



Apropiaciones de los medios de comunicación por parte de las víctimas para construir la memoria del conflicto armado en Colombia. Tres estudios de caso (2016-2019)

Matthias Kopp

Tesis doctoral presentada para optar al título de Doctor en Ciencias Sociales

Asesora

Claudia Patricia Puerta Silva, Doctora en Antropología Social y Etnología (EHESS)

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Doctorado en Ciencias Sociales
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Cita	(Kopp, 2024)
Referencia	Kopp, M. (2024). <i>Apropiaciones de los medios de comunicación por parte de las víctimas para construir la memoria del conflicto armado en Colombia. Tres estudios de caso (2016-2019)</i> [Tesis doctoral]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	



Doctorado en Ciencias Sociales, Cohorte IV.



CRAI María Teresa Uribe (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Para mis hijos

Theopolis, Manuela, Miguel, mi nieta Hadiya,
y la mirla, cuyo canto evoca a los ancestros.

Tabla de contenido

Resumen	9
Abstract	10
Introducción	11
Capítulo 1. El periodismo y la confrontación con el pasado.....	29
1.1 Del trauma a la tarea.....	34
1.1.1 La violencia de los años ochenta y noventa en Medellín.....	37
1.1.2 El concepto de víctima.....	45
1.1.3 Periodistas como víctimas del conflicto armado	53
1.2 Metodologías para un periodismo de memoria	58
1.2.1 Diagnóstico de medios en Antioquia	62
1.2.2 Sonsón: la televisión comunitaria como espacio testimonial	68
1.2.3 Granada: la necesidad de ordenar el tiempo	83
1.2.4 Medellín: hacer memoria en la casa propia	94
1.3 Aportes de las víctimas a la memoria colectiva: textos del portal Hacemos Memoria.....	110
1.3.1 La probabilidad de ciertos tópicos	111
1.3.2 Presencia de las víctimas en los textos	117
1.4 Conclusiones: subjetivaciones y memoria en el postconflicto.....	129
Capítulo 2. Comunicación comunitaria: imaginación y diseño	134
2.1 Vokaribe: la radio en el postconflicto	137
2.1.1 El derecho a hacer radio comunitaria en Colombia	146
2.1.2 Análisis del programa de radio Palabra justa.....	156
2.1.3 El concepto de comunidad	166
2.2 En la espiral del tiempo: memorias indígenas.....	171

2.2.1 Comunicación en el proceso político-organizativo indígena.....	182
2.2.2 El concepto de comunicación indígena.....	189
2.2.3 Análisis de texto: Revista Unidad Indígena Álvaro Ulcué.....	196
2.2 Conclusiones	204
Capítulo 3. Cooperación, comunicación y desarrollo de medios.....	209
3.1 La cooperación internacional y la memoria histórica	210
3.1.1 Deutsche Welle: fundaciones de un medio.....	214
3.1.2 El diseño de la cooperación	217
3.1 El concepto de desarrollo de medios.....	224
3.2 Conclusiones	230
4 Conclusiones	233
Referencias	243

Lista de tablas

Tabla 1 Matriz de impacto del proyecto de DW Akademie en Colombia 2016-2019 (simplificada)	221
Tabla 2 El objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas	227

Lista de figuras

Figura 1 Modelo a) 10 tópicos, 7 palabras.....	113
Figura 2 Modelo b) 30 tópicos, 5 palabras.....	114

Siglas, acrónimos y abreviaturas

AMCIC	Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia
Asovida	Asociación de Víctimas Unidas de Granada
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CEV	Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
CNMH	Centro Nacional de Memoria Histórica
CRIC	Comité Regional Indígena del Cauca
DW	Deutsche Welle
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPL	Ejército Popular de Liberación
ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FLIP	Fundación para la Libertad de Prensa
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz
LGBTIQ+	Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, más
MOIR	Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
Movice	Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
NLP	Natural language processing
ONG	Organización no gubernamental
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
RUV	Registro Único de Víctimas
UAIIN	Universidad Autónoma Indígena Intercultural
UBPD	Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
UdeA	Universidad de Antioquia
UP	Unión Patriótica

Resumen

La tesis doctoral *Apropiaciones de los medios de comunicación por parte de las víctimas para construir la memoria del conflicto armado en Colombia. Tres estudios de caso (2016- 2019)* se sitúa en el momento histórico en el que las exigencias de las víctimas por el reconocimiento y la reparación tuvieron mayor presencia en el discurso público: el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.

El estudio se enfoca en tres iniciativas de comunicación que se propusieron fortalecer la participación de víctimas en la construcción de la memoria colectiva: el proyecto periodístico Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, la emisora comunitaria Vokaribe en Barranquilla y el Programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca. El autor participó con estas organizaciones en el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar el acceso de víctimas a medios locales en el curso de un proyecto de la cooperación internacional.

Las prácticas comunicativas y sus marcos institucionales y culturales, así como metodologías pedagógicas aplicadas en los procesos de colaboración, son interrogadas con respecto a su potencial para activar el debate público sobre la memoria del conflicto armado. El objeto de estudio, las metodologías y los referentes teóricos se enmarcan en un texto en el que la construcción colectiva de memoria es puesta en relación con los conceptos de la imaginación y el diseño para vislumbrar una sociedad más inclusiva.

Palabras clave: víctimas del conflicto armado, memoria histórica, periodismo, medios comunitarios, comunicación indígena, cooperación para el desarrollo de medios.

Abstract

The doctoral thesis *Apropiaciones de los medios de comunicación por parte de las víctimas para construir la memoria del conflicto armado en Colombia. Tres estudios de caso (2016-2019)* is situated in a historical moment in which the demand of victims for recognition and reparation had acquired greater presence in the public discourse: the years shortly before and after the Peace Agreement with the FARC guerrilla.

The study focuses on three communication initiatives that sought to strengthen the participation of victims in the construction of collective memory: the journalistic project Hacemos Memoria of the University of Antioquia, the community radio station Vokaribe in Barranquilla and the Communications Program of the Consejo Regional Indígena del Cauca. The author participated with these organizations in the development of strategies aimed at improving victims' access to local media in the course of an international cooperation project.

Communication practices and their institutional and cultural frameworks, along with pedagogical methodologies applied in collaboration processes, are examined regarding their potential to stimulate public debate on the memory of the armed conflict. The object of study, methodologies, and theoretical references are framed within a text where the collective construction of memory is related to the concepts of imagination and design to envision a more inclusive society.

Keywords: victims of the armed conflict, historical memory, journalism, community media, indigenous communication, cooperation for media development.

Introducción

Hace 25 años aproximadamente, en medio del conflicto armado entre fuerzas del Estado, movimientos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, en Colombia se inició un debate sobre cómo construir una memoria colectiva de los hechos violentos a partir de la perspectiva de las víctimas (Sánchez Gómez, 2018). La hipótesis subyacente es que un ejercicio público de memoria, concebido como una forma de reparación a las víctimas, puede contribuir a una convivencia menos violenta. Fortalecidos por un marco institucional, garantizador de los derechos humanos, cada vez más amplio, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, los familiares de las víctimas de hechos violentos comenzaron a organizarse con el fin de articular demandas frente al Estado: principalmente, la de obtener información verídica sobre lo que ocurrió y, con mayor énfasis, sobre el destino de los desaparecidos. La discusión en torno a los derechos de las víctimas ha tomado mayor vigor en el contexto de los Acuerdos de Paz con las FARC y, particularmente, con la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (Tonche y Umaña, 2017). Junto con la empatía colectiva por el sufrimiento de las víctimas, la pregunta por la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado se encuentra en el centro de la controversia.

Muchos autores han resaltado que la memoria social es tanto resultado como precondition de los procesos de comunicación constitutivos de una sociedad, y que las formas y los contenidos de la memoria colectiva cambian con el contexto social, político y cultural (Assmann, 2006a; Halbwachs, 2004a y 2004b; Jelin, 2002; Olick, 2008). La creciente importancia otorgada a los derechos humanos en las relaciones internacionales, en el discurso oficial de los gobiernos y sobre todo en los reclamos por una mayor justicia social formulados por actores de la sociedad civil, ha conllevado un desplazamiento del enfoque y de los sujetos de la memoria, desde los héroes (generalmente militares) de la nación hacia las víctimas de las guerras y de los conflictos violentos. En muchos lugares del mundo, las personas que han sufrido los atropellos de los violentos dejaron de ser víctimas pasivas y anónimas para convertirse en actores políticos, asumiendo en algunos casos un papel de vanguardia en la transformación de su sociedad. Para América Latina, las madres de la Plaza de Mayo de Argentina son tal vez el ejemplo más conocido de ello; más allá de las fronteras de su país, ellas han sido una fuente de inspiración para otros grupos.

Dar el paso de convertir el sufrimiento de las víctimas de una tragedia privada en un asunto político público significa realizar un acto creativo en el sentido de Castoriadis (2013): imaginar una sociedad, a pesar de todo. Se trata de construir una comunidad de sujetos políticos activos, de conocer los derechos propios y de articular demandas, superando el miedo y el aislamiento causado por la violenta destrucción del tejido social. En el centro de esta transformación se encuentran procesos de comunicación que, dependiendo del momento histórico, pueden asumir diferentes manifestaciones. Dar testimonio de la injusticia sufrida, denunciar los crímenes, demandar reconocimiento y reparación, y, por último, aventurarse en el perdón, o inclusive en la reconciliación, son actos comunicacionales que crean cambios en las relaciones intersubjetivas y sociales.

El propósito del presente estudio es conocer mejor estos procesos de comunicación, tomando como ejemplo tres iniciativas que se llevaron a cabo en distintas regiones de Colombia, con el fin de aportar a la construcción de una memoria colectiva, en un momento histórico en que este emprendimiento adquirió un significado especial: el fin del conflicto armado interno con las FARC. Por tal motivo, las preguntas que se formulan inicialmente se centran en procesos de mediación (Martín-Barbero, 2010) que hacen posible la articulación de la memoria de las víctimas con sectores más amplios de la sociedad: ¿De qué manera –a través de qué estrategias– logran las víctimas del conflicto armado usar los medios de comunicación para participar en el discurso público? ¿Cuáles son las condiciones que permiten que puedan expresar tanto sus experiencias de marginalización por la violencia como sus reivindicaciones para superar esta marginalización? ¿Qué es necesario para poder crear espacios en los medios de comunicación que permitan la participación de las víctimas? ¿Qué aportes pueden ser realizados por la cooperación internacional para facilitar aquellos procesos incluyentes de comunicación?

Estas interrogantes no son el producto de un interés netamente académico, sino que surgieron en el transcurso de un proyecto de la cooperación alemana en Colombia del cual hice parte. El objetivo del proyecto era precisamente apoyar la participación de víctimas del conflicto armado en las discusiones sobre la memoria histórica en los medios de comunicación. Fue implementado por DW Akademie, una unidad de la cadena pública de Alemania Deutsche Welle, junto con organizaciones colombianas en diferentes regiones del país. Tres de ellas serán introducidas como protagonistas de esta tesis: 1) el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad

Antioquia; 2) la emisora comunitaria Vokaribe Radio en Barranquilla; y 3) el programa de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Se trata de tres emprendimientos de comunicación y de periodismo local ubicados en contextos geográficos y culturales muy diversos, pero unidos por la idea de crear procesos de comunicación alternativos a los medios convencionales. En el transcurso de cuatro años, del 2016 al 2019, estas organizaciones participaron de manera intensiva en el diseño y la ejecución de actividades como talleres, foros y asesorías, al igual que realizaron investigaciones y publicaciones centradas en los derechos humanos y la memoria del conflicto armado.

Los objetivos al analizar los casos seleccionados para esta investigación son: conocer procesos de comunicación que pretenden lograr una mayor inclusión de las víctimas en el debate público; sistematizar estas experiencias y, de tal forma, contribuir a una mejor comprensión de las configuraciones de la memoria colectiva centrada en la defensa de los derechos humanos a través de medios locales; y caracterizar posibles aportes e impactos que la cooperación internacional enfocada en el desarrollo de medios puede ejercer en la construcción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.

Los medios de comunicación que son objeto de este estudio se caracterizan por estar más interesados en promover el pensamiento crítico y la cultura ciudadana, que en su propio desarrollo comercial. Pertenecen a un sector de medios que son usualmente denominados medios comunitarios, medios ciudadanos o independientes. En América Latina tienen una larga historia y representan, de alguna manera, la utopía de una comunicación más libre y más equitativa en países que están gobernados por oligarquías tradicionales, quienes mantienen el control sobre los medios masivos.

En la presente tesis parto de la suposición de que son precisamente aquellos medios alternativos los que ofrecen mejores posibilidades de participación para las personas que son socialmente marginadas por su condición de víctimas.

Me parece coherente en este contexto revisar si la intervención de la cooperación en el ámbito del desarrollo de medios dispone de los instrumentos adecuados para fortalecer aquellas mediaciones que fortalecen el posicionamiento de las personas victimizadas como sujetos políticos. Entonces surge también la pregunta por la compatibilidad de las memorias en el proceso de cooperación. Como veremos, la memoria colectiva no solo es constitutiva de las identidades sino

también de las instituciones, o, para parafrasear una vez más a Castoriadis (2013), del proceso social instituyente y, por tanto, también de la cooperación.

Pero la interpretación de los hechos no solo está guiada por memorias, sino también por intereses, y en consecuencia es natural que los partidos de un conflicto antagónico hagan una evaluación distinta de los acontecimientos. El conflicto armado colombiano ha dominado en gran medida la vida social y política del país durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI. Ha estado enmarcado, por un lado, en las contradicciones entre clases sociales y, por el otro lado, en la disputa ideológica dominante de la época a nivel mundial: la Guerra Fría entre los dos bloques liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1989, la caída del muro de Berlín, el símbolo arquitectónico de esta división, y el subsecuente desmantelamiento de la Unión Soviética, cambiaron el panorama. Alrededor del mundo, los gobiernos y movimientos de izquierda, muchos de ellos apoyados por la Unión Soviética, entraron en una crisis profunda. En América Latina, varios grupos de izquierda alzados en armas contra regímenes autoritarios iniciaron negociaciones que eventualmente condujeron a la firma de acuerdos de paz (El Salvador en 1992; Guatemala en 1996).

En Colombia, la organización guerrillera Movimiento 19 de Abril (M-19), junto con otros grupos revolucionarios, dejó las armas para convertirse en un partido político. Luego participó en la formulación de una nueva Constitución más democrática, que fue aprobada en 1991. Sin embargo, el conflicto armado en Colombia persistió. Otras guerrillas de orientación marxista, en primer lugar, las FARC y el ELN, expandieron sus filas y aumentaron sus ambiciones de control territorial. El conflicto armado se recrudeció durante los años noventa. Las estrategias de contrainsurgencia del Estado colombiano, fomentadas y dirigidas desde Estados Unidos, en conjunto con el accionar de grupos paramilitares de orientación ideológica de ultraderecha, resultaron en un endurecimiento del conflicto y en un fuerte aumento de las víctimas civiles (Giraldo, 1996; Ronderos, 2014).

Fue la demanda por verdad y justicia, expresada públicamente por las víctimas organizadas, la que incentivó los primeros esfuerzos de sistematizar los registros de graves violaciones a los derechos humanos. Gonzalo Sánchez Gómez, historiador y director fundador del Centro Nacional de Memoria Histórica, identifica dos razones principales que provocaron la “enunciación social de la memoria agenciada por las víctimas” (Sánchez Gómez, 2018, p. 106): la primera fue que el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) negó –contra toda evidencia– la existencia de

un conflicto armado y, con mayor énfasis, las graves violaciones a los derechos humanos por fuerzas del Estado. Para los sobrevivientes de estos hechos, esta negación significaba una profunda humillación. La segunda razón fue la actitud vacilante del Estado frente a la necesidad de las víctimas de esclarecer los hechos violentos. Una ley expedida en 2005, llamada Ley de Justicia y Paz (la Ley 975), garantizó rebajas penales a paramilitares desmovilizados sin que ellos hubieran contribuido plenamente a la entrega de información sobre el paradero de las víctimas de desaparición forzada. En vez de aceptar este acuerdo como una condición inevitable para conseguir la paz, los familiares de las víctimas vieron en ello una burla de su derecho fundamental de conocer la verdad. Como consecuencia, ellas fortalecieron sus demandas frente al Estado; pero al mismo tiempo se constituyeron grupos de mujeres que por iniciativa propia emprendieron la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Solo apenas cuando encontraron algún vestigio pudieron contar con el apoyo de la Fiscalía para la exhumación de los restos del difunto (GMH - Grupo de Memoria Histórica, 2009, 2011).

El propósito que alienta a las víctimas en esta difícil reconstrucción es la posibilidad de restaurar discretamente la dignidad de quien ha muerto: las piezas halladas permitirán que los cadáveres dejen de ser cosas tiradas y lleguen a ser cuerpos enterrados. (GMH, 2009, p. 88)

Sin embargo, más que la dignidad de los muertos, lo que está en juego es el reconocimiento de los sobrevivientes y su lugar en la sociedad. En este sentido, dignificar a la víctima es un acto de resistencia y de empoderamiento de las personas que fueron estigmatizadas y marginalizadas por su cercanía a los que murieron o fueron violentados de otras maneras.

En este contexto es notable el uso de los medios de comunicación que los familiares de las víctimas hacen desde el inicio de su lucha. Así, por ejemplo, Pastora Mira, cuya hija Sandra fue desaparecida en el municipio antioqueño de San Carlos en 2001, cuenta cómo se encontró con una reportera del diario *El Tiempo*, quien había llegado al municipio para cubrir otro asunto. Aprovechando esta oportunidad, Pastora convenció a la periodista de escribir una nota sobre la búsqueda de los desaparecidos en San Carlos.

Le conté, le dije: “Me toca ir con esa mamá a visitar ese hueco, qué pecado, yo soy capaz de sacar un muerto, pero ¿de qué me sirve?, para enterrarlo en el solar de la casa de ella o en el solar de la casa mía no tiene sentido porque en el cementerio no lo podemos enterrar”. Me dijo: “Señora, ¿usted es capaz de hacer un reportaje?”. Y yo: “Claro”. Me dijo: “¿Cuándo le mando un periodista?”. “Ah, para mañana es tarde”. Nos pusimos de acuerdo y para el otro día estaba el periodista. Fuimos e hicimos la denuncia. (GMH, 2011, p. 329).

Esta iniciativa espontánea de una madre desesperada es un ejemplo de la apropiación de un medio de comunicación con un objetivo muy concreto: visibilizar el caso de su hija con la esperanza de que algún lector del periódico pudiera aportar una pista para encontrar a la desaparecida. Finalmente, el artículo fue publicado bajo el título “Armada de machete y palas Pastora excava en busca de su hija” y de esta manera la lucha dolorosa de Pastora Mira llegó a formar parte de una memoria colectiva mediatizada a nivel nacional (Oquendo, 2007, abril 24)

Mientras se van consolidando, los grupos de víctimas perfeccionan también sus estrategias de comunicación. Se buscan aliados en la prensa y varias organizaciones han creado sus propios medios. Al mismo tiempo, algunos periodistas desarrollaron una particular sensibilidad por las aflicciones de las personas y de las comunidades afectadas por la guerra. Muchos de ellos habían sufrido las amenazas y la violencia en su propia carne, sea en el ejercicio de su profesión, o porque les tocó como a cualquier colombiano. Esta sensibilización llevó a que algunos medios de comunicación decidieran realizar un registro más continuo de las violaciones a los derechos humanos, así como del sufrimiento y las resistencias de los sobrevivientes.

Diversos actores se sumaron a la tarea incipiente de narrar la memoria del conflicto armado: académicos, organizaciones para la defensa de los derechos humanos, periodistas y también entidades estatales. Gradualmente el debate sobre la memoria histórica comenzó a penetrar el discurso público, recibiendo estímulo desde una serie de iniciativas gubernamentales como la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), la instalación de una comisión de historiadores (Grupo de Memoria Histórica - GMH) en 2007, así como la constitución de un Centro Nacional de Memoria Histórica, la proyección de un Museo Nacional de Memoria (aún no concretado) y la puesta en marcha de una Comisión de Verdad en 2018.

En 2013 el Centro Nacional de Memoria Histórica entregó al presidente Juan Manuel Santos el informe *¡Basta ya! Colombia memorias de guerra y dignidad*, con el cual se presenta un resumen de 54 años de conflicto y resistencia civil a un público amplio de colombianos (GMH, 2013). Las cifras publicadas en el informe hablaban de una nación profundamente traumatizada por la continua violencia: entre 1958 y 2012, 220 000 personas murieron violentamente por causa del conflicto armado, muchas otras fueron víctimas de desplazamiento, violencia sexual, reclutamiento forzado y otras graves violaciones a los derechos humanos. A esta cifra hay que agregar la de más de 100 000 personas dadas por desaparecidas según el registro de la *entidad* estatal creada como resultado del acuerdo de paz con las FARC (UBPD - Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, 2019).

Con todo, aunque persisten distintas percepciones sobre el conflicto armado en la sociedad colombiana, el tamaño de los daños y la cantidad de personas victimizadas ya no se pueden negar. También está científicamente comprobado (en los distintos informes de observatorios, grupos, entidades e instituciones estatales y académicas) que todos los actores armados han cometido graves violaciones a los derechos humanos, aunque no en iguales proporciones. En 2022, la Comisión de Verdad terminó su trabajo y entregó un amplio informe que documenta detalladamente cómo se desarrolló la tragedia, dando forma también a los testimonios de miles de víctimas.

La transformación de la sociedad colombiana ha continuado con vigor después del periodo cubierto en esta tesis. La elección del primer presidente de izquierda en la historia del país, Gustavo Petro, lo hace manifiesto, pero más aun la pacífica transición del poder. Mientras termino este texto, el Gobierno conduce negociaciones de paz con el ELN, la última guerrilla comunista del continente. Todos estos hechos son también una expresión de que la memoria colectiva de los colombianos está cambiando.

En noviembre de 2016 una ceremonia solemne fue celebrada en el Teatro Colón de Bogotá. Representantes del Gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Con este acto simbólico pusieron fin al conflicto armado que había sacudido el país por medio siglo, desde la fundación de este grupo insurgente en 1964. Durante cuatro años habían llevado a cabo negociaciones en La Habana; la sociedad colombiana estaba profundamente dividida sobre el asunto. Una primera versión del acuerdo, incluso, fue rechazado por una mínima mayoría. Desde

su inicio, el proceso de paz recibió un acompañamiento internacional: Cuba y Noruega fungieron como países garantes, Venezuela y Chile como facilitadores adicionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania designó un enviado especial para apoyar el proceso de paz; la Unión Europea se comprometió a dar respaldo político y económico, así como asistencia técnica para la implementación de lo acordado.

En los años que siguieron, estas declaraciones de solidaridad se tradujeron en acciones concretas: la cooperación internacional reforzó sus esfuerzos para promocionar la construcción de la paz en los territorios. Nuevos proyectos fueron implementados en diversas regiones del país, muchos de ellos destinados a facilitar la participación ciudadana, la convivencia pacífica y la reconciliación. En este escenario, la memoria histórica también comenzó a ser considerada por la cooperación internacional como un campo de acción relevante.

En el contexto internacional, la configuración de narrativas sobre los conflictos con la intención de aspirar a la no repetición había adquirido recientemente mayor vigor (Robin, 2012). Mientras la nueva tecnología de televisión por satélite permitió la transmisión de imágenes de las guerras del mundo en vivo y en directo a los hogares, la discusión sobre la violencia y los crímenes de Estado comenzó a girar en torno al concepto de la universalidad de los derechos humanos. Con el Tribunal de La Haya se institucionalizó una justicia internacional para esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos en casos como la antigua Yugoslavia, Congo y Liberia, y condenar a los máximos responsables de estos crímenes. Algunos países, sin embargo, optaron por el indulto y la reconciliación por encima de la justicia y el castigo. La comisión de la verdad en Sudáfrica fue un antecedente en este sentido. En América Latina, las comisiones de la verdad en Chile y Guatemala documentaron las atrocidades, sin que ello tuviera consecuencias jurídicas para los perpetradores.

En Alemania fueron los intelectuales judíos retornados del exilio después de 1945 quienes comenzaron a tematizar el problema de la memoria colectiva (Adorno, 1996). Impulsado por estas intervenciones públicas, el movimiento estudiantil del 68 interpeló a la generación de sus padres quienes guardaron un silencio opresivo con respecto a su actuación durante el régimen nazi. Sin embargo, apenas en los años ochenta, el debate sobre la memoria y sobre la responsabilidad del pueblo alemán por los horrores del pasado llegó a tener un mayor alcance a través de los medios masivos. Fue en esta coyuntura que el testimonio de las víctimas sobrevivientes comenzó a ser considerado como la fuente central alrededor de la cual se debería de construir la memoria

colectiva. En este contexto histórico, la caída del muro de Berlín y el subsecuente desmantelamiento del sistema represivo de la seguridad estatal (Stasi) y del régimen socialista en la República Democrática de Alemania dieron un nuevo impulso al debate público acerca de la interpretación colectiva de la historia (Assmann, 2006a, 2006b).

Es ante este trasfondo social, cultural e histórico que la cooperación alemana observaba los esfuerzos de distintos sectores de la sociedad colombiana por desarrollar narrativas de memoria histórica, y de ahí nace la disposición para apoyar las iniciativas correspondientes. En su visita oficial a Colombia en 2013, el presidente alemán Joachim Gauck, quien fue pastor y activista de derechos humanos en la extinta RDA, dio un discurso frente a estudiantes de la Universidad de los Andes. El tema fue la importancia de la memoria histórica para estabilizar la paz en las sociedades que se encuentran en procesos de transformación hacia la democracia. En su discurso, Gauck hizo una relación directa entre su experiencia personal y la situación que encontró en Colombia al momento de su visita.

¿Por qué les cuento esto? Porque en 1990, cuando fui diputado del primer parlamento libre, nos teníamos que preguntar: ¿qué forma de superar el pasado nos ayuda? ¿Cerrar los ojos y tapar la culpa? ¿Cerrar los expedientes? ¿O es algo diferente? Por eso vale la pena revisar la historia de Alemania desde la guerra hasta los años 90 para comprender cómo se impuso el principio de sinceridad, revelación y verdad. (Gauck, 2013, mayo 13)

Es importante mencionar estos antecedentes para entender el contexto en el cual se escribe la presente tesis, pues el punto de vista del observador influye en la manera como el fenómeno observado es explicado. Si esto aplica para las llamadas ciencias exactas o naturales, como lo ha demostrado la física cuántica desde Heisenberg y Schrödinger, en las ciencias sociales, donde el observador es parte del sistema observado, la perspectiva epistemológica es de mayor relevancia. El punto ha sido enfatizado por muchos autores, desde la teoría crítica (Habermas, 1973), las ciencias feministas (Haraway, 1988) y los estudios poscoloniales (Bidaseca y Meneses, 2014).

Mi interés por el tema de la presente disertación se explica solo en parte por la actualidad social y política que encontré en Colombia al iniciar el proyecto de DW Akademie. La otra parte tiene que ver con que he sido formado en una sociedad donde la confrontación con el pasado y la pregunta por la responsabilidad se ha vuelto una constante.

Tenía tal vez quince años cuando se me ocurrió preguntar a mi abuelo por sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente intervino la abuela y cortó la conversación antes de que comenzara. “¡De esto no hablamos!” dijo, o algo similar. Y efectivamente, nunca se habló del asunto, ni volví a preguntar. Cuarenta años más tarde –estaba iniciando mi trabajo en Colombia– encontré un librito entre las cosas de mis padres, que habían fallecido: la bitácora de mi bisabuela. El texto habla muy poco de la vida familiar, pero mucho de los acontecimientos políticos antes, durante y después de las dos guerras mundiales. Al principio, el lenguaje está lleno de fervor nacionalista, de odio a los ingleses y los franceses. Luego el entusiasmo eufórico por el líder Adolf Hitler quien promete salvar el pueblo alemán: “Fui la primera del barrio que sacó la bandera el día que el Führer visitó nuestra ciudad”, escribe. Pero las cosas salen mal y mi bisabuela se da cuenta, aunque tarde: “Hitler debe haber estado mal aconsejado...”, escribe. En las últimas páginas del diario, en retrospectiva a una larga vida, constata que “Al final de cuentas, los alemanes tuvimos mucha suerte, porque a pesar de nuestros errores pudimos vivir una vida próspera. Resulta que la democracia sí era el mejor sistema”.

Si bien no pudo hablar –la vergüenza lo debe haber impedido–, sus palabras escritas permiten ver lo que hay detrás del silencio. De alguna manera –por cierto, fragmentaria– la conversación que fue interrumpida por la hija de mi bisabuela años atrás tuvo lugar en la lectura del diario. De golpe, la historia de mis antepasados se hizo presente en mi vida, algo que ningún libro de historia o documental ha logrado con esta intensidad. Comprendí mejor las constelaciones de mi familia en aquella historia violenta y me quedó claro que solo cuando se conecta con la memoria personal –la de la familia y del entorno cercano– la memoria colectiva adquiere mayor relevancia.

Luego de graduarme como antropólogo en la Universidad Libre de Berlín en 1986, realicé estudios de campo sobre la situación de migrantes mixtecos en México y Estados Unidos. Para aquellos campesinos indígenas provenientes de las montañas de Oaxaca, la memoria tenía mucho que ver con la identidad étnica, y esta fue un recurso para formar la resistencia a las condiciones inhumanas a las que los migrantes estaban expuestos en los campos laborales de la agroindustria global. Regresé a Alemania en 1989 pocos meses antes de la caída del infame muro de Berlín. Mi biografía, como las de muchos de mis compatriotas, tomó un giro abrupto. Dejé la investigación académica para convertirme en periodista y cubrí, en los años siguientes, los drásticos cambios que ocurrieron en Alemania y Europa. Como reportero de Deutsche Welle, el canal público

internacional de Alemania, recorrí distintas regiones del mundo para informar sobre países en conflicto o en situación de postconflicto, entre ellos Bosnia, Palestina, Ruanda, Afganistán y otros. Por su gran alcance público el periodismo pareció ser un instrumento más eficiente que la antropología para denunciar las injusticias del mundo.

Desde mis primeros viajes a América Latina a finales de los años setenta, Colombia cautivaba mi interés. Entre 1992 y 2006 realicé varios reportajes sobre el conflicto armado en este país (Kopp, 2004, 2020). Desde 2008 hago parte DW Akademie, el centro de formación y cooperación para el desarrollo de medios de Deutsche Welle. Comencé a organizar talleres, foros y encuentros sobre el periodismo en las condiciones del conflicto armado. En las conversaciones con periodistas y docentes universitarios de periodismo de la Universidad del Norte en Barranquilla, la Universidad de Antioquia en Medellín y la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, se fue expresando una inquietud por el papel del periodismo en la confrontación con el pasado reciente y con la memoria de las víctimas, en particular. Fue así como en 2015 DW Akademie presentó un proyecto al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, cuyo objetivo era fortalecer la participación de víctimas del conflicto armado en procesos comunicativos conducentes a la construcción de memoria colectiva. La propuesta fue aceptada y el proyecto se realizó en la temporada de 2016 a 2019.

La suposición principal era que si las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos eran habilitadas para expresarse a través de medios de comunicación cercanos, podían iniciar un diálogo con los otros miembros de su comunidad y, eventualmente, superar las divisiones. No solamente se trataba de crear espacios públicos para fomentar el debate y la construcción de memoria, sino también de desarrollar las capacidades en las personas para hacerlo de una manera informada. De hecho, fomentar las habilidades de comunicación de personas en desventaja y facilitar el acceso a medios locales de aquellos que son marginalizados por los grandes medios comerciales constituye un objetivo en sí. Significa fomentar un derecho fundamental: el derecho a la información y a la libertad de expresión, garantizado por artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El proyecto de DW Akademie en Colombia estudiado aquí sostuvo un enfoque territorial y se basó en una estrecha colaboración con organizaciones locales que operan en regiones bien definidas del país, persiguiendo el interés de generar cambios en las comunidades que las rodean. Son estos grupos y sus respectivos territorios los actores principales del presente estudio. La

pregunta conductora es, pues, de qué manera y con qué resultado estos actores desarrollan y ejecutan estrategias para fomentar los debates acerca de la memoria colectiva en las comunidades de las cuales hacen parte o las cuales están a su alcance. No solo las organizaciones protagonistas de este estudio se diferencian entre ellas, sino que también los territorios en los que están ubicadas, donde viven y trabajan sus integrantes, tienen características muy diversas. Las historias de cada región retratada y sus afectaciones por el conflicto armado, o para ser más exacto, de los diferentes conflictos violentos, son tan variadas como sus condiciones geográficas y económicas, así como las idiosincrasias culturales y étnicas de sus habitantes. El común denominador entre los actores cuyas estrategias, acciones y reflexiones son tema de esta tesis de doctorado es que su principal campo de intervención son las comunicaciones. Sin embargo, las formas de entender la comunicación y los conceptos utilizados para ponerla en práctica también varían entre ellos. El interés de la investigación para esta tesis doctoral es analizar estos conceptos, así como las estrategias y metodologías aplicadas por cada grupo de actores, con el fin de entender mejor los procesos comunicativos y sus contribuciones a la formación de memoria. Esto requiere, primero, documentar las prácticas comunicativas de los grupos mencionados, sobre todo aquellas orientadas a propiciar una convivencia menos violenta. Y, segundo, se trata de sistematizar de qué manera estos grupos locales construyen la memoria colectiva del conflicto armado vivido en su respectivo lugar.

En los primeros dos capítulos se caracterizarán las tres organizaciones que son las protagonistas de esta tesis. Se analizarán los motivos que las llevaron a involucrarse activamente en la construcción de la memoria colectiva, así como las metodologías que aplicaron para facilitar discusiones en las cuales las víctimas del conflicto armado juegan un papel central. También se analizarán algunos de los productos mediáticos que han publicado en el transcurso del proyecto coordinado por DW Akademie. Aquí será suficiente dar una breve descripción de estas organizaciones para poder ubicar su lugar en el contexto en el cual se desarrolla el argumento:

- a) Hacemos Memoria es un proyecto que surgió en 2014 en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. El proyecto explora formas de realizar aportes a la memoria desde el periodismo. Con formación y asesoría, el grupo Hacemos Memoria apoya a periodistas y medios locales en la investigación del conflicto

armado, fortaleciendo especialmente la construcción de narrativas de memoria centradas en la perspectiva de las víctimas.

- b) La emisora comunitaria Vokaribe Radio en Barranquilla, la capital del departamento Atlántico, busca la interacción con organizaciones sociales de su entorno para la producción de contenidos radiales. Tiene su sede en el barrio La Paz en el suroccidente de esta ciudad, un conglomerado urbano marcado por los bajos ingresos de sus habitantes, múltiples deficiencias en la infraestructura y altos índices de violencia.
- c) El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es una organización que reivindica los derechos y las identidades étnicas de los pueblos originarios del departamento del Cauca, una región en el suroccidente de Colombia donde se concentra una gran parte de la población indígena del país. El CRIC está interesado en realizar un trabajo de memoria colectiva acerca de las movilizaciones de las comunidades indígenas, especialmente de su lucha por la propiedad colectiva de la tierra. A través de su equipo de comunicaciones, el CRIC impulsa la producción de contenidos mediáticos con el objetivo de agilizar la discusión sobre memoria en las comunidades indígenas.

El capítulo 3 se ocupará con más detalle de la intervención del proyecto de DW Akademie. Se tratará de examinar de qué forma se puede gestionar la cooperación entre diferentes actores del llamado norte y sur global para fomentar la memoria histórica. En este contexto se realizará también una reflexión sobre el concepto del desarrollo de medios y sus efectos para la memoria y los derechos humanos. Ahí la pregunta central es en qué medida el desarrollo de los medios de comunicación puede ser favorable para la libertad de expresión de las víctimas y para sus articulaciones políticas.

Cuando se pretende, como es el caso del proyecto aquí estudiado, facilitar la participación de las víctimas del conflicto armado en la discusión sobre la memoria histórica, esta intervención parte de una hipótesis que se puede formular de la siguiente manera: *Las víctimas de conflictos violentos pueden, a través de la apropiación de los medios de comunicación, contribuir a la construcción de memoria colectiva. Y esto es importante porque un debate abierto y participativo sobre la memoria del conflicto es la condición que permite llegar a acuerdos colectivos para la solución de conflictos y para lograr una convivencia menos violenta.*

En busca de poder comprobar la plausibilidad de la hipótesis, sin embargo, es necesario analizar sus elementos conceptuales. Es decir, hay que preguntarse por el contenido semántico de los términos centrales que la constituyen. ¿A qué grupo de personas refiere la palabra *víctima*? ¿Qué son y de qué manera se utilizan los medios de comunicación? ¿Cuáles son los atributos de una memoria colectiva? ¿En qué circunstancias se puede generar este anhelado debate abierto y constructivo sobre los intereses en conflicto? La búsqueda de respuestas a cada una de estas preguntas requiere la inmersión en un campo semántico abierto y lleva inmediatamente a varias otras preguntas. La mayoría de ellas han sido objeto de discusiones en el ámbito de las ciencias sociales, de la filosofía, la política, el derecho y otros.

La caracterización de la categoría de *víctima*, por ejemplo, en el caso concreto del conflicto armado en Colombia, se puede enfocar desde distintos ángulos. Por un lado, el Estado provee un marco legal, ejemplificado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), el cual está anclado en acuerdos y normativas internacionales. Por otro lado, personas afectadas por hechos violentos se pueden congregan en colectivos con el objetivo de reivindicar ciertos derechos, y pueden hacerlo en torno a la categoría de *víctima*, o, como algunos prefieren, como sujetos en resistencia. Cuando se habla de *víctimas*, se habla de *víctimas* de algo, de algún acto de violencia. El concepto de violencia está intrínsecamente vinculado al de *víctima*. Pero existen muchos tipos de violencia, desde la violencia causada por las fuerzas de la naturaleza, como los terremotos, hasta la violencia en los distintos contextos sociales. Ahí se puede distinguir entre una violencia que rompe las normas de convivencia mayoritariamente aceptadas de otro tipo que defiende el *statu quo* legal –el monopolio de violencia del Estado–. De ahí nos vemos confrontados con otras preguntas: por la justicia, por el poder, por las disposiciones psicológicas, etc.

En el presente trabajo pretendo estudiar las connotaciones de las categorías que conforman la hipótesis “*víctimas* usan medios para construir memoria y así aportan a la no-repetición de hechos violentos” en los contextos concretos en los que esta hipótesis se utiliza como punto de partida para el diseño de una intervención social.¹ Las preguntas relevantes surgen entonces de la situación específica en la que cada uno de los grupos estudiados pone en práctica sus estrategias de comunicación adaptadas al contexto social y cultural (en Medellín, Barranquilla y Popayán) para

¹ El concepto de diseño como herramienta para la construcción de autonomía en comunidades marginalizadas fue elaborado por el antropólogo colombiano Arturo Escobar (2016). Ver también apartado 2.3 de esta tesis.

fortalecer la participación de las víctimas en la construcción de memoria. ¿Cuál es la tipología de violencias en cada lugar? ¿Cuáles son las formas más recurrentes de victimización? ¿De qué forma se relacionan las personas afectadas por hechos violentos con el concepto de víctima? ¿Cuáles son las características específicas en cada lugar de los procesos comunicativos conducentes a la construcción de memoria colectiva? ¿De qué manera se configuran y cuáles son los factores que hacen posible que esto suceda de una manera específica y no de otra?

Esta última pregunta es la que apunta al interés central de esta investigación: conocer y sistematizar las metodologías y los procesos colectivos de comunicación que favorecen una mayor participación de víctimas del conflicto armado en los debates públicos y en la construcción de memoria colectiva. Será entonces necesario identificar tanto las particularidades territoriales y culturales de cada caso, como las pautas comunes. Hay que analizar en qué condiciones las estrategias de comunicación pueden lograr que se realicen las conversaciones deseadas acerca de la memoria, pero también los obstáculos con que se encuentran. Se espera que los resultados de esta investigación puedan ser útiles para las comunidades investigadas y que puedan servir de orientación para aquellos que quieren impulsar procesos de comunicación comunitarios y alternativos, con el propósito de fortalecer la construcción de memoria colectiva, la ciudadanía y la autonomía de los sujetos.

La presente investigación es impulsada por las inquietudes formuladas en el curso del mencionado proyecto de cooperación. La presente investigación es impulsada por las inquietudes formuladas en el curso de cinco años de trabajo en un proyecto de cooperación. En las discusiones con grupos locales en diferentes lugares de Colombia, desde la costa atlántica hasta el Cauca, surgieron preguntas acerca de las prácticas de comunicación en comunidades muy diversas y, específicamente, acerca de las metodologías conducentes al fortalecimiento de una memoria colectiva de los hechos violentos, poniendo estos en un contexto político e histórico. A través del tiempo, en el trabajo conjunto en el marco del proyecto de cooperación con colectivos de comunicaciones en Atlántico, Antioquia y Cauca se han construido relaciones de una cierta confianza que permitieron tocar temas que son sensibles por su naturaleza, ya que se trata de los conflictos violentos vividos en los territorios y las experiencias, en muchos casos traumáticas, de las personas involucradas. En el transcurso del proyecto el optimismo respecto a un desarrollo positivo de la situación de derechos humanos luego de la firma del Acuerdo de Paz tuvo que ceder

a una evaluación más sobria. Persistieron las amenazas a activistas, periodistas y comunicadores. Ante el peligro, muchas memorias se mantendrán todavía en reserva para un tiempo largo.

El trabajo etnográfico en que se apoya esta tesis está plasmado en memorias y notas, videos y fotografías tomadas en los años de 2016 a 2019 durante reuniones de trabajo, encuentros de planificación, de monitoreo y de evaluación en las distintas fases del proyecto de cooperación. Además se consultaron informes técnicos, documentos conceptuales y relatorías de talleres, conferencias y de otras actividades realizadas. Múltiples viajes a las regiones me permitieron mantener un diálogo continuo con comunicadores, activistas de derechos humanos y otras personas interesadas en la construcción de la memoria colectiva, en particular, personas vinculadas a asociaciones de víctimas en los tres departamentos. A menudo visité las ciudades donde las organizaciones implementadoras del proyecto (Vokaribe Radio, Hacemos Memoria, el programa de comunicaciones del CRIC y la organización de periodistas Consejo de Redacción) tienen sus sedes, y –con menos frecuencia– las comunidades rurales donde se desarrollaron muchas actividades del proyecto: los municipios de Granada, Sonsón y El Carmen de Viboral en Antioquia; Kokonuko, Rioblanco, Caldono y Totoró en el Cauca. A través de los años pude conocer a las personas involucradas en el proyecto, sus formas de pensar, de hablar y de organizarse, las organizaciones de las cuales hacen parte y los territorios en los cuales desenvuelven su trabajo. Por supuesto, estas visitas no bastaron para llegar a una comprensión completa de las complejas relaciones sociales, políticas e históricas que dan el trasfondo de los hechos violentos de los cuales se procuraba hablar. Pero estas impresiones dieron una base para estudiar de manera más profunda el contexto de cada región en el marco de la presente tesis.

En 2018 y 2019 se realizó un proceso participativo de sistematización de estos proyectos. Se condujeron entrevistas con los miembros de los equipos de trabajo de las cuatro organizaciones, las cuales se focalizaron en el desarrollo metodológico de las intervenciones en las diferentes comunidades (Martínez y Restrepo, 2019). De ahí salieron algunas pautas que permitieron avanzar elementos sobre las preguntas de la investigación. Para obtener datos de la investigación se realizaron las siguientes actividades:

- a) Entrevistas con los miembros de los tres grupos. Se usaron distintos formatos como entrevista semiestructurada y talleres. En estos espacios se hicieron reflexiones sobre lo que

significa la memoria y de qué manera se puede fortalecer la libertad de expresión de las víctimas en los medios locales, sobre las condiciones particulares en cada contexto regional y sobre las estrategias de cada grupo.

- b) Entrevistas con víctimas del conflicto armado del entorno de los proyectos de comunicaciones estudiados. Esta categoría central para este proyecto se elaboró en el curso de la investigación, con base en las conversaciones realizadas con las personas afectadas por la violencia, los comunicadores, investigadores académicos, defensores de derechos humanos y otros.
- c) Análisis cualitativo de los productos mediáticos de los tres grupos y medios asociados sobre temas relacionados con conflicto, violencia y derechos humanos. Sumando textos, videos y programas de radio producidos en el marco del proyecto de cooperación 2016-2019.
- d) Análisis de contenidos publicados en el blog de Hacemos Memoria a partir de *Natural Language Processing* (NLP) y *Structural Topic Modelling*. Este ejercicio se realizó en cooperación con el Centro de Investigación de la Complejidad Social, Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile.
- e) Observación participativa. Participación en algunas actividades de los socios del proyecto (por ejemplo “minga del arte indígena” realizada por el CRIC en el parque Caldas de Popayán, noviembre de 2018, “Reporteratón” durante el carnaval popular del Suroccidente de Barranquilla, organizada por Vokaribe Radio en 2019, la producción de contenidos por medios comunitarios en el Oriente de Antioquia), de las cuales se realizaron grabaciones de video, fotos y notas para documentar los diferentes procesos comunicativos en su contexto.
- f) Estudio de la literatura acerca del conflicto armado en los diferentes lugares con el fin de poder contextualizar los otros textos y relatos.

La investigación de campo para completar el estudio fue diseñada en coordinación con los actores intermediarios (grupo Hacemos Memoria, equipo de comunicaciones del CRIC, emisora Vokaribe). Con ellos también se discutió la propuesta de investigación. Recibí muy valiosos aportes en talleres y presentaciones donde tuve la oportunidad de exponer los avances de mi investigación. Agradezco especialmente los comentarios recibidos en conversaciones con Patricia

Nieto, Víctor Casas, Martín Vidal, Belén Pardo, Patricia Rendón, Milton Patiño, Wálter Hernández, Selnich Vivas y Omar Rincón.

A Rodrigo Villarzú, director del departamento de América Latina y el Caribe de DW Akademie y David Olmos, jefe de la unidad de Sudamérica, agradezco el apoyo recibido que ha sido fundamental para poder realizar la investigación.

Carlos Rodríguez Sickert, director del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile, e Ignacio Toledo, especialista en análisis de datos de la misma universidad, me introdujeron al modelamiento estructural de tópicos, que fue un instrumento importante para el análisis de textos.

A Margarita Isaza, mi agradecimiento por la lectura y corrección del manuscrito.

Quiero expresar especialmente mi gratitud a la Universidad de Antioquia, en particular al profesor David Hernández quien, como decano de la Facultad de Comunicaciones fue contraparte del acuerdo de cooperación entre Deutsche Welle y la Universidad, y quien generosamente me vinculó como profesor invitado. El profesor Hernando Muñoz, en su función de decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, apoyó mi admisión al programa de doctorado.

Debo mencionar el gran valor para esta investigación de los aportes intelectuales de los profesores del programa de doctorado en ciencias sociales: Carlos Eduardo Maldonado, Carlo Emilio Piazzini, Cristóbal Gnecco, Gabriel Vélez-Cuartas, Rogerio Haesbaert, Natalia Cantó. Todos han influido de alguna manera u otra en la construcción de este texto.

Con especial afecto recuerdo al profesor Robert Dover quien acogió mi proyecto de tesis como asesor y me propició orientación muy valiosa fundamentada en su amplia lectura y su experiencia como investigador de campo en Colombia, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. Su fallecimiento en 2018 me causó profunda tristeza. Tuve la fortuna de encontrar entonces a la profesora Claudia Puerta, una asesora que me motivó a continuar con el trabajo en la tesis a pesar de la ruptura causada por la ausencia de Robert. Con su experticia y con infinita paciencia supo conducir este proyecto a un buen puerto. Le agradezco enormemente.

Capítulo 1. El periodismo y la confrontación con el pasado

Solo en años recientes, y como producto del vívido interés académico en la memoria como fenómeno social y cultural, el periodismo ha recibido atención como agente de la construcción de memoria histórica. El hecho de que este reconocimiento llegó tarde en comparación con la importancia que ha sido asignada a otros medios como contribuyentes a la formación de memoria colectiva, como la novela o el cine, se debe probablemente a que el periodismo es tradicionalmente considerado como una forma de narración enfocada en el presente, en la inmediatez de la noticia. Si bien puede ser considerado como inevitable relacionar el registro de la actualidad de alguna forma con eventos del pasado, el énfasis del periodismo reside claramente en el presente. Solo ocasionalmente el pasado adquiere valor noticioso, como es el caso, por ejemplo, con los eventos conmemorativos (los aniversarios de guerras y grandes catástrofes, etc.) que son noticia precisamente porque estos eventos, aunque evocan el recuerdo de hechos ocurridos en el pasado, transcurren en la actualidad. Generalmente el pasado funge en el periodismo como un trasfondo implícito delante el cual se desarrolla la noticia como registro de la contemporaneidad (Zelizer, 2008, p. 380). Pero no solamente la preocupación central del periodismo por el presente, sino también los formatos de narración característicos de él, parecen, a primera vista, designarlo como un vehículo poco apropiado para la confrontación con el pasado, pues, parte de su esencia son la reducción de complejidad, la síntesis y la simplificación. El valor fugaz de la noticia, por un lado, y la representación, de cierta manera esquemática, de los hechos mediante fórmulas narrativas estandarizadas y fácilmente reconocibles, por otro, parecen hacer del periodismo un instrumento menos adecuado que otros para la interpretación del pasado.²

El presente capítulo se ocupará de caracterizar una forma de hacer periodismo que reta a aquellos presupuestos establecidos. Se trata de un periodismo, ejemplificado aquí por el proyecto Hacemos Memoria, que surge en Colombia en la segunda década del siglo XXI, en el momento de transición de una confrontación armada, con las características de una guerra civil de baja intensidad, a una situación de menor conflictividad. Suele ocurrir en las transformaciones radicales de sociedades, por ejemplo, de un estado de guerra civil a la paz, o de un sistema político autoritario

² “A gravitation toward simplistic narratives, recounting without context, and a minimization of nuance and the grey areas of a phenomenon all make journalistic accounting a somewhat restricted approach to the past” (Zelizer, 2008, p. 382).

a la democracia, que se abren espacios para una mayor participación ciudadana, tanto en el debate público como en los procesos políticos. Entonces la dimensión histórica adquiere una mayor importancia, ya que la pregunta por los orígenes de la violencia, así se espera, puede conducir a respuestas normativas como base de una mejor convivencia.

En Colombia se pueden identificar diversas transformaciones ocurridas en el último medio siglo. En la mitad de los años ochenta, un fallido proceso de paz fue seguido por una creciente ola de violencia que desembocó en la desmovilización de varias organizaciones guerrilleras a finales de esa década. El siguiente proceso político condujo a la firma de una nueva constitución, en 1991. Sin embargo, la violencia no cesó. Al contrario, la confrontación armada, impulsada por el narcotráfico, aumentó de tal manera que los años noventa se recuerdan como una de las décadas más violentas que ha vivido el país. Solo con la desmovilización parcial de los ejércitos paramilitares a partir del 2004 esta ola de extrema violencia comenzó a disminuir. Sin embargo, un nuevo intento de negociar la paz con la guerrilla de las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana fracasó en 2002, lo cual condujo a una década más de guerra contrainsurgente, concentrada en las zonas rurales apartadas de los centros urbanos del país. La más reciente de estas transiciones fue marcada por la firma, en 2016, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Pero muy pronto una serie de sucesos rebajaron el optimismo expresado en el título del acuerdo: primero, el voto negativo en un plebiscito, luego la elección de un gobierno que rechazó el acuerdo de paz, y, finalmente, una ola constante de asesinatos de líderes sociales.

A pesar de estas contrariedades, o tal vez precisamente con la intención de superarlas, la ventana de oportunidad para realizar “los trabajos de la memoria” en Colombia fue ampliamente aprovechada por la sociedad civil –organizaciones sociales, investigadores académicos y algunos medios de comunicación– y entidades del Estado creadas específicamente para este fin, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El periodismo, fiel a su misión de representar las tendencias sociales, culturales y políticas, no pudo hacer caso omiso de esta irrupción del pasado en el presente. En su cubrimiento de la actualidad, los periodistas se vieron confrontados con la necesidad de analizar, con mayor rigor, las causas históricas del conflicto armado. El registro de graves violaciones de los derechos

humanos del pasado, hasta entonces olvidadas o subsumidas en una suerte de masa indefinida de horrores del pasado, se volvió noticia. En un entorno en el que las confrontaciones armadas, la persecución de activistas sociales y el miedo generalizado comenzaron a disminuir notablemente, el reclamo de las víctimas organizadas por el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades se escuchaba con más claridad. Al mismo tiempo, algunas intervenciones del Estado, como la Ley de Justicia y Paz de 2005 y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, instituyeron en la agenda noticiosa la confrontación con la historia de la violencia en Colombia. En la cambiante situación del país también se volvió oportuno recordar los actos de resiliencia y resistencia civil, ya que estos adquirirían importancia como referentes para una nueva ética social. Es decir, el periodismo se veía obligado a prestar una mayor atención al pasado, para poder cumplir con su rol de hacer comprensible el presente.

Sin embargo, varios factores dificultaron la realización de esta tarea. Entre ellos hay que mencionar los acelerados ritmos de producción característicos de los medios de información que raras veces permiten una investigación profunda, y la escasa capacidad analítica de los periodistas cuya experticia profesional, en muchos casos, se limita a dar un resumen de los comunicados oficiales, de ruedas de prensa y entrevistas con agentes del Gobierno o personas institucionalmente reconocidas como “expertas”. Por otro lado, los periodistas de gran renombre a nivel nacional, pertenecientes a las élites sociales y culturales del país, influyentes formadores de la opinión pública con credenciales intelectuales y equipados con los instrumentos de la crítica política y cultural, raras veces conocían de primera mano la realidad de vida de los millones de víctimas del conflicto armado, en su gran mayoría campesinos y obreros.³ Es precisamente esta indiferencia de los medios del *mainstream* frente a las causas sociales e históricas del conflicto armado la que llevó a varios grupos de periodistas a tomar la decisión de fundar medios independientes que se ocuparan de profundizar sobre los orígenes y consecuencias de la violencia política en Colombia. Así nació, en 2014, el proyecto Hacemos Memoria, como iniciativa de un grupo de docentes de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Su impulso principal era la preocupación por ampliar los aportes del periodismo a la comprensión del conflicto armado y sus

³ Hay importantes excepciones, entre ellas cabe destacar la obra del periodista, escritor y sociólogo Alfredo Molano, quien, debido a su amplia trayectoria como cronista del conflicto armado en las zonas rurales y su particular forma de escritura basada en voces testimoniales, fue elegido miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad del conflicto armado.

efectos sobre la sociedad, en particular, sobre las personas que fueron victimizadas. Era una preocupación nutrida por la experiencia de pertenecer a una sociedad permeada por la violencia, en la que casi todas las familias han sufrido la pérdida de alguno de sus miembros, donde moverse de un lugar a otro implica mayores riesgos y el oficio del periodismo es considerado uno de los más peligrosos.

Se trataba, por tanto, de fortalecer un periodismo que asume la responsabilidad de conocer a fondo los hechos del pasado violento, darles sentido una vez ha comprendido todas las dimensiones de su complejidad, y comunicarlos con la intención de contribuir a la verdad, a la justicia y a garantizar la no repetición de las atrocidades. (Nieto y Hernández, 2020, p. 124)⁴

Este objetivo, sin embargo, fue ampliado por un componente de gran relevancia: Hacemos Memoria procura no solamente producir textos que documenten e interpreten los hechos violentos, sino que aspira a involucrar a víctimas del conflicto armado como participantes activos en este esfuerzo, y, yendo aun más lejos, capacita a personas victimizadas para que puedan construir sus propias historias acerca del conflicto armado.

El proyecto, por tanto, realiza un giro metodológico radical: más allá de incorporar los testimonios de víctimas para mejorar los textos periodísticos (“darles autenticidad”), se desarrollaron metodologías de formación para un “periodismo participativo” (Martínez Mejía, 2023), orientadas a públicos no académicos, particularmente en zonas afectadas por graves violaciones a los derechos humanos. Con la implementación de estas metodologías se logró proveer a personas victimizadas con los instrumentos para investigar la historia de la violencia ocurrida en sus comunidades, comprenderla en un contexto espaciotemporal y político más amplio, y crear relatos desde su perspectiva propia.

La mayoría de estos trabajos se publicaron en medios diversos, como la radio local, en la página web de una asociación de víctimas y en redes digitales. Adicionalmente, las historias

⁴ Es pertinente mencionar aquí otros dos proyectos periodísticos que se ocupan de las secuelas de la violencia política en Colombia: *Verdad Abierta*, un medio que se concentra en la investigación del paramilitarismo y sus impactos, y *Rutas del Conflicto*, que procura crear un mapa periodístico de los hechos violentos ocurridos en el país.

producidas en los procesos asesorados por Hacemos Memoria fueron incorporadas en el blog del proyecto (www.hacemosmemoria.org), y de esta forma llegaron a hacer parte de un cuerpo de más de 600 textos publicados en el periodo estudiado aquí. A la fecha de la terminación del presente estudio, el número de trabajos relacionados con la memoria del conflicto armado publicados en este blog ha subido a más de 1200, y Hacemos Memoria se ha establecido como un medio de referencia para periodistas, investigadores y entidades defensoras de los derechos de las víctimas.

En el caso de Hacemos Memoria, el acercamiento proactivo a un periodismo centrado en la memoria histórica, implementado desde una institución académica, reúne la experticia profesional de periodistas que a su vez tienen mucha experiencia como docentes en la formación de estudiantes de pregrado en periodismo, con el conocimiento, de primera mano, de personas directamente afectadas por el conflicto armado. La publicación de piezas periodísticas se combina con la formación sobre el periodismo participativo enfocado en la memoria, orientada a personas, tanto periodistas como no periodistas, provenientes de diferentes ámbitos de la sociedad, entre ellas víctimas del conflicto armado asociadas a organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En los siguientes apartados se delinearán las particularidades de este periodismo dedicado a aportar, conscientemente, a la construcción de memoria colectiva. Primero examinaremos cómo se conformó el proyecto Hacemos Memoria y cuáles fueron las motivaciones de sus integrantes para dedicar sus esfuerzos profesionales a un periodismo centrado en la memoria de las víctimas del conflicto armado (capítulo 1.1). Como veremos, si bien algunos de los miembros del grupo (los más jóvenes) no se consideran personas victimizadas por su ejercicio del periodismo, otros sí han sufrido graves afectaciones a su libertad de expresión; y todos han presenciado de distintas maneras la extrema violencia que causó una tragedia humanitaria en el departamento de Antioquia y su capital Medellín. Sin embargo, el gremio de los periodistas no solo fue afectado por experiencias traumáticas en la cobertura de los hechos violentos, sino que muchos periodistas sufrieron la violencia en cuerpo propio.

En el capítulo 1.2 se revisarán las metodologías desarrolladas y aplicadas por Hacemos Memoria para incidir en el discurso público sobre la memoria del conflicto armado. Estas consistían en una mixtura de periodismo, pedagogía y cocreación en la que medios, academia y víctimas organizadas juntaron saberes y prácticas para construir narrativas de memoria. Este proceso se realizó a través del periodo examinado en esta tesis en comunidades rurales y urbanas de Antioquia. Pero la dirección de este movimiento –de la universidad a las comunidades– se tuvo

que invertir: la experiencia del diálogo con las víctimas organizadas condujo a una reflexión sobre la violencia y sobre víctimas y victimarios en la casa propia, la Universidad de Antioquia. En el capítulo 1.3 se analizarán los artículos publicados en el blog del proyecto Hacemos Memoria en la temporada estudiada en esta tesis. El objetivo será identificar el posicionamiento de las víctimas en estos textos.

1.1 Del trauma a la tarea

Como recuerda el filósofo francés Paul Ricœur en su obra seminal sobre la memoria histórica (Ricœur, 2010), ya desde la antigüedad se distingue la memoria que nos afecta, que nos invade, la que padecemos, de aquella otra memoria que activamente buscamos –*mneme* versus *anamnesis* en Aristóteles–. A finales del siglo XIX, Henri Bergson retoma la noción de los dos tipos de memoria caracterizados por Aristóteles y la amplía. Según Bergson hay que diferenciar entre una memoria-hábito, la cual está formada por las experiencias repetidas en la cotidianidad, sin que tomemos mayor nota de ello, y la memoria-recuerdo, que requiere de un esfuerzo intelectual: una intervención activa del sujeto para detener el olvido. En las palabras de Ricœur, esta última es la memoria que “realiza su trabajo a contracorriente del río *Leteo*” (Ricœur, 2010, p. 46).

Es precisamente este trabajo a contracorriente lo que caracteriza la construcción de una memoria colectiva centrada en las víctimas. Pues si la corriente general, la del *mainstream*, se ocupa de enaltecer los relatos gloriosos de la nación, la mera presencia de las víctimas en el espacio público apunta a los lugares oscuros, las llagas y los clivajes de la sociedad. Las voces de las víctimas expresan la demanda por la justicia y señalan responsabilidades, y por ello pueden ser sumamente peligrosas para los que están en el poder. Una vez que estas voces llegan a ser oídas, cambian la historia.

En el contexto latinoamericano, esta fue precisamente la experiencia de los países del Cono Sur donde el constante reclamo de los familiares de las víctimas, “a contracorriente”, fue la clave para el derrocamiento de las dictaduras militares y el restablecimiento de la democracia. El análisis de la socióloga argentina Elizabeth Jelin (2002) de la lucha por la memoria de las víctimas como parte de una lucha política por la liberación es válido para todo el continente. Hacemos Memoria, un proyecto iniciado en 2014 por un grupo de periodistas egresados de la Universidad de Antioquia

en torno a la profesora Patricia Nieto, asume esta lucha a contracorriente como una tarea del periodismo.

El propósito de Hacemos Memoria es fomentar el periodismo centrado en la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, con el doble objetivo de fortalecer el diálogo público sobre los acontecimientos violentos, por un lado y de empoderar a personas victimizadas, por el otro lado, de tal manera que puedan participar activamente en estas discusiones. Son varios los recursos que se emplean para este fin: primero, la formación en periodismo con un enfoque especial en la memoria histórica y los derechos humanos; segundo, la investigación y la reflexión académica sobre el rol del periodismo en la construcción de la memoria colectiva; tercero, la producción periodística como resultado de los procesos de formación, y, finalmente, la creación de espacios que faciliten una participación activa de la ciudadanía en debates sobre el conflicto armado en Colombia y sobre las graves violaciones a los derechos humanos que este produjo. En vista de su orientación social y política, estas intervenciones de Hacemos Memoria (algunas de ellas se describirán más detenidamente) se pueden denominar como lo que Jelin llama “la acción estratégica de ‘emprendedores de la memoria’ que desarrollan políticas activas de construcción de sentidos del pasado” (Jelin, 2002, p. 125). Estos emprendedores son los que proponen y realizan acciones que sacan a la luz, a contracorriente, aquella memoria obstinada por las constelaciones vigentes del poder. Proponemos examinar, en el presente capítulo, en qué medida este emprendimiento de la memoria logra el objetivo de fortalecer la participación de víctimas en el debate público y en la formación de memoria colectiva.

En los años que aquí observamos, de 2016 a 2019, el proyecto Hacemos Memoria ha ido creciendo y un número cada vez más grande de periodistas y otros profesionales se vincularon a sus diversas actividades. Aproximadamente 30 personas llegaron a hacer parte del equipo de trabajo de Hacemos Memoria, en diferentes momentos, durante esta temporada. Organizaron clases y talleres, charlas, foros de debate y la publicación de un blog, así como varios programas de radio y un libro. A este grupo núcleo de Hacemos Memoria se sumaron unos 70 docentes invitados para dictar cursos sobre una amplia gama de temas relacionados a la memoria y los derechos humanos. No todos eran académicos; las contribuciones venían de disciplinas tan diversas como el derecho, la filosofía, la sociología, la historia y el arte. Había reporteros, escritores y defensores de los derechos humanos entre los docentes, también antropólogos y criminólogos y hasta un exalcalde de Medellín. Sin embargo, el campo de conocimiento más enfatizado en este proceso de formación

era el periodismo. Desde luego, el concepto de periodismo aquí no se limita al de un servicio de información pública, sino que se entiende como un campo de investigación y de docencia, e incluso más que esto: como una práctica social.

Si bien la idea inicial de Hacemos Memoria fue poner en juego la creación de relatos periodísticos acerca del pasado violento, mediante la enseñanza y la reflexión académica, el involucramiento de la cooperación internacional de Alemania, que asumió una gran parte del financiamiento del proyecto, le dio un giro conceptual. A sugerencia del Ministerio de Cooperación de Alemania y con el objetivo de ampliar el alcance social del proyecto, Hacemos Memoria puso en marcha una estrategia de formación, que trascendía el ámbito universitario y se dirigía a comunidades urbanas y rurales fuertemente golpeadas por la violencia en el departamento de Antioquia. Para los integrantes del grupo, esto significaba llevar el aula fuera de la universidad. Había que viajar en bus a comunidades apartadas de esta región montañosa, parte de la cordillera central de los Andes, para iniciar un emprendimiento delicado e incluso arriesgado: estimular la conversación pública sobre el dolor y la dignidad, sobre la victimización y la resistencia durante el conflicto armado. Lo particular de este proceso de formación fue su intensidad y duración: no se trataba de visitas puntuales de algunas horas o de máximo un par de días, como suele ser el caso de cuando llegan profesionales de afuera a estas comunidades para dar algún taller de capacitación. Por el contrario, en el curso de un proceso prolongado, de varios años, los integrantes de Hacemos Memoria iban de forma regular a municipios rurales a varias horas de Medellín, para dar charlas y talleres, hacer estudios, realizar diagnósticos y asesorías, y también para llevar a cabo el registro periodístico acerca del estado de la elaboración de memoria colectiva en aquellas comunidades. De esta forma, en el transcurso de los cuatro años de 2016 a 2019 se desarrolló una serie de encuentros del grupo Hacemos Memoria con comunicadores de medios locales, estudiantes, miembros de asociaciones de víctimas y otras agrupaciones sociales. En cada uno de estos encuentros se avanzó, de forma colectiva, hacia una mayor comprensión del conflicto armado, poniendo lo ocurrido en la respectiva comunidad, en el contexto de la región y del país entero. Como resultado tangible de este proceso se pueden consultar planes de trabajo, conceptos metodológicos, informes de evaluación, así como productos periodísticos, entre ellos programas de radio y televisión, líneas de tiempo, entrevistas, videos y fotografías publicadas en redes digitales.

Antes de revisar con más detalle esta metodología, sin embargo, es preciso preguntar por los impulsos que motivaron a este grupo de periodistas y académicos a involucrarse en un proceso

tan largo e intenso de formación de un público fuera del ámbito de la academia y del periodismo tradicional. Para ello, hay que volver la mirada a los años de formación de los integrantes del grupo Hacemos Memoria, que remontan hasta el comienzo de la década de los años noventa del siglo pasado.

1.1.1 La violencia de los años ochenta y noventa en Medellín

En 1991, en Medellín, ciudad que debido a la ola de violencia desatada por Pablo Escobar había ganado notoriedad internacional como centro de operaciones del narcotráfico, la tasa de homicidio alcanzó la cifra exorbitante de 433 asesinados por 100 000 habitantes (Franco *et al.*, 2012), la más alta del mundo, una situación que llamó la atención de los medios internacionales y produjo titulares en los que la ciudad fue tildada como “la capital mundial del homicidio”. Para los habitantes de Medellín, esta fue una época particularmente difícil, pues tenían que sobrevivir entre tiroteos, explosiones y secuestros; además, adonde iban los perseguía el estigma de “mafiosos”. Adicionalmente, grupos guerrilleros y paramilitares se disputaron el territorio urbano (Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, 2017a). La vida pública estaba severamente limitada, sobre todo en la noche, pues pocas personas se atrevían a desplazarse por las calles de la ciudad en horas avanzadas para no exponerse al riesgo de un asalto, un secuestro o una bala perdida. Un reporte de Human Rights Watch de 1994 señalaba que niños y jóvenes pobres estaban especialmente expuestos a estos peligros. Se estima que el número de niños asesinados en Medellín alcanzó 1200 solamente en el año 1993 –la mayoría de ellos eran víctimas de conflictos entre bandas o de la llamada “limpieza social” ejecutada por grupos de autodefensa y agentes de policía (Human Rights Watch, 1994). La ciudad se había convertido en el símbolo de una violencia urbana desenfrenada, nutrida por el explosivo negocio del narcotráfico, la extrema pobreza e injusticia social, así como una violenta confrontación entre el Estado y sus contradictores, en un ambiente marcado por un alto nivel de corrupción política y ética.

Numerosos estudios sociológicos, obras literarias y de cine documental se ocuparon del fenómeno, agregando un toque científico y artístico a la aureola de ciudad maldita de Medellín. Libros como *No nacimos pa' semilla* de Alonso Salazar (1990), *La virgen de los sicarios* de Fernando Vallejo (1994), y las películas de Víctor Gaviria (*Yo te tumbo, tú me tumbas*, 1990, *Rodrigo D No futuro*, 1990, *La vendedora de rosas*, 1998) retrataron una juventud urbana al borde

del abismo, llamando la atención de un público internacional. De la literatura que ha tratado esta época posteriormente y bajo la sigla de la memoria, destaca la novela *El olvido que seremos* de Héctor Abad Faciolince (2006) en la cual el autor procesa el recuerdo de su padre, Héctor Abad Gómez, un reconocido médico y activista por los derechos humanos quien fue asesinado a balazos en el centro de Medellín en 1987. La muerte de Abad Gómez ilustra el peligro al que estaba expuesta una sociedad civil que se estaba formando para actuar contra la descomposición social que la ciudad sufría. Tanto entidades del gobierno local como la academia y organizaciones no gubernamentales se dedicaron a estudiar las causas sociales de la violencia y comenzaron a diseñar estrategias para contrarrestarla (Martin, 2014).

En 2000, la tasa de homicidios en Medellín había bajado a 167 por 100 000 habitantes. En diez años la cifra se había reducido en más de la mitad; sin embargo, en comparación internacional, todavía era altísima, y más que diez veces mayor que en la actualidad. Además, en la misma década, la violencia en los municipios rurales del departamento de Antioquia se había disparado. Entonces Apartadó, una ciudad de provincia con escasamente 100 000 habitantes, ubicada en la región bananera de Urabá, registraba la tasa de homicidio más alta Colombia (269) (Medicina Legal, 2000).

En 2016, al comienzo de la temporada estudiada aquí, la violencia extrema en Medellín había bajado de manera significativa. La tasa de homicidios marcaba 22 por 100 000, un valor que ya se comparaba de manera favorable con otras ciudades colombianas como Cali (54), Armenia (38) o Cúcuta (37) (Fundación Ideas para la Paz, 2016), e incluso con algunas ciudades en Estados Unidos como Baltimore (51), Detroit (45) o Cleveland (35) (FBI, 2016). Luego del desmantelamiento de los grandes carteles de la cocaína, la desmovilización de los paramilitares y el acuerdo de paz con las FARC, Medellín se hallaba nuevamente en los titulares de la prensa internacional. Ahora se hablaba del “milagro de Medellín”.⁵

La violencia de las mafias, combinada con la violencia política, tuvo efectos nefastos sobre la participación ciudadana en todo el país. Los movimientos sociales de tendencia izquierdista, en particular las organizaciones campesinas, los sindicatos y los movimientos estudiantiles fueron atacados de manera indiscriminada en el marco de las estrategias antsubversivas de los sucesivos gobiernos nacionales, alineados por políticas contrainsurgentes de Estados Unidos y en alianza con

⁵ En 2021, la tasa de homicidios en Medellín era de 15,4 por 100 000 habitantes (Preciado, 2022, febrero 1).

ejércitos ilegales, las llamadas autodefensas o paramilitares, de orientación política de extrema derecha. En las universidades, especialmente las de carácter público como la Universidad de Antioquia, donde se discutían con más vigor las corrientes políticas que pusieron en cuestión el orden social establecido, la confrontación política a menudo se salió del debate democrático sobre puntos de vista divergentes, convirtiendo el campus en campo de batalla, lo que ha dejado a través de los años una larga huella de sangre.

Si bien al comienzo de los años ochenta se presenció un importante surgimiento de movimientos cívicos independientes, hacia finales de esta década, tanto los partidos políticos tradicionales como las guerrillas habían logrado ejercer control sobre varios de estos movimientos, con una subsecuente división y decaída de los mismos. Desde las ciencias sociales, se diagnosticaba un “acelerado deterioro ético” del país, y en su consecuencia, una creciente desconfianza en los liderazgos políticos.

No pocos jóvenes, militantes actuales o potenciales de diversos movimientos, no encuentran en el panorama político colombiano una perspectiva halagadora y se inclinan más bien por el enriquecimiento rápido que promete el tráfico de drogas e, incluso, el crimen a sueldo. (Restrepo, 1990, p. 408)

Paradójicamente, 1991, el año del clímax de la violencia en Medellín, también fue un momento de esperanza por una mayor inclusión social en Colombia. Una nueva constitución, aprobada en este año, prometía la participación de sectores de la población tradicionalmente marginalizados en las decisiones políticas. Fue un año marcado por transformaciones políticas a nivel global, como la disolución de la Unión Soviética y la reunificación de Alemania. En muchas partes se hablaba de un auge de la sociedad civil, así también en este país suramericano golpeado por las secuelas tardías del colonialismo, la injusticia social, el autoritarismo y el conflicto armado. La Constitución de 1991 representaba una promesa de paz, no solamente porque fue resultado de la integración de varios grupos guerrilleros a la vida civil, sino también porque en ella se incluyeron varios elementos que garantizaban una mayor participación ciudadana, entre ellos la elección de los alcaldes que antes fueron designados, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la legalización de los medios comunitarios.

Estas medidas, sin embargo, no lograron detener la violencia política y la corrupción en Colombia, ambas alimentadas por el dinero del narcotráfico. En algunas regiones, incluso, la descentralización tuvo efectos contrarios a los deseados: la disminución del control centralizado del poder abrió las puertas para excesos de corrupción y para la intromisión de grupos al margen de la ley en la política local (González, 2014, p. 402 y ss.). Contrario a lo esperado, la continuada confrontación violenta entre grupos armados de ideología comunista con otros de ultraderecha – estos últimos vinculados a sectores del Estado y de las élites económicas– produjo una nueva ola de violencia cuyas víctimas, en su gran mayoría, pertenecían a la población civil y no estaban involucradas en la confrontación armada.

La Universidad de Antioquia no quedó a salvo, al contrario: por su carácter de institución de educación pública, los conflictos que afectaban a la sociedad se reflejaban en ella. Esto hasta tal grado en que el campus, ubicado en el centro de la ciudad de Medellín, se convirtió en varias épocas en un campo de batalla entre guerrilla, paramilitares y fuerzas del Estado. Los integrantes de Hacemos Memoria presenciaron el clima de violencia, de corrupción y de desencantamiento político que regía en todo el país, y especialmente en Medellín, de forma directa. Todos fueron afectados de alguna manera u otra. Algunos provenían de comunidades rurales y se fueron a la ciudad no solamente por las mejores oportunidades de estudio sino también porque, pese a su alto nivel de violencia, Medellín se consideraba como un lugar más seguro. Para la mayoría del grupo, la pérdida de parientes, de amigos, conocidos o vecinos por causa de la violencia era una experiencia común.

Uno de ellos, Juan Camilo Castañeda, un joven periodista egresado de la Universidad de Antioquia, publicó un libro sobre Santa Inés, un barrio obrero de Medellín, donde él nació y el cual fue escenario de una sangrienta guerra entre dos bandas criminales entre 2009 y 2011, la última de tres grandes oleadas de violencia que este barrio obrero ha sufrido desde los años ochenta. Los testimonios recogidos por el autor hablan del “temor a ser asesinados; a escuchar enfrentamientos con armas de largo y corto alcance durante las noches; a constatar que los jóvenes del sector engrosaban las filas de los distintos combos” (Castañeda Arboleda, 2016, p. 7).

Es notable que en una situación en la que Colombia era considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo (Iragorri, 1999, noviembre 13), la decisión de tomar esta profesión fue basada en una motivación política. Patricia Nieto, la directora de Hacemos Memoria, recuerda los años ochenta, cuando era estudiante en la Universidad de Antioquia, como “una juventud en un

estado permanente de toque de queda”. Las protestas estudiantiles contra las injusticias sociales que sufría el país encontraron una respuesta violenta de parte de las fuerzas de seguridad. Con frecuencia el Ejército ocupaba el campus y disparaba con fusiles contra los estudiantes. “Durante toda mi carrera, la universidad estaba rodeada de soldados”, recuerda Nieto; “había un soldado cada dos metros”. Mientras las élites conservadoras consideraban las universidades públicas como nidos del comunismo y justificaban la fuerte represión con que era ahí donde se formaban los cuadros guerrilleros, muchos jóvenes veían las protestas como una legítima expresión de descontento con un Estado que no se preocupaba por las justas demandas sociales de sus ciudadanos y cuyos representantes constantemente violaban los derechos humanos. Para algunos estudiantes fue precisamente esta experiencia de la violencia del Estado en la opresión de las protestas sociales la que los motivó a afiliarse a los grupos armados (Acevedo y Samacá, 2015).

Pese a que el conflicto armado estaba presente en el campus y había cobrado las vidas de miembros de la universidad –profesores, estudiantes y empleados–, el proyecto Hacemos Memoria, en su fase inicial, no asumió la tarea de hacer la memoria en la propia casa sino que optó por desarrollar sus actividades en comunidades alejadas. En parte, esto se debía a que la conflictividad que se había desplegado en la universidad durante décadas (y lo continuaba haciendo hasta el presente, solo temporalmente interrumpida por el cierre de la universidad debido a la pandemia de covid-19) produjo un ambiente en que hablar de estos acontecimientos era un asunto bastante delicado, pues en este momento varios de los promotores de la violencia aún estaban presentes en el campus. Por otro lado, tanto la ciudad de Medellín como la Universidad de Antioquia vivían un momento de relativa tranquilidad. Los indicadores de violencia, como se mencionó, habían bajado considerablemente y en el campus las protestas estudiantiles que solían, de forma cuasi ritual, culminar en confrontaciones violentas (gases lacrimógenos y disparos de un lado, piedras y cocteles Molotov del otro), eran menos frecuentes que en años anteriores. De tal suerte que los miembros más jóvenes de Hacemos Memoria, algunos de ellos recién graduados del pregrado en periodismo, otros todavía terminando la carrera, consideraban que la extrema violencia era un asunto del pasado, y aun si la conflictividad continuaba en todo el país, esta se concentraba en lugares apartados de la vida de ellos.

En cambio, los miembros de mayor edad del grupo, periodistas pertenecientes a la generación que presenció la guerra urbana y la persecución política de los años ochenta y noventa, tenían una visión menos optimista de la situación: ellos advertían que el trabajo de los que exponen

las injusticias y las violaciones a los derechos humanos (los “emprendedores de la memoria”, en palabras de Jelin) siempre trae consigo el riesgo de ser agredidos por aquellos cuyo interés es que estos asuntos se borren de la memoria colectiva y queden en el olvido.

Los integrantes de Hacemos Memoria, por tanto, recibieron el impulso inicial para aportar a la construcción de la memoria histórica del conflicto armado por su vivencia de las confrontaciones violentas en la universidad y por la experiencia profesional de los mayores de este grupo como periodistas en tiempos de guerra. La capacidad de indagar y hablar de la violencia en una sociedad silenciada tiene su origen ahí: por un lado, en la memoria compartida de las protestas y de la represión policial; en el miedo ante los asesinatos de compañeros y de profesores políticamente activos; en la convicción de que había que resistirse a los poderes destructivos. Por otro lado, esta inquietud por el pasado y el deseo de comunicar sobre él se nutrió del recuerdo de las vivencias como reporteros en escenarios de combate, en lugares donde ocurrieron masacres; de los encuentros con los sobrevivientes así como con actores armados de todos los bandos en el terreno. Estas experiencias, sumadas a la formación académica en ciencias sociales y políticas, constituyeron la base para una percepción política del periodismo. En su consecuencia, el trabajo de informar sobre los hechos violentos que afectaban el país era percibido como una tarea social. Lo resultante es una ética profesional característica de los periodistas formados en las universidades públicas, pues estas definen su misión educativa no solamente a través de la formación académica, sino que pretenden impulsar transformaciones sociales en sectores de la sociedad, más allá del ámbito universitario.

Se puede constatar, en resumen, que el interés por el enfoque periodístico en la memoria histórica nació de una necesidad de los periodistas de entender mejor no solamente el desenvolvimiento del conflicto armado, como una condición para comprender de la sociedad actual, sino también su propio pasado. Esta necesidad, por tanto, no era abstracta o netamente académica, sino producto de interrogantes que surgieron del trabajo de los periodistas. Para Patricia Nieto, por ejemplo, una experiencia clave fue la asignación, en 1998, de reportar sobre una masacre ocurrida en la población rural de Machuca, un pueblo apartado en las montañas de Antioquia que sufrió un ataque de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. La explosión de un

oleoducto en la cercanía del pueblo causó un gran incendio en el cual 84 personas perdieron la vida. Cuenta ella:⁶

Cuando llegué los periodistas ya se habían ido. Era un caserío organizado de lado y lado de la carretera, quemado. La gente sin casa, todo el borde del río quemado. Lo que se veía en las mangas eran vacas quemadas, pollos quemados, caballos quemados, que no habían sacado porque durante tres días se habían ocupado de sacar a las personas heridas y enterrar a los muertos. Toda la gente estaba sentada en la orilla de la carretera. Estaban con la ropa deshecha y en estados emocionales muy críticos.

A pocos días de la catástrofe, la periodista compartió tiempo y espacio con las víctimas traumatizadas. Durmió en la iglesia con ellas y compartió con ellas las comidas repartidas por las organizaciones de auxilio. Pero a pesar de la cercanía vivida en este momento, al regresar a la ciudad se percató de que las entrevistas grabadas en Machuca no le servían para contar una historia, más allá de la noticia que ya había pasado por los medios de información.

Eran entrevistas reales, a personas reales, que me habían contado y me habían respondido preguntas. Pero para mí era como si fueran entrevistas en otro mundo. Como que no eran de lo que llamamos la realidad. Porque lo que contaban eran relatos propios de un momento dramático en el cual las personas están fuera de la consciencia. La mayoría de los relatos no tenían un orden lógico. Eran relatos delirantes.

Ante la aplastante presencia de la tragedia, las víctimas no tenían la capacidad de cumplir con la función social que se les suele adscribir, la del testigo. La imposibilidad de dar un testimonio coherente en esta situación resultó en la imposibilidad de crear un relato periodístico que más allá de registrar los datos crudos que conforman la noticia (número de muertos, estado de los heridos, atribución de responsabilidades) hubiera comunicado la experiencia contada en primera persona por la víctima, como sujeto de lo vivido. Lo cierto es que no solamente los muertos están callados para siempre, sino también los seres tan severamente traumatizados que no pueden expresar su

⁶ Estas experiencias las he conocido en conversaciones y entrevistas informales, incluso con otros miembros de los equipos de trabajo.

sufrimiento. Basándose en los reportes de los sobrevivientes de los campos de concentración nazis, Agamben hace referencia a los llamados *musulmanes*, prisioneros que ante la dimensión de la crueldad habían perdido tanto la voluntad de vivir como la capacidad de expresión y deambulaban entre los otros prisioneros como muertos vivos.⁷ “Quien asume la carga de testimoniar por ellos sabe que tiene que dar testimonio de la imposibilidad de testimoniar” (Agamben, 2009, p. 34).

Para un periodismo que reconoce esta impotencia —que por razones obvias no puede ser el periodismo sensacionalista, el que se aprovecha de la imagen de la persona indefensa en su máxima expresión de dolor, aumentando con ello su condición de abatimiento—, que considera la dignidad de la otra persona como un valor inalienable, esta incapacidad de dar testimonio puede tener distintas consecuencias. Una es omitir la voz de la víctima y relatar los hechos a través de las declaraciones de expertos, funcionarios, técnicos, delegados, encargados, etc. Otra posibilidad ofrece un periodismo más reflexivo, menos impulsado por la urgencia de la actualidad inmediata. Porque, si bien existen los casos extremos, en los que la víctima queda inhabilitada de manera permanente para dar el testimonio, como era el caso de los *musulmanes* de Auschwitz, en muchos otros casos, con el paso del tiempo se crean mejores condiciones tanto en los individuos como en su entorno social para hablar de lo que anteriormente no se pudo mencionar. También es cierto que entre el periodista y la persona victimizada y traumatizada se tiene que establecer una relación de confianza, un proceso que puede durar mucho tiempo y una disposición de invertir energía para cultivar esta relación.

Finalmente, el reportaje sobre las víctimas del atentado de Machuca quedó frustrado, no solamente por la imposibilidad de los protagonistas de dar un testimonio coherente, sino también por la afectación emocional de la periodista. La empatía se traducía en el silencio y en la incapacidad de escribir *sobre* las personas que en este momento habían perdido su voz racional. Sin embargo, este silencio obligado tuvo como consecuencia una conclusión: construir una narración del conflicto armado basada en los testimonios de las víctimas necesitaba una mayor distancia con respecto a los eventos, se requería de un marco temporal diferente para el periodismo, el tiempo propio de la memoria histórica.

⁷ Según Agamben, la expresión *musulmán*, para referirse a estos seres que habían abandonado cualquier esperanza, hacía alusión a un presunto fatalismo islámico. “La explicación más probable remite al significado del término árabe *muslim*, que designa al que se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios” (Agamben, 2009, p. 45).

Años más tarde, en una coyuntura diferente del país, donde se vislumbraba la posibilidad de acuerdos entre los grupos hostiles y el Estado, y la sociedad registraba con mayor atención las demandas articuladas por las víctimas, el proyecto Hacemos Memoria empezó a construir las condiciones para un periodismo centrado en la memoria de las víctimas. El grupo de personas a cargo del proyecto estaba convencido de que con ello se respondía a una necesidad social, pues en Colombia, como en muchos otros países afectados por conflictos violentos, los debates sobre la verdad y el derecho a reparaciones entraron en la agenda política y en la de los medios. Las víctimas se habían vuelto noticia.

Es necesario detenernos un momento aquí, antes de continuar con el relato etnográfico sobre el grupo Hacemos Memoria y sus esfuerzos por narrar la historia de las víctimas del conflicto armado, y concentrar la mirada en el significado de aquel concepto tan central para el presente trabajo: la víctima. En el siguiente apartado resumiré algunas de las reflexiones centrales realizadas en los últimos años acerca de esta categoría, planteadas por investigadores de distintas ramas de conocimiento.

1.1.2 El concepto de víctima

A través de los tiempos, y en concordancia con las transformaciones políticas y culturales que afectan las sociedades, algunas de las categorías que designan las agrupaciones sociales desaparecen con ellas, o son reemplazadas por nuevas, mientras algunas otras permanecen, pero cambian su significado. Este último es el caso de la categoría de víctima, que hace parte de nuestro vocabulario desde la antigüedad. En su origen latín, la palabra *víctima* está estrechamente vinculada al ritual del sacrificio y designa al ser vivo (humano, animal o planta) sacrificado a un dios.⁸ René Girard (2012, 2016) derivó de ahí su famosa teoría del sacrificio entendido como un acto de violencia característico de las sociedades arcaicas, donde el colectivo elige y asesina a un individuo como el *chivo expiatorio*, con el fin de garantizar la cohesión de la comunidad; en otras palabras, “el hecho de que el orden sea engendrado por un paroxismo de violencia desordenada” (Girard, 2012, p. 52). Solo las religiones judaica y cristiana no requieren más del chivo expiatorio porque el mismo Dios ofrece a su hijo único como sacrificio. Así, “lo bíblico y lo evangélico privan

⁸ En una capa etimológica más antigua de la palabra *víctima* suena la sílaba indoeuropea *weik*: separar, poner aparte, escoger (Rodríguez Moreno, 2010).

lentamente a la humanidad de sus últimas muletas sacrificiales; nos enfrentan a nuestra propia violencia” (p. 83). El sacrificio, por tanto, es un don sagrado, es la vida entregada a una causa superior. En una nueva vuelta semántica, durante el siglo XIX y hasta la mitad del XX, el sacrificio es secularizado. Ahora la vida se entrega en el campo de la batalla heroica, como un don de sí mismo, a este nuevo ser superior que es la Nación. Sin embargo, con la industrialización de la guerra en Europa esta glorificación de la víctima heroica pierde todo el sentido.

La figura de la víctima, bajo los rasgos de aquel o de aquella que se sacrificaba, es decir, de aquel o de aquella que hasta cierto punto elegía a morir, simplemente ya no se sostiene frente a las decenas de millones de muertos y desaparecidos, de desplazados y de sobrevivientes aterrados y extraviados a los que nadie jamás pidió su opinión. (Hartog, 2012, p. 13)

Si bien esta afirmación de Hartog es cuestionable, teniendo en cuenta las masas de jóvenes alemanes que marcharon con gran entusiasmo a la guerra en 1914, y la eufórica respuesta a la pregunta retórica de Goebbels “Wollt ihr den totalen Krieg?” (“¿Quieren ustedes la guerra total?”), lo cierto es que en las dos guerras mundiales se hicieron obvias las nefastas consecuencias del nacionalismo, que los pueblos fueron engañados y victimizados por el cálculo brutal de sus líderes. En los campos de exterminio de los nazis, empero, se suma un agravante a la condición de la víctima: el régimen hace todo para eliminar, junto con las personas, cada vestigio de su existencia, en particular, todas las voces que puedan dar testimonio. Y si bien este plan siniestro fracasó, llegó tan cerca de hacerse realidad que los negadores de la Shoah se pudieron sentir envalentonados a sostener que no había ninguna prueba de la existencia de las cámaras de gas.

Para Jean-François Lyotard, la esencia de la condición de víctima deriva precisamente de esta condición: de su imposibilidad de dar testimonio; o porque no tiene voz para hablar, o bien, porque no hay quién esté dispuesto a escuchar. “Es propio de una víctima no poder probar que sufrió una sinrazón. Un querellante es alguien que sufrió un daño y que dispone de los medios para probarlo. Se convierte en una víctima si pierde esos medios” (Lyotard, 1988, p. 20).

Elizabeth Jelin, la socióloga argentina quien, con su libro *Los trabajos de la memoria* (2002), hizo un aporte fundacional al debate sobre la memoria histórica en América Latina, retoma esta noción de la víctima desarrollada por Lyotard y la amplía:

La voz de la víctima no pertenece al mundo real reconocido. En tanto no hay medios para verificar nada de lo ocurrido en el contexto del terror arbitrario y el poder total, es como si nunca hubiera sucedido. De esta manera, las víctimas son empujadas al silencio o, cuando hablan, no se les cree. En contraste, la posición de sujeto de derecho implica que los adversarios en conflicto tienen acceso a una autoridad, a un tribunal que puede juzgar la verdad de lo que se alega según procedimientos y reglas que permiten presentar pruebas. (Jelin, 2017, p. 278)

Desde los años setenta del siglo pasado, cuando en medio de las dictaduras militares en Suramérica las víctimas emergieron como una categoría social y política en América Latina, ha sido común entender este término en un contexto marcado por la reivindicación de los derechos humanos y referente a personas violentadas por los Estados y sus fuerzas militares o paramilitares. A diferencia de los países del Cono Sur, la situación en Colombia ha sido más compleja. No hubo dictadura sino gobiernos democráticamente elegidos, pero sin que hubiese una participación real del pueblo empobrecido en la toma de decisiones. Las fuerzas revolucionarias que se formaron para combatir la injusticia no lograron ser aceptadas por las mayorías como representantes del pueblo frente a su opresor. Al contrario, en medio siglo de guerra “de baja intensidad” acumularon un historial aplastante de crímenes contra los derechos humanos. Solo recientemente, y como producto de los acuerdos de paz, la implementación de la justicia transicional, y la disposición de los desmovilizados jefes guerrilleros a asumir la responsabilidad por las atrocidades cometidas, en Colombia se ha comenzado a incluir también plenamente a aquellas personas que sufrieron daños por parte de los grupos subversivos en la categoría de las víctimas (Guglielmucci, 2017).

La violencia de los grupos armados contra la población civil tiene muchas caras. El listado documentado por el Grupo de Memoria Histórica constituye una tipología del terror: asesinatos selectivos, masacres, sevicia y tortura, desapariciones forzadas, secuestros y toma de rehenes, desplazamiento forzado, despojos y extorsiones, violencia sexual, reclutamiento ilícito, acciones bélicas, minas antipersonal, entre otras (GMH, 2013). En menor o mayor medida, estas modalidades de crimen violento fueron –y siguen siendo– aplicadas por todos los actores armados, en algunos casos, incluso, por las fuerzas del Estado. Recopilar y hacer visible los detalles y la dimensión del sufrimiento de las víctimas del conflicto armado en Colombia ha sido la tarea comisionada por el Estado al Centro Nacional de Memoria Histórica y a la Comisión para el

Esclarecimiento de la Verdad. Ambas entidades han publicado una amplia documentación de los hechos ocurridos, propugnando en ella el derecho de las víctimas a dar testimonio. En muchos eventos –foros, talleres, actos de reconciliación y otros–, personas victimizadas obtuvieron la oportunidad (muchas de ellas por primera vez) de relatar su historia en público. A pesar de una postura indiferente, o incluso reacia, de amplios sectores de la sociedad colombiana, esta gran acción concertada por el Estado, las ONG y la cooperación internacional creó un escenario facilitador para que las víctimas pudieran dar su testimonio en distintos lugares. Así, por ejemplo, con el apoyo financiero de la cooperación internacional, se publicaron reportajes sobre las violaciones a los derechos humanos y las iniciativas de víctimas; algunos medios comunitarios propiciaron espacios en su programación para que sobrevivientes del conflicto armado pudieran relatar sus historias y participar en discusiones sobre la memoria.

Es una realidad que en la coyuntura histórica actual la categoría de víctima se ha ido instituyendo como un elemento central del discurso social, político y jurídico en Colombia, y que las víctimas del conflicto armado hoy constituyen un movimiento social fuerte que forma activamente parte de la transformación de la sociedad. El reconocimiento de las víctimas por el Estado y la subsecuente implementación de un marco institucional que puede responder a sus necesidades, ha resultado en que existe “un uso discursivo e incluso político de las víctimas, propio de los escenarios que ha promovido la transicionalidad” (Puerta, 2020, p. 96). Por primera vez se vislumbra la posibilidad de un tratamiento digno de las experiencias dolorosas de millones de colombianas y colombianos. Para poder lograr la comprensión y una cierta empatía con aquellos que han sido expulsados y violentados, el trabajo de memoria, es decir, la investigación de los hechos ocurridos y el debate sobre ellos, es una precondition indispensable, y –en este aspecto el caso de Alemania puede servir de ejemplo– lo seguirá siendo por mucho tiempo. El caso de Colombia, a su vez, demuestra que para las sociedades que han sufrido un conflicto interno y procuran superar sus divisiones, asumir la responsabilidad hacia todas las víctimas y exigir contribuciones a la verdad a todos los actores violentos, es clave. Esto requiere cambios profundos; en primer lugar, una concientización de la ciudadanía acerca de la condición de la víctima como sujeto social, y, sobre todo, como sujeto de derechos; los espacios apropiados por las víctimas en los medios de comunicación juegan un papel importante en ello. A partir de esta sensibilización de la sociedad puede comenzar el largo proceso de creación de una institucionalidad capaz de responder al problema a través de la construcción de normas jurídicas, de procedimientos

administrativos, conceptos pedagógicos y narrativas culturales. Es decir, la memoria activa –la *anamnesis* de Aristóteles– es la condición para que pueda entrar en juego aquella imaginación instituyente que es la fuerza creadora de la sociedad, según Castoriadis (2007).⁹

Históricamente, el origen del reconocimiento de las víctimas por las instituciones del Estado se puede asociar con la difusión de la noción de derechos humanos, desde el siglo XVIII. Sin embargo, tenían que pasar más de cien años para que se concretaran los primeros acuerdos internacionales para humanizar la guerra, en particular, la primera Convención de Ginebra, de 1864, que se considera como el punto de partida del Derecho Internacional Humanitario. Ahí se establecieron normas éticas, por ejemplo, la de proteger a la población civil en la guerra y la de garantizar un tratamiento humano a los combatientes presos o caídos. No obstante, apenas en la segunda mitad del siglo XX, bajo la desgarradora impresión de las imágenes de los campos de concentración nazis, la figura de la víctima comenzó a ocupar un lugar central en la cultura del recuerdo (Assmann, 2006b; Goltermann, 2017).

Para las personas victimizadas, sin embargo, ser denominado víctima muchas veces implica una cierta vergüenza, un sentido de culpabilidad. Es, por un lado, el sentimiento de humillación por haber sido abatido (*victus*, latín por vencido), y, por otro lado, la sospecha persistente dirigida por la sociedad hacia las víctimas, por ejemplo, cuando en casos de violencia sexual se alega que la víctima se habría comportado de una manera que provocaba el crimen, o –un alegato común en el contexto colombiano– cuando se presume que las víctimas civiles “algo tenían que ver” con los actores armados. Para muchos que han sufrido actos de violencia es preferible representarse como *sobrevivientes*, o incluso *resistentes*, palabras que connotan una subjetividad activa, empoderada, o por lo menos con el potencial de empoderamiento. Pero el proceso de pasar de ser una persona agredida, violentada, injustamente victimizada a un sujeto político que desde su condición de víctima lucha por sus derechos y los de otras personas, es difícil y suele tomar mucho tiempo. El relato de Yomira Espinosa, cuyo padre, un líder sindical, fue asesinado en 2004 puede servir de ejemplo:

⁹ Se ha criticado a Castoriadis porque su concepto de imaginación no toma en consideración las condiciones sociales que hacen posible, in primer lugar, la imaginación de una institución nueva (Stavrakakis, 2010). Para Ricoeur, en cuya obra la imaginación también juega un papel central, esta no puede existir sin algo previo (Michel, 2014). Castoriadis, en cambio, responde que algunas instituciones sociales, como la *polis* griega y la democracia moderna, no pueden ser explicadas con algo previo si no representan una creación original.

Primero, cuando a uno le colocan el cartón de víctima, el título de víctima, uno no entiende cómo, por qué y cuándo. Es un proceso de aceptación, es un proceso que pasa del miedo al entendimiento, luego a la tranquilidad y luego a la fortaleza para reconocer que somos víctimas. Largo... un proceso de más de 13 años que ha vivido mi familia, y ahora, pues lo digo sin miedo: soy una víctima, un sobreviviente del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. El papel de víctima ha sido muy duro en este proceso, primero, nunca se nos dio un apoyo, todo lo que nos enteramos qué teníamos que hacer fue por iniciativa propia, se han tocado puertas, se llegó a todos los estamentos e instituciones, desde la Defensoría hasta la Unidad de Víctimas para saber por qué somos víctimas, qué hacemos como víctimas, hasta dónde llega el hecho de ser víctima. Todos los procesos han sido muy difíciles y lo último que nos dijeron fue que como ya viene el posconflicto, el nuevo proceso, pues nosotros vamos a quedar ahí, siendo un número más, una estadística más, cuando hay muchas cosas todavía por resolver. (Vokaribe Radio, 2017)

Son conocidos los relatos de sobrevivientes judíos de los campos de concentración acerca de su sentido de culpabilidad por haber sobrevivido cuando tantos otros murieron. De ahí la advertencia de Primo Levi de que los sobrevivientes no eran los verdaderos testigos sino

una minoría anómala además de exigua: somos aquellos que, por sus prevaricaciones, o su habilidad, o su suerte, no han tocado fondo. Quien lo ha hecho, quien ha visto a la Gorgona, no ha vuelto para contarlo, o ha vuelto mudo; son ellos, los “musulmanes”, los hundidos, los verdaderos testigos, aquellos cuya declaración habría podido tener un significado general. Ellos son la regla, nosotros la excepción. (1989, p. 83)

Fue con el Estatuto para el Tribunal de Núremberg de 1945 que la noción de justicia, y más concretamente, la de legalidad, se vinculó con el concepto de víctima. Los sobrevivientes fueron escuchados en los procesos contra los responsables de los crímenes que fueron etiquetados como de “lesa humanidad”, y con ello no solamente hicieron un aporte al esclarecimiento de los hechos sino que también comenzaron a entrar en la conciencia colectiva como seres cuyos derechos fundamentales fueron violados de forma radical. Esto a su vez fue, en términos morales y en consecuencia también en términos legales, el fundamento del reclamo por una indemnización. Y

es precisamente ahí donde se genera la transformación de la categoría de víctima: de un ser abatido, vencido, básicamente sin derechos, a un sujeto político, portador de derechos que fueron violados, y por lo cual se le debe hacer una reparación. Claramente, como bien señala Goltermann (2017), la definición de quien se debe considerar víctima y cuáles son sus derechos es una cuestión de poder, y son los gobernantes de los países que se encuentran en situaciones de conflicto o de postconflicto los que ejercen este poder de definición.

Ahora bien, en las últimas décadas se han establecido varias normas legales a nivel internacional que han fortalecido la posición de las víctimas y han tenido impacto en una legislación más favorable para ellas en los países que han sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos (Puerta, 2020).

En 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder” (Resolución 40/34), en la cual se presenta una definición general de víctimas como “personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”. Además, se establece que los familiares cercanos y las personas dependientes de la víctima también adquieren el estatus de víctima.

Otro hito fue el Estatuto de Roma para la creación del Tribunal Penal Internacional, aprobado en 1998, que reafirmó el derecho de las víctimas a las reparaciones. En 2005, luego de quince años de negociaciones, la Asamblea General adoptó otra resolución (Resolución 60/147) en la cual se concreta el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones de las víctimas. En este documento se dispone que “las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias”. Específicamente, el Estado debe velar por que no ocurra una revictimización, de tal manera que “las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma” (Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2005).

Asimismo, se definen, de acuerdo con el derecho internacional, los siguientes derechos de la víctima: a) acceso igual y efectivo a la justicia; b) reparación adecuada, efectiva y rápida del

daño sufrido; y c) acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. En resumen, aquí están plasmados los principios que orientan, en la actualidad, el tratamiento de las víctimas por el Estado colombiano, a decir: justicia, verdad y reparación.

En el mismo año en que las Naciones Unidas adoptaron los principios para el tratamiento de las víctimas, en Colombia entró en vigor la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, cuyo fin es la reincorporación a la vida civil de excombatientes paramilitares y la reparación de sus víctimas. Como consecuencia de esta ley se realizaron durante años audiencias públicas, transmitidas por videoconferencia, en las cuales los perpetradores debían relatar la verdad sobre los crímenes cometidos, y sobre todo acerca del paradero de las víctimas desaparecidas, a cambio de una considerable reducción de la pena. En estas audiencias, las llamadas versiones libres, algunas de las víctimas tuvieron la oportunidad de enfrentar a los perpetradores, por ejemplo, para solicitarles información sobre un familiar desaparecido.

La reparación de las víctimas adquiere un nuevo impulso con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), en cuyo título está plasmado uno de los principales desafíos para la justicia en Colombia: el problema de la indemnización de millones de campesinos desplazados por el conflicto armado. Con la creación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y un Registro Único de Víctimas (RUV), en 2012, el Estado implementa, por primera vez, una institucionalidad a nivel nacional y regional para atender las necesidades de las víctimas en todo el país, cuya cifra alcanza un total de 9,3 millones de personas.¹⁰

En suma, se puede decir que en Colombia se procuró aplicar las nuevas normativas del derecho internacional con relación a las víctimas, efectuando de esta manera la transformación de una justicia retributiva a una justicia restauradora, es decir, mover el enfoque hacia los derechos de las víctimas.

Se puede resumir que a partir de cierto momento se dan en Colombia condiciones más favorables para que las personas que han sufrido injusticias en el marco del conflicto armado sean escuchadas y que el Estado atienda sus necesidades, aunque sea con una respuesta mínima. Los dos principales factores que confluyen aquí —el nuevo marco normativo internacional que es adoptado por los gobiernos nacionales, y el creciente clamor de las organizaciones de víctimas,

¹⁰ Reporte del Registro Único de Víctimas, consultado el 27 de junio de 2022: <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/infografia>.

cada vez mejor preparadas— conducen a que se comiencen a abrir espacios en los medios de comunicación, en los cuales se da a conocer esta situación transformada de las víctimas. Siempre hay que recordar en este contexto que, si los medios periodísticos han sido reacios a informar sobre el conflicto armado desde una perspectiva enfocada en las víctimas, como se ha constatado más arriba, esto puede tener una explicación simple pero contundente: investigar estos asuntos es peligroso y publicar verdades incómodas expone al periodista al riesgo de ser perseguido, sea por medios ilegales o por la vía jurídica. La violencia contra los periodistas ha sido una constante en la historia de Colombia y los periodistas conforman un grupo dentro del universo de las víctimas, no muy grande en número, pero destacado por el alcance público de su oficio.

1.1.3 Periodistas como víctimas del conflicto armado

Durante muchos años, Colombia ha sido calificado como uno de los países más peligrosos para los periodistas. Quienes investigan y publican información sobre la corrupción, los negocios ilegales o maniobras políticas sucias como la compra de votos, son expuestos a las agresiones de guerrillas y paramilitares, bandas al servicio de los narcotraficantes, la fuerza pública, los políticos y los funcionarios. Las maneras de victimizar a periodistas son diversas y tienen un amplio rango: desde la obstrucción al trabajo periodístico y la estigmatización hasta las amenazas, la detención ilegal, el hostigamiento y formas aun más crudas de violencia, como el secuestro, la violencia sexual (contra mujeres periodistas) e incluso el asesinato.

Si bien los años de la extrema violencia desatada por Pablo Escobar, cuando las cifras de los periodistas asesinados subieron a niveles excepcionales (14 periodistas asesinados en 1989, 11 en 1991), son un recuerdo traumático del pasado (Rey, 2015), varios factores continúan limitando la libertad de los periodistas de investigar y publicar temas críticos, sobre todo asuntos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. Durante la temporada estudiada en el presente trabajo, en el índice de libertad de prensa publicado por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (s. f.), Colombia ocupaba un lugar estable en el último tercio de 180 países.

Luego de la muerte de Escobar y del fin de los grandes carteles del narcotráfico, la persecución violenta de los periodistas alcanzó un nuevo clímax durante el auge del paramilitarismo. La peor temporada fue el periodo comprendido entre 1999 y 2003, cuando en promedio 8 periodistas fueron asesinados anualmente.

Asesinar periodistas se convirtió en una estrategia de guerra, claramente definida, con la participación diferenciada de los múltiples actores del conflicto interno colombiano y con objetivos que recaían sobre la víctima, sus familiares, el medio de comunicación en el que trabajaban y en general la comunidad en la que vivían y en la que tenían influencia y reconocimiento. (Rey, 2015, p. 26)

Solo después del desarme de una gran parte de los grupos paramilitares de ultraderecha a partir del año 2004, los niveles de violencia contra los periodistas bajaron de manera abrupta. Al mismo tiempo, las estructuras paramilitares comenzaron a “reciclarse” como empresas de la economía criminal (Ronderos, 2014). En el contexto internacional, después del acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC, otros países en conflicto como México y Siria comenzaron a encabezar la lista de los lugares más hostiles para los periodistas. Sin embargo, en Colombia perdura una atmósfera de miedo y de represión contra los periodistas.

Después de la violencia se instala el silencio. Cuando amenazan a un periodista nosotros sabemos más o menos qué hay que hacer para tratar de protegerlo. Cuando en una región no se habla de un tema, estamos hablando de cómo enfrentamos una atmósfera. Hay una región donde está el Clan del Golfo donde no se puede hablar de ellos, hay otra donde hay disidencias de las Farc donde es difícil hablar de ellos, hay regiones donde hay políticos que mantienen a través de pauta a los medios de comunicación y es muy difícil criticarlos, entonces intervenir esas atmósferas de autocensura es tremendamente difícil. (Vaca, 2017, septiembre 29)

Muy pocas veces los crímenes contra periodistas son esclarecidos y los responsables llevados a juicio. Aun si se logra captar al sicario, frecuentemente el autor intelectual queda en la sombra. El único caso en el cual se logró a llevar a la justicia a toda la cadena criminal fue en el asesinato del periodista Orlando Sierra, del periódico *La Patria* de Manizales. En 2015, 13 años después del crimen, un político local, Ferney Tapasco González, fue condenado a 36 años de cárcel por haberlo encargado (Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, 2017, noviembre 2).

En su informe sobre la violencia contra periodistas en Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) constata un daño colectivo causado por la violencia (Rey, 2015). Cada

homicidio afecta directamente a los colegas de la víctima, genera terror entre los periodistas, los lleva a abstenerse de realizar investigaciones sobre temas delicados. Pero no solamente el gremio de los periodistas se ve enfrentado a limitaciones colectivas en el ejercicio de la profesión, sino que el derecho fundamental a la libre expresión y la información de la sociedad entera es coartado de manera drástica. Cada investigación no realizada sobre temas de interés público, como pueden ser por ejemplo los nexos entre política y crimen organizado, o la apropiación de recursos públicos con fines privados por funcionarios del Estado, resulta en una desinformación de la sociedad y en un debilitamiento de la democracia. En el mismo informe, el CNMH sugiere que se realice una reparación pública al colectivo de los periodistas. Esta debería enfocarse en la reconstrucción del “tejido comunicativo” destruido, y su acción podría consistir en medidas que contribuyan al desarrollo de medios independientes, así como a la formación profesional de periodistas, la formación de redes y asociaciones, la protección efectiva de periodistas y la promoción de la memoria colectiva de las víctimas de los crímenes contra el periodismo. En este contexto la responsabilidad cae en el Estado, no solamente por ser el garante constitucional de la libertad de expresión, sino también por las múltiples y sistemáticas violaciones al derecho de expresión e información por parte de sus actores. De hecho, la mayoría de los 154 homicidios de periodistas registrados por la FLIP fueron cometidos por victimarios pertenecientes al ámbito de la corrupción política (FLIP, 2017, noviembre 2).¹¹

Un momento particularmente crítico para la libertad de prensa se vivió durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). En este período, opositores al Gobierno, entre ellos periodistas, jueces y activistas de derechos humanos, fueron sometidos a interceptaciones ilegales de llamadas telefónicas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un servicio de inteligencia con nexos a grupos paramilitares. El escándalo de las “chuzadas del DAS”, descubierto por la revista *Semana*, llevó a la eliminación de esta institución por decreto presidencial en el gobierno de Juan Manuel Santos. Las escuchas clandestinas fueron acompañadas por hostilidades verbales enunciadas en público por el entonces presidente Uribe en contra de sus opositores. Uno de los objetivos principales de las arremetidas de Uribe fue el periodista Hollman Morris, director de *Contravía*, un programa de reportajes con tono crítico al Gobierno, emitido por el Canal Uno de televisión. En múltiples ocasiones, Uribe acusó al periodista de ser un cómplice del terrorismo,

¹¹ Según el informe del CNMH, editado por Rey, 30 casos son atribuidos a la corrupción política, 27 al narcotráfico, 23 a los grupos guerrilleros y 22 al paramilitarismo.

término utilizado por el Gobierno y amplios sectores de los medios de comunicación para designar a las guerrillas de izquierda. Ser estigmatizado por el mismo presidente como ayudante de la guerrilla significó un peligro para la vida del periodista y lo obligó a salir temporalmente del país (Martínez, 2016). Otras víctimas de las interceptaciones ilegales fueron la periodista Claudia Julieta Duque, cuando investigaba el asesinato del periodista Jaime Garzón,¹² y Daniel Coronell, entonces director del informativo de televisión *Noticias Uno* y uno de los periodistas investigativos más reconocidos del país.

La denuncia del caso de las “chuzadas” y la subsiguiente disolución del DAS sin duda fortalecieron la posición del periodismo. El rol de la prensa en el descubrimiento de las maniobras siniestras de este servicio de inteligencia dejó manifiesta la importancia de la existencia de medios independientes¹³ y de un periodismo crítico e investigativo para el funcionamiento de la democracia. Por el otro lado, también quedaron expuestos los peligros que la libertad de prensa puede correr en un sistema democrático que formalmente se adhiere a ella sin restricciones y cuyos representantes la afirman con regularidad en sus discursos públicos. En su conjunto, estas circunstancias propician un periodismo libre pero intimidado, en el que algunos periodistas, de manera heroica, asumen la tarea de investigar a los corruptos e informar a la sociedad, corriendo peligro ellos y sus familias, mientras la gran mayoría, por razones entendibles, prefieren no mirar con demasiado detalle los puntos oscuros del sistema.

Los acuerdos de paz, al parecer, no han mejorado la situación de los periodistas en Colombia; al contrario: según cifras de la FLIP, los ataques han aumentado considerablemente. Si bien el indicador de libertad de prensa medido anualmente por Reporteros sin Fronteras representa una estabilidad a bajo nivel (en los años 2016-2019 el lugar que ocupaba Colombia en el ranking oscilaba entre el 129 y 130 de 180 países), los datos de la FLIP revelan un ambiente cada vez más hostil. Cuando en 2016 se contaban 262 periodistas víctimas de violaciones al derecho de informar, en 2019 (un año marcado por grandes protestas sociales en todo el país) esta cifra había aumentado

¹² En marzo de 2016, el asesinato de Garzón fue declarado como un crimen de Estado, en el cual la Policía, el Ejército y el extinto DAS habrían estado involucrados (El Espectador, 2018, enero 15).

¹³ Por supuesto, la independencia de periodistas y medios de comunicación solo puede ser relativa, como demuestra con claridad el caso de *Semana*. El director de la revista durante muchos años fue Alejandro Santos, periodista e impulsor de investigaciones críticas; es sobrino del expresidente Juan Manuel Santos. Hasta el 2012, la familia Santos también fue uno de los propietarios del periódico más importante del país, *El Tiempo*, lo que pone en evidencia los fuertes nexos entre medios y poder político en Colombia. En 2020, el banquero Jaime Gilinski compró *Semana* y convirtió la revista en un medio propagandístico de sectores políticos afines a la derecha.

a 634, más del doble. En 2017, una bala disparada por un policía durante una protesta de comuneros indígenas terminó con la vida de la comunicadora Efigenia Vásquez de la emisora Renacer Kokonuko, en el departamento de Cauca. Este caso será retomado en el apartado 1.4 de este trabajo, donde se hablará de la construcción de la memoria colectiva, centrada en la lucha por la identidad y por el territorio, de las comunidades indígenas.

Cada año, entre 2016 y 2019, más periodistas recibieron amenazas y se registró un enorme incremento de la modalidad de acoso judicial en este periodo. La estadística dibuja un escenario preocupante, pero es razonable presumir que los datos también están reflejando una creciente concientización sobre los derechos de expresión de parte de periodistas y comunicadores, y, por consecuencia, una mayor disposición a denunciar. Además, las ONG defensoras de la libertad de prensa llevan un registro cada vez más minucioso de los hechos. Esto está claramente expresado en la ampliación de los criterios para establecer el estatus de victimización de los periodistas por parte de la FLIP: mientras para 2016 se definieron 9 tipos de violación, en 2019 ya eran 22 categorías.¹⁴ En cuanto víctimas, los periodistas se vuelven multifacéticos y cada nuevo criterio puede ser utilizado como instrumento para defender un derecho específico. No solo se trata de defender el derecho a la libertad de expresión, sino también una multiplicidad de derechos: a no ser estigmatizado, a no ser acosado judicialmente, a no ser agredido con medios digitales, entre otros.

Los excursos sobre la violencia contra periodistas, en el presente apartado, y sobre las configuraciones del concepto de víctima en general, en el anterior, eran necesarios para poder entender la posición desde la cual los periodistas operan cuando intervienen no solo como productores de medios sino como mediadores para la construcción social de memoria histórica. Seguramente, una gran mayoría de los periodistas colombianos no se consideran como víctimas, pues realizan su trabajo sin mayores obstáculos. Pero a todos les queda absolutamente claro que tocar los puntos sensibles del poder significa un riesgo profesional que, si se asume, puede terminar con la muerte, el exilio o la cárcel. Sin embargo, ¿no es acaso precisamente esta la tarea primordial

¹⁴ Categorías de victimización establecidas para 2016: agresión, amenaza, atentado contra infraestructura, desplazamiento, detención ilegal, estigmatización, obstrucción al trabajo periodístico, secuestro, trato inhumano o degradante. Para el año 2019: acceso a la información, acciones arbitrarias de redes sociales, ciberataque a páginas web, solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en internet, acoso judicial como agresión, amenaza, asesinato, atentado, daño a la infraestructura, desplazamiento, detención ilegal como espionaje o invasión, estigmatización, exclusión como exilio, hostigamiento como obstrucción al trabajo periodístico, otras, robo o eliminación del material periodístico, secuestro, violencia sexual (cfr. FLIP, s. f.).

del periodismo: vigilar, investigar, desenmascarar el poder? El no poder ejercer la profesión como debería ser acerca a los periodistas naturalmente, en su condición de sujetos excluidos, a las personas victimizadas de otras maneras. El proyecto Hacemos Memoria, como se verá en las próximas páginas, aprovecha esta cercanía para crear una forma de hacer el periodismo en diálogo entre víctimas del conflicto armado y periodistas.

1.2 Metodologías para un periodismo de memoria

El modelo tradicional del periodismo y de los medios masivos, basado en la transmisión unidireccional de información (emisor-receptor), de golpe se volvió obsoleto con la irrupción de las tecnologías digitales. De repente, una comunicación de todas y todos, sin el control de los *gatekeepers* de la información –cuasi el paraíso habermasiano– parecía posible. En las salas de redacción y en ciertos círculos académicos, así como entre los activistas en las redes, se comenzó a soñar con un nuevo periodismo, abierto para toda la ciudadanía. De ahí en adelante, no solo periodistas profesionales pertenecientes a los medios institucionalizados tenían la legitimación y la posibilidad técnica de producir y difundir información periodística. Ahora cualquier persona o colectivo tenía la posibilidad de informar y de hacer periodismo con un inmenso potencial de enriquecer y diversificar el debate público. Lo único que se requería era que quien participaba en el debate debía estar dispuesto a adherirse a algunos criterios básicos; en primer lugar, la veracidad.

Por supuesto, la idea no era tan nueva. La prensa alternativa, los colectivos de comunicación y las radios comunitarias ya tenían una larga trayectoria. Y la promesa de una democracia digital comenzó a mostrar muy pronto su lado oscuro: la monopolización de los medios a una escala nunca antes vista, el libre flujo de la desinformación junto con la información, la polarización del discurso. No obstante, todo esto ha resultado en que el paisaje de los medios informativos se diversificara enormemente –el portal Hacemos Memoria es un ejemplo de ello– y que nuevas formas de cooperación entre medios, financiadores, periodistas y no periodistas hicieran posibles investigaciones periodísticas de gran valor para la sociedad.¹⁵ Términos como periodismo ciudadano, periodismo participativo o periodismo colaborativo reflejan estas tendencias, sin que se haya formado un consenso sobre el uso exacto de estas palabras. Pueden referirse a la

¹⁵ Uno de los proyectos de mayor impacto hasta ahora fueron los *Panama papers*, una investigación conjunta de cientos de periodistas de varios países acerca de los flujos financieros a paraísos fiscales.

investigación conjunta de periodistas de diferentes medios, a la producción de información por personas sin formación profesional como periodistas, a la cooperación de periodistas y no periodistas con variables formas de distribuir los roles, etc. Para el presente trabajo no nos vamos a servir de ninguna de estas fórmulas sino trazar estrategias colaborativas puestas en práctica por el proyecto Hacemos Memoria. En otras palabras, seguir a los actores y no a los conceptos.

El punto de partida de Hacemos Memoria es la convicción de que una mayor inclusión social de las víctimas solo es posible cuando ellas mismas puedan articular públicamente sus experiencias y sus reivindicaciones. Por lo tanto, el propósito inicial del proyecto era “elevar la calidad de la participación ciudadana en debates públicos sobre memoria histórica” (Martínez Mejía, 2023, p. 24). Cuando en noviembre de 2016 los representantes del Gobierno y de las FARC firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el proyecto Hacemos Memoria ya estaba en marcha y sus integrantes tenían una cierta experiencia en el trabajo con víctimas del conflicto armado. De hecho, varios años antes de iniciar el proyecto, miembros del grupo habían realizado una serie de talleres de escritura con víctimas. En estos talleres, personas que habían sido afectadas por la violencia, la mayoría de ellas de origen campesino, aprendieron a escribir sus relatos personales sobre las injusticias experimentadas, un proceso que se extendió por varios años. Los textos escritos se publicaron en tres libros (Nieto, 2006, 2009, 2010). En este proceso el rol de los periodistas y su relación con las víctimas adquirió una nueva modalidad: las personas que contaron sus experiencias de violencia ya no lo hicieron como meras fuentes para un reportaje, sino que se convirtieron, con ayuda de los periodistas, en autores de sus propios relatos. Las historias revelan el sufrimiento contado en primera persona, como también lo ponen en relación directa con el mundo de la vida (*Lebenswelt*) campesina de las personas que relatan su tragedia, en un lenguaje propio de ese mundo.¹⁶ Hablan de lo que les ocurrió, de la herida, del desplazamiento, de la dificultad de aceptar la condición de víctimas y del largo camino para ser reconocidos como tal y recibir ayuda del Estado. “Recuerdo patético que ese día me levanté con muchos ánimos”, cuenta Diomedes Osorio, a quien una mina antipersona dejó ciego.

¹⁶ Mundo de la vida aquí se entiende como la *Lebenswelt* de la fenomenología alemana (Husserl, 2008; Schutz y Luckmann, 2013). Para Habermas (1999), el concepto de *Lebenswelt* es complementario a la acción comunicativa. Las sociedades son al mismo tiempo sistemas y *Lebenswelt*, o para decirlo en otras palabras, nexos funcionales tanto como ensamblajes de sentido.

Vi a toda mi familia muy alegre. Bregué a arreglarme lo más bien que pude. Me puse un pantalón de jean, que es la ropita que uno usa en el campo, ropa especial. Yo tenía de esa ropa y otra ropa buena para salir como la que uso ahora en la ciudad. Ese día estaba con ropa bien lavadita, pero tal vez manchadita. Me puse una camiseta. Trabajaba a veces de camisa en la cintura, aunque he sido muy abandonadito de camisa. Era rara la vez que me vieran con camisa trabajando. Me la amarraba en la cintura, y así estaba cuando me explotó la mina. (Nieto, 2010, p. 85)

Cuando los libros se entregaron a sus autores y a sus familiares y cuando los textos se leyeron en público, en colegios, iglesias, bibliotecas y en plazas de la ciudad, ocurrió algo que se puede denominar una restitución de la voz pública de las personas victimizadas. Esta experiencia, financiada por la Alcaldía de Medellín, marcó la pauta para el futuro trabajo de Hacemos Memoria. Cuando el proyecto se había consolidado y comenzó a recibir financiación de la cooperación internacional, uno de los primeros desafíos era desarrollar una estrategia para continuar trabajando de forma sistemática para lograr, desde el periodismo, una mayor participación de víctimas en el diálogo público sobre la memoria del conflicto. El objetivo era claro: facilitar un acercamiento de víctimas con periodistas de medios locales con el fin de elaborar conjuntamente una versión centrada en la perspectiva de las víctimas de los hechos violentos acontecidos en sus comunidades. Sin embargo, para poder realizar este propósito había que superar dos obstáculos: primero, las dificultades que personas con bajo nivel de escolaridad enfrentan para construir una narración, sea en forma escrita o audiovisual, y segundo, las limitaciones de acceso que los medios de comunicación erigen ante este sector de la población.

En respuesta a estas dificultades, el grupo Hacemos Memoria desarrolló una metodología basada en la formación y el ejercicio participativo del periodismo, con el objetivo de engendrar espacios de articulación para víctimas del conflicto armado en los medios locales y comunitarios. Esta metodología, puesta en práctica en distintas comunidades rurales y urbanas de Antioquia, consiste en cuatro elementos principales. Primero, convocar a grupos locales heterogéneos, compuestos de trabajadores de medios comunitarios, miembros de asociaciones locales de víctimas, estudiantes y otros jóvenes, artistas, trabajadores sociales, integrantes de cooperativas y otras instituciones de la vida social y cultural del pueblo, así como personas interesadas en la historia local. Segundo, realizar un proceso de formación en el que las personas participantes

aprenden sobre el desarrollo del conflicto armado, el concepto de la memoria histórica, los derechos humanos y el periodismo. Durante cuatro años se realizaron clases y talleres en comunidades rurales y urbanas, donde más de 80 expertos de diferentes áreas profesionales –periodistas, historiadores, politólogos, sociólogos, escritores, cineastas– impartieron sus conocimientos. Tercero, la producción de relatos periodísticos sobre victimización y resistencia durante el conflicto armado. En talleres asesorados por periodistas de Hacemos Memoria los grupos mixtos conformados en cada localidad definieron temas y formatos, investigaron los impactos del conflicto armado en sus comunidades, entrevistaron a testigos y redactaron sus historias para publicarlas en una emisora local, en el canal de televisión comunitario, en redes digitales o páginas web, entre otros. El cuarto elemento de la metodología implementada por Hacemos Memoria procura poner en circulación los productos realizados. Se organizaron encuentros, talleres y foros en las respectivas comunidades para divulgar los contenidos e incentivar la discusión.

En resumen, el proyecto trabaja de esta manera: 1) formación de equipos mixtos, 2) capacitación, 3) investigación y producción, y 4) divulgación. Ahora, con las metodologías delineadas, se puede examinar cómo se han puesto en práctica y cuáles han sido las experiencias de las personas involucradas, en particular, las víctimas del conflicto armado. Vamos a revisar tres de las intervenciones realizadas por Hacemos Memoria, dos de ellas en comunidades rurales de Antioquia –Sonsón y Granada– y una en la propia Universidad de Antioquia (U. de A.) en la ciudad de Medellín. Estos tres casos representan solo una selección, pues hubo varias actividades del proyecto en otras comunidades, tanto de la ciudad como en zonas rurales. En la temporada estudiada aquí (2016-2019), sin embargo, estas tres intervenciones (Granada, Sonsón, U. de A.) fueron las que se realizaron con mayor intensidad y las que más tiempo duraron y que, por tanto, obtuvieron resultados más interesantes.

Antes de ocuparnos de cada caso, sin embargo, conviene detenernos un momento para relatar de qué manera se seleccionaron las comunidades con las cuales el proyecto decidió vincularse. Previo al diseño de las actividades, los integrantes del proyecto vieron la necesidad de estudiar la presencia de medios de comunicación en el departamento y de clasificarlos según criterios que permitieran establecer cuáles de estos medios estarían adecuadamente capacitados para realizar un proyecto de esta índole, y que estuvieran interesados en contribuir a la memoria del conflicto juntamente con las asociaciones de víctimas. Un sondeo de los medios en Antioquia que se realizó a consecuencia de esto sentó las bases para la implementación del proyecto.

1.2.1 Diagnóstico de medios en Antioquia

Antes de poner en marcha el programa de capacitación y de asesorías a medios locales y organizaciones de víctimas, el grupo Hacemos Memoria realizó dos diagnósticos de medios en el departamento de Antioquia, uno en 2014 y otro en 2015. El objetivo era conocer la presencia y las condiciones de trabajo de los medios de comunicación locales en Medellín y en dos subregiones del departamento: Oriente antioqueño y Urabá. Estas regiones fueron seleccionadas, en primer lugar, porque ambas habían sido fuertemente afectadas por la violencia del conflicto armado y registraban muy altos porcentajes de población victimizada.¹⁷ Pero otro factor jugaba un papel importante: la presencia de la Universidad de Antioquia con sedes regionales que podrían facilitar el trabajo en estos lugares. Una de ellas está en Turbo, ciudad de unos 70 000 habitantes, centro urbano y puerto de la zona bananera, además uno de los epicentros del conflicto armado. Las otras dos sedes –las del Oriente antioqueño– se encuentran en el municipio de El Carmen de Viboral, a 50 km de Medellín, y en Sonsón, ciudad de clima frío en la región de los páramos, a 120 km de la capital departamental.

Los sondeos arrojaron una serie de datos importantes acerca de dos preguntas principales: una, ¿en qué condiciones operativas se encontraban los medios locales?, y, dos, ¿cuál era su disposición para informar sobre temas relacionados con el conflicto armado y los derechos humanos? En conjunto se identificaron 217 medios, entre ellos emisoras de radio, canales comunitarios de televisión, periódicos y medios digitales. De estos medios, 155 pudieron ser contactados por los investigadores del proyecto Hacemos Memoria y sus directores consintieron en ser entrevistados sobre la situación del medio en relación con varios aspectos: su modelo económico, las condiciones laborales, el uso de tecnologías digitales, sus enlaces con las comunidades locales y sobre su interés y sus posibilidades de abordar temas afines a los derechos humanos y las víctimas del conflicto armado.

¹⁷ Investigadores de la Universidad de Antioquia, particularmente del Instituto de Estudios Regionales (INER), han realizado hondos estudios sobre las causas estructurales de la conflictividad en estas dos regiones (García *et al.*, 2011). Cifras del RUV, del Estado colombiano, indican que un 45 % de la población de Turbo calificaba como víctima. En Granada, un municipio del Oriente antioqueño, este porcentaje era aun más alto: 87 %, casi toda la población. El porcentaje total de víctimas en Antioquia era de 14 %, siendo este departamento el que registraba con creces el mayor número de víctimas en Colombia, casi 1 000 000 (Ministerio de Salud, 2015).

El medio principal en la región es la radio, pues es el que mejor responde a las circunstancias de vida de sus usuarios. Se puede escuchar mientras uno se ocupa de sus labores en el campo o en la ciudad y no requiere de habilidades de lectura. Pero la radio también responde a las posibilidades de colectivos con un interés de comunicar, no con fines comerciales sino para gestionar cambios sociales, pues es un medio que no requiere de una inversión muy grande. Existen algunos canales de televisión comunitaria pero ningún periódico de distribución diaria y solo algunos pocos medios estrictamente digitales y que se limitan a la publicación por internet. En general, los investigadores hallaron que, si bien la mayoría de los medios locales usan medios digitales, sobre todo las llamadas redes sociales, para la divulgación de sus contenidos y para establecer contacto con sus audiencias, muy pocos lo hacen de una manera sistemática, explorando las posibilidades que estas tecnologías permiten para entrar en un diálogo sostenido con la comunidad de sus usuarios.

Sin duda, la memoria colectiva es una preocupación central de la gran mayoría de estos medios. Es una memoria que exalta las tradiciones locales, celebra la belleza de los paisajes y destaca las virtudes de sus habitantes. Los programas llevan títulos como *Las voces de mi vereda* o *Crónicas y paisajes*, y en su mayoría giran alrededor de eventos de la vida comunitaria: actividades culturales y deportivas, fiestas, costumbres locales, actos para conmemorar eventos importantes en la vida del pueblo, programas de la alcaldía u otras entidades locales, etc. Generalmente, las fuentes de información consultadas son las mismas instituciones y asociaciones que promocionan estas actividades. Un lugar prominente, en muchos medios, tienen los contenidos religiosos. Algunos medios son propiedad de las iglesias y su meta principal es el adoctrinamiento religioso, otros responden a intereses y hábitos de una población, sobre todo en el Oriente antioqueño, profundamente católica.

Ahora bien, ¿qué lugar –si es que alguno– tienen la memoria del conflicto armado y las reivindicaciones de sus víctimas en estos medios? Ahí las respuestas de los dueños de medios entrevistados varían. La mayoría dice que sus medios cubren noticias relacionadas con el conflicto armado, las víctimas y los derechos humanos. Sin embargo, esta información se limita a los pronunciamientos de las autoridades locales, a eventos locales de carácter oficial como la celebración del “Día de las víctimas” o a noticias del ámbito judicial. En resumen, constata el informe de Hacemos Memoria, “no tienen una postura o línea editorial definida que los oriente a la hora de cubrir temas como el conflicto, el postconflicto, la memoria histórica, las víctimas o las iniciativas de paz que surgen en sus municipios” (Hacemos Memoria, 2014). Algunos dueños de

medios locales prefieren evitar la temática por completo, aduciendo argumentos como “el conflicto ha sido un tema muy delicado de tratar en el municipio, preferimos no escribir sobre eso”, o “es muy delicado y complicado, pues hay muchas heridas abiertas”. El director de un medio en el municipio de La Ceja, que sufrió una violenta ocupación paramilitar, dice que su agenda informativa no aborda el conflicto porque los cejeños “se sienten ajenos a él”. Otros de los entrevistados afirman que “el conflicto armado no ha afectado directamente a sus municipios”; por lo tanto, a sus lectores, oyentes o televidentes no les interesa informarse al respecto. El director de un periódico llamado *El Comunero* dice que el conflicto armado “no le llama la atención, es un tema muy trajinado, todo el mundo habla de la misma cosa”.

En Urabá, una región que aún en la actualidad vive una fuerte presencia de grupos armados, varios de los entrevistados mencionan la crítica situación de seguridad como obstáculo para el abordaje de los conflictos. El coordinador técnico de una emisora explica que en su municipio todavía está activo el conflicto y la gente no se atreve a hablar de lo que ha pasado. Otro entrevistado se refiere a que en su municipio cohabitan víctimas y victimarios. “Es muy complicado hablar de estos temas. Solo podemos hablar de convivencia y reconciliación”. “Nos tenemos que proteger”, dice otro; “No podemos hablar mal de nadie. Si habláramos de esos temas, estuviéramos afuera o muertos”, agrega.

Este miedo generalizado conduce a que no solamente los conflictos del pasado sino también los temas controversiales de la actualidad no encuentran un eco en los medios locales. Así, por ejemplo, cuando los medios reciben denuncias de la ciudadanía contra oficiales locales, prefieren no publicarlas, con tal de evitar represalias. Esto, a su vez, tiene un efecto adversario en las audiencias, pues muchas veces los medios locales se perciben como al servicio del alcalde de turno y no de la comunidad.

“Cuando uno denuncia”, cuenta un reportero, “queda como el mosco en la leche. Le dicen comunista o que no deja trabajar al alcalde”. Algunos periodistas hablan de autocensura y de temas vedados. Hablar de ciertos problemas que afectan la vida de los lugareños es tabú, pues son el dominio de las mafias, como el narcotráfico o el tráfico humano con migrantes en la ruta que conduce del Urabá a través del tapón del Darién hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Sin embargo, las amenazas no vienen solamente de los grupos ilegales, sino que también proceden de agentes del Estado. “En mi experiencia de más de 30 años de ejercicio nunca me han perseguido

la guerrilla o los paramilitares sino la institucionalidad: militares, policías, alcaldes”, afirma el director de un periódico en Urabá (Hacemos Memoria, 2014).

Como resultado del análisis de los dos diagnósticos, el grupo Hacemos Memoria llegó a la conclusión de que la situación en Urabá no era favorable para una intervención del proyecto, pues dada la continuación de los conflictos violentos en esta región no se encontraban condiciones suficientes de seguridad para poder desarrollar actividades como talleres, foros públicos o publicaciones en medios locales sobre el conflicto armado y sus secuelas. Pues, a diferencia del Oriente antioqueño, donde se consideraba que el conflicto armado había terminado con el desmantelamiento de las estructuras guerrilleras y con la desmovilización de los paramilitares, en Urabá todavía se registraba presencia de unidades de la guerrilla y una continuación directa de las estructuras de los grupos paramilitares en las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

En el Oriente antioqueño, por el contrario, existían condiciones para hablar de la memoria del conflicto armado. Así, por ejemplo, en el municipio de Granada, donde la asociación local de víctimas estaba realizando actividades de conmemoración y de concientización sobre la situación de las víctimas, con el apoyo no solo de instituciones locales como la alcaldía, la iglesia y las cooperativas agrícolas, sino también de entidades nacionales como el Centro Nacional de Memoria Histórica. En este contexto, era más fácil para los medios locales abordar temas vinculados al conflicto, en una atmósfera impregnada de expectativas e incertidumbre frente a los posibles resultados de las conversaciones de paz que se estaban realizando en La Habana. De hecho, los medios locales de Granada seguían de cerca las actividades de la asociación local de víctimas; y en el municipio vecino de San Carlos se publicaron crónicas y perfiles de víctimas. También se buscó la participación de expertos en la elaboración de estos contenidos, para que ayudaran a entender las aflicciones de las víctimas y los orígenes de estas. Sin embargo, los directores de medios insistieron en que el tema del conflicto era muy difícil de tratar, pues había muchas heridas abiertas y los periodistas locales no contaban con la formación necesaria para poder realizar investigaciones con cierta profundidad sobre estos asuntos.

En Medellín, donde se registraron 90 medios locales, más de la mitad de ellos de carácter comunitario, en las respuestas de los entrevistados se reflejaban las particularidades de la conflictividad urbana. Muchos medios están ubicados en zonas afligidas por guerras entre bandas, con largas historias de extrema violencia, incursiones de milicias guerrilleras, paramilitares y las fuerzas del Estado. Por otro lado, muchos de los barrios populares han sido construidos por

personas desplazadas por la violencia en otras regiones. La formación de estas comunidades urbanas suele ser el resultado de largas luchas sociales para acceder a servicios básicos como vías, energía y agua potable. Muchos de los medios fundados en estas zonas urbanas desfavorecidas pertenecen a asociaciones cívicas que han sostenido estas reivindicaciones. La memoria de la fundación y la construcción del barrio es un tema de gran interés para estos medios. La mayoría de ellos ven su misión en la divulgación de información local en sus respectivas comunidades. Su relación con los temas de conflicto varía: algunos de los directores respondieron que, a pesar de reconocer la importancia de estos temas, no se sentían preparados para enfrentarlos. Un entrevistado afirmó que “las denuncias las hacen los periódicos amarillistas, lo nuestro es culturizar la gente”, expresando una percepción generalizada del tratamiento de los temas de violencia por los medios: registran los hechos, pero no elaboran la información de tal manera que pueda aportar a una mayor comprensión de estos. Algunos medios, por otro lado, explícitamente abordan los conflictos locales –un periódico, por ejemplo, ha trabajado para promocionar pactos entre diversos actores sociales–, sin embargo, esto siempre los expone al riesgo de amenazas. La directora de un periódico juvenil contó que luego de publicar un editorial sobre el conflicto en la comunidad recibieron amenazas y que “de milagro no hubo muertos”. Desde entonces no volvieron a tocar el tema.

La atmósfera de miedo que los investigadores de Hacemos Memoria encontraron coincide con los hallazgos del informe sobre la violencia contra periodistas publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica:

Las consecuencias de la violencia sobre el periodismo en estas zonas de Antioquia fueron concretas y evidentes: disminuyeron las emisoras de radio, se fueron apagando uno tras otro los programas noticiosos, la música reemplazó a la información y se generó el éxodo de periodistas, y quienes tuvieron que salir desplazados de sus comunidades locales. Las medidas cautelares y de protección acrecentaron y hubo ceses de actividades ante los peligros que experimentaban para cumplir con su oficio. (Rey, 2015, p. 186)

Luego de evaluar los informes, en la segunda mitad de 2015 el grupo Hacemos Memoria decidió comenzar con primeras actividades en dos municipios del Oriente antioqueño, Granada y Sonsón, donde se consideró que se encontraban las condiciones más propicias para realizar un

proyecto de construcción de memoria local conjuntamente con medios locales y asociaciones de víctimas. En los años siguientes, de 2016 a 2019, a estos procesos se sumaron otras comunidades rurales en el Oriente antioqueño (San Carlos y El Carmen de Viboral), mientras simultáneamente se organizaba un proceso de formación con medios urbanos en Medellín. De esta manera el proyecto Hacemos Memoria se ha ido consolidando como un campo de interacción entre diversos actores en distintos lugares, todos con sus intereses y particularidades. En la página web del proyecto, hacemosmemoria.org, su metodología se resume de la siguiente manera:

Reunir a periodistas y ciudadanos para producir colaborativamente relatos sobre hechos del pasado es el propósito de las asesorías que realiza Hacemos Memoria. En equipo, reporteros y víctimas, construyen piezas periodísticas que, caracterizadas por el equilibrio informativo, son importantes para la memoria histórica de las localidades. Mediante estrategias ideadas con los participantes, hemos diseñado una metodología propia para la investigación y la escritura en el lugar de memorias periodísticas de acontecimientos del conflicto armado en los que las violaciones a los Derechos Humanos son constantes.

El procedimiento de Hacemos Memoria, basado en experiencias anteriores, el estudio de la literatura y el diagnóstico en terreno, hizo factible la aplicación de una misma metodología para el trabajo con distintos grupos de personas en diferentes lugares. Esto también era posible porque las condiciones de vida en estos pueblos de la cordillera central de los Andes son muy similares: el trabajo agrícola, la organización espacial de los pueblos, las creencias religiosas, las formas en que se manifiesta la violencia en la vida cotidiana, en suma, todo el tejido simbólico y de relaciones sociales que constituye el mundo de la vida. Y si bien la vida en Medellín, una zona metropolitana con más de 4 000 000 de habitantes, esto es diferente, para la mayoría de las personas, el mundo de vida de los pueblos de la montaña es muy familiar, pues una gran parte de la población urbana tiene raíces en el campo.

Sin embargo, pese a las idiosincrasias culturales de la región y la experiencia compartida del conflicto armado, la intervención de Hacemos Memoria produjo resultados distintos en cada lugar.

En los apartados que siguen se presentará una mirada más detallada a algunos de estos procesos de asesoría realizados por el proyecto. En el acercamiento etnográfico comienzan a

aparecer las complejidades de la temática: la pregunta por los actores, sus intereses y las relaciones que forman entre ellos, la formación de identidades personales y colectivas en distintos entornos de victimización, la institucionalidad como marco social para la producción de memoria, la influencia del espacio, que siempre tiene que ser pensado como espacio-tiempo en el cual se desenvuelven los acontecimientos, y las diferentes maneras de conceptualizar y poner en práctica los medios de comunicación.

1.2.2 Sonsón: la televisión comunitaria como espacio testimonial

La Ruta Nacional 56, que une a Medellín con el municipio de Sonsón, es una carretera andina con muchas curvas que en un trayecto de algo más de 100 kilómetros sube varias veces a alturas de más de 2500 metros, para luego atravesar valles verdes de paisajes bucólicos con vacas lecheras y cultivos de papas y aguacates en laderas casi verticales, pueblos campesinos y pequeñas ciudades de mercado. En Sonsón, la cabecera municipal, se sienten los vientos fríos del páramo que frecuentemente envuelven el pueblo en una espesa manta de neblina. La ruta 56 continúa de ahí bajando al calor tropical del valle del río Magdalena para volver a subir, con muchas curvas más, a la sábana de Bogotá. Aunque la distancia no es mucho más grande que la de Medellín, el viaje de Sonsón al Magdalena es mucho más largo, por el mal estado de la vía. Esta ubicación ha sido significativa para el desenvolvimiento del conflicto armado en esta región, pues combina vías que conducen a importantes centros económicos del país con zonas apartadas de bosques y montañas, ideales como refugio para los grupos armados ilegales. Pero a pesar de su aislamiento geográfico de los dos grandes aglomerados metropolitanos –Bogotá y Medellín– y aunque la población del municipio no supera los 50 000 habitantes, en las calles de Sonsón se respira un gran orgullo por la historia del lugar. Muchas de las casas tradicionales con techo de tejas y balcones pintados de colores vivos que rodean el parque central llevan placas conmemorativas que hacen referencia a hombres de la vida política, religiosa y cultural del pueblo. Estas placas y estatuas ubicadas en lugares públicos relatan una memoria oficial, la de los próceres de un pueblo que ha sido gestor de muchos otros, pues en el siglo XIX ciudadanos de Sonsón, expulsados por el hambre, fundaron varios asentamientos en la región. Es notable que la versión de la historia contada por las placas conmemorativas y los monumentos no incluye el conflicto armado de las décadas recientes ni el sufrimiento que ha causado para muchas familias de Sonsón. Tampoco hablan estas placas de

la pobreza de muchas familias campesinas, del trabajo duro y mal pagado y de la falta completa de servicios públicos en las veredas apartadas, asuntos que llevaron a muchos jóvenes, como en tantos otros lugares rurales de Colombia, a ver en los grupos armados una alternativa económica, reforzada por la oferta de ideologías simples pero contundentes. El conflicto armado en Sonsón culminó a comienzos del siglo XXI con una intensa confrontación entre las FARC, paramilitares basados en el valle del Magdalena y el Ejército. Secuestros de finqueros y comerciantes, asesinatos selectivos y masacres, minas antipersona y combates en las cercanías del centro urbano formaron parte de la vida cotidiana en esta temporada.

Quince años más tarde, todavía era muy difícil hablar del conflicto armado en Sonsón y si bien existían algunas iniciativas de personas afectadas por la violencia para hablar de sus experiencias, no se pudo hablar aún de un proceso de formación de memoria colectiva alrededor de los acontecimientos del conflicto armado. Claro que esto era la normalidad en casi todo el país: hablar en público del conflicto y de la vida de los sobrevivientes era igual a pisar terreno minado; generalmente, se evitaba hacerlo. A pesar de las dificultades, el proyecto Hacemos Memoria seleccionó Sonsón como uno de los municipios donde se veían condiciones prometedoras para poder lograr un trabajo conjunto con periodistas y víctimas del conflicto armado. No solo existían dos grupos de víctimas del conflicto armado y varios medios de información local, entre ellos una emisora de radio y un canal de televisión comunitaria, sino también una sede regional de la Universidad de Antioquia que ofrecía un pregrado de periodismo. Se conformó entonces un grupo de trabajo con miembros de las dos organizaciones locales de víctimas –la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón y el Costurero de Tejedoras por la Memoria–, con estudiantes de periodismo y comunicadores de un canal local de televisión, y con integrantes del grupo Hacemos Memoria.

Luego de varios encuentros, charlas y talleres donde se tematizaron las incidencias del conflicto armado en la historia reciente de Sonsón, el grupo de trabajo llegó a la conclusión de que la mejor forma de estimular el debate público alrededor de la temática era producir un documental sobre el problema del desplazamiento forzado en el municipio, cuyos impactos en la vida social eran notorios y causaban una gran preocupación en Sonsón, ya que su dimensión era extremadamente grande en relación con el tamaño de la población. Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, 12 600 personas estaban registradas como víctimas de desplazamiento forzado en 2016, aproximadamente un tercio de la población entera del

municipio (Ruiz Buitrago, Alzate Orozco y Gil Montes, 2016). Finalmente, los periodistas del canal comunitario Sonsón TV fueron los encargados de realizar un video-documental que se transmitiera en el canal. Los otros integrantes del grupo de trabajo hicieron aportes desde sus distintos lugares y capacidades. Las señoras de las asociaciones de víctimas contribuyeron, desde sus experiencias individuales y con las reflexiones realizadas en colectivo, a una mirada sobre los acontecimientos desde la perspectiva de víctimas, y desde ahí orientaron la selección del tema y de los protagonistas del documental. Los estudiantes de periodismo apoyaron la investigación con criterios profesionales como la búsqueda de información de contexto, la verificación de fuentes, la construcción narrativa. El producto fue un video documental de 20 minutos titulado *Las vueltas del retorno en Sonsón* (Sonsón TV, 2015). En él, dos agricultores, Aurelio Suárez y Donaldo Gómez, cuentan sus experiencias de haber sido expulsados de sus parcelas y de su reciente retorno luego de varios años de desplazamiento. El drama de ambos se originó porque sus propiedades estaban ubicadas en lugares estratégicos para los diferentes actores armados y así fueron víctimas de múltiples desplazamientos, dependiendo de qué grupo ganaba el control territorial. En el video, don Aurelio, un caficultor de 67 años, relata:

Quando comenzaron a llegar, uno sentía ese temor: no del que estaba acá, sino que llegara otro grupo y nos encontrara acá. Ya se formaba aquí el encuentro mortal para todos nosotros. Esta finca le ha gustado mucho a esta gente porque es una finca que es bien situada y tiene dos partes donde ellos podían estar vigilando de que no llegaran otros grupos. (Sonsón TV, 2015)

Donaldo Gómez, otro habitante de Sonsón, cuenta que fue tres veces desplazado de su finca, la primera de ellas por la guerrilla: “En el 2002 llegó la guerrilla y nos hicieron desocupar todo lo de por aquí, pues. Se fue la guerrilla y llegaron los paramilitares. Prácticamente nos hicieron ir. Después, en la mitad de 2003 ya no había nadie, entonces me volví para acá”. Sin embargo, pronto Donaldo debió abandonar la esperanza de recuperar la vida campesina en la parcela propia, pues esta fue nuevamente ocupada por hombres armados, esta vez por las fuerzas del Estado:

Arreglamos el techo, blanqueamos las paredes. Le cambiamos la cara a la casa porque quedó como una casa fantasma. Y era fantasma, cierto. Y cuando ya vinieron ellos;

volvieron y me hicieron ir del todo. Los soldados... Llegaron el 8 de enero de 2004 y me dijeron que ellos van a vivir en esta casa. Entonces dije ¿Por qué? Que hasta donde yo entendía esta casa era mía. Entonces ellos dijeron, no. Que ellos iban a vivir aquí, quisiera yo o no. Que entonces ¿por qué había dejado vivir a la guerrilla y a los paramilitares aquí? Cinco años estuvo el ejército en mi casa y no me dejaban ir. (Sonsón TV, 2015)

En su brevedad, los dos testimonios expresan de forma muy clara la complejidad de la condición de las personas desplazadas: la múltiple victimización, la estigmatización por los agentes del Estado y el frustrado intento de reclamar derechos básicos como el de la propiedad.

El documental logró nombrar y desdibujar, a través de las voces de personas afectadas, una de las complejas problemáticas que se experimentaban en el municipio de Sonsón en los meses antes de la firma del acuerdo de paz, y hacía varios años, ya que la situación de seguridad había mejorado. Por entonces, los fuertes enfrentamientos militares habían cesado, el número de secuestros, asesinatos y masacres se había reducido notablemente, y muchas familias desplazadas volvieron al municipio. Al momento de filmar el documental, Aurelio había recuperado sus cultivos de café, y además logró conseguir créditos para invertir en la producción de aguacates, un cultivo que prometía buenas ganancias. Donaldo, por el contrario, a pesar de haber recuperado su finca hacía seis años, no pudo volver a ocuparla. No solo le faltaron los recursos para arreglar la casa y empezar con nuevos cultivos, sino que, por encima de esto, un reciente cambio en la normativa ambiental imponía restricciones a la ocupación de la zona de los páramos a la cual pertenecía la parcela. A través de las historias de sus dos protagonistas, *Las vueltas del retorno en Sonsón* resalta que, si bien se dieron las condiciones para el retorno de las víctimas, el Estado no les garantizaba una reparación suficiente para poder comenzar un nuevo proyecto económico.

Lo que hace este documental distinto de otras producciones es la constelación de actores que permitió tanto su creación como la difusión. En primer lugar, las representantes de las dos organizaciones de víctimas que participaron en el proceso incidieron de manera decisiva en la selección del tema y de los protagonistas. Si bien Aurelio y Donaldo no pertenecían a ninguno de los dos grupos, estos consideraron que ellos representaban de cierta manera una condición que afectaba a la mayoría. Fue, en este sentido, no solo una producción mediática *sobre* dos casos de victimización, sino que fue encomendada *por* las personas en esta comunidad que se asociaban bajo la sigla de ser víctimas.

Otro factor era importante: la producción no quedaba en manos de las víctimas mismas, pues la mayoría de las asociadas eran mujeres campesinas que no tenían afinidad al formato periodístico de narración que se proponía de parte del proyecto Hacemos Memoria. Ellas, especialmente uno de los dos grupos, el de las Tejedoras por la Memoria, tenían una gran experiencia de contar las historias de las graves violaciones a sus derechos a través del bordado. Habían decorado grandes mantas, almohadas y otros utensilios textiles con hilos colorados que configuraban relatos de masacres, del desplazamiento, la tortura y otras formas de abuso.¹⁸ Si bien el relato audiovisual con cámaras y micrófonos no era lo suyo, en los reporteros del canal comunitario Sonsón TV encontraron aliados capacitados para esta tarea. De hecho, desde hacía tiempo ya existía una estrecha relación entre las mujeres de la asociación y los reporteros del canal, pues estos informaban de manera regular sobre actividades públicas de las víctimas organizadas, reuniones con delegaciones oficiales, días conmemorativos de las víctimas, en fin, todos los acontecimientos que podían tener un valor noticioso en la agenda del canal. Sin embargo, estas producciones se limitaban a informar sobre el acontecimiento del momento en un formato de noticia, generalmente de dos a tres minutos de duración. La propuesta del documental *Las vueltas del retorno en Sonsón* era diferente, no solo por su duración más larga, que permitía profundizar el tema del desplazamiento que afectaba a un gran número de personas en el municipio, sino también por la forma de narrar, más pausada, más reflexiva y, sobre todo, porque estaba narrada por las voces de los protagonistas, pues los autores del video desistieron de una narración en off que es característica de los reportajes de noticias. “Era una experiencia absolutamente nueva para el medio”, decía Natalia Grisales, la gerente de canal. “Nunca antes habíamos contado el tema de esta manera”.

Es importante resaltar el rol de mediador del proyecto Hacemos Memoria para crear esta alianza. Pues a pesar de que las víctimas ya desde antes tenían una cierta representación en los programas del canal, el proceso de asesoría y formación impartido por los docentes de la universidad abrió un espacio nuevo, más amplio y participativo en el medio. El proyecto Hacemos Memoria dio un fuerte impulso para un cambio conceptual en el canal, y también en las víctimas organizadas. Este impulso a su vez se debía en gran parte a una dinámica introducida por la

¹⁸ El uso del bordado como medio de comunicación apropiado por grupos de mujeres victimizadas se popularizó por las “arpilleras” durante las dictaduras militares en países del Cono Sur, y ha sido desde entonces replicado en muchos otros territorios conflictivos. El grupo de las Tejedoras por la Memoria de Sonsón fue asesorado por la antropóloga Isabel González, también profesora de la Universidad de Antioquia.

cooperación internacional. Por un lado, los fondos facilitados por la cooperación alemana permitieron financiar el proceso de asesoría, en particular, los honorarios y viáticos de los asesores enviados por Hacemos Memoria desde Medellín. Por otro lado, estos fondos estaban vinculados a procedimientos metodológicos que, según la convicción de los donantes, podían permitir una mayor participación de víctimas en la construcción de memoria. Por ejemplo, se introdujeron instrumentos como el marco lógico y la medición de impacto a través de indicadores, con el fin de poder ejercer cierto control sobre los avances del proyecto hacia el objetivo (los alcances y limitaciones de esta forma de cooperación se examinarán detalladamente en capítulo 3).

Desde el punto de vista de los protagonistas del documental, el hecho de que el canal comunitario se encargara de la producción generaba confianza, pues en un pueblo pequeño como Sonsón, donde muchas de las personas se conocen personalmente y tienen vínculos familiares, el medio comunitario tiene un rol muy importante que difiere del que ejercen los grandes medios nacionales o regionales. Para expresarlo en un término de espacialidad, el lugar de enunciación es otro. El medio comunitario no solo está físicamente ubicado en el mismo territorio que su audiencia —el canal Sonsón TV, por ejemplo, tiene su estudio y sus oficinas en el centro del pueblo, a un costado de la plaza principal—, las personas que hacen parte de la programación, sea en función de periodistas, presentadoras y técnicos, o como protagonistas de las noticias locales suelen ser conocidas figuras de la vida cotidiana, vinculadas entre ellas por lazos de parentesco, relaciones profesionales, por haber compartido años en el colegio, y demás; en suma: son habitantes del mismo mundo de vida. Siendo parte de este mundo local, el canal comunitario está posicionado como medio apropiado para la construcción de memoria en este mismo territorio. Es un rol que los principales medios difundidos en la región no podrían asumir. La mayoría de ellos son de propiedad privada y pertenecen a grandes conglomerados de empresas, generalmente con sede en la capital Bogotá o, especialmente en el caso de las redes digitales, a monopolios extranjeros. Sin duda, estos medios que dominan en gran medida las pautas de consumo mediático también forman una suerte de memoria colectiva a través de sus telenovelas, *realities* y noticieros encapsulados en publicidad. Pero esta memoria colectiva que obedece a una lógica de producción y consumo dista en muchos sentidos de la realidad vivida por las personas, sobre todo de aquella realidad marcada por la violencia del conflicto armado.

El canal comunitario Sonsón TV, en cambio, está físicamente ubicado en el pueblo del mismo nombre y sus empleados son personas del lugar, hechos que lo distinguen radicalmente de

los medios comerciales. Mientras estos se concentran en captar audiencias con programas confeccionados para vender publicidad y crear una opinión pública favorable a las élites a las que pertenecen los dueños de estos medios, el interés de los medios comunitarios yace principalmente en valores orientados hacia la construcción de una identidad cultural local. Por supuesto, las pequeñas comunidades rurales no están libres de jerarquías sociales y conflictos de poder, y por lo tanto los medios comunitarios pueden responder a distintos intereses personales o institucionales, por ejemplo, de la alcaldía o la parroquia del lugar. El canal Sonsón TV es parte de una cooperativa de caficultores que sostiene varios emprendimientos en el municipio, entre ellos un supermercado, una estación de radio y el canal. Con más de 200 asociados, la cooperativa tiene una representación significativa en la comunidad, por lo que conseguir su apoyo era fundamental para poder realizar el proyecto. No solamente porque hablar de la memoria del conflicto armado era un tema delicado que podía fácilmente desatar controversias en la comunidad, sino principalmente porque se requería de recursos, sobre todo el tiempo de los empleados del canal, que superaba en mucho el tiempo que se solía invertir en la reportería cotidiana.

Ya se mencionó que uno de cada tres habitantes de Sonsón ha sufrido el desplazamiento forzado. En efecto este grupo conforma la gran mayoría de la población de víctimas registradas del municipio. Pero en el registro están documentadas muchas otras formas de victimización: los asesinatos, la tortura, la violencia sexual, el reclutamiento de menores de edad, la muerte o las heridas causadas por minas antipersona, entre otras. Teniendo en cuenta que la violencia se dirigía más que todo a la población rural, es probable que muchos de los socios de la cooperativa y sus familias, la mayoría de ellos agricultores, estuvieran entre las víctimas. No está documentado qué respuesta produjo la emisión del documental en este grupo. Los socios de la cooperativa no suelen incidir en la operación del canal. Tampoco se ha realizado un esfuerzo especial de parte del canal para socializar el video con los socios de la cooperativa. En el momento, 3800 hogares estaban suscritos al servicio del canal comunitario que se emite vía cable. También es razonable presumir que entre los televidentes se encontraba un alto número de víctimas, pero esto no está documentado.

En todo caso, la respuesta al documental, excepcional en forma y contenido para este medio, fue positiva. Los periodistas recibieron comentarios en redes sociales y en conversaciones informales con habitantes del pueblo. Todos aprobaron la forma en que se había tratado el problema del desplazamiento, sobre todo porque en el foco de la narración se encontraban dos personas conocidas con las que muchos se podían identificar. También en el grupo de trabajo conformado

por las dos asociaciones de víctimas, los periodistas y los universitarios, el resultado del proceso fue evaluado positivamente, de tal manera que se decidió realizar otro documental en el año siguiente. El tema que se iba a abordar esta vez era aún más difícil, un tema del que no se hablaba en público, pues esto podía traer consecuencias impredecibles. Se trataba de la muerte de 18 jóvenes del pueblo a manos del Ejército, un suceso conocido en Sonsón como “la masacre de La Pinera”.

El 13 de junio de 2017, el segundo producto del grupo de trabajo coordinado por Hacemos Memoria, el documental *Luces y sombras. Reconstrucción de memoria sobre La Pinera*, se presentó en el teatro de la Casa de Cultura de Sonsón. Era el día en que se cumplían los quince años del incidente que probablemente había dejado la huella más profunda del conflicto armado en la memoria colectiva del municipio.

El caso tratado en el video era complejo porque divergía de los patrones habituales de este conflicto; un caso que, por lo demás, sigue sin ser esclarecido completamente. Pero era la historia de un acontecimiento violento tan importante en la reciente historia del municipio que el gerente de la cooperativa no solo dio luz verde al equipo del canal para la producción de este segundo documental, sino que también permitió la compra de un dron, recurso tecnológico que fue utilizado con mucho entusiasmo en la filmación del documental. Así, en la primera escena de *Luces y sombras*, la cámara se acerca en un vuelo lento entre los árboles de un bosque de pinos al lugar donde en la madrugada del 13 de junio de 2002 un comando del Ejército libraba un combate con un grupo de paramilitares que pertenecía a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Este grupo se había recluido en un centro recreativo con restaurante y piscina ubicado en este pequeño bosque a tres kilómetros del pueblo de Sonsón. Al finalizar el tiroteo que duró varias horas, los medios nacionales divulgaban el parte militar: 18 paramilitares muertos, 11 más capturados.

El documental *Luces y sombras* es el esfuerzo colaborativo de un grupo mixto de personas de reconstruir este acontecimiento que ha dejado una herida profunda en la memoria del pueblo, pero nunca había sido contado, excepto en conversaciones privadas. Solo en el día después de lo ocurrido, los muertos de La Pinera recibieron una breve mención en los medios noticiosos. El periódico nacional *El Tiempo* citaba al jefe del operativo, el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Mario Montoya Uribe, quien destacaba que esta unidad militar era la que “con más fuerza se ha enfrentado a los paramilitares en todo el país” (El Tiempo, 2002, junio 15). Era

una noticia sorprendente, pues desde hacía tiempo, no solo en Colombia sino también a nivel internacional, circulaba información que indicaba que los grupos paramilitares ilegales operaban con el consentimiento tácito o incluso en coordinación directa con las fuerzas del Estado.¹⁹

En febrero de 2002, un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaba que “durante 2001 se atribuyó al paramilitarismo la responsabilidad de 89 masacres, en las cuales 527 personas perdieron la vida”, añadiendo que “en varios casos, se denunció la presunta vinculación de miembros de la fuerza pública y otros servidores del Estado con esas matanzas” (Naciones Unidas, 2002). Ante los constantes reportes sobre violaciones a los derechos humanos la presión internacional sobre el Gobierno de Colombia creció. En 2001, Washington había clasificado a las Autodefensas Unidas de Colombia como organización terrorista (Koppel, 2001, septiembre 10). Y el informe de Naciones Unidas no había dejado lugar a dudas con respecto a la responsabilidad del Gobierno colombiano:

Con base en la existencia de una responsabilidad por la existencia, el desarrollo y la expansión del fenómeno paramilitar, y las diversas conductas arriba referidas, la Alta Comisionada ha considerado reiteradamente en sus diversos informes sobre Colombia que las acciones de los grupos paramilitares comprometen la responsabilidad estatal por la violación de los derechos humanos. (Naciones Unidas, 2002)

En Sonsón, la noticia de la muerte de los paramilitares impactó fuertemente, no solo porque en el pueblo se escucharon los disparos y las explosiones, que causaron gran temor entre la población, sino más aun porque resultó que los 18 muertos que presentó el Ejército eran jóvenes del pueblo, la mayoría de ellos recién reclutados y algunos incluso menores de edad. Era, por supuesto, un gran golpe para las familias de los muertos, pues no solamente tenían que enfrentar el luto, sino también señalamientos en la comunidad por ser parientes de alguien que hacía parte de uno de los grupos que sembraban el terror en la región. Se sabía que desde hace meses los paramilitares se habían instalado en el centro recreativo La Pinera y que ahí mantenían un

¹⁹ En 2006, el general Montoya fue nombrado comandante del Ejército nacional. En 2008 tuvo que renunciar debido a acusaciones que lo vincularon al asesinato de civiles por el Ejército quienes luego fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, un *modus operandi* criminal públicamente conocido como el escándalo de los llamados “falsos positivos”. Actualmente, Montoya debe responder por crímenes de lesa humanidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (Cruz, 2020, febrero 15).

campamento de entrenamiento. También se sabía que varios jóvenes del pueblo estaban con ellos, algunos por falta de oportunidades económicas (los paramilitares, como la guerrilla, pagaban un salario mínimo), otros por motivos de venganza, pues desde hacía años grupos guerrilleros azotaban la región con extorsiones, secuestros y asesinatos. Desde el punto de vista de los sonsoneños, el operativo militar en La Pinera contradecía la lógica de la guerra. Ellos estaban acostumbrados a que el Ejército junto con los paramilitares combatiera a las guerrillas del ELN y las FARC. Por lo tanto, esta noticia fuera de serie levantaba sospechas. Comenzaron a circular rumores. Una versión decía que se trataba de un error de los militares, que creían que se enfrentaban con la guerrilla y cuando se dieron cuenta de que eran sus aliados era demasiado tarde. El personero (*ombudsman* de derechos humanos) de Sonsón vertió otra hipótesis según la cual el Ejército, bajo la presión de organismos nacionales e internacionales que señalaban su connivencia con los paramilitares, quería demostrar su disposición de combatir a los grupos ilegales de ultraderecha: “Entonces parece ser que es que recogieron a estos muchachos, los pusieron como carne de cañón para que el Ejército montara un operativo contundente en contra del paramilitarismo en Sonsón” (CNMH, 2020, p. 228).

Como se puede ver, fue una historia bastante compleja y delicada la que el grupo de víctimas y periodistas de Sonsón se propuso abordar, quince años luego de los hechos. El tema todavía afectaba los sentimientos de muchas personas, pues los muertos eran hijos del pueblo, jóvenes quienes por falta de oportunidades o para defender a su pueblo de los ataques de la guerrilla se habían dejado convencer por los paramilitares. “Siempre pienso que, así como fueron unos muchachos pudimos haber sido nosotros, o mis hermanos o cualquiera de los amigos o compañeros con los que ahora estamos”, dice una joven habitante de Sonsón en el documental *Luces y sombras*. Al parecer, cuando comenzó el tiroteo, los integrantes del grupo paramilitar estaban durmiendo, menos el centinela que fue el primero en caer. Así por lo menos lo indican testimonios de paramilitares sobrevivientes del enfrentamiento que además señalaban que dos de sus compañeros, ya heridos e indefensos, fueron ejecutados por los soldados. En el documental un reportero del canal local de televisión, quien fue llamado al sitio de los hechos, recuerda que los muertos estaban en calzoncillos y sin armas.

Estaban cubiertos, pero se veía en algunas partes que no estaban dispuestos para ningún combate ni nada por el estilo. Estaba pensando, viendo los cuerpos, quién era mi primo

porque no lo podía identificar. Pues porque era conocimiento de que él estaba en las autodefensas. Para nosotros como familia era muy triste ver a Luis Ángel ahí entre los muertos y como víctima también del conflicto, de ese ataque. Uno en la mente se imagina como fue el desespero de todo eso porque, según todo, los cogieron de sorpresa, porque ellos no estaban preparados para ningún tipo de ataque. En las imágenes y lo que recuerdo que vi se veía que esto era una masacre más que un ataque o un encuentro. (Sonsón TV, 2017)

El documental puso de manifiesto una noción que se había solidificado en la opinión pública a través de los años, si bien nunca antes se había enunciado en público: que lo que ocurrió en La Pinera era una masacre del Ejército y que los jóvenes paramilitares muertos en el suceso eran víctimas. Esta por lo menos es la impresión que deja el documental *Luces y sombras*, cuya narración está construida sobre el testimonio de una de las madres de los paramilitares muertos en La Pinera. Gertrudis Nieto es miembro de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza y fue ella la que se dispuso a contar su historia, por primera vez en un medio público, y quien por consenso del grupo de trabajo se designó como protagonista del filme. “Me encerré en el dolor, porque la gente decía ‘ah, este era un paramilitar’”, dice ella en el documental, haciendo un esfuerzo para aliviar el estigma adherido al nombre de su hijo. “No, no era un paramilitar. Murió uniformado así porque quizás fue el destino que le tocó vivir los últimos días de su vida”.

De cierta manera, el testimonio de esta madre nos acerca a aquella “zona gris” que menciona Primo Levi, la zona donde operaban los *Sonderkommandos* en Auschwitz –prisioneros encargados de ejecutar el asesinato masivo de los judíos en las cámaras de gas–, víctimas y victimarios a la vez (Levi, 1989). Las deplorables circunstancias de vida de la gran mayoría de los que se enrolaban como combatientes del conflicto armado interno de Colombia pueden ser aducidas para construir un argumento moral, en el sentido de que fueron víctimas de las condiciones de pobreza y de injusticia social que no les dejaron ver otra opción que ingresar en uno de los grupos armados. En términos legales, sin embargo, este trasfondo social no les borra el estatus de combatientes, incompatible con el de víctimas. Una excepción son los menores reclutados forzosamente, pues esta práctica es calificada como crimen de guerra.

Gertrudis Nieto no reclama el título de víctima para su hijo. Lo que pide es que la comunidad no la excluya a ella y a sus otros hijos. “Las heridas del corazón ahí siguen. Sanan

lentamente. Que la gente ya no le repudia a uno con tantas cosas porque son cosas que quizás ya están en el pasado, para la gente. Pero para nosotros no” (Isaza Velásquez, 2017, p. 99). Su condición emocional comenzó a mejorar cuando una amiga la invitó a un encuentro de la Asociación de Víctimas y convenció a las otras integrantes del grupo para que la admitieran ya que ella sufrió el mismo dolor de la pérdida que las demás.

Quince años después del hecho violento, el grupo de víctimas elige a Gertrudis como su representante. Es el sufrimiento de ella el que va a ser contado en el documental, y esta historia de sufrimiento representa a las de cada miembro de la asociación. Así, el dolor ya no es solamente individual o de una familia, sino que hace parte de un dolor colectivo de este grupo de víctimas y por el cual buscan la empatía de la comunidad entera. Es esta empatía la que puede sanar las heridas dejadas por la violencia, el trauma vivido de forma directa por las personas afectadas o los sobrevivientes cercanos a las víctimas. Una hija de Gertrudis recuerda cuando fue llamada a identificar el cuerpo de su hermano:

En ese momento estaba en shock. No lloré ni tuve ninguna reacción, pero después entré. Empecé a mirar a uno por uno a estos cuerpos, que siempre eran dieciocho. Estos cuerpos estaban ahí, unos destrozados, otros no, otros normales. Nunca se me olvida que pasé por sobre Amado. No lo vi. Miré a estos cuerpos de pie a cabeza. Dije, no lo veo. De los nervios quizás, de la esperanza que estuviera vivo. (Sonsón TV, 2017)

De esta manera el filme genera entendimiento por el sufrimiento psicológico de los familiares de un actor armado, poniéndolo, sin expresarlo directamente, a un nivel con el sufrimiento de los familiares de las víctimas oficialmente reconocidas. Aquí se trata de borrar las diferencias que han dividido a la comunidad durante el conflicto armado, pues, así como algunos engrosaron las filas de los paramilitares, otros se iban a la guerrilla o prestaron servicio militar. A través de la figura de la madre que ha perdido a su hijo –un tropo narrativo evocador de emociones fuertes–, el documental procura resaltar la unidad del pueblo en el sufrimiento. Esta idea es apoyada por los testimonios de personajes secundarios, como una campesina que relata el estado generalizado de miedo que se vivía en esta comunidad en la época:

Uno se mantenía en una sicosis muy horrible porque uno se acostaba, por ejemplo, y en la madrugada o a cualquier hora de la noche le tocaban la puerta y tocaba abrir. Y si ellos decían, vea, nos tiene que acompañar; una vez por ejemplo a mi papá y a un hermano mío les tocó acompañarlos por allá arriba. Y uno siente mucho miedo porque creía que los iban a matar. (Sonsón TV, 2017)

“No todo el que sufre es víctima. La víctima es inocente”, aclara el filósofo español Reyes Mate (2008, p. 37). Pero el asunto no es tan sencillo, pues para poder determinar culpabilidad o inocencia es necesario conocer la verdad. “Sabemos que fue el Ejército quienes hicieron una incursión y los mataron”, afirma la hermana del difunto joven paramilitar de Sonsón.

Fue el Ejército, sí. Porque días después salió una nota en un periódico que decía: el general Mario Montoya dio parte de su victoria al haber dado de baja a dieciocho paramilitares en zona rural del municipio de Sonsón, en el punto llamado la Pintera. A mí, personalmente no me gustó esta declaración porque, ¿cómo se siente alegre? ¿cómo se siente feliz al haber matado tantas personas? Quizás algunas de las personas que estaban ahí pudieron estar malos, otros muy malos, otros pudieron haber matado alguna que otra persona. Y creo que Amado no alcanzó a ensuciarse las manos. Creo. Y si así lo fue, quiero tener en mi mente y en mi corazón este concepto, que él nunca atentó contra la vida de nadie ni le hizo nada a nadie. Por esto me duelen tanto las palabras de este señor.

Dos veces, relata Gertrudis en el documental, ella fue a La Pintera a buscar a su hijo y a convencerlo de que se saliera del grupo armado y que volviera a casa, pero no lo logró.

Le dije qué tan preparado estaba para morir y dijo que no, que a ellos no les iba a pasar nada porque ellos estaban aquí en conjunto con el Ejército. Entonces eso es un gran interrogante o una pregunta que nos tenemos que hacer: cuál fue el motivo y muy rico que se esclarecieran los hechos. Que uno supiera en realidad qué paso con ellos.

Hasta la fecha, el caso de La Pinera no ha sido esclarecido jurídicamente. Un informe publicado en 2020 por el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el grupo paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio llega a la conclusión de que

todo apunta a que fue un operativo, en principio legal, en que el batallón Juan del Corral utilizó la información de la que disponía sobre sus aliados paramilitares para asestarles un ataque y que derivó en ejecuciones en estado de indefensión y por tanto extrajudiciales. (CNMH, 2020, p. 245)

Los autores del informe utilizaron el documental *Luces y sombras* como una de sus principales fuentes de investigación. Textos publicados en el portal Hacemos Memoria sobre el tema aportaron información adicional. Se puede decir, por lo tanto, que el esfuerzo del grupo de trabajo de Sonsón trascendió lo local y fue incorporado en el gran archivo nacional de la memoria del conflicto armado.

El sitio de La Pinera, que había quedado perforado por balas y manchado de sangre, fue convertido en una sede regional de la Universidad de Antioquia en 2006. A pesar de los escasos recursos financieros suministrados por el Estado, la universidad pública procura ofrecer un servicio de educación superior de alta calidad a las diferentes subregiones del departamento de Antioquia, lo cual significa esfuerzos inmensos teniendo en cuenta la accidentada topografía, la diversidad climática y las deficiencias de infraestructura en esta región. Para llegar a dar clases en la sede de Sonsón, los docentes, que en su mayoría vienen de la sede principal en Medellín, se ven obligados a emprender un viaje de varias horas en bus o colectivo por vías curvadas de las montañas andinas, o, de manera alternativa, arrendar una habitación y quedarse en el pueblo durante temporadas prolongadas sin ver a sus familias. Por otro lado, una buena parte de los estudiantes provenientes de comunidades rurales alejadas tienen que superar trayectos aún más difíciles, en medios de transporte más precarios, para poder acceder a esta institución académica más cercana para ellos. De todas formas, el compromiso y las durezas asumidas, tanto por la institución como por sus integrantes, pueden ser considerados como una expresión de esperanza para una región severamente golpeada y frenada en su desarrollo por los muchos años del conflicto armado. La Pinera, que años antes había pasado de ser un sitio turístico a un centro operativo de la guerra sucia,

fue nuevamente transformada, esta vez en un lugar de educación que promete formar a ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y más próspera.

Cada 9 de abril en Sonsón se celebra el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. En 2021, las señoras del grupo de las Tejedoras por la Memoria recibieron un reconocimiento de la Personería del municipio. Se celebró la eucaristía y hubo un almuerzo para las señoras, Gertrudis Nieto entre ellas.

En resumen, se puede constatar que la intervención de Hacemos Memoria en el municipio de Sonsón ha permitido realizar una serie de reflexiones sobre las condiciones que favorecen o dificultan la creación de relatos de memoria sobre el conflicto armado a través de los medios de comunicación locales. Primero, se evidenció que tanto los medios como las organizaciones de víctimas no actúan de forma aislada, sino que están rodeadas por un tejido de instituciones locales cuya actitud favorable hacia el trabajo de memoria es importante, si no imprescindible. Al parecer, cuando Hacemos Memoria propuso impulsar un debate sobre la memoria del conflicto en Sonsón se presenció un consenso tácito, no expreso, en la comunidad de que era un momento oportuno para comenzar a hablar en público sobre los hechos violentos ocurridos en el pasado reciente. El respaldo institucional era particularmente importante para los periodistas del medio local, pues cuando se trata de temas políticamente sensibles, ellos necesitan el visto bueno de sus superiores.

En el caso de Sonsón TV, era importante poder contar con la aprobación del gerente de la cooperativa dueña del medio. A diferencia de las víctimas que muchas veces se ven obligadas a formular sus reivindicaciones y su memoria colectiva en un entorno hostil –frecuentemente, en vez de recibir apoyo del Estado, son sometidas a sospechas y persecuciones–, los medios periodísticos dependen de un cierto respaldo institucional para poder constituirse formalmente (por ejemplo, licencias de emisión), lo cual es una condición para poder alcanzar un público amplio y generar impacto social. Así como la cooperativa provee el abrigo institucional para Sonsón TV, el trabajo de Hacemos Memoria es facilitado por el anclaje del grupo en la universidad, en la medida en que ser parte de esta institución educativa le otorga credibilidad y relevancia al medio digital operado por el grupo. Más allá de lo institucional, hay una característica fundamental que ambos medios comparten: tanto para los integrantes del canal comunitario rural como para los del medio universitario urbano, la presencia de las memorias del conflicto no es algo ajeno y abstracto, sino que forma parte de las experiencias de todos. Para los periodistas esta experiencia sienta las bases de un acercamiento con mayor sensibilidad a la problemática de las víctimas. Tal vez por ello

estuvieron preparados para admitir la confrontación con una historia que se salió del esquema simplista de víctimas versus victimarios, infinitamente repetido en los medios informativos. El caso de La Pinera en Sonsón tiene matices que requieren de una disposición que permite comprender una constelación tan compleja de acontecimientos, y también la capacidad narrativa para reproducir esta complejidad en una forma comprensible para otros. Solo el trabajo conjunto y en diálogo de periodistas, académicos y víctimas, pudo producir esta sensibilidad necesaria para lograr algo excepcional: dar el protagonismo a una persona, Gertrudis Nieto, marginalizada incluso del universo de las víctimas, y contribuir a que esta madre de un paramilitar sea reintegrada en la comunidad, veinte años después de la muerte de su hijo.

1.2.3 Granada: la necesidad de ordenar el tiempo

En Granada, un municipio rural a una hora y media de Medellín, por carretera, el grupo Hacemos Memoria encontró condiciones similares a las de Sonsón: una aldea y sus veredas satélites incrustadas en las faldas de la cordillera central de los Andes, su población, predominantemente campesina, acosada durante décadas por fuerzas armadas externas: grupos guerrilleros, paramilitares y tropas del Estado. Todos estos actores armados tenían la capacidad de asimilar a miembros de la comunidad, y todos dejaron un enorme saldo de muertos, de personas desaparecidas y desplazadas. Para el periodo de 1985 a 2016, el Centro Nacional de Memoria Histórica registró 460 víctimas directas de asesinato selectivo, 241 víctimas de desaparición forzada y 11 554 personas desplazadas (CNMH, 2016a). Trágicamente, hay que decir que esta situación marcaba la “normalidad” de muchos pueblos *paisas* del Oriente antioqueño en los años noventa del siglo XX y hasta la mitad de la siguiente década. Esta ola de violencia política estaba enmarcada en una geografía física y humana, un paisaje cultural característico de esta región: un clima templado, apto para el cultivo de papas y la lechería en las partes altas, café y caña de azúcar en las zonas bajas; la arquitectura colonial, el fervor religioso y el conservadurismo político de sus habitantes. Un factor geográfico, sin embargo, diferencia Granada de Sonsón y otros municipios de la región: su cercanía a una de las vías principales del país, la autopista Medellín-Bogotá. Si bien el término autopista puede parecer algo presumido para una carretera que en una buena parte de su transcurso presenta solo dos estrechos carriles perforados por un sinnúmero de baches, la importancia de esta ruta para la economía del país no puede ser sobrestimada, de tal manera que

durante el conflicto armado quien controlaba el tránsito por esta vía ganaba una enorme ventaja estratégica. La ubicación de la cabecera municipal de Granada, escondida en las montañas, pero a pocos kilómetros de la autopista tuvo, por ello, consecuencias tanto para el transcurso del conflicto armado en este municipio como para los esfuerzos posteriores de la elaboración de una memoria colectiva.

Para Hacemos Memoria, la decisión de intervenir en Granada fue tomada fácilmente, no solo porque el rápido acceso desde Medellín permitía planear una intensidad mayor de las actividades del proyecto con los recursos disponibles, sino también porque en este municipio ya se habían puesto en marcha varias iniciativas para recordar el impacto de la violencia. De hecho, entre todos los pueblos antioqueños golpeados por la guerra, Granada asumió un estatus cuasi emblemático por la fuerza con la cual sus habitantes organizaron la resiliencia colectiva frente a la destrucción y la muerte. Sin duda, la buena conexión vía carretera también ayudó para difundir esta imagen de Granada como un ejemplo de resistencia civil en el conflicto armado, pues para los reporteros de los medios regionales y nacionales era más viable informar sobre Granada que sobre otras comunidades rurales. Pero también hubo un acontecimiento de guerra cuyo impacto literalmente superó el nivel de violencia al que muchos ya se habían resignado. Los días 6 y 7 de diciembre de 2000 las FARC invadieron el casco urbano de Granada en un acto de retaliación contra los paramilitares que en los meses anteriores habían ocupado el pueblo y estaban cometiendo una serie de masacres y asesinatos selectivos de civiles denunciados como supuestos ayudantes de la guerrilla. En medio del combate, un carro bomba que fue dirigido contra el comando de policía explotó antes de llegar a su objetivo en la calle principal del pueblo. Cuatro cuerdas de casas ocupadas como viviendas o tiendas y restaurantes fueron completamente destruidas. Dieciocho civiles y cinco policías perdieron la vida. De golpe, Granada fue noticia nacional.

En los años que transcurrieron entre el atentado y el comienzo de las actividades del proyecto Hacemos Memoria en Granada en 2015, los grupos armados ilegales fueron expulsados del territorio por el Ejército y los habitantes emprendieron la reconstrucción del pueblo. Algunas de las familias desplazadas por la violencia regresaron, pero todavía el municipio no alcanzó a recuperar las cifras de población de antes del conflicto. En 2007 se fundó la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida), con el motivo de registrar los hechos violentos ocurridos a miembros de la asociación, a sus familiares y otras personas de la comunidad, y para propiciar el recuerdo colectivo del dolor y de la resistencia civil a la atrocidad. Se realizaron marchas en el pueblo para

conmemorar las víctimas y para reivindicar los derechos de los sobrevivientes y se instaló un memorial con los nombres de las víctimas en una plaza pública. En 2009 se abrió el Salón del Nunca Más, un pequeño museo local de la memoria, al lado de la iglesia y del parque central. Al entrar a la sala principal desde la calle, los visitantes se ven confrontados con una pared entera cubierta con retratos fotográficos de las personas muertas o desaparecidas en el conflicto armado. A un lado de este mural se encuentra un mesón con cuadernos o bitácoras. Cada uno lleva en la portada la fotografía de una de las víctimas. En las páginas blancas del cuaderno las personas que visitan el lugar pueden dejar algún mensaje escrito. La mayoría de los textos son escritos por los familiares sobrevivientes y dan testimonio del sufrimiento individual y colectivo.

Las iniciativas tomadas por las propias víctimas para reconstruir el pueblo –la infraestructura material a través de donaciones y trabajo colectivo, el tejido social mediante actos simbólicos y conmemorativos– llamaron la atención y recibieron el apoyo de entidades estatales y de organizaciones no gubernamentales. La decisión del equipo de Hacemos Memoria de realizar una fase del proyecto en Granada fue tomada con base en los resultados del diagnóstico de medios y organizaciones sociales en Antioquia realizado previamente por el grupo. Ahí se había registrado el interés de un grupo de ciudadanos en realizar un trabajo de investigación comunitaria con el fin de obtener mayor claridad sobre lo ocurrido. Entre ellos se encontraban integrantes de Asovida y varias personas vinculadas a un Comité Interinstitucional, que se había formado en los años ochenta como una iniciativa conjunta de las diferentes instituciones locales –la alcaldía, la iglesia, centros educativos y de salud, cooperativas agrícolas y otras– para denunciar las agresiones de los actores armados y para coordinar actos de resistencia de la sociedad civil. Además, el diagnóstico de Hacemos Memoria había identificado tres medios comunitarios en Granada: la revista *La viga en el ojo*, el canal de televisión comunitaria Vahos TV y la emisora Granada Stereo.

Como resultado de las iniciativas de memoria que ya se habían puesto en marcha en el pueblo –y que fueron noticia en los informativos locales– en estos tres medios, existía una cierta sensibilidad para la relevancia de los temas del pasado para el futuro de la comunidad, pero no se había realizado una reflexión sobre cómo tratar estos temas, especialmente cuando se relacionaban con hechos que habían instalado un terror en el pueblo que en cierta medida aún persistía. Al ser contactados por el grupo Hacemos Memoria, los responsables de los medios comunitarios habían señalado que la información sobre el pasado del conflicto y sobre sus víctimas era importante para Granada en la coyuntura actual y que les interesaba la posibilidad de adquirir mejores capacidades

para poder realizar esta tarea. La operación cotidiana de la emisora, el canal y la revista estaba a cargo de un grupo de jóvenes del pueblo quienes como parte de su quehacer diario cubrían los eventos conmemorativos que se realizaban en honor de las víctimas. Pero en cuanto a lo que realmente había ocurrido durante el conflicto armado tenían una idea más bien vaga. Conocían algunas historias, sobre todo las que habían afectado directamente a sus familias, pero les faltaba el contexto general. Para ellos, hablar de la guerra era un asunto de los viejos, pues, en 2005, cuando con la desmovilización de los paramilitares terminó la fase más violenta del conflicto armado, ellos todavía eran niños. Así que, en las primeras reuniones convocadas por Hacemos Memoria no era fácil motivarlos para emprender un proyecto periodístico sobre la memoria del conflicto, junto con las mujeres y los hombres de la asociación de víctimas.

“Primero estuve aburrido. Otra vez el tema de la violencia”, recuerda uno de los jóvenes comunicadores comunitarios. “Aquí se habla mucho de la violencia”, opina otro; “mejor hablar de lo que se está haciendo hoy para salir adelante”.²⁰ Sería preferible, dicen algunos, hablar de temas más interesantes como los deportes, la música, las nuevas tecnologías. Pero luego de varias conversaciones en grupo superan su resistencia inicial y consienten a participar en el proyecto. La oferta de capacitación que traen los universitarios parece atractiva: aprender sobre el oficio del periodismo de primera mano, de periodistas profesionales, y recibir formación de expertos y expertas de alto nivel, algunos de ellos incluso de otros países. Un panorama atractivo, pues, en un pueblo como Granada, las posibilidades de encontrarse con este tipo de personas son escasas y, a pesar de la cercanía con Medellín, pocos de los jóvenes del pueblo –hijos de campesinos y pequeños comerciantes en su mayoría– pueden acceder a la educación universitaria. Para las víctimas organizadas de Granada, en cambio, el interés de vincularse al proceso propuesto por Hacemos Memoria residía en un interés de naturaleza más política: “La universidad tiene la obligación de vincularse a este tipo de iniciativas”, dice una de las representantes de Asovida, “y creo que los estudiantes deberían involucrarse más. Es muy bueno cuando los jóvenes salen de las aulas y se encuentran con nosotros en las comunidades” (Tavera, 2017, junio 6).

En los tres años de 2015 a 2017, Hacemos Memoria implementa su estrategia para fortalecer la construcción de la memoria colectiva centrada en las víctimas paralelamente en Granada y en Sonsón. La metodología aplicada es la misma en ambos municipios y consiste en tres etapas: la

²⁰ Comentarios registrados durante un taller realizado en Granada con integrantes de los tres medios comunitarios, el 14 de mayo de 2016.

primera, la formación de un grupo de trabajo compuesto por personas interesadas en realizar una reflexión sobre la historia violenta en su comunidad: periodistas de medios locales, víctimas organizadas, integrantes de organizaciones sociales, aficionados a la cultura e historia del lugar. La segunda, una serie de talleres con expertos de diferentes áreas relacionadas a la temática: periodismo, memoria histórica, derechos humanos, historia del conflicto armado. Y la tercera fase, creación colaborativa de un producto periodístico que relata una historia del conflicto armado en el municipio desde la perspectiva de sus víctimas.

Durante el proyecto, el apoyo de DW Akademie se manifestó no solo en la financiación y asesoría al proyecto Hacemos Memoria, sino también en encuentros y talleres con coordinadores técnicos, asesores, evaluadores, y periodistas del medio internacional, incluso una visita del director general de la Deutsche Welle a la emisora comunitaria Granada Stereo. En estas reuniones siempre se expresaba el interés de la cooperación alemana en apoyar el proceso de memoria en Colombia y que este interés estaba fundamentado en experiencias propias de los alemanes con la guerra y su memoria. El programa en español del canal alemán emitió un reportaje de la corresponsal de DW para América Latina sobre los esfuerzos de los granadinos de debatir acerca del pasado violento. Todas estas eran muestras de interés que señalaban que aquí en esta comunidad campesina en Colombia, se estaba haciendo algo importante. Interés, tanto por una auténtica motivación a favor de la comunicación y la solidaridad entre pueblos –muy en el espíritu habermasiano– como también por el propio crecimiento institucional, ya que una exitosa intervención en el marco de la cooperación internacional se traduce en reconocimiento político (recepciones en la embajada, visitas de altos cargos gubernamentales, etc.) y este, a su vez, en financiación pública.

En 2016, cuando el proyecto de Hacemos Memoria ya llevaba un año en Granada, en Bogotá el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un informe titulado *Granada: Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción* (CNMH, 2016a).²¹ En este libro se construye una narración del conflicto armado en Granada centrada en voces testimoniales recogidas en talleres, grupos focales y entrevistas conducidas por el equipo investigador. Los primeros cuatro capítulos del libro relatan el desarrollo del conflicto armado en Granada, comenzando con una caracterización de este

²¹ El informe se realizó en cooperación con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y la Corporación Región, una ONG de Medellín dedicada al fomento de la democracia y la construcción de paz.

municipio como “epicentro regional de la paz y de la guerra” que desde los años ochenta fue elegido por las guerrillas como espacio de retaguardia y de campamentos permanentes desde donde procuraban controlar los municipios vecinos de San Carlos, San Luis y Cocorná, así como la mencionada autopista. Esta zona, además, era de alto valor estratégico por los grandes proyectos hidroeléctricos que se habían instalado sin consulta y participación de los habitantes campesinos de la región y, por tanto, habían producido un considerable descontento y protestas que la guerrilla buscó aprovechar para agitar y reclutar a la población local. La respuesta del Estado y de grupos paramilitares fue excesivamente violenta; se creó un círculo vicioso de terror que culminó en una fase de alta intensidad del conflicto entre 1997 y 2004, que fue denominada por los propios habitantes de Granada como “la guerra de verdad”.

Los capítulos 3 y 4 del informe mencionado presentan una tipología de formas de victimización –estrategias de la guerra contra la población civil– y las afectaciones que estas tuvieron en las personas que las sufrieron y en el tejido social. Los textos están intercalados con testimonios que dan fe de la perspectiva de esta población civil victimizada y del deterioro extremo de las relaciones humanas en esta guerra, como en el relato de una mujer entrevistada en 2013:

Aquí los paramilitares utilizaron a las personas como mulas de carga. Les cargaban los muertos encima, asesinaban las personas delante de ellos [...] se los montaban al hombro y los arreaban con zurriago por caminos veredales hasta que los sacaran a la vía principal, los montaban a las escaleras y les decían: “Lleve ese muerto hasta Granada y lo entrega al inspector de policía y se va de una vez”. Entonces llegaba la persona y de una vez se iba para Cali o Medellín. (CNMH, 2016a, p. 209)

En estas dos frases está plasmada una buena parte de la situación: el control arbitrario del territorio por un poder armado irregular, el asesinato selectivo, la forzada colaboración de civiles, la participación de los órganos de seguridad del Estado, el desplazamiento y, sobre todo, la sistemática aniquilación de la dignidad humana. Una participante de un taller cuenta cómo la guerra destruyó la confianza entre las personas, hasta el punto de inhabilitar la comunicación:

[...] todo eso todo mundo se lo tenía que tragar y tragar y comer en silencio, porque si hablaba, sentía temor que de pronto este lo iba a traicionar o aquel le iba a contar o qué

razón iba a llevar porque uno no sabía con quien estaba hablando, al fin y al cabo. Entonces mire que todo eso pues a raíz de esto de estar callada y no poder hablar genera todo eso de las afectaciones psicológicas, los sentimientos de impotencia, dolor, depresión. (CNMH, 2016a, p. 267)

Las secuelas del conflicto armado no son las mismas en todas las víctimas, concluyen los autores, y algunos daños son irreparables: “La frustración del proyecto de vida genera consecuencias devastadoras: incide en el sentido mismo de la vida del ser humano. Es la humanidad y no solo la población granadina la que ha quedado herida” (CNMH, 2016a, p. 274).

El libro termina con un capítulo centrado en las acciones de individuos y colectivos orientadas a la sobrevivencia, la denuncia de los crímenes, la atención humanitaria, en fin, los diversos intentos de rescatar la dignidad en medio de la guerra, la reconstrucción del pueblo y, finalmente, la movilización de las víctimas y su reclamo por la memoria.

Varias de las personas convocadas por Hacemos Memoria habían participado en los talleres previos al informe. Tenían una idea de los hechos interrelacionados y de una ubicación espaciotemporal mucho más allá de sus propias experiencias individuales. Se había comenzado a construir un relato como memoria colectiva desde el punto de vista del momento. Sin embargo, el grupo de participantes provenientes de la asociación de víctimas querían aprovechar la oportunidad de los talleres ofrecidos por Hacemos Memoria para aclarar algunos asuntos, y para darle una estructura temporal más concreta a la narración de los hechos. El grupo de los jóvenes periodistas comunitarios, por otro lado, tenía mucho menos claridad sobre el transcurso de los eventos. Para ellos, todo se centraba en la explosión del carro bomba, la subsiguiente erradicación de la guerrilla y la reconstrucción del pueblo; pero no tenían referentes de los hechos anteriores, de la interrelación de factores sociales y políticos que originaron la violencia no solo en Granada sino en muchas otras regiones del país. Entonces, para poder construir relatos de memoria en la radio y los otros medios del pueblo, ellos necesitaban más elementos de la historia y la capacidad de ponerlos en relación. La expectativa era, por tanto, que la colaboración entre la asociación de víctimas, los integrantes de los medios comunitarios y el grupo Hacemos Memoria conducía a una mejor comprensión de la complejidad del conflicto, a una articulación aun más precisa de la experiencia y de las reivindicaciones de las víctimas y, en suma, a mejores capacidades para comunicar estas reflexiones a través de los medios locales. Como resultado de esto, este grupo mixto se propuso

como meta construir una línea de tiempo del conflicto armado, resaltando tanto hechos violentos como actos de resistencia civil. Este instrumento, la línea de tiempo debía ayudar a estructurar la memoria y permitir que esta se transmitiera a las nuevas generaciones. Iba a ser un trabajo periodístico colectivo en el cual se organizaban, de forma lineal, artículos de prensa, testimonios, entrevistas, fotografías, videos y otros materiales.

Aquí la memoria, que suele operar de manera errática, sin respetar la secuencia temporal de los acontecimientos, se apropia de la técnica de la historia: poner las cosas en su orden temporal. Así como para Heidegger la temporalidad es el sentido de la existencia humana, para la historia, establecer la cronología –la lógica temporal de los hechos, su ubicación en la línea de tiempo– es el primer paso para determinar su sentido. Por otro lado, este ejercicio de enfilar los recuerdos deja en evidencia el carácter espacial del tiempo. En este sentido la historia que se propone comprender, analizar, explicar los hechos se diferencia de la memoria. Ella puede saltar sin problema entre tiempos y lugares, asociar hechos distantes en tiempo y espacio en una sola imagen; una propiedad estudiada por el psicoanálisis, a nivel de individuo, y notoriamente explotada por los manipuladores de masas, por ejemplo cuando justifican la invasión de un país vecino con hechos ocurridos cientos de años atrás. Pero podemos notar que la inconstancia, la irregularidad temporal de la memoria también se impone sobre la línea de tiempo. Pues, como veremos a continuación, los segmentos de esta línea no son uniformes como los minutos del reloj y los días del calendario, sino que se comprimen o extienden. En un año puede haber mucha historia, en otro poca, y la narración de un día puede tomar más espacio que la de una década. Lo que interesa aquí, sin embargo, es la pregunta: en qué medida el ordenamiento temporal de la memoria del conflicto armado puede ser un recurso de empoderamiento para las víctimas.

La línea de tiempo titulada *Granada: Una historia de dolor y resistencia* se puede encontrar en la página web del Salón del Nunca Más, salondelnuncamas.com, el espacio de memoria creado por las víctimas de Granada. La localización exacta ocurre en un segmento de la página titulado “Historia”. Ahí, un texto introductorio marca claramente la motivación detrás de esta publicación:

La violencia llegó a nuestras comunidades siendo el resultado de un laboratorio de experimentación de los actores armados (ELN, FARC, AUC y fuerzas del Estado) para librar su batalla, una batalla a la que no fuimos invitados y no queríamos participar, pero en la que nos vimos forzados a colocar muertos, desaparecidos, niñas y niños reclutados,

familias desplazadas, mujeres violentadas y sufrir las consecuencias de las minas antipersonas, entre otros hechos victimizantes. [...] El Salón del Nunca Más nace de la necesidad de reconocer lo sucedido y también como una forma de aportar a la reparación simbólica, desde quienes vivieron los hechos y es un proceso de reconstrucción de la memoria de las víctimas del conflicto armado de este municipio, que busca generar un escenario físico y una dinámica social, pública y política donde de manera permanente se exprese la voz de una sociedad que da a conocer al mundo los atropellos vividos en el marco del conflicto armado y el clamor por la no repetición. (Asovida, s. f.)

Reconocer lo sucedido, entonces, pero en orden temporal, para entenderlo mejor, para vincular los hechos victimizantes cronológicamente y, de esta manera, buscar algún sentido. Pero desde el inicio se toma una decisión estratégica: dividir esta línea de tiempo en dos. Esto se hace porque desde la perspectiva de las víctimas, así se divide el tiempo: en un tiempo sufrido, de una violencia impuesta, un tiempo aplastante que deja como únicas alternativas callar, huir o morir; y en otro tiempo que es el de un sujeto colectivo activo, que reconstruye el territorio y recupera la dignidad. Los dos tiempos coexisten paralelamente, se cruzan y sus actores muchas veces son los mismos, pero para efectos de la memoria de las víctimas, es necesario mantenerlos separados.

Son en total 43 historias que se han colocado en las dos líneas, un trabajo de tres años. Los elementos que conforman estos dos hilos de narración son de cinco categorías: 1) videos testimoniales realizados por el equipo del canal local (20); 2) artículos de archivo del periódico regional *El Colombiano* (15); 3) fotografías (7); 4) documentos (2), y 5) tablas que recopilan datos (2).

El contraste entre la cobertura noticiosa del conflicto armado en Granada por el principal periódico de la región y el trabajo colectivo realizado por el grupo mixto de periodistas comunitarios, víctimas y académicos, es significativo. Mientras los habitantes de Granada, victimizados en distintos grados y de diferentes maneras, tienen el papel protagónico en los videos testimoniales —son ellos los que narran lo que ocurrió—, en los artículos de prensa las no víctimas aparecen con voz propia. Solo cuando se trata de funcionarios gubernamentales emergen en los textos y las fotografías como individuos con nombre y apellido: varios alcaldes y concejales que fueron secuestrados, un candidato a gobernador cuyo helicóptero fue baleado, una comisión de observadores de la OEA retenida por la guerrilla.

En la línea de tiempo, estos artículos periodísticos cumplen con la función de marcar hitos: la fecha exacta en que ocurrió el hecho, los nombres de los funcionarios, de los actores armados involucrados, el lugar preciso, etc. Datos que en la memoria de las personas y de los colectivos se pueden confundir o desaparecer. Los artículos de prensa sirven, entonces, como una especie de muleta para apoyar el progresar de la memoria. No transportan las voces y miradas de las víctimas sino que representan una perspectiva externa, la narrativa noticiosa, basada en fuentes oficiales, partes militares, ruedas de prensa, estadísticas, en primer lugar. Los campesinos muertos quedan sin rostro y sin nombre en la noticia: “Los paramilitares asesinaron a siete hombres en El Vergel”, “23 civiles y 5 policías muertos”, son algunos de los titulares. Solo en un artículo de 2004, unas víctimas sin cargo gubernamental son mencionadas con nombre completo. Se trata de cuatro conductores de transporte local: Jorge Jiménez Granada, Raúl Rivera, Luis Enrique Cubillos y Edgar Mauricio Pantano, quienes fueron asesinados por las FARC. Es posible que esto ya revele una conciencia más desarrollada de los medios de comunicación acerca del sufrimiento de las víctimas individuales. Pues, al mismo tiempo, en 2004, la línea de tiempo paralela al “escenario de resistencia” registra las primeras marchas conmemorativas, cuando las víctimas entran en el escenario público: “Los primeros viernes de cada mes, los granadinos encienden velas y recorren las calles del municipio. Las jornadas de la luz son un acto de resistencia que honra la memoria de las víctimas”, dice la prensa. Por supuesto, para las personas que hicieron parte de estas marchas, que luego conformaron la asociación de víctimas Asovida y crearon el espacio de memoria, denominado Salón del Nunca Más, honrar la memoria de las víctimas ha sido el motivo principal para intervenir en los espacios públicos y en los medios, y, por último, para crear su propio espacio público de memoria y su medio en el espacio virtual. También, esto se refleja claramente en el texto introductorio a la línea de tiempo *Granada: Una historia de dolor y resistencia*: “Los habitantes de este municipio reconocen que la memoria es el camino que conduce a la verdad, la justicia y la reparación. Recordar el nombre de las víctimas y su historia les permite sanar las heridas, derrotar la indiferencia y construir escenarios de paz en su comunidad”.

Los videos grabados para la línea de tiempo entre 2015 y 2017, en modo de retrospectiva, reflejan no solo el proceso de formación de las víctimas como organización social y política sino que permiten también observar la formación de una conciencia colectiva, el descubrimiento de que la condición de víctima no se limita a la experiencia individual de sufrimiento, y que esta es más bien una condición social producto de la guerra. Pero, además, las personas afectadas ya muestran

una habilidad muy desarrollada de reflexionar sobre estos mismos procesos y de articular sus reflexiones, como se ve, por ejemplo, en un video de la línea de tiempo titulado “2007 / Creación de la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida)”. Ahí Amanda Suarez, una integrante de la asociación, recuerda:

Desde el 2004 comenzamos a trabajar acá con las víctimas, [...] nos reuníamos con las mamás que habíamos quedado con hijos. Entonces, ahí de esa manera empezamos a contarnos lo que nos había pasado a la una a la otra, a las unas más a las otras menos. Bueno, de todas maneras a ese dolor veníamos como a unirlo en un solo dolor.

El trabajo terapéutico, los abrazos, la formación de un cuerpo colectivo con un dolor común, desemboca en la constitución de un sujeto político. No solo se trata de reconocerse el uno en el otro, sino de conocer sus derechos y reivindicarlos. Gloria Quintero, una de las lideresas de la asociación cuyo hermano fue desaparecido, hace una descripción de este proceso de empoderamiento:

Tenemos documentos de las víctimas, donde eran más de 350 personas que asistían a la organización. Con el tiempo se ha ido mermando la asistencia, de todas maneras mucha gente se va cansando de tanta reunión, otros van accediendo a los derechos y se van alejando, todo eso. Pero lo primordial fue la cantidad de personas que lograron hacer incidencia en el municipio desde la organización de víctimas, que ya no era ir y suplicar por un derecho sino que ya se exigía con respeto porque se conocía.

La última entrada en la línea de los hechos violentos es un artículo de prensa que se refiere a la detención de tres militares por el asesinato de una joven campesina en el municipio de Granada, para luego presentarla como “abatida en combate”. La línea “escenario de resistencia” continúa hasta 2016. En su transcurso relata eventos como “el primer retorno simbólico de desplazados”, en 2007; “La inauguración del parque de la vida”, en 2008; “La inauguración del Salón del Nunca Más”, en 2009, y finalmente “El Centro Nacional de Memoria Histórica presenta el informe ‘Granada: memorias de guerra, resistencia y reconstrucción’”, el 5 de noviembre de 2016. Con este hecho, la memoria del conflicto armado en Granada se instituyó en la memoria nacional.

La línea de tiempo fue presentada en dos monitores interactivos que se instalaron en el Salón del Nunca Más, para el uso de los visitantes de este espacio de memoria. Adicionalmente, estos equipos fueron llevados a colegios del municipio para hacer presentaciones de la línea de tiempo. Sin embargo, debido a la falta de recursos, los equipos se deterioraron y en 2018 la asociación lanzó un grito de auxilio porque debido a la humedad del lugar los objetos expuestos, en particular las bitácoras de las víctimas, se habían dañado. Hoy, la línea de tiempo puede ser consultada en la plataforma digital del Salón del Nunca Más, y mientras este dispositivo digital funciona, puede servir como repositorio de la memoria para los granadinos y otras personas interesadas.

Para el grupo Hacemos Memoria, la participación en la construcción de la línea de tiempo en Granada fue reveladora y condujo a un cuestionamiento de su propia condición de víctimas o no víctimas como pertenecientes al colectivo universitario. La salida de la universidad para realizar trabajo de campo en una comunidad rural y el diálogo con personas conformadas como grupos (la asociación de víctimas, los periodistas locales) produjo este efecto de concientización de sí mismos. Los unos, claramente identificados como miembros de una comunidad victimizada (el hecho de que algunas personas de Granada también pueden haber participado activamente en el conflicto armado no fue tomado en consideración en esta investigación), los otros miembros de una institución, la universidad pública, que no solo ha acompañado y analizado el conflicto armado con los recursos académicos e intervenido en debates públicos, sino que también fue lugar de conflictos violentos. El siguiente apartado tratará de esta autorreflexión y de los esfuerzos de Hacemos Memoria de llevar la metodología aplicada en Granada y los aprendizajes hechos ahí a la propia colectividad universitaria e iniciar el debate entre profesores, estudiantes y trabajadores de la universidad, este un emprendimiento de memoria significativamente más complejo, que prometía ser confrontado con dificultades comparables, tal vez, con sacar a la luz los trapos sucios de una familia.

1.2.4 Medellín: hacer memoria en la casa propia

Entrar en el campus de la Universidad de Antioquia en Medellín desde la calle Barranquilla es entrar en un “espacio otro” en la ciudad, una heterotopía, para adoptar el término acuñado por Foucault en su famosa conferencia dada al Círculo de Estudios Arquitectónicos de París, en 1967.

Las heterotopías, a diferencia de las utopías, son espacios reales pero separados de la realidad cotidiana de la vida social. Se trata de

lugares reales, lugares efectivos, que están diseñados en la institución misma de la sociedad, que son especies de contraemplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas en las cuales los emplazamientos reales, todos los otros emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura están a la vez representados, cuestionados e invertidos, especies de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sean sin embargo efectivamente localizables. (Foucault, 1984, p. 47)

Como ejemplos, Foucault nombra los cementerios, los espejos, los museos, los jardines, los moteles y otros, pero extrañamente –siendo académico– omite las universidades. La universidad, en todo caso –la pública en particular– puede ser denominada una heterotopía *par excellence*: un lugar demarcado y separado dentro de la ciudad, que proyecta a su interior la sociedad externa en toda su complejidad. Son lugares para la formación de ciudadanos educados que a su vez conforman una sociedad ilustrada, que al mismo tiempo refleja y produce todas las contradicciones ideológicas, políticas y sociales del mundo exterior. Esto queda más que evidente en el caso de las universidades públicas en Colombia, donde la confrontación ideológica pudo llegar a extremos violentos y donde todas las fracciones que protagonizaban el conflicto armado en el campo, en la selva y en las ciudades, tenían su representación –de manera oculta, a veces; y totalmente abierta, otras–.

El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022a) documenta cómo las universidades fueron convertidas en un campo de batalla donde la disputa con palabras y argumentos fue reemplazada por la imposición violenta de discursos ideológicos.

Los grupos armados crearon formas de dominar en las universidades: las guerrillas buscaron aumentar su influencia y el número de militantes. Agentes estatales y grupos paramilitares enfrentaron de forma violenta a estudiantes y docentes por actividades consideradas como expresión del “enemigo interno”. (Comisión de la Verdad, 2022b)

Una vez más, entramos a la *zona gris*, el lugar donde víctimas y perpetradores se encuentran, se mezclan, se confunden. No solo había estudiantes y docentes de las diferentes líneas políticas que se enfrentaron, a veces de forma violenta. También el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, contribuyó al escalamiento de la violencia con medidas represivas muchas veces desmesuradas, tratando de erradicar los grupos subversivos de las universidades que se consideraban como un campo propicio para la formación política e ideológica de la guerrilla. Lo cierto es que el análisis de la sociedad colombiana como clasista, dominada por el “imperialismo yanqui” y esencialmente no reformable por la vía democrática y legal fue compartido no solamente por muchos estudiantes sino también por una buena parte del cuerpo docente (Rudas, 2021).

Hoy, la universidad como institución se ve desafiada a cuestionarse a sí misma por haber propiciado la formación intelectual de personas que se convirtieron en líderes de organizaciones violentas. Este nivel de reflexión, sin embargo, no es fácil de alcanzar, pues, desde afuera y desde adentro, las universidades públicas en Colombia han sido expuestas a emociones políticas contrarias: por un lado, el reconocimiento de su excelencia académica y, sobre todo, el orgullo por su misión de abrir la educación superior a los sectores populares; por otro lado, la estigmatización como supuestos “nidos de guerrilleros” y la subsecuente persecución estatal y paramilitar. El alto nivel de conflictividad ha conducido a que el campus de la Universidad de Antioquia, como los de otras universidades colombianas, sea un predio cercado, separado de la ciudad con portales de entrada controlados por vigilantes uniformados.

En días normales, el campus es un espacio tranquilo. Sus zonas verdes con árboles grandes, poblados por una diversidad de pájaros y una familia de monos, le dan el aspecto de un parque, un oasis en medio del caos urbano. Se ven estudiantes inmersos en la lectura o la conversación, compartiendo café con un profesor, jugando ajedrez o practicando deportes. Hay venta de libros usados y de artesanías, feria de productos orgánicos, actividades culturales. Esta tranquilidad, sin embargo, se rompe periódicamente, y en lo que aparenta ser una comunidad idílica irrumpe como un macabro ritual la violencia política que aflige a todo el país.

Los muros de los edificios repartidos por el campus dan fe de esta historia conflictiva: muchos de ellos son pintados con murales que recuerdan a los alumnos, docentes y trabajadores de la universidad que murieron por causa de la violencia política. Uno de los grafitis representa el ángel de la historia, una reproducción del famoso cuadro de Paul Klee al que Walter Benjamin hace referencia en sus tesis sobre el concepto de la historia: “Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde

se nos presenta una cadena de acontecimientos, él no ve sino una sola y única catástrofe, que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar lo destruido” (Löwy, 2002, p. 100). Este texto escrito por Benjamin en 1940, poco antes de su muerte en la huida de los nazis, parece fácilmente transferible a este lugar “fuera de lugar”, la Universidad de Antioquia donde la historia reciente ha dejado amontonados los cadáveres de estudiantes y profesores revolucionarios, aquellos que dejaron su vida en la lucha por la utopía social.

La metáfora del marxista judío Benjamin continúa con una visión cuasi mística de una tempestad que sopla desde el paraíso y empuja al ángel de la historia “al futuro, al cual da la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esa tempestad es lo que llamamos progreso”. Esta visión mesiánica de la primera mitad del siglo XX, según la cual las catástrofes acumuladas del pasado colocaban la semilla de la revolución, fue nuevamente adoptada en América Latina, en una variante católica, por la Teología de la Liberación. Este movimiento liderado por intelectuales y sacerdotes marxistas inspirados en la revolución cubana y la lucha anticolonial procuraba transformar la misión caritativa cristiana en la acción revolucionaria de las clases oprimidas, haciendo caso omiso de las palabras del propio Marx quien, como es sabido, caracterizaba la religión como “el opio del pueblo”.

En la segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano que se celebró en Medellín en 1968, esta corriente se manifestó de manera contundente. En este año, el sacerdote colombiano Camilo Torres, una de las figuras emblemáticas de la corriente revolucionaria en la Iglesia latinoamericana, ya había muerto. Torres, un miembro de la élite bogotana, había abandonado sus puestos como cura y profesor de la Universidad Nacional para unirse a la guerrilla del ELN, en 1965. Cayó muerto, poco después, en su primer combate; un hecho que, mirado desde hoy, puede servir para ilustrar la ineptitud de un intelectual para la confrontación militar, y, más aún, la futilidad de la lucha revolucionaria por medio de la violencia de las armas. En medio del fervor revolucionario del 68, sin embargo, ocurrió todo lo contrario: la muerte de Torres fue mistificada como un sacrificio. Hoy, la veneración de la figura de Camilo Torres por una izquierda conservadora sigue intacta, comparable solo a la glorificación del Che Guevara; y esto, a pesar de que ha transcurrido más de medio siglo desde la muerte del sacerdote revolucionario, y sin tomar en consideración los múltiples fracasos que la lucha armada ha sufrido desde entonces a través del

continente; haciendo caso omiso también del hecho no casual de que en donde la revolución armada prosperó se acabaron de establecer regímenes autoritarios.

En las universidades públicas, las referencias iconográficas a estas figuras míticas son omnipresentes. El auditorio principal de la Universidad de Antioquia, por ejemplo —el espacio donde se llevan a cabo los eventos más importantes—, lleva oficialmente el nombre del cura caído: Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo. En su fachada luce una imagen de Torres, con fusil alzado. Lo que resulta como un anacronismo treinta años después del colapso de la Unión Soviética y en vista del acuerdo de paz firmado en Bogotá en 2016, aquí es parte de una actualidad política. Para algunos, la violencia es todavía considerada un recurso legítimo para combatir la injusticia sistémica, y donde jóvenes están dispuestos a jugarse la vida por la causa revolucionaria, e incluso a morir como mártires, siguiendo el ejemplo del cura.

En 2021, la Universidad de Antioquia entregó dos informes sobre la violencia en las universidades a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Uno de ellos fue elaborado por el grupo Hacemos Memoria, el otro por la Unidad Especial de Paz, una entidad creada en la universidad tras la firma del acuerdo del Gobierno con las FARC, con el objetivo de apoyar iniciativas para la construcción de paz. En ambas publicaciones se realiza un registro de los hechos de violencia que ocurrieron en la universidad durante las décadas anteriores. Es notable, sin embargo, que las metodologías aplicadas para la elaboración de cada uno de estos dos documentos difieren significativamente, y por consecuencia, también los resultados obtenidos. El trabajo de Hacemos Memoria es una línea de tiempo titulada *50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia*. En ella se documentan 300 hechos ocurridos entre 1968 y 2018. No es fortuito que Hacemos Memoria utilizara la misma metodología para analizar la violencia en la universidad que ya se había aplicado en el trabajo de construcción de memoria en la comunidad rural de Granada. “Las personas de Granada nos aterrizaron”, explica Patricia Nieto, directora de Hacemos Memoria en una conferencia con ocasión de la entrega de los informes a la Comisión de Verdad. “Es decir, nosotros fuimos a construir con ellos su pasado, su memoria, y de pronto nos interpelaron y nos dijeron: ¿Y la memoria de ustedes, y lo que pasó en la universidad?” (Universidad de Antioquia, 2021, agosto 5).

Una vez más, el proyecto asume el empeño de ordenar el tiempo para obtener mayor claridad acerca de lo ocurrido. El procedimiento para construir la línea de tiempo en la universidad fue muy similar al que se realizó en Granada, con la diferencia de que ahora ya no se trataba de un

encuentro con un colectivo *otro*, al estilo del periodismo convencional o de la antropología, sino de un análisis de la condición histórica de la comunidad propia, la misma a la cual el colectivo de autores pertenece. En la primera fase de la investigación, miembros del grupo Hacemos Memoria revisaron miles de ejemplares del periódico local *El Colombiano*, donde se habían registrado, durante la temporada en cuestión (1968-2018), todos aquellos acontecimientos de la vida universitaria a los que se pudo otorgar un valor noticioso debido a su relación con el conflicto armado.

La evaluación del archivo de prensa reafirma lo que, de manera intuitiva o por experiencia propia, ya se sabía: en el contexto del conflicto armado, la Universidad de Antioquia fue un epicentro de la violencia política. La primera noticia registrada en la línea de tiempo, empero, tiene un tono esperanzador: se trata de la inauguración del nuevo campus, en 1968, ocasión aprovechada por el *El Colombiano* para enaltecer a la Universidad de Antioquia como institución que vincula la tradición con el progreso:

Sin abjurar de sus gloriosos antecedentes, plena de historia y de responsabilidades con la biografía de la patria, ha iniciado la etapa de acomodamiento a los planteamientos de la pedagogía y de las estructuras modernas. Tenía que ser inevitable y necesariamente así, porque la Universidad debe ser vanguardia y guía de la comunidad. (Hacemos Memoria, s. f. b)

Pero de ahí en adelante, las entradas en la línea de tiempo están marcadas por hechos violentos. En 1969, estudiantes protestan contra planes del Gobierno para reformar la educación superior con asesoramiento desde Estados Unidos. Poco después se registra el primer muerto en el campus: un joven recibió un impacto de bala durante una protesta por la visita a Colombia de Nelson Rockefeller, el delegado del presidente de Estados Unidos Richard Nixon para América Latina. En este momento, lo que ocurrió en la Universidad de Antioquia y en otras Universidades del país no era excepcional. En muchos otros lugares, estudiantes izquierdistas tiraban piedras y cocteles molotov contra policías que respondían a su vez con una violencia desmesurada. En Berlín occidental, por ejemplo, un estudiante fue asesinado por un policía durante una manifestación contra la visita del sah persa a Alemania; en los Estados Unidos, policías mataron a tres estudiantes afroamericanos quienes protestaron contra la segregación racial en Orangeburg, en el estado de

Carolina del Sur; y en México, la masacre de Tlatelolco cometida por fuerzas del Estado dejó un gran número de estudiantes muertos, probablemente cientos –la cifra exacta no se ha podido establecer hasta el día de hoy (Allier Montano, 2018).

En 1973, durante protestas en las afueras de la Universidad de Antioquia, un agente de la policía secreta DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)²² disparó su revólver de dotación y mató al estudiante de Economía Fernando Barrientos. Enfurecidos, sus compañeros llevaron el difunto a la rectoría de la universidad y lo depositaron encima de la mesa de la sala de reuniones. En seguida, el edificio fue incendiado y el cadáver fue evacuado antes de que lo alcanzaran las llamas que destruyeron por completo el edificio. Hoy, una de las plazas más concurridas del campus lleva el nombre de Fernando Barrientos. Frecuentemente es lugar de asambleas y manifestaciones; la memoria del estudiante muerto se mantiene viva, medio siglo después del hecho que simboliza –esto parece ser el consenso de una gran parte de la comunidad universitaria– la brutal represión del movimiento estudiantil por una fuerza pública al servicio de las élites reaccionarias.

En el texto sobre el caso publicado en la línea de tiempo, Hacemos Memoria adopta ese punto de vista, a pesar de que la situación no era tan clara, pues el mismo texto menciona por lo menos dos testimonios contrarios con respecto a lo ocurrido: por un lado, el del agente quien afirmó frente al juzgado que disparó al aire cuando estaba siendo violentamente agredido por los manifestantes; por otro lado, la narración de un exalumno de la universidad, entrevistado 45 años después del evento, quien recuerda haber presenciado el momento cuando el agente, huyendo de los estudiantes que lo perseguían luego de haberlo identificado como un espía en una asamblea estudiantil, se dio vuelta y soltó el disparo mortal. La contradicción entre estas dos versiones no se resuelve en el artículo de la línea de tiempo. Pero, a pesar de que el juzgado había determinado en su momento que el disparo fatal del policía era un acto de legítima defensa, el dictamen opuesto de los autores está claramente expresado en el título del artículo: “Agente del DAS asesinó al estudiante universitario Fernando Barrientos” (Hacemos Memoria, s. f. c), afirmando la narrativa que durante medio siglo hizo parte de la memoria colectiva de la universidad. A mi parecer, aquel firme posicionamiento de los periodistas ante un turbio estado de hechos solo se puede explicar

²² Este cuerpo de inteligencia y contrainteligencia, notorio por una cadena de violaciones a los derechos humanos cometidos por sus agentes, fue desarticulado en 2011, luego de un escándalo por interceptaciones ilegales de llamadas dirigidas contra políticos opositores y activistas de la sociedad civil.

por un sentimiento latente que no se halla articulado abiertamente en el texto, a decir: la convicción de pertenecer a una comunidad y una institución educativa constantemente victimizada por el Estado y las fuerzas oscuras con las que este se había aliado en el transcurso del conflicto armado, que, por cierto, no había llegado todavía a su punto máximo. En lo que quedaba de los años setenta, continuaron tanto las protestas, a menudo violentas, como la represión del Estado y sus fuerzas de seguridad. Los titulares de la línea de tiempo dan fe de la tensa atmósfera que regía en la universidad: “La fuerza pública militarizó la Universidad” (1974), “El ejército asesinó a un estudiante de Ingeniería” (1976), “Heridos seis policías durante una protesta” (1976), “Explotó una bomba en el Departamento de Matemáticas” (1978), “Dos estudiantes sometidos a consejo de guerra” (1978), “Profesores condenaron la violencia en el interior del campus” (1978).

En 1979, se registra la primera acción abierta de un grupo guerrillero en la Universidad de Antioquia. Un comando del M-19, armado “con metralletas y carabinas”, se tomó uno de los edificios para repartir propaganda revolucionaria entre los estudiantes. La breve acción terminó antes de la llegada de la policía que en este momento tenía, bajo un denominado “Estatuto de seguridad” decretado el año anterior por el presidente Turbay, la facultad de realizar detenciones sin orden judicial. “Muchas personas eran desaparecidas por las autoridades, por el simple hecho de tener un libro de izquierda”, recuerda una exalumna que presenció la toma guerrillera. “Pese a que en los días posteriores las clases continuaron con normalidad, algunos estudiantes nunca regresaron” (Hacemos Memoria, s. f. d).

En los años ochenta, la violencia en la universidad alcanzó niveles extremos. El peor año fue 1987, cuando 16 miembros de la comunidad universitaria fueron asesinados; diez estudiantes y seis profesores –entre ellos el médico Héctor Abad, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, y Pedro Luis Valencia, senador de la república– perdieron la vida en este *annus horribilis* de la Universidad de Antioquia.²³ Pero, a pesar de que en los años siguientes hubo menos muertos, la confrontación entre grupos de extrema izquierda, fuerzas del Estado y grupos estudiantiles vinculados a organizaciones paramilitares de extrema derecha, continuaba. La línea de tiempo de Hacemos Memoria registra nuevos asesinatos,

²³ Durante años, en la Universidad de Antioquia se hablaba de 17 muertos en el 1987. Sin embargo, en 2022 Hacemos Memoria logró entrevistar a un exalumno que se tenía por muerto, pero en realidad sobrevivió un atentado y logro salir del país. Desde entonces vive en el exilio (Hacemos Memoria, 2022, septiembre 28).

secuestros, explosiones, paradas militares de grupos guerrilleros, disturbios instigados por estudiantes encapuchados y operativos policiales en la universidad.

La última muerte violenta de un estudiante en el tiempo estudiado aquí se registró a finales de 2019, año en que se vivieron fuertes convulsiones en Colombia. Un paro nacional convocado por movimientos sociales, sindicatos y estudiantes, entre otros, fue respondido con una brutal represión por las fuerzas estatales. En este contexto, un grupo de estudiantes lanzó petardos a la calle enfrente de la universidad. Un joven de 21 años, estudiante de Educación Física, murió cuando cayó al suelo y su mochila cargada de explosivos estalló.²⁴ En reacción a este trágico incidente, la universidad publicó una declaración en defensa de la vida de todas las personas, y jóvenes revolucionarios prendieron velas y lanzaron arengas. Por otro lado, en las redes digitales abundaron mensajes de odio que celebraban la muerte del joven. Hacemos Memoria respondió a la muerte del estudiante con una serie de videos publicados en redes digitales. En cada uno de ellos un miembro de la universidad recordó un hecho similar ocurrido en años anteriores para concluir con un llamado al fin de la violencia en las universidades. En su conjunto, estos testimonios despliegan una cadena tanto macabra como absurda de eventos en los cuales jóvenes estudiantes, algunos de ellos aún menores de edad, perdieron la vida o quedaron gravemente heridos manipulando explosivos en el marco de manifestaciones estudiantiles. ¿Es pertinente hablar de víctimas en estos casos? Lo cierto es que muchos factores pueden haber contribuido a estas muertes: la pobreza, perpetuada por un sistema político y económico basado en la desigualdad; entornos violentos a muchos niveles –en las familias, en la política, en los barrios populares, en los medios–; la falta de oportunidades de participación política y de una formación de sujetos democráticos en las familias, los colegios y hasta en las universidades. Sin embargo, ninguna de esas fallas sistémicas suspende la urgencia de señalar concretamente la responsabilidad de los actores políticos que promueven este tipo de acciones.

Es fácil perder la cuenta de la cantidad de grupos radicales que, a través de los años, han dejado sus huellas violentas en el campus de la Universidad de Antioquia. En las páginas de Hacemos Memoria se encuentran los principales grupos de la guerrilla de la extrema izquierda (FARC, ELN, EPL, M-19) y de los paramilitares de extrema derecha (AUC, Bloque Metro, Águilas

²⁴ En 2022, luego de un periodo de parálisis de las protestas debido a la pandemia de covid-19, una estudiante de la Universidad de Antioquia murió por causa de una explosión cuando preparaba petardos (El Colombiano, 2022, junio 9).

Negras), pero también grupos de menor incidencia, como el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), la Corriente de Renovación Socialista, las Autodefensas Universidad de Antioquia, el Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista, entre otros. Algunas de sus acciones fueron clandestinas, otras abiertas, buscando el máximo efecto propagandístico entre los estudiantes, por ejemplo cuando en 2008, “un grupo de personas armadas, vestidas con camuflados, capuchas y brazaletes de las FARC, hizo una parada militar en la plazoleta central de la Universidad” (Hacemos Memoria, s. f. f).

En una autorreflexión crítica, miembros de Hacemos Memoria evaluaron los alcances de su proyecto y las metodologías aplicadas, las líneas de tiempo entre ellas.

Habrán quienes puedan decir que se trata de una simple inscripción de hechos puestos de manera cronológica, que bien pudo ser realizada por cualquier periodista en una sala de prensa. No obstante, asumirlo de esta manera, sería desconocer que toda narración como toda memoria implica una selección, de recuerdos y olvidos, de rememoraciones dolorosas y acontecimientos memorables, de víctimas y victimarios [...] que en el caso de las líneas de tiempo aquí referidas ha sido realizada de manera participativa y concertada con los miembros de la comunidad, y ha sido pensada para llenar de sentido un pasado traumático. (Hernández, 2023, p. 106)

La línea de tiempo, por tanto, no solo es el producto de un proceso de construcción de memoria colectiva por miembros de una comunidad victimizada, sino también el punto de partida de nuevas investigaciones y de un debate abierto. Desde su publicación, se han realizado varios foros públicos, tanto en la universidad como en otros espacios, para discutir los resultados. En estos encuentros suelen aflorar recuerdos personales de miembros de la comunidad universitaria y también puntos de vistas diversos sobre cómo evaluar este pasado y presente de la violencia en la universidad. Uno de los temas que generan mayor debate es la cuestión de si la universidad debe solicitar, frente al Estado, el estatus de víctima colectiva, lo cual implicaría reclamar el derecho a reparaciones colectivas. Mientras algunos piensan que la cantidad y la duración de las acciones violentas de agencias del Estado en contra de la universidad pública no solo justifican esta medida sino que la hacen obligatoria, otros toman una posición algo más cautelosa. Así, por ejemplo, la

politóloga emérita de la Universidad de Antioquia María Teresa Uribe, una investigadora renombrada del conflicto armado, quien en entrevista con Hacemos Memoria manifestó que

la reparación colectiva debe esperar un tiempo, hasta que aclaremos, y hasta el fondo, qué pasó en la Universidad, qué nos compete como víctimas y victimarios. Porque la historia de la Universidad pública ha sido una historia de conflictos... y si queremos la verdad debemos empezar por nosotros mismos. (Hacemos Memoria, 2018, junio 14)

La última entrada de la línea de tiempo *50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia* documenta la creación de la Unidad Especial de Paz, la cual “busca acercar a la comunidad universitaria a los procesos de paz del Estado colombiano con los actores del conflicto armado, para hacer aportes desde la academia”.

Fue esta entidad, precisamente, la que produjo el segundo documento entregado por la Universidad de Antioquia a la Comisión de Verdad. El documento titulado “La violencia política y el conflicto armado en la Universidad de Antioquia 1958-2016: Aportes a la memoria y esclarecimiento de sus impactos y relaciones” permite una mirada interesante a cómo operaban estos grupos afines a la lucha armada dentro de la institución (Gómez, 2021). Su elaboración estuvo a cargo de un grupo interdisciplinar de profesores y estudiantes de esta universidad, bajo la coordinación del filósofo Juan Guillermo Gómez. El objetivo del trabajo se resume en la siguiente expresión: “Como comunidad universitaria, debemos rechazar la institucionalización solapada del olvido y crear un antídoto contra la ‘cólera pública’ que devora nuestra nación” (Gómez, 2021, p. 3). Este supuesto antídoto consiste, como se verá, en una representación parcial de los acontecimientos violentos de la temporada referida. Pues, el punto de vista que se elige es el de los grupos guerrilleros que hicieron presencia en la universidad, o el de los estudiantes y profesores de la izquierda revolucionaria, cercanos a los anteriores.

Las fuentes principales utilizadas allí son entrevistas y grupos focales realizados con militantes de grupos radicales de izquierda que tuvieron presencia en la Universidad de Antioquia, personas que se encontraban “generalmente en funciones de dirección política y militar dentro de la organización FARC-EP”. Otra fuente consultada son profesores y estudiantes o exalumnos de la universidad que presenciaron algunos de los hechos violentos referidos en el informe. El tercer conjunto de materiales utilizados consiste en reportes de la prensa noticiosa, en particular, aquellas

notas de prensa extraídas de la hemeroteca universitaria y puestas a la disposición del público por el proyecto Hacemos Memoria.

En síntesis, el informe presentado por la Unidad Especial de Paz logra determinar 323 hechos victimizantes que afectaron a la comunidad universitaria en las seis décadas que constituyen el marco de la investigación. La atribución de estos hechos, en la medida que su autoría se ha podido aclarar, lleva a los autores a una conclusión contundente:

el actor de mayor afectación contra la población universitaria ha sido la Fuerza Pública, ya sean estos miembros del Ejército, la Policía, ESMAD; agentes secretos (DAS, B2), a través de las detenciones ilegales, lesiones físicas, homicidios, desapariciones forzadas, uso de gases lacrimógenos, etc. (Gómez, 2021, p. 132)

En el fondo –esta es la tónica del texto– el origen de la violencia que ha afectado a la comunidad universitaria y la sigue afectando, aunque en menor medida, yace en la intransigente persecución de cualquier expresión crítica por parte del sistema político vigente –en el texto se aplica el término “régimen político colombiano”, poniendo en tela de juicio la legitimidad del Gobierno–. Esta perspectiva se profundiza en la segunda parte del informe, centrada en el actuar de lo que se denomina el “bloque de poder contrainsurgente” en la universidad. Este término acuñado por una politóloga de la Universidad de Antioquia se refiere a la coalición de fuerzas políticas, económicas y militares que se ha forjado en el marco de las estrategias contrainsurgentes propulsadas por los Estados Unidos en toda la región, y cuyo principal propósito es la inclemente represión –con medios legales o ilegales– de los movimientos revolucionarios (Franco Restrepo, 2009). Es este conglomerado de fuerzas que es responsabilizado de la estigmatización y de la consecutiva violencia contra las universidades públicas porque

han sido señaladas como enemigos internos, y podemos afirmar, en la lógica de la transicionalidad, y en el caso de la Universidad de Antioquia, que, por el carácter sistemático de las agresiones recibidas, el Alma Mater debe ser declarada como sujeto colectivo de reparación. (Gómez, 2021, p. 134)

Al mismo tiempo, el informe presenta relatos testimoniales sobre la actuación y las estrategias de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN dentro de la universidad. Estas no dejan lugar a dudas sobre la intención de los comandantes de estas organizaciones de utilizar las universidades públicas como campo de reclutamiento y capacitación para la guerra. Así, por ejemplo, jóvenes guerrilleros fueron enviados de zonas rurales a la universidad para recibir formación y retornar fortalecidos al grupo armado:

Todos los frentes rurales de Antioquia tenían gente estudiante en la universidad y algunos frentes del sur del país y la región Caribe. No eran muchos, eran uno o dos por frente si mucho y nunca se cruzaban entre ellos o hacían trabajo en la universidad, su misión era estudiar y regresar. (Gómez, 2021, p. 22)

El relato de un exguerrillero entrevistado para el informe revela una estrategia cínica de reclutamiento que no solo se dirigía a estudiantes universitarios sino también a un grupo aún más vulnerable: niños de familias de bajos recursos educados en escuelas públicas como el Liceo Antioqueño que formaba parte de la universidad.

La izquierda armada tenía sus escuelas de reproducción. Eran las coronas en donde había que meterle mucha influencia, porque allí salían los futuros combatientes. [Primero] porque esos tres colegios eran buenos colegios públicos, segundo [porque en ellos estudiaba] gente de los sectores populares, o sea estratos 1 al 3. Ahí no había [estudiantes] de otros estratos. (Gómez, 2021, p. 28)

Lo notable es que el informe relata estos hechos sin calificarlos, como si de alguna manera se justificaran en el contexto de la guerra insurgente. Aún más significativa es la omisión de un hecho particularmente cruel y traumatizante: en 1982 un comando armado del ELN entró al Liceo Antioqueño y, en un juicio al instante, sentenció a muerte al profesor Diego Roldán, por supuestas actividades antirrevolucionarias. La ejecución se efectúa con seis disparos, en frente de cuarenta niños que asistían a su clase de biología; un caso que ha quedado en la impunidad.²⁵ Un niño que

²⁵ No se trata de un hecho aislado. Siete meses después de asesinar al profesor Roldán, el ELN acribilló el rector de otro liceo en Medellín en presencia de dos empleados (Hacemos Memoria, s. f. b).

presenció desde afuera el ingreso de los armados al salón de clase relató en indagatoria que “dijeron que pertenecían al ELN y que iban a matar a don Diego dizque por venganzas, que estaban celebrando el aniversario de la muerte de un Camilo que no sé el apellido” (Hacemos Memoria, s. f. e). Este crimen cometido en honor al difunto cura guerrillero no encuentra mención en el informe. Al parecer, lo que entra en juego aquí es lo que Koselleck (2011) llama la memoria negativa, aquella memoria que no se puede apoyar en alguna idea de justicia, porque la crueldad y lo absurdo de los hechos (Koselleck se refiere a los crímenes de los nazis) niega cualquier fundación del recuerdo en un sentido, mucho menos en la justicia, y por tanto es obviada. Algo de esto debe haber intuido el coordinador del trabajo al escribir en su introducción que “Las lagunas de este Informe son, como ya advertimos, enormes, y llegarán a hacerse cada vez más visibles en tanto que tengamos más lectores críticos. Son estos lectores los que precisamos, los que precisa nuestra comunidad universitaria (y el país)” (Gómez, 2021, p. 3). Ahora bien, estas lagunas se pueden considerar sintomáticas, pues con ellas no solo se borra la memoria incómoda de hechos injustificables, sino que se evita también el reconocimiento de las víctimas. Entrevistado por Hacemos Memoria, Miguel Roldán, hijo del profesor asesinado hace manifiesto el sentimiento de ser olvidado como víctima: “Nunca nos dijeron: ‘Miren hay tales personas capturadas por el hecho’. Nunca más se supo nada. Todo con el tiempo se fue borrando y la Universidad, también con el tiempo, fue olvidando” (Hacemos Memoria, s. f. e).

En otro estudio sobre la violencia en la Universidad Nacional, la principal universidad pública de Colombia, el autor llega a la conclusión de que las formas violentas de la lucha revolucionaria en las universidades públicas, fundamentadas en una postura autoritaria de pequeños grupos de estudiantes dogmáticos, cerraron durante años toda posibilidad de crear espacios civiles en la universidad, donde el libre intercambio de diferentes puntos de vista hubiese podido producir propuestas creativas para solucionar los problemas que afligían la universidad y el país (Rudas, 2021). Junto con la memoria de las víctimas, la reconstrucción de estos espacios civiles parece ser una de las tareas más urgentes para las universidades públicas en el futuro próximo. Ambas cosas todavía se confrontan con obstáculos y miedos, algunas veces fundados en memorias negativas, otras veces en amenazas reales de actores violentos todavía presentes en la universidad. Y a pesar de las discusiones iniciadas por Hacemos Memoria, la Unidad de Paz, la Comisión de Verdad y otras entidades dentro y fuera de la universidad, se siguen presentando actos de violencia simbólica en negación de la memoria de las víctimas, como fue el caso reciente cuando

un funcionario de la universidad borró con pintura gris un mural conmemorativo pintado por familiares de víctimas del conflicto armado en la Universidad de Antioquia (González, Nieto y Arenas, 2022, julio 23).

Desde 2018, el proyecto Hacemos Memoria ofrece un “recorrido de la memoria” por el campus central de la Universidad de Antioquia. Las personas que participan en este tour guiado visitan los sitios que llevan alguna inscripción conmemorativa del conflicto armado en la universidad: murales, placas, estatuas. En cada sitio reciben una explicación sobre la persona o el hecho referenciado; en algunos lugares existe además la oportunidad de dialogar con personas que participaron en los acontecimientos conmemorados, o fueron testigos, o víctimas. Esta metodología abre y amplía el concepto de medio como portador de la memoria. Existe un notable contraste con otros soportes de la memoria, los cuales sirven primordialmente para la transmisión de textos e imágenes, como el libro, el periódico, la radio y la televisión, o páginas en internet. Si bien el uso de estos medios siempre ocurre en un contexto espacial cargado de simbolismo –el entorno donde se encuentra el usuario: la biblioteca, el metro, la sala de la casa–, el recorrido de la memoria permite una experiencia que intencionalmente se dirige a todos los sentidos de la percepción. Se trata de la lectura de un territorio marcado por las huellas de la violencia. Pero aquí, la apropiación de la memoria no es solo lectura y diálogo, es también un acto físico. “Caminar la palabra” es una expresión frecuentemente utilizada por los pueblos indígenas de Colombia para dar cuenta de que el pensamiento y la comunicación en ningún momento están separados del entorno, de lo que la cultura occidental suele apartar como naturaleza (en el capítulo 5 se ampliará el concepto de la *comunicación propia indígena*). Si en el presente caso variamos el concepto y llamamos *caminar la memoria* lo que ocurre en los recorridos por el campus universitario, no se trata de una metáfora, pues ahí el acto de caminar constituye una parte esencial de la formación de memoria. El espacio del campus con sus diversas inscripciones es el medio que está siendo apropiado por la comunidad victimizada para comprender y narrar lo que pasó. No sería raro, dicho sea de paso, que las personas que participan en uno de los recorridos sean alcanzadas por el conflicto, que la memoria se vuelva una vez más una experiencia del presente, por ejemplo, si de repente aparece un grupo de estudiantes encapuchados tirando petardos o si el campus tiene que ser evacuado ante una inminente ocupación del espacio por la fuerza pública.

Los recorridos de la memoria, como una de las metodologías aplicadas por Hacemos Memoria con el fin de propiciar el diálogo sobre el conflicto armado centrado en sus víctimas, se

inserta, como hemos visto, en un programa más amplio, en el que los recursos del periodismo y de los medios de comunicación se juntan con conceptos pedagógicos y la intervención social. Todas estas estrategias y actividades están orientadas a posibilitar la participación de víctimas en el debate público y en la construcción de memoria colectiva. Falta mencionar, para terminar la descripción del proyecto Hacemos Memoria, los programas de docencia mediante los cuales el proyecto incide en la formación de futuros periodistas y de otros actores de la sociedad civil. Así, por ejemplo, se han desarrollado módulos sobre la memoria histórica que ahora forman parte de los programas de pregrado y maestría en periodismo. Adicionalmente, se está proyectando un programa de especialización sobre periodismo y memoria. Para poder responder al interés de formación de personas que no están cursando una carrera universitaria, el proyecto ha creado un Diploma en Memoria Histórica. El programa se ha ofrecido tanto de forma presencial como en una plataforma de aprendizaje digital, de tal manera que ha podido alcanzar públicos locales, nacionales e incluso internacionales.

Hasta este punto, en nuestro resumen del origen y de las actividades del proyecto Hacemos Memoria, ya hemos podido distinguir algunas pautas características de este proceso de formación de memoria colectiva. Por un lado, se observa una confluencia de intereses y acciones de distintas instituciones y organizaciones en un contexto particular político e histórico del país. El acontecimiento central, de orden político-simbólico es la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Se inicia una transformación social, recibida eufóricamente por algunos, con escepticismo por otros, y con temor y rechazo por muchos. Múltiples y controvertidas memorias son activadas; una gran gama de actores –entidades del Estado, ONG de derechos humanos, medios, universidades, la cooperación internacional– fomentan el debate alrededor de la memoria. Por otro lado, las motivaciones de las personas que gestionan un proyecto que busca un enfoque particular de memoria, el de los periodistas y del periodismo en diálogo con las víctimas del conflicto armado: cerciorarse como profesionales a quienes corresponde crear narraciones de que permitan a la sociedad comprender la actualidad como resultado de acciones en el pasado, confrontar traumas personales sufridos por haber crecido en un mundo de vida violento y por la experiencia de ejercer el periodismo en la guerra; y la motivación política de contribuir mediante el periodismo en diálogo con las víctimas a esta transformación social en curso.

El instrumento central que provee registro de este diálogo es la plataforma digital hacemosmemoria.org donde se publican de manera constante artículos periodísticos sobre temas

relacionados con el proceso de paz y la construcción de la memoria del conflicto armado. Más de 650 textos se han publicado en la temporada que aquí se estudia, en los cuatro años de 2016 a 2019. Con ello, Hacemos Memoria se ha convertido en una fuente regularmente consultada por personas e instituciones interesadas en el periodismo sobre la memoria histórica y los derechos humanos. Es procedente, por tanto, revisar este cuerpo de textos desde la perspectiva y con la pregunta que orienta esta tesis, es decir: tratar de identificar si este medio –el portal digital Hacemos Memoria– ha sido apropiado por víctimas del conflicto armado, si ha podido contribuir a un empoderamiento de estas, y qué expresiones textuales sirven como indicadores para ello.

1.3 Aportes de las víctimas a la memoria colectiva: textos del portal Hacemos Memoria

Cuando se trata de extraer significado de un texto, se pueden emplear distintas metodologías, unas más centradas en estructuras y fenómenos medibles –por ejemplo, la cantidad de ocurrencia de ciertas palabras en relación con otras–, otras más en la interpretación semántica. Se pueden examinar los impactos del lenguaje sobre el comportamiento de otros (actos de hablar; Austin, Searle), el uso de recursos lingüísticos como capital simbólico (Bourdieu), y los flujos del poder mediante el análisis de discurso foucaultiano (Wodak, van Dijk, Jäger). La teoría fundamentada (Strauss, Corbin) provee una metodología para interrogar textos con una serie de conceptos extraídos de los mismos en distintos niveles de abstracción, con el objetivo de llegar a la construcción de teorías a partir de material etnográfico. Aparte de estas técnicas más artesanales, por llamarlas de alguna manera, el desarrollo de instrumentos digitales ha permitido el análisis de grandes conglomerados de texto con algoritmos (*data mining*, *text mining*), una práctica ampliamente empleada para rastrear pautas de comportamiento de los usuarios de redes digitales con fines comerciales y políticos. Al momento de elegir las herramientas apropiadas, la pregunta clave, por supuesto, es qué se está buscando en los textos que se pretende analizar.

De acuerdo con los objetivos formulados al inicio del presente trabajo, aquí se trata de identificar prácticas dirigidas a la construcción de consenso acerca de los hechos violentos; prácticas en las cuales las personas y comunidades afectadas por esa violencia juegan un papel activo, protagónico. Como hemos visto, estas prácticas en el caso de Hacemos Memoria se gestionan en tres ámbitos de la comunicación: la pedagogía, el diálogo público y el periodismo. En los apartados anteriores nos concentramos en la creación e implementación de procesos formativos

y de diálogo y cocreación con distintas comunidades afectadas por la violencia. En lo que sigue se examinarán los textos publicados por Hacemos Memoria como producto de la práctica más elemental del proyecto, es decir, la investigación y redacción de relatos en el formato del periodismo. Con todo, la práctica del periodismo es la que le otorga identidad al empeño del proyecto por construir memoria colectiva y sus múltiples actividades en el ámbito de la formación y el diálogo público son informadas por ella.

Para poder dar cuenta del grado en que este cuerpo de textos puede ser considerado como una forma de mediatizar las memorias y las reivindicaciones de las personas victimizadas, el análisis debe, por tanto, considerar al menos tres niveles de representación: primero, las enunciaciones directas hechas por víctimas de la violencia como autoras o coautoras de los textos. Segundo, su presencia en los textos como personas entrevistadas –como autoras de su propio testimonio en diálogo con otro (el periodista)–. Y, en un tercer nivel, como sujeto (protagonista) de la narración del otro (periodista); la narración, en este caso se centra en gran medida en el testimonio, lo cual quiere decir que la autoría de la víctima está algo más retirada, pero igualmente presente, ocupando incluso un lugar central en el relato.

Procederé con el análisis en tres pasos: primero aplicaré una metodología digital, basada en la llamada inteligencia artificial, conocida como *structural topic modelling* (modelado de tópicos estructurales). Este instrumento permitirá, como punto de partida para la interpretación, identificar ciertas pautas semánticas en el cuerpo de textos. Se espera que de esta manera se puedan formular preguntas para, en el segundo paso, someter los textos a un análisis más intensivo. Para ello, se seleccionarán del conjunto total de textos publicados entre 2016 y 2019 aquellos que representan de alguna forma u otra una perspectiva de las víctimas. Una vez más, se tratará de reconocer pautas, por ejemplo, de los contextos en que se realizan las enunciaciones, temas recurrentes, características de lenguaje. Lo que interesa es, sobre todo, saber en qué medida las víctimas del conflicto armado logran articular sus aportes a la memoria colectiva a través de un medio como Hacemos Memoria.

1.3.1 La probabilidad de ciertos tópicos

El crecimiento exponencial de la disponibilidad de textos digitalizados en internet ha producido grandes desafíos, pues el enorme volumen de la información desborda cualquier

capacidad humana en su procesamiento. Al mismo tiempo la llamada inteligencia artificial ofrece nuevas posibilidades para identificar de forma automatizada sentidos en un universo de comunicación cada vez más complejo. El modelado de tópicos estructurales es una metodología basada en el uso de algoritmos con el fin de descubrir estructuras semánticas en grandes cuerpos de texto, por ejemplo, bibliotecas digitales, ediciones completas de revistas, cables de agencias noticiosas, conversaciones en redes digitales como Twitter, etc. (Blei, 2012; Grajzl y Murrell, 2019; Roberts, Stewart y Airoidi, 2016; Rosati, 2022).²⁶ La utilidad del modelado de tópicos para las ciencias sociales es que permite, a través del cálculo probabilístico de la distribución de palabras, identificar la probabilidad de la ocurrencia de conjuntos de palabras. La inclusión de variables adicionales (por ejemplo, año de publicación, autor) hace posible observar variaciones en la probable ocurrencia de los tópicos. De esta manera se puede realizar un análisis semántico de grandes volúmenes de texto sin tener que recurrir a la codificación manual.

Si bien en el caso del presente estudio el volumen de los textos publicados por Hacemos Memoria no es tan grande como para excluir categóricamente la revisión manual de cada uno de ellos (644 textos, 755 000 palabras), he optado por aplicar el modelado de tópicos en una primera fase del análisis para poder identificar conjuntos de sentido que puedan servir como punto de partida de un trabajo hermenéutico. Para ello, el modelamiento se realizó en dos variantes. En la primera se buscaron 30 tópicos consistentes de 5 palabras cada uno; en la segunda versión se redujo el número de tópicos a 10 y se aumentó el número de palabras a 7 por cada tópico, entendiendo que un mayor número de tópicos produce una mayor coherencia entre las palabras de cada tópico (mayor similitud semántica de las palabras), mientras un número reducido conduce a tópicos compuestos de palabras de mayor relevancia (en el contexto del corpus total de textos). De antemano, el programa elimina palabras consideradas de poco valor semántico (las llamadas *stop words*, como de, a, y, con, etc.).

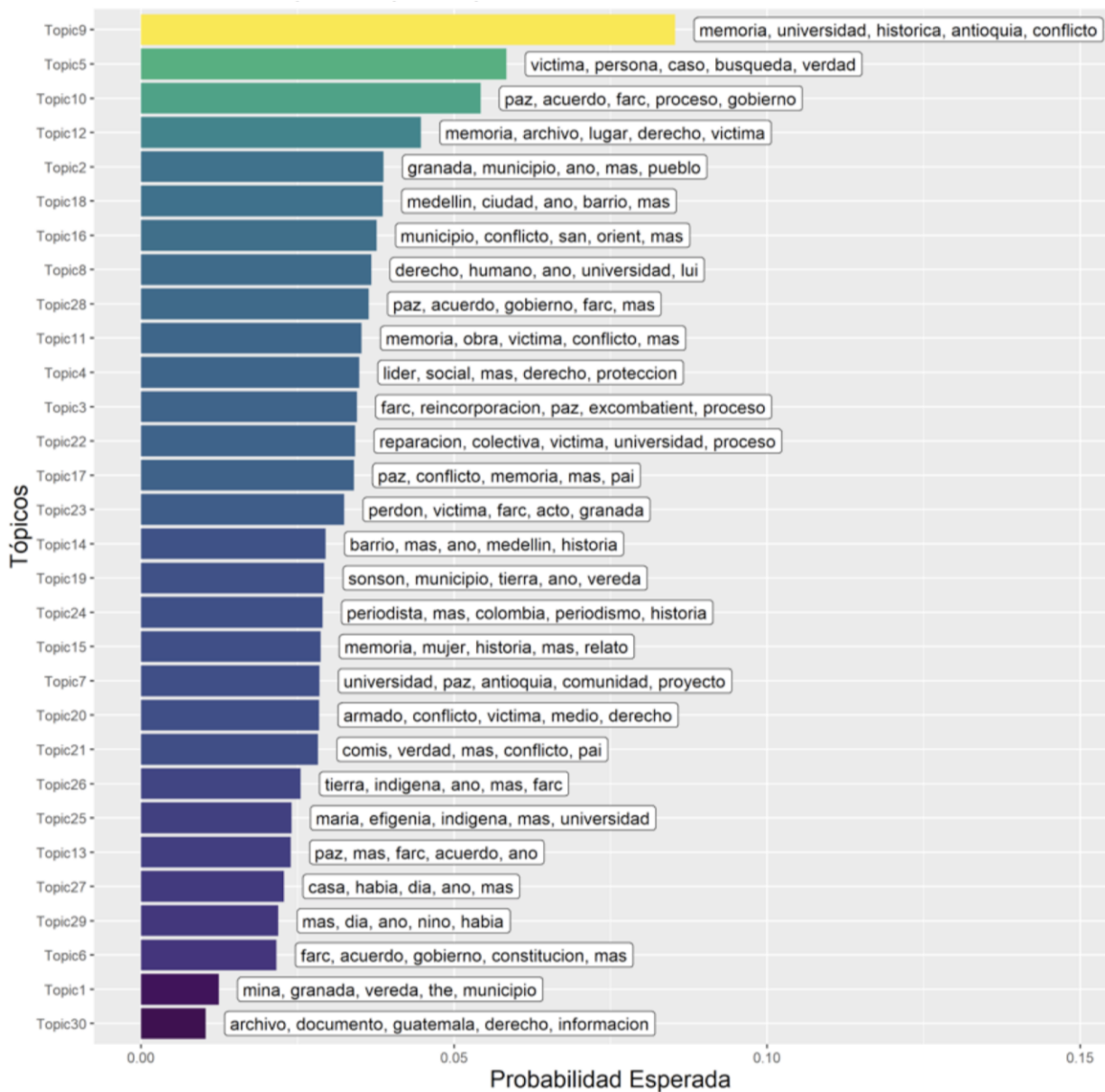
²⁶ Agradezco a Carlos Rodríguez Sickert, director del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo, Chile, por la introducción al modelado de tópicos, y a Ignacio Toledo Román por el apoyo técnico en la aplicación de la metodología a la presente investigación.

Figura 1

Modelo a) 10 tópicos, 7 palabras



Figura 2
Modelo b) 30 tópicos, 5 palabras



En la comparación de las dos tablas previas (figuras 1 y 2) de tópicos es notable, a primera vista, la congruencia del tópico que se espera con mayor probabilidad. En ambos modelos las palabras “memoria”, “universidad”, “histórica”, “Antioquia” y “conflicto” conforman el tópico de lejos más probable; en el modelo de siete palabras se suman “historia”, que prácticamente se puede considerar redundante, y “armado”, que generalmente aparece como parte del concepto “conflicto armado”. Ahora bien, si este resultado tal vez no parece sorprendente y se podría decir simplemente

que los algoritmos hicieron su trabajo bien, pues de manera intuitiva se podría llegar a la conclusión de que este conjunto de palabras representa la esencia del proyecto Hacemos Memoria, la clara preponderancia de este tópico en ambos modelos, tanto en el que da mayor énfasis a la coherencia como en el que pondera la relevancia de las palabras, es reveladora: contiene el sujeto (la Universidad), su ubicación (Antioquia), la actividad (construir memoria histórica) y el contexto, o el objeto de esta actividad (el conflicto armado). En otras palabras, este tópico, estadísticamente el más representativo del corpus de texto, enuncia de manera transversal quién habla, desde dónde y sobre qué.

Es igualmente revelador, para los fines de este estudio, que una palabra cuya presencia en el lugar de la mayor probabilidad, uno podría esperar esté ausente en este primer y más probable tópico, es decir, la palabra víctima. Con esto, uno se podría arriesgar a deducir que en el centro de la narración del portal Hacemos Memoria están los esfuerzos de la Universidad de Antioquia por construir la memoria del conflicto armado y que las víctimas no ocupan el primer lugar, a menos que se considere –con buenos argumentos disponibles, como se pudo ver más arriba– a la comunidad universitaria como víctima colectiva. Sin embargo, el segundo tópico de mayor probabilidad –otra vez en congruencia entre los dos modelos– contiene la palabra víctima en conjunto con las palabras “persona”, “verdad” y “caso”. Además, están las palabras “reparación”, “año” y “conflicto” en el modelo de mayor relevancia, y “búsqueda” en el de mayor relevancia. La cercanía de las palabras “víctima” y “persona”, por un lado, parece señalar que en el conjunto de los textos las víctimas del conflicto armado son percibidas como individuos, como “casos” jurídicos. La relevancia de “verdad” en este tópico significa, por otro lado, que la demanda de las víctimas por la verdad ocupa un lugar central en los textos. Y es ahí donde se plasma, de forma implícita pero innegable, el vínculo entre los periodistas de Hacemos Memoria y las víctimas del conflicto armado: a los periodistas les corresponde la tarea social de descubrir y publicar la verdad que es esencial para que las personas victimizadas puedan recuperar su lugar en la sociedad.

Mientras en el modelo de 10 tópicos la palabra “víctima” se registra solo una vez, en la versión de 30 tópicos, “víctima” aparece en seis conjuntos de palabras diferentes:

- víctima, persona, caso, búsqueda, verdad
- memoria, archivo, lugar, derecho, víctima
- memoria, obra, víctima, conflicto, mas

- reparación, colectiva, víctima, universidad, proceso
- perdón, víctima, farc, acto, granada
- armado, conflicto, víctima, medio, derecho

Cada uno de estos tópicos coloca el sujeto de víctima en otro contexto y representa, de esta manera, diferentes matices del significado social del concepto de víctima. Así podemos ver a la víctima representada consecutivamente en relación con la búsqueda de verdad, con la memoria y los archivos, con la obra (de arte), como sujeto en proceso de reparación colectiva en el caso de la universidad, en el contexto de un acto de perdón realizado por las FARC en Granada y en relación con el conflicto armado, el derecho y los medios. Si el modelo de 30 tópicos (de mayor coherencia) nos permite ver la condición de víctima en distintas facetas, el modelo de 10 tópicos (de mayor relevancia) aplicado al mismo cuerpo de textos nos arroja un solo tópico que incluye la palabra víctima (víctima, persona, verdad, caso, reparación, año, conflicto), y se puede asumir que, como la probabilidad de su ocurrencia es relativamente alta, este tópico esté relacionado con una variedad de textos que cubren la temática de las víctimas de distintas maneras. Efectivamente, encontramos 24 textos (de 640) con una probabilidad mayor a 0.9 (cuando 1.0 significa coincidencia total) de que este tópico tenga relevancia. Los títulos son los siguientes:

1. ¿Cuál es el plan para buscar los desaparecidos en Medellín? 20.09.2016
2. Desaparecidos de Medellín y Antioquia, con espacio en la JEP. 06.03.2019
3. “La bomba en Granada no se puede reivindicar como un acto revolucionario”: Juan Prometeo. 23.09.2017
4. Granada: ¡Nunca más! 22.09.2017
5. Una búsqueda que va del Universal a toda Antioquia. 02.10.2018
6. La Esperanza retomó el proceso de la reparación colectiva. 08.07.2018
7. La impunidad continúa tras 15 años de la Operación Orión. 18.10.2017
8. Tres mujeres mantienen viva La Esperanza. 15.12.2018
9. No hay avances en la búsqueda de los desaparecidos de Granada. 23.09.2018
10. ¿Qué le exigen las víctimas a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas? 05.09.2017
11. Dabeiba honra a las víctimas del paramilitarismo. 02.05.2017
12. Sí a la paz, pero sin desaparecidos. 30.10.2016

13. La desaparición, un crimen invisible cuya impunidad es alarmante. 29.08.2019
14. De La Escombrera aún no salen los desaparecidos. 07.09.2018
15. Inició la búsqueda de cerca de 20 mil desaparecidos en Antioquia. 19.06.2019
16. Organizaciones sociales denunciaron desapariciones forzadas ante la CIDH. 14.02.2019
17. Hidroituango, ¿inundar la memoria? 05.12.2017
18. Granada: Una historia de dolor y resistencia. 01.11.2016
19. La Unidad de Investigación de la JEP avanza en casos de violencia sexual. 21.07.2019
20. A un paso de firmarse el primer plan de reparación colectiva de los sectores LGBT del país. 18.04.2019
21. Bojayá, Cali y Apartadó: ¿Qué ha pasado desde que las Farc pidieron perdón? 23.09.2017
22. Magistrados de la JEP escucharon a las organizaciones sociales de Antioquia. 19.06.2018
23. Reparación simbólica: un compromiso que va más allá de los monumentos. 09.05.2017
24. Las violaciones a los derechos reproductivos en las Farc. 16.10.2019

La distribución de estas publicaciones es más o menos pareja: 8 artículos en 2017, 6 en 2018 y 7 en 2019; en el primer año, 2016, el tópico es menos frecuente y aparece solo en 3 artículos. Es notable que 9 de estos 24 artículos con mayor probabilidad del tópico de víctimas llevan la palabra desaparición o desaparecidos en el título, lo cual puede significar que esta forma de victimización ha sido tratada con mayor énfasis en el portal Hacemos Memoria. Hay que señalar, sin embargo, que la presencia del concepto de víctima no está de ninguna manera limitado a los 24 artículos mencionados, al contrario: la palabra víctima se encuentra en 415 de los 644 textos, o sea en casi dos tercios de ellos.

1.3.2 Presencia de las víctimas en los textos

Hasta ahí este primer rastreo por conjuntos de significado en el cuerpo de textos con ayuda de la computación. El ejercicio evidencia que en el trabajo periodístico de Hacemos Memoria la memoria histórica está en primer lugar vinculada con la institución desde la cual el proyecto opera, la Universidad de Antioquia. Las víctimas individuales, como personas victimizadas por la violencia, y particularmente por la modalidad de desaparición forzada, ocupan el segundo lugar, el lugar del otro con el que el proyecto busca dialogar y por cuyos derechos aboga; por el derecho a saber la verdad, primordialmente.

Entremos ahora en la segunda fase de la interpretación y busquemos con más profundidad las huellas que las víctimas del conflicto armado han dejado en las narrativas de Hacemos Memoria, en particular, sus contribuciones a la construcción de memoria.

La lectura de los textos, ya sin la ayuda de los algoritmos, permite distinguir distintos formatos periodísticos (entrevista, reporte noticioso, informe, crónica), así como una serie de temas que se tratan de forma recurrente (el proceso de paz, las políticas de la memoria, iniciativas de memoria en comunidades rurales, el arte como medio de la memoria, la violencia en la Universidad de Antioquia, entre otros). También pone al descubierto las limitaciones de la inteligencia artificial, pues uno de los textos que con menos probabilidad corresponde al tópico de víctimas (víctima, persona, verdad, caso, reparación, año, conflicto) es la historia de Efigenia Vásquez, una comunicadora indígena del pueblo Kokonuko que murió a causa de un disparo con arma de fuego en una confrontación de comuneros indígenas con la policía antidisturbios ESMAD, en 2017. ¿Cómo es posible que el algoritmo ignore un caso tan evidente de victimización? Una posible respuesta es que el artículo cayó por la rejilla de los conceptos debido a un sesgo cultural, pues en los pueblos indígenas del suroccidente de Colombia, altamente politizados e inmersos en procesos de reivindicación étnica, la muerte violenta se suele asociar con el concepto de resistencia más que con el de victimización. En efecto, la palabra víctima aparece una sola vez, en la entradilla del texto. Por lo demás, el artículo dibuja el retrato de una mujer campesina indígena que luchaba por la propiedad de las tierras comunales (“una comunera en defensa de los pueblos originarios y la recuperación de la madre tierra”) y del derecho a la comunicación. Las personas entrevistadas para el artículo, comuneros indígenas y familiares de Efigenia, la recuerdan por su actividad política

en las mingas, en los congresos, en las protestas, en todas las actividades organizativas y comunitarias, ahí, dispuesta a trabajar en colectivo y, sobre todo, capaz de comunicar su propia lucha, la misma que heredó de su padre y de los ancestros del pueblo Kokonuco. (Otálvaro, 2017, octubre 18)

En total se publicaron 8 artículos relacionados al caso de Efigenia Vásquez en Hacemos Memoria. Vamos a retomar este tema en el capítulo 3 donde se analizarán las narrativas sobre este acontecimiento desde la perspectiva de los medios indígenas.

Volvamos, por el momento, a dirigir la mirada al tópico de las víctimas y examinemos el artículo que, según la metodología del modelamiento estructural, más probabilidad de congruencia muestra. El trabajo publicado en 2016 titulado “¿Cuál es el plan para buscar los desaparecidos en Medellín?” (Castañeda Arboleda, 2016, septiembre 20) trata de las reivindicaciones de los familiares de las víctimas de desaparición forzada quienes demandan una mayor eficiencia y celeridad de las instituciones del Estado en la búsqueda e identificación de los muertos. Concretamente, se mencionan tres temas en el artículo: primero, el desorden en los cementerios donde durante muchos años muertos no identificados fueron enterrados en fosas comunes como N. N., sin que se llevase un registro estructurado de estos entierros; segundo, la necesidad de coordinar las diferentes agencias territoriales del Estado para poder asegurar una búsqueda más eficiente de las personas desaparecidas; y tercero, la demanda de las víctimas hacia la Alcaldía de Medellín para retomar la búsqueda de cuerpos –interrumpida porque no se habían encontrado restos humanos– en La Escombrera, un vertedero de desechos de construcción donde los diferentes actores del conflicto armado depositaron a sus víctimas. La historia tiene cinco protagonistas: Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía; Gustavo Duque, coordinador de la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía en Antioquia; Martha Soto, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado; José López, administrador del Cementerio Universal, y Kevin Mejía, director regional del Instituto Nacional de Medicina Legal. El texto comienza con un relato de exhumaciones que se estaban realizando en el Cementerio Universal de Medellín, la noticia que dio ocasión a este reportaje. Las primeras dos personas mencionadas son el subsecretario de Derechos Humanos y el funcionario de la Fiscalía. Solo en el tercer lugar aparece la representante de las víctimas, Martha Soto. Ella afirma que fueron las familiares de las víctimas quienes identificaron el cementerio como lugar donde se pudieran encontrar los restos de los desaparecidos y que, a pesar de ello, las autoridades no les proporcionaron información sobre los procedimientos de exhumación. También denuncia el descuido de las instituciones con los cuerpos no identificados, pero admite que la situación está mejorando: “A los NN los tiraban en cualquier lado y a nadie le importaba. Eso sucedió hasta hace muy poco. Uno espera que eso no vuelva a pasar”. A continuación, el fiscal confirma que “en todos los cementerios del país no les dan un manejo adecuado a los restos NN”. El administrador del cementerio, por el contrario, resalta los cambios positivos, sosteniendo que en la actualidad se les da prioridad a los NN y que “tenemos todo un protocolo de marcación de los cuerpos y las tumbas que se registran en un sistema de

información”. Las nuevas exhumaciones se presentan como parte de un “Plan integral de búsqueda de personas desaparecidas”, pero la coordinación de las instituciones que lo deben ejecutar es deficiente. Lo comprueba el testimonio del director del Instituto de Medicina Legal, quien “no sabe cuál es el objetivo de la intervención en el cementerio”. La representante de víctimas, por su parte, critica que la administración municipal ha construido el plan sin participación de las víctimas, una afirmación que enseguida es desmentida por el subsecretario: “Las víctimas nos han hecho sugerencias, hemos debatido. Incluso, todavía estamos en esa construcción colectiva”. Finalmente, se toca el tema de la búsqueda interrumpida de cuerpos de personas desaparecidas en La Escombrera. Una primera iniciativa que se había realizado el año anterior no había dado resultado. Ahora el representante de la Fiscalía manifiesta que espera luz verde de la Alcaldía para retomar el trabajo. También dice que se necesita más información de “personas que estuvieron en esa época en el territorio y familiares de las personas desaparecidas. De esta forma, tendremos mayor certeza”. En el último párrafo del texto, el autor resume que “las víctimas pierden las esperanzas de encontrar a sus seres queridos”, pero

no dejan de exigir a las instituciones del Estado que continúen con sus obligaciones legales, que lo hagan de manera articulada y que valoren la experiencia que ellas han acumulado después de años de buscar a sus familiares en cementerios, ríos y fosas comunes.

Examinemos, entonces, el lugar de las víctimas en esta historia. El texto entero gira entorno de un sujeto colectivo ausente: las personas desaparecidas. Y si bien algunas de ellas emergen en el relato cuando este reporta que se encontraron 20 cuerpos de personas registradas como desaparecidas, en el texto ellas mantienen su anonimato, pues no se mencionan sus nombres y de esta manera conservan su condición de ausentes.

Martha Soto, la vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, asume la representación (en el sentido literal: hacer presente algo que ya no lo es) de los desaparecidos. Su historia personal —el hermano de Martha, Jorge Soto, un militante de la Unión Patriótica, fue desaparecido en 1985— no se tematiza en este artículo. El papel de Martha en la construcción del relato es personificar una institución: la organización de víctimas. Es en esta función, y no por su condición propia de víctima, que sus enunciados están puestos en relación con aquellos de los representantes de otras instituciones (la Alcaldía, la Fiscalía, el cementerio, el Instituto de Medicina

Legal). Desde su posición como vocera del colectivo de víctimas, ella lanza una serie de críticas contra estas instituciones, alegando que actúan de forma poco coordinada y sin tomar lo suficiente en consideración a las víctimas.

El segundo texto identificado como altamente congruente con el tópico de víctimas es de 2019 y trata nuevamente el tema de los desaparecidos en Medellín y Antioquia.²⁷ En los tres años que pasaron desde el artículo anterior, el marco institucional ha cambiado radicalmente, como producto del Acuerdo de Paz y con la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El texto titulado “Desaparecidos de Medellín y Antioquia, con espacio en la JEP” (Restrepo, 2019, marzo 6) se centra en las demandas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia autoridades locales. Concretamente, la JEP solicita que se acaten órdenes previas para aclarar la situación de posibles fosas clandestinas, especialmente en lugares donde se desarrollan megaproyectos como la represa Hidroituango. La trama del texto se desenvuelve enteramente entre los diferentes niveles de la institucionalidad: JEP, Fiscalía General de la Nación, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín. Las personas afectadas, los familiares de los desaparecidos, no aparecen. De hecho, no hay ninguna voz de una víctima. Solo hacia el final del texto se menciona que la JEP inició sus indagaciones debido a una solicitud de medidas cautelares interpuesta por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado. De tal forma que en este texto la víctima individual no tiene presencia abierta; se funde en el colectivo, en la persona jurídica. Pero, si bien la víctima como sujeto individual no deja mayor rastro en el relato, su impacto como sujeto colectivo en el sistema judicial del Estado es tanto mayor.

Hemos visto, entonces, en esta primera confrontación con el corpus de textos publicados en Hacemos Memoria, que el análisis automatizado de tópicos puede ayudar a identificar estructuras semánticas y, en este sentido, facilitar la interpretación. Sin embargo, la utilidad de esta metodología llega a sus límites, sobre todo cuando conduce a pistas erradas, como se pudo evidenciar luego de realizar una lectura con ojos propios. Para poder entender mejor las prácticas

²⁷ En este momento, 2019, en Colombia circulaba la horripilante cifra de 80 000 personas dadas por desaparecidas. El informe de la Comisión de Verdad publicado en 2022, sin embargo, afirma que la dimensión de la catástrofe humana es aún mayor. Según las investigaciones de la Comisión, el número de víctimas de la desaparición forzada entre 1985 y 2016 asciende a “alrededor de 121 768”, pero teniendo en cuenta el subregistro puede llegar a 210 000 personas desaparecidas (Comisión de la Verdad, 2022a).

periodísticas de Hacemos Memoria y en qué medida contribuyen a la formación de memoria y a la constitución de víctimas como sujeto político, es necesario hacer una revisión más profunda de los textos publicados en el portal. Se requiere una aproximación hermenéutica, orientada por las preguntas centrales de este trabajo: ¿Cómo interpretan las víctimas de hechos violentos lo que les ocurrió? ¿Cuáles son las prácticas de periodistas y víctimas para construir memoria colectiva?

Para poder llegar a una mayor comprensión en este sentido, en el marco de la presente investigación se seleccionaron aquellos textos del conjunto publicado en Hacemos Memoria entre 2016 y 2019 en los que la condición de víctima juega un papel importante. Existen tres formas principales de tratar la temática: primero, los textos escritos por personas identificadas como víctimas; segundo, textos escritos por periodistas y cuyos protagonistas son víctimas; tercero, textos que informan sobre desarrollos sociales y políticos relevantes para las víctimas (disposiciones legislativas, constitución del marco institucional, debates acerca de la memoria histórica). Cabe señalar que ninguno de los textos publicados en el portal Hacemos Memoria pertenece a la primera categoría –no hay textos (escritos en primera persona o no) que asuman una posición de autor como víctima–. Lo que sí hay son trabajos colaborativos en los que personas adscritas a asociaciones de víctimas elaboran sus historias con periodistas de Hacemos Memoria. La gran mayoría de los trabajos que se ocupan de otorgar un espacio de expresión a las víctimas del conflicto armado son escritos por los periodistas de Hacemos Memoria. Los textos de la tercera categoría, aquellos que meramente propician información sobre asuntos relacionados con las víctimas –información que puede ser muy relevante para estas personas, pero fue generada sin participación directa de ellas–, no se tomaron en cuenta para este análisis.

La metodología aplicada fue la siguiente: primero se identificaron aquellos textos que están centrados en la temática de las víctimas (184 textos, algo más de un cuarto del corpus total de las notas publicadas entre 2016 y 2019). Cien de estos textos (los primeros 25 de cada año) fueron seleccionados para lectura y análisis bajo los siguientes criterios:

- ¿Qué prácticas periodísticas se reflejan en ellos?
- ¿Cuáles son las percepciones articuladas por las víctimas?
- ¿Qué formas de violencia se registran?
- ¿De que manera se manifiestan prácticas constitutivas para la memoria colectiva?
- ¿Se hace alguna reflexión sobre el uso de medios para la memoria?

- ¿Se otorga alguna relevancia a fuerzas no humanas?

No siempre ha sido posible responder a estas preguntas de una manera inequívoca, sobre todo en cuanto se refiere a la perspectiva subjetiva de víctimas representada en los textos. Si bien la mayoría de los autores del grupo Hacemos Memoria (sobre todo aquellos nacidos en la mitad de los años ochenta o más tarde) no se identifican como víctimas del conflicto, lo más probable es que, como la gran mayoría de los colombianos, hayan presenciado algún hecho victimizante en persona propia o de un familiar u otro allegado, y estas experiencias pueden haber influido en decisiones como la selección del tema, el acercamiento a la persona entrevistada, la formulación de preguntas, etc.

Ahora bien, el estilo de lenguaje que predomina en los textos es el del periodismo clásico, que siempre mantiene una cierta distancia –tanto con el objeto tratado (“la situación”) como con sus actores (“el otro”) y con la propia subjetividad (“el yo del autor”). Es, por tanto, el lenguaje de un observador “neutral” y “objetivo” que evita el uso de la primera persona y nunca revela la posición del autor o la autora quien, por lo demás, se abstiene de articular opiniones. Una pieza publicada en mayo de 2017 bajo el título “Dabeiba honra a las víctimas del paramilitarismo” (Tavera, 2017, mayo 2) puede servir de ejemplo:

las instituciones del municipio, en cabeza del alcalde Antonio José Lara, adquirieron la responsabilidad de promover un acto público de reparación en el que se les devolviera la dignidad a las víctimas y se pidiera perdón por la connivencia de la Fuerza Pública con el accionar paramilitar. El acto se llevó a cabo el pasado 29 de abril con una marcha que atravesó la calle principal del pueblo y finalizó con una eucaristía al aire libre. La placa de mármol en la que se leen los nombres de las víctimas que el Bloque Élder Cárdenas dejó en Dabeiba se instaló en el atrio de la iglesia.

La nota entrega datos como la cifra de las víctimas, fechas, nombres, lugares, hechos. Las víctimas están en el centro del acto de memoria, sus nombres grabados en mármol, pero en la noticia solo se refiere a ellas como un grupo anónimo, “pues temen que con la aparición de nuevos grupos en los territorios que antes ocupaban las Farc se repita el horror de la guerra en su comunidad”.

Muy distinto es el tono de una nota publicada al día siguiente, que también trata de un acto de conmemoración. El texto comienza así:

En la procesión del Domingo de Ramos, el 16 de abril, Gertrudis Nieto sintió el abrazo y la empatía que esperó de sus vecinos desde que en el 2002 su hijo fue asesinado. “Yo ahí, sentí que había valido la pena hablar”, dice. (Otálvaro, 2017, mayo 3)

Desde el inicio, el texto procura asumir la perspectiva de la víctima, da cuenta de sus emociones y de su reflexión personal sobre el acto de haber hablado en público, a través del medio comunitario, de sus malos recuerdos. Valió la pena, dice, pues el resultado para ella ha sido la empatía y el reconocimiento de la comunidad. En el reportaje la persona victimizada emerge del anonimato, de la masa indefinida de las miles y miles de víctimas, como un sujeto activo, cuyo valiente acto de hablar contribuyó a la liberación del trauma. Sin duda, el proceso de periodismo participativo realizado por Hacemos Memoria en el municipio de Sonsón dejó su huella en este texto. En el trabajo conjunto realizado previamente, la periodista adquirió una mayor sensibilidad por la posición de la persona victimizada quien, a su vez, fue envalentonada para articular públicamente su dolor y el deseo de ser reincorporada en la comunidad. Aquí la víctima es una persona, y si bien la historia de la protagonista es, como es característico del periodismo, representativa de algo mayor, de un fenómeno o proceso social, ella no pierde su rostro y reconocerse y verse reconocida en el texto puede ser considerado como una forma de ser aceptada por la sociedad, incluso, como un gesto de reparación.

Pero hay otra forma de texto en Hacemos Memoria, en la que la percepción subjetiva de las víctimas del conflicto armado encuentra una expresión aun más contundente. Se trata de dos entrevistas a mujeres públicamente conocidas quienes perdieron a familiares cercanos por la violencia: la periodista María Jimena Duzán, cuya hermana Silvia fue asesinada por paramilitares, y la senadora María José Pizarro, cuyo padre Carlos Pizarro, exlíder del movimiento guerrillero M-19 y candidato presidencial en 1990, que fue víctima de un atentado. Los dos textos, publicados en 2019 (Atehortúa, 2019, junio 6; 2019, abril 7), destacan por la presencia de la persona entrevistada, que está reforzada por un procedimiento narrativo: las preguntas del periodista no están incluidas, de tal manera que la narración fluye como si fuera un texto escrito en primera persona. Ambas mujeres pertenecen a las élites intelectuales y políticas del país, y durante años se

preocuparon de mantener vivo el recuerdo de sus familiares muertos.²⁸ Como miembros de la élite cultural y política disponen de recursos narrativos que les facilitan más que a la gran mayoría de las víctimas la posibilidad de utilizar los medios de comunicación para comunicar sus experiencias y reflexiones, su memoria. A pesar de ello, las dos se demoraron un cuarto de siglo en dar el paso de hacer públicas sus historias, marcadas por la persecución política, la resistencia, el exilio. Al final de la entrevista, María Jimena Duzán reivindica el derecho de las víctimas de contar lo que les pasó “porque es su historia y es nuestra historia”. El motivo principal de María José Pizarro, en cambio, parece ser la restitución del buen nombre de su padre quien, a pesar de las dificultades que su vida en la clandestinidad le causó a su hija, era un buen padre y “un hombre que tenía honor”.

Entonces podemos identificar, hasta ahora, distintas formas de participación y de representación de las víctimas en los textos de Hacemos Memoria. Está, por un lado, el gran universo total de las víctimas, más de nueve millones según la estadística oficial, que encuentra espacio de articulación en las páginas de Hacemos Memoria a través de las lideresas de las distintas organizaciones, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, por ejemplo. Luego están las personas que participaron en los procesos formativos de Hacemos Memoria, muchas de ellas vinculadas a asociaciones locales de víctimas ubicadas en municipios rurales o en comunas desfavorecidas de la ciudad de Medellín. Generalmente, estas personas llevan años inmersas en procesos de reflexión, de búsqueda, de conversación y de reivindicaciones. Han desarrollado capacidades comunicativas, organizativas, de autoayuda y de ayuda mutua. Siendo personas del ámbito rural, muchas veces con bajos niveles de formación escolar, la expresión mediante el texto escrito no les queda fácil, pero tienen su discurso muy claro y algunas de ellas son buenas oradoras y saben cómo cautivar sus oyentes. Obligadas por la interrupción violenta del curso normal de su vida, y con el apoyo de organizaciones promotoras de los derechos humanos, se han informado sobre sus derechos, han aprendido a formular demandas, a coordinarse con otras personas en condiciones similares y a confrontar toda clase de autoridades. Algunas, incluso, se han convertido en figuras públicas; son consultadas por la prensa e invitadas como panelistas a foros nacionales. Hoy, después de años de lucha en contracorriente, de señalamientos y amenazas, son respetadas en sus comunidades. La visibilidad en los medios y el reconocimiento que reciben por parte de entidades estatales o de organizaciones internacionales ayudan.

²⁸ En 2015, María Jimena Duzán publicó un libro sobre el asesinato de su hermana Silvia (Duzán, 2015). En el mismo año, María José Pizarro participó en la producción de un documental sobre su padre.

Para el periodismo centrado en la memoria histórica estas “líderesas de la memoria” (la mayoría son mujeres) son figuras claves. Son cercanas, convencidas de la importancia de dialogar con los medios para avanzar en su causa, tienen mucha información y han superado la timidez, la fragilidad y el sentido de impotencia frente a la marginalización social que han experimentado. A través de los años, Hacemos Memoria ha establecido una relación continua con varias de estas mujeres: Pastora Mira, coordinadora del Centro Acercamiento, Reconciliación y Reparación del municipio de San Carlos; Gloria Serna, miembro de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón; Flor Gallego, integrante de la Mesa de Víctimas de Desaparición Forzada en el Carmen de Viboral y del capítulo Antioquia del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice; Fabiola Lalinde, quien logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado de Colombia por la desaparición forzada y el asesinato de su hijo; Gloria Ramírez y Gloria Quintero, fundadoras del asociación de víctimas Asovida y del Salón del Nunca Más en Granada.

Algo que tienen en común estas mujeres, más allá de su fuerte voluntad de superar no solo el propio sufrimiento sino también el de otras personas, es el profundo arraigo en la creencia cristiana. Su discurso, como el de muchas personas en Colombia, es intercalado con bendiciones y otras referencias a entidades espirituales como Dios, Jesús y la Virgen. La historia bíblica, el lenguaje religioso, los conceptos y las prácticas asociadas con el catolicismo proveen en gran medida el marco de referencia cognitivo, hasta la organización del espacio. La iglesia es un lugar muy frecuentado en los pueblos de Antioquia y es normal que el domingo la misa se celebre varias veces para que toda la gente pueda asistir. Era, por tanto, natural que un acto público en el que comandantes de las FARC pidieron perdón a la población de Granada por los actos violentos cometidos por esta guerrilla, se celebrara en la iglesia (a pesar de la orientación marxista de este grupo que, a diferencia del ELN, nunca efectuó el cruce paradójico entre el materialismo dialéctico y el catolicismo). Seleccionar la iglesia para realizar el acto de perdón (de por sí un concepto cristiano) lo ubicó en el contexto de la religión y no en el de la política, como podría haber sido el caso si se hubiera escogido la plaza pública o el ayuntamiento. En el acto de reconciliación Gloria García, una mujer que perdió a su padre, a su esposo y a dos hermanos por la violencia, dirige palabras a sus conciudadanos y a los exjefes guerrilleros. El texto de Hacemos Memoria que narra el evento está lleno de simbolismo religioso. Gloria “lee pausadamente una hoja de cuaderno escrita a mano con palabras que tratan de ser suyas, mientras los lazos de fe que le cuelgan en el pecho y

las orejas se sacuden al contar los dolores que la guerra le dejó en su corazón”, “encomendada a Dios y a la Virgen, ha asimilado su duelo” y afirma que “si uno no perdona, Dios no lo perdona a uno” (Hacemos Memoria, 2017, junio 26).

Fabiola Lalinde, una figura emblemática del movimiento de familiares de víctimas de desaparición forzada, comienza su discurso en la Universidad Nacional con una declaración de fe:

Soy una persona creyente, porque como decía mamá, orar es hablar con Dios y yo no le doy descanso a ÉL ni de día ni de noche. Y hablo tanto con ÉL, dicen los chismes por ahí, que cuando entro a una iglesia Jesús se pone la mano en la frente, cierra los ojos, baja la cara y dice: ayyyyy, mira quien llegó.

La comunicación con el Ser supernatural fue un elemento esencial en la búsqueda de su hijo, desaparecido por el Ejército en 1984.

Buscamos y buscamos, pero no encontrábamos el cráneo. Mamá me enseñó que la fe mueve montañas. Era miércoles santo, yo cantaleté al Señor y le dije que no podía permitir que reinara la impunidad. Una luz brilló entre las nubes e iluminó el árbol más alto de la montaña y yo supe que era una señal de que ÉL había escuchado mis oraciones, pero el juez militar se negó a continuar. Sin embargo, insistimos, y con el apoyo de la comunidad internacional pudimos presionar hasta reanudar la búsqueda en mayo. Volvimos. Los peritos judiciales dedujeron que, por la ley de la gravedad, el cráneo debería estar en las partes bajas de la montaña. Yo insistí en que deberíamos seguir buscando montaña arriba y fue entonces cuando les dije: —¡Cuándo van a entender que aquí en Colombia las leyes de la impunidad van incluso contra la ley de la gravedad! Seguimos buscando, cuesta arriba, hasta que encontramos el cráneo en las raíces del árbol más alto de la montaña. (Hacemos Memoria, 2018, abril 17)

Hacemos Memoria acompaña los procesos de memoria liderados por estas mujeres, las consulta, las convoca para charlas y talleres. El medio divulga actividades de las organizaciones de víctimas y visibiliza dificultades que ellas enfrentan. En 2018, por ejemplo, Hacemos Memoria informó sobre el deterioro del Salón del Nunca Más, el espacio de memoria de las víctimas en el

municipio de Granada. Debido a una larga temporada de lluvias, las paredes del edificio se saturaron de humedad, amenazando con la destrucción de los objetos expuestos. Mientras la alcaldía local adujo que no había recursos para arreglar los daños, Gloria Quintero, una de las activistas de la asociación Asovida, solicita que “tengan más sentido de pertenencia por este sitio, pues no solo a nosotros nos debe doler” (Tavera, 2018, mayo 29). Sin embargo, las lluvias han continuado y, a pesar de ello, la esperada ayuda sigue sin llegar. Hacemos Memoria continúa observando el tema y publica de forma constante: “Una vaca por el Salón del Nunca Más” (2018, septiembre 7); “A cuentagotas llegan las ayudas para el Salón del Nunca Más” (2019, enero 30). Pero dos años más tarde, la situación se agravó: una parte central de la exposición, las bitácoras donde familiares y amigos de las víctimas pueden dejar sus mensajes y recuerdos, fueron destruidas por la humedad. “Una tragedia anunciada” (2020, septiembre 1), titula Hacemos Memoria y vuelve a consultar a Gloria Quintero. “Esto es lo más triste que nos ha pasado”, dice ella, “y lo peor es que desde hace más de tres años veníamos advirtiendo la posibilidad de un suceso como este”. Ana María Bustos, abogada de Asovida, encuentra palabras más duras: “En un país sin memoria, lo que no matan lo dejan acabar. Esto significa la pérdida de gran parte del trabajo que viene haciendo desde hace más de catorce años Asovida” (Peña, 2020, septiembre 1). Parece, que esta vez el llamado de emergencia tuvo efecto. Pocos días después, el jefe del gobierno departamental visitó el Salón del Nunca Más, y Hacemos Memoria pudo titular “En Granada la Gobernación se comprometió a salvar el Salón del Nunca Más” (2020, septiembre 10). Pero en las instituciones del Estado la gravedad del olvido es más fuerte que los compromisos con la memoria. Cuando ya nadie recordaba la visita del gobernador, Hacemos Memoria siguió reportando: “Pasaron dos años y aún no restauran el Salón del Nunca Más” (2022, octubre 12). Una vez más tiene la palabra Gloria Quintero; su frustración llegaba al fondo: “Yo he sentido que han jugado con la necesidad, con las ganas de tener un lugar bonito, con la memoria de las víctimas. Uno siente que el interés por la memoria en este país es nulo” (Sánchez, 2022, octubre 12). A pocos días de tal publicación se repetía la fecha de la desaparición forzada de su hermano Rubén por paramilitares; Gloria lleva veinte años buscándolo (Hacemos Memoria, 2018, septiembre 24).

1.4 Conclusiones: subjetivaciones y memoria en el postconflicto

Aún es temprano para juzgar si el Acuerdo de Paz de 2016 ha sido el inicio de una profunda democratización de Colombia o si, como auguran los pesimistas, se repite la historia de los previos acuerdos que no habían logrado acabar con la violencia política, ni transformar los problemas de fondo: la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad y la justicia, la extrema desigualdad, la exclusión de una gran parte de la población de los procesos políticos. Esta vez existen indicios que apuntan en ambas direcciones: por un lado, el fin del conflicto armado abre espacios para la participación política; por otro lado, se registra un drástico aumento de homicidios de líderes y lideresas sociales en zonas rurales. El proceso de paz recibió el apoyo de la comunidad internacional, incluso de los Estados Unidos, y de una parte de la élite nacional, pero la polarización política del país es tan profunda que nuevas olas de violencia parecen previsibles. Al mismo tiempo, el rápido avance de las tecnologías digitales permite un mayor acceso a la información; sin embargo, los mal llamados “medios sociales” fragmentan la comunicación, crean burbujas de opinión impenetrables para el intercambio de argumentos y amplifican los mensajes de odio. ¿Existe, entonces, una forma de comunicar que hace posible superar la polarización? Al parecer, el proyecto Hacemos Memoria no puede ofrecer una respuesta a esta pregunta, pues su estrategia no es la de juntar oponentes para hacer intentos de reconciliación o para lograr que se hagan actos de perdón. Antes, se trata de prepararse, como periodistas, para la nueva actualidad del país, en la cual, por primera vez, el recuerdo de las violencias desde una perspectiva de los derechos humanos puede jugar un papel fundamental. Esta preparación solo puede hacerse en conjunto con distintos sectores de la sociedad, entre los cuales destacan aquellas personas que tienen la autoridad natural, como testigos de la violencia sufrida en cuerpo propio, de exhortar a toda la colectividad a recordar para no repetir. La formación, el diálogo y la creación conjunta de historias también son un refuerzo para las víctimas, un reconocimiento de que lo que tienen que decir –lo que han querido contar desde hace mucho tiempo pero que nadie quiso escuchar– es importante.

Sin preparación, para las víctimas la formación de memoria colectiva puede convertirse en una experiencia que revive el trauma, como ocurrió en la confrontación con los perpetradores en las llamadas versiones libres que se realizaron en el marco de la Ley de Justicia y Paz, luego de la desmovilización de varios grupos paramilitares. Esta ley estipuló rebajas considerables de las condenas para aquellos responsables de graves violaciones de los derechos humanos que las

confesaran y, como reparación simbólica, hablaran de sus crímenes en sesiones transmitidas vía satélite. Sobrevivientes y familiares fueron invitados a ver estas transmisiones o a asistir en persona a ellas. Luego de estos encuentros con los responsables de su tragedia, muchas personas contaron que sintieron nuevamente la impotencia que les impuso el hecho violento. Claramente, aquella fue una práctica de memoria colectiva que, en vez de sanar, volvió a abrir heridas. Por ello, luego del Acuerdo de Paz con las FARC, y en buena medida como aprendizaje de aquellas experiencias de revictimización, se diseñaron escenarios más apropiados, en los que el testimonio de las víctimas primó sobre el de los asesinos y torturadores. En particular, el voluminoso trabajo realizado por la Comisión de Verdad, en todo el país, se centró en la construcción de una verdad social (o socialmente aceptable), partiendo de los relatos de las víctimas del conflicto.

Hago uso del término de verdad social, para aludir a la forma particular en la cual se escribe la historia, que es ninguna otra cosa que crear, entre muchos, interpretaciones de los acontecimientos del pasado válidos para el presente. A diferencia de otras verdades, como la jurídica o aquellas que son producto de las ciencias y están en manos de expertos, la verdad social se construye en un proceso de comunicación que involucra actores muy diversos. Si bien es cierto que académicos como historiadores, sociólogos y antropólogos hacen aportes muy importantes basados en la investigación científica, y de esta manera forman el discurso en gran medida, personas de muchos ámbitos de la sociedad participan muy activamente en las discusiones: políticos, militares, artistas, filósofos, periodistas, publicistas, activistas y, desde una posición destacada, los llamados testigos del tiempo. Siendo esto así, es innegable que la construcción de la verdad histórica no puede ser otra cosa que un producto social y por tanto susceptible de las subjetividades de aquellos que participan en este debate –lo cual no es lo mismo que decir que esta verdad es absolutamente relativa–. En las palabras de Paul Ricœur, “esas disposiciones subjetivas son dimensiones de la objetividad histórica misma”, y lo son porque el objeto de la historia es, precisamente, el sujeto humano (Ricœur, 2015).

El escenario propio para evaluar el grado de veracidad de los enunciados de una persona acusada de un crimen es el tribunal. Y si bien es cierto que las narraciones de los perpetradores (a veces justificaciones, otras veces manifestaciones de redención o purificación de conciencia) pueden ser articuladas en otros espacios públicos –un ejemplo notorio son las autobiografías de exjefes paramilitares que inundaron las librerías colombianas luego de la desmovilización parcial de las AUC–, pueden despertar interés e incluso generar ventas, pero no encuentran la aceptación

de la sociedad en general. Es distinta la participación de las víctimas de la violencia en la construcción de la verdad social. Hablan desde una fuerte posición ética –y en este sentido su discurso es altamente aceptable–, pero su posición social y política es muy débil (con excepción de aquellas pocas víctimas que pertenecen a los estratos altos de la sociedad), pues no son las personas que hacen la historia, sino las que la sufren. Solo cuando adoptan un rol activo, cuando forman asociaciones y articulan sus señalamientos y reivindicaciones en público, esto cambia. Pero entonces muchas veces ocurre lo siguiente: empieza el juego sucio de las acusaciones y la estigmatización, se cuestionan los motivos de las personas que lideran los movimientos (“se quiere lucrar a costo de otros”), o se siembran dudas acerca de su reputación (“lo que le pasó debe haber sido por algo”). Tal vez esto no debe sorprender, pues, en una sociedad polarizada por una guerra civil, muy a menudo las víctimas de unos se convierten en los verdugos de otros. Los incómodos reclamos de las víctimas o de aquellos que las representan suelen suscitar el rechazo de algunos y las críticas más comprensivas de otros. En el contexto europeo, Tzvetan Todorov lamentó en su conocido texto *Los abusos de la memoria* que “si nadie quiere *ser* una víctima, todos, en cambio, quieren haberlo sido, sin serlo más; aspiran al estatuto de víctima” (Todorov, 2000).

En Alemania, donde los debates sobre la interpretación de la época nazi todavía se mantienen vivos después de casi ochenta años, se enunció recientemente un reproche a la generación del 68 –hijas e hijos de los antiguos nazis– por haberse falsamente identificado con las víctimas judías (Jureit y Schneider, 2010); esta acusación fue refutada con el argumento de que la empatía de la generación del 68 con las víctimas del Holocausto no significaba una falsa identificación en el sentido de creer que uno mismo también es víctima, sino que más bien sentó la base para una nueva “cultura del recuerdo”, en la cual, por primera vez, la historia y el testimonio de las víctimas jugaban un papel elemental (Assmann, 2013). A diferencia de los debates en Europa, en la actualidad colombiana, donde las memorias de la violencia son muy frescas y, además, constantemente renovadas por nuevos acontecimientos, a pesar de que la presencia y el número de víctimas son tan grandes, la incorporación de sus experiencias en la conciencia nacional recién ha comenzado. Por tanto, las actividades del proyecto Hacemos Memoria y los trabajos periodísticos publicados en su plataforma digital adquieren sentido político: son acciones que transforman percepciones: de sí mismos como periodistas en circunstancias de posguerra, y del otro como persona victimizada y creadora de su propia historia.

En su conjunto y a través de los años, las intervenciones, las capacitaciones y publicaciones de *Hacemos Memoria* permiten observar la gestión de cambios sociales a partir de la memoria histórica. Probablemente el más significativo de estos cambios es el de las actitudes y estrategias de los diversos actores involucrados; periodistas que no solamente observan, analizan e informan, sino que interactúan, permiten la participación, asumen una responsabilidad por el bienestar del otro; víctimas de la violencia que reconocen su tragedia personal como consecuencia de estructuras sociales y desde ahí descubren su poder político y posibilidades de actuar –primero por las vías de la comunicación–. “Hablar es hacer”: la famosa fórmula del filósofo pragmatista John Austin encuentra aquí una expresión con sentido emancipador.

Para Ricœur existe una memoria que enfatiza la repetición (aquella, por ejemplo, que idealiza a los héroes de la patria, o a los de la revolución), y otra, fundamentalmente opuesta, que se distingue por una postura crítica (Ricœur, 2010). Es aquella memoria crítica que incomoda, que indaga, que saca los trapos sucios a la luz, que es irrespetuosa de fórmulas calmantes tan comunes como “es mejor dejar quietas las cosas del pasado”, o más directamente: “de eso no se habla”. En este trabajo colectivo, perseguido con constancia a través de años, se extrae el duelo de los sobrevivientes del espacio privado para ponerlo en el contexto de las constelaciones de poder y de contrapoder. “Es la justicia la que, al extraer de los recuerdos traumatizantes su valor ejemplar, transforma la memoria en proyecto; y es este mismo proyecto de justicia el que da al deber de memoria la forma del futuro y del imperativo” (Ricœur, 2010, p. 120).

Ahora bien, ¿cuál es exactamente el rol de la memoria en la construcción de un futuro más justo? Está claro que la práctica de hacer memoria de los hechos violentos es una condición para poder criticar y, eventualmente, superar las injusticias. Pero, ¿de dónde surge la iniciativa para romper con el silencio y hablar de los temas incómodos? Tenemos en el caso descrito en este capítulo dos grupos de actores principales: periodistas, académicos y estudiantes, por un lado, y personas victimizadas en el conflicto armado, muchas de ellas pertenecientes al mundo campesino y obrero, por el otro. Es precisamente en el diálogo entre estos dos grupos que se genera algo nuevo. En las páginas de *Hacemos Memoria* este diálogo queda documentado y archivado. No cabe duda sobre quién lidera esta conversación plural: la iniciativa parte del grupo de periodistas anclados en la academia; varios de ellos tienen experiencia como reporteros en la guerra, traumatizados –algunos más, otros menos–, politizados en la universidad pública, tanto en el aula como en la protesta estudiantil. Es esta mezcla de experiencias, la académica, la política y el ejercicio del

periodismo en tiempos del conflicto armado, la que sensibiliza a este grupo por los derechos humanos y su constante violación de parte de todos los actores armados.

Inevitablemente, el periodismo centrado en los derechos humanos se encuentra con las víctimas, primero como testigos de los crímenes que se cometieron, luego como miembros de organizaciones reivindicadoras de derechos. Y si bien cada miembro de este grupo puede haber sido victimizado de muchas maneras en su vida, tanto en el ejercicio profesional (amenazas, retención por algún grupo armado, estigmatización) como en la vida privada (haber sido desplazado por causa de la violencia, haber perdido algún familiar), no es desde una posición de víctima que se asume la tarea de la memoria. La víctima, en el trabajo de Hacemos Memoria es el otro, con quien se busca el diálogo.

Es importante destacar el significado del tiempo o, mejor dicho, de las diferentes modalidades de tiempo, en el proceso colaborativo de hacer memoria. Ahí chocan dos realidades: por un lado, la de las personas victimizadas, en su mayoría criadas en el campo con sus temporalidades marcadas por el trabajo agrícola y las formas de comunicación propias de la vida rural. Por el otro lado, el afán del periodista, siempre estresado para alcanzar la hora determinada para la entrega de su artículo. Posiblemente, el periodismo es una de las áreas de trabajo en que la aceleración causada por los medios digitales es más notable: tiene que producir más contenidos en menos tiempo porque la tecnología así lo demanda; vive con la contradicción de que el internet no olvida, pero la información se vuelve cada vez más efímera. Pero crear historias de forma conjunta entre periodistas y personas victimizadas requiere desacelerar el ritmo de producción. Este es un aprendizaje central del proyecto Hacemos Memoria: se necesita tiempo para construir la memoria de una forma responsable, buscando verdades con los recursos del periodismo y de otras disciplinas. Y este tiempo invertido tiene que ser congruente con los tiempos de las víctimas: el tiempo del dolor y la tristeza, el tiempo necesario para cultivar la confianza, el tiempo para aprender e investigar, el tiempo para actuar. Una de las formas de hacer la memoria liberadora y no aplastadora, es organizar el tiempo (los acontecimientos) en el espacio. Esta antigua mnemotécnica permite relacionar los acontecimientos entre ellos de una forma estructurada en un antes y un después que deja descubrir causalidades y consecuencias. Entonces se puede leer el sentido de la historia

Capítulo 2. Comunicación comunitaria: imaginación y diseño

En el capítulo anterior nos concentramos en los aportes del periodismo a la construcción de memoria colectiva y, en particular, al empoderamiento de las víctimas del conflicto armado. Vimos que las mejores condiciones para ello se dan en un acercamiento dialógico que requiere, en primer lugar, una sincronización de temporalidades. El periodismo, tradicionalmente caracterizado por la inmediatez y la creciente velocidad de la transmisión de información, se encuentra con el tiempo de las víctimas que está anclado en el pasado, en el momento traumático que es origen tanto de las carencias sufridas en la actualidad como de una proyección política transformadora para el futuro.

Por supuesto, esta inmediatez, comprendida en el sentido literal: como una suspensión del medio –una comunicación directa que no requiere de medio de comunicación–, es una ilusión. Muy al contrario, la importancia de los medios y las tecnologías de la comunicación ha crecido a tal grado que, hoy por hoy, las empresas más valoradas en el mercado global son aquellas que organizan, con un gigantesco aparato tecnológico, la mediación de los humanos con la realidad. Así se ha ido formando un sistema mundial económico basado en la información, en el cual los individuos fungen como proveedores de datos como insumo para una consumición de bienes cada vez más acelerada, un sistema que, por último, produce el calentamiento de la atmósfera del planeta.

Una hipótesis de la presente investigación, sin embargo, es que las personas –y comunidades– se pueden apropiar (en cierta medida) de los medios de comunicación y crear espacios de comunicación en los cuales no prima el valor mercantil –medido en *clicks* y *ratings*– sino el de la interacción libre de sujetos autónomos. Así pudimos ver, en el ejemplo del proyecto Hacemos Memoria, cómo las páginas web, los blogs y las plataformas digitales de enseñanza, al igual que la radio y la televisión comunitarias son medios apropiados por grupos e individuos para debatir el pasado, para investigar los orígenes históricos de los conflictos y para trazar posibilidades de construir una convivencia más justa, menos violenta. Hasta ahora, nuestro trabajo se ha enfocado en la producción de una memoria colectiva como un proceso social. Se trata de aquella memoria histórica que puede servir a los colectivos que han experimentado la victimización como un instrumento de crítica política. En los próximos apartados vamos a

orientar la mirada más hacia el rol que el medio mismo juega en el proceso de la formación de memoria.

La primera parte del capítulo tratará de una emisora comunitaria, Vokaribe Radio, y la segunda de la revista *Unidad Indígena Álvaro Ulcué*, producida por el programa de comunicaciones del Concejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Ambos medios, los grupos de personas que los operan, hicieron parte del proyecto implementado por DW Akademie en Colombia, al igual que Hacemos Memoria. Por lo tanto, el objetivo de fortalecer la memoria de las víctimas del conflicto armado regía para ellos de la misma manera, por lo menos en el contexto de la realización del proyecto de cooperación; no obstante que para estas dos organizaciones el tema de la memoria colectiva no ocupaba, hasta entonces, el primer lugar entre sus preocupaciones y objetivos, como fue el caso con Hacemos Memoria.

Hay un factor común a los tres proyectos estudiados, Hacemos Memoria, Vokaribe y el programa de comunicaciones del CRIC: son proyectos que procuran gestionar cambios sociales a través de la comunicación, y lo hacen en escenarios político-sociales marcados por la violencia del conflicto armado y, posteriormente, por los esfuerzos de construir la paz. En el contexto de las recientes transformaciones de la sociedad colombiana, en que el Acuerdo de Paz de 2016 puede ser considerado como una bisagra, estos tres casos representan, de alguna manera, la diversidad territorial y cultural tan característica de esta sociedad. Ya hemos visto, en el caso de Antioquia, cómo ciertos factores sociales, culturales y territoriales confluyeron para crear una atmósfera de violencia extrema que hizo que graves violaciones a los derechos humanos formaran parte de la cotidianidad: el auge del narcotráfico en los años ochenta, por ejemplo, tan estrechamente vinculado con el nombre de Medellín.

La emisora Vokaribe está ubicada en Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico –una ciudad que cultiva la imagen de ser el lugar tanto del eterno carnaval como también un foco de progreso económico–. El hecho de que la ciudad fuera durante años un centro operativo del paramilitarismo es omitido en el discurso oficial, lo cual dificulta enormemente el trabajo de la memoria.

En el imaginario nacional, el departamento del Cauca, al suroccidente del país, constituye algo así como el polo opuesto. Esta zona montañosa que se extiende de la cordillera central de los Andes hasta la costa del Pacífico es una de las más atrasadas en cuanto al desarrollo de infraestructura e industrias, pero, al mismo tiempo, es una de las que representa la

mayor diversidad cultural. El Consejo Regional Indígena del Cauca reúne a los cabildos de diez pueblos originarios que habitan la región, y como tal, sus esfuerzos de comunicación tienen mucho que ver con la formación de memoria colectiva como base de la constitución como grupos étnicos y como movimiento reivindicador de los derechos de los pueblos originarios. Aquí, la temporalidad es otra: el conflicto armado con las FARC y la violencia de las mafias del narcotráfico son episodios en una historia de colonización, racismo y exterminio de cinco siglos.

Hay, sin embargo, otro asunto que pudimos observar en la historia del proyecto Hacemos Memoria: la creación de una memoria colectiva requiere de instituciones en las cuales se pueda apoyar, y tanto más cuando se trata de la memoria de un grupo tan marginalizado como son las víctimas. La Universidad de Antioquia dio el respaldo institucional y puso a disposición diversos recursos tanto materiales como simbólicos. La oficina del proyecto y los espacios para talleres y reuniones figuran entre ellos, lo mismo que horas de trabajo de personal, conocimientos académicos y administrativos y, no menos importante, el buen nombre de una institución educativa con una tradición de más de doscientos años. Pero la institucionalidad también jugó un papel importante en las comunidades rurales donde el proyecto intervino: la radio comunitaria, la cooperativa, la iglesia, etc.

Ahora bien, hemos puesto el enfoque de nuestra mirada en la construcción de la memoria y de las subjetividades, y lo que encontramos fue que el diálogo entre periodistas-académicos y comunicadores-víctimas condujo a una reflexión que afecta a esta misma institucionalidad que lo permitió. Así, las conversaciones con la gente de Granada y Sonsón llevaron a los integrantes de Hacemos Memoria a confrontarse con su propia historia y a trasladar la discusión a la propia universidad. Por otro lado, las publicaciones de Hacemos Memoria, realizadas con los comunicadores y las activistas de la asociación de víctimas de Granada, revelaron a la atención del público las negligencias de las instituciones como Alcaldía y Gobernación en el caso del Salón del Nunca Más.

El presente capítulo profundizará la mirada en la institucionalidad del medio de la memoria, en este caso de la radio comunitaria. Se intentará demostrar que las instituciones que facilitan la comunicación y la construcción de memoria no constituyen un marco rígido y no siempre son fijas y preexistentes, como el Estado, la Iglesia, la universidad, o las normas que regulan a los medios de comunicación, por ejemplo. Las instituciones son creadas por personas y colectivos, y en el fondo de cada proceso instituyente laten un deseo de cambio y una energía

transformadora: la imaginación. Para quedarnos con el ejemplo del Salón del Nunca Más de Granada, es la imaginación de un grupo de mujeres, víctimas del conflicto armado, lo que hace posible la creación de un espacio común dedicado a la memoria.

Vamos, a continuación, a retomar el motivo de la imaginación y, apoyados en Cornelius Castoriadis, a explorar el potencial transformador –en el sentido de ganar una mayor autonomía de los sujetos– de la imaginación en el caso de Vokaribe Radio. En otras palabras, la memoria activa, aquella que indaga en la historia para identificar cuándo y dónde las cosas tomaron un rumbo malo, y la imaginación de una sociedad más justa van de la mano. Pero luego introduciré otro elemento que me parece fructífero para la transformación social, y que, además, nos conecta con el tema de la cooperación: el concepto del diseño. Lo vamos a retomar en el apartado siguiente, que trata del proyecto del CRIC, y nos apoyaremos en los escritos del antropólogo colombiano Arturo Escobar, quien lo ha utilizado en el contexto de la intervención social en comunidades rurales en la costa del Pacífico de Colombia.

2.1 Vokaribe: la radio en el postconflicto

Para Colombia, la última década del siglo pasado comenzó como un momento de esperanza, un momento de transformación política. Varios grupos guerrilleros, entre ellos el Movimiento 19 de abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), habían abandonado la lucha armada. Transformados en partidos políticos hicieron parte de una asamblea constituyente que reformó la Carta Magna. La nueva Constitución de 1991 sentó las bases para ampliadas formas de participación ciudadana, tanto en partidos, parlamentos y otras instituciones políticas, como también en los medios de comunicación (Navarro Wolff, 2021; Rodríguez, 2021).¹ Además, se extendió la aplicación de derechos fundamentales a grupos hasta entonces excluidos. Así, por ejemplo, se concedió por primera vez el estatus de ciudadanía a los miembros de los pueblos originarios (Laurent, 2021). Con la participación de los insurgentes

¹ En una revisión de la Constitución de 1991 con ocasión de su trigésimo aniversario, Rodríguez (2021) afirma que el nuevo modelo de Estado conservó las características principales del régimen constitucional anterior, en particular el marcado presidencialismo. Sin embargo, “en un país como Colombia, cuya historia política tiende a la exclusión y al sectarismo, se destaca el hecho de que la Constitución de 1991 haya sido el producto de la participación de algunos de los sectores que tradicionalmente no habían sido tenidos en cuenta, y que, con posterioridad, haya sido un referente para reclamar, por parte de los mismos sectores, la vigencia del Estado de derecho, mejores condiciones de vida y la realización de la democracia”. (Rodríguez, 2021)

desmovilizados en el proceso constituyente se abrieron nuevas perspectivas políticas para la izquierda; entonces parecía viable realizar el sueño de una sociedad más justa sin las armas, por la vía legal, y a través del debate en los parlamentos y los medios.

Varios de los excombatientes optaron por Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, como lugar para reintegrarse a la sociedad. La ciudad ofrecía no solo oportunidades de empleo y de educación, sino también más seguridad que las zonas rurales. Además, a comienzos de los años noventa se respiraba una atmósfera de cambio en Barranquilla, que dejaba vislumbrar, para algunos de los exguerrilleros, la posibilidad de un nuevo proyecto político.² El descontento de amplios sectores de la población con las élites tradicionales de la costa del Atlántico –corruptas e incapaces de liderar un proceso modernización– había crecido de tal manera que la ciudad llegó a un punto de quiebre. Aparecieron nuevos actores políticos que prometieron romper con los vicios del clientelismo y abogar por una mayor inclusión de la población marginalizada. Esta consistía, en buena medida, de campesinos desplazados hacia la ciudad por la violencia en las zonas rurales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015; Correa de Andreis, 2016; Ramos Vidal, 2018).

En 1992, un nuevo partido llamado Movimiento Ciudadano, que contaba con el apoyo de muchos exguerrilleros reinsertados, ganó las elecciones municipales. Su líder, Bernardo Hoyos, un sacerdote adepto de la Teología de la Liberación, fue elegido alcalde de Barranquilla. “Barranquilla es, para muchos de los ex guerrilleros una luz que les atrae”, escribió un diario en esos días, “es una ciudad segura, alegre, hospitalaria, informal y sus autoridades están comprometidas con la izquierda, que ayudó a su elección” (Alvarado, 1994, enero 30). Era un momento de efervescencia política y de activismo cívico. Surgieron nuevas iniciativas para reclamar los derechos básicos de los habitantes de las zonas urbanas marginalizadas: el acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, educación y salud, entre otros. Los cambios sociales y culturales que ya se percibían, y que se proyectaban con mayor fuerza para el futuro inmediato, requerían de formas de comunicación adecuadas –participativas y críticas– y de medios que las hacían posibles.

De hecho, democratizar la comunicación y obrar contra el dominio de los grandes consorcios de medios era uno de los objetivos del movimiento que había luchado por la nueva

² Entrevista con M., excombatiente del EPL, realizada el 21.09.2021.

Constitución. La radio comunitaria se ofrecía como un instrumento ideal para crear ese contrapoder mediático (Cadavid y Gumucio Dagrón, 2014; Osses Rivera, 2015; Pereira y Cadavid, 2011). En este momento, al comienzo de la década de los noventa, la revolución de las redes digitales era aún un tema para visionarios y *nerds*, pero todavía estaba lejos de ser una realidad social; la tecnología del internet apenas estaba comenzando a masificarse. La radio, en cambio, un medio de amplio alcance, sobre todo para las clases populares, ofrecía una opción interesante para la comunicación alternativa. En América Latina y particularmente en Colombia, la radio comunitaria, que se regía por fines educativos más que comerciales, se remontaba a una larga historia. Ahora, la coyuntura actual del país creaba condiciones favorables para el surgimiento de nuevos medios alternativos y comunitarios: un acuerdo de paz, una nueva Constitución, y un debate vivo sobre la comunicación como catalizador del cambio social.

Vokaribe Radio puede ser considerado un producto de esta coyuntura. Sus inicios coinciden con las luchas de los pobladores de Las Malvinas, uno de los asentamientos irregulares de Barranquilla que estaban creciendo en los márgenes de la ciudad. Un grupo de estudiantes de comunicación, artistas y excombatientes desmovilizados del EPL concibió la propuesta de crear una emisora comunitaria en Las Malvinas (Rendón, 2012, mayo 9). La alcaldía progresista apoyó el proyecto y ayudó a conseguir fondos destinados a la reinserción de excombatientes. Para aquellos miembros del grupo que venían de la lucha armada, la radio fue un proyecto que les permitió regresar a la vida civil con un proyecto político: trabajar, a través de la comunicación, por las demandas sociales y el reconocimiento cultural de la población marginalizada. “Conservábamos los radios de comunicación militares” cuenta M., uno de los reinsertados,

y con esos radios hacíamos radio comunicación, convertimos como en una emisora, era como un encuentro cultural y demás, de esos antiguos radios y fueron otras personas que me dijeron: debías dedicarte a la comunicación... yo hasta ese momento estaba en otro rollo, no sabía cómo empezar la vida. Y me fui con eso para España, con esa idea en la cabeza y recorrí las radios libres, las radios anarquistas, las radios no sé qué, estuve en Valencia y en Madrid y me traje los estatutos de Onda Verde. Ese es el modelo con que comenzamos Vokaribe.

Inspirado por lo que vio en España, a su regreso a Colombia, M. se inscribió en la universidad pública para una carrera de producción radiofónica. Ahí se encontró con otros estudiantes que tenían ideas políticas afines a las suyas y tenían interés en la comunicación popular y la radio comunitaria. Entre ellos estaba P., cuyo padre también estaba vinculado al EPL. Aunque P. no formaba parte de la guerrilla, su vida, como la de M., transcurría en un ambiente de activismo político en la universidad y en los barrios populares del suroccidente de Barranquilla, donde vivían.

Siempre tuve una relación muy directa con el suroccidente, desde el primer momento que llegué a la ciudad y tiene que ver con el movimiento estudiantil, con los grupos populares que trabajaban el teatro, el trabajo comunitario y ahí estaban esos chicos. Desde entonces los conocía. Después, cuando ya entro a la universidad, ahí nos pica la curiosidad con el tema de la comunicación comunitaria, conozco a M.

Pero pese a la proveniencia de grupos revolucionarios de algunos de sus miembros, el proyecto político de Vokaribe ya no era el adoctrinamiento ideológico de las masas. Más bien, lo que se pretendía era un cambio cultural. La radio se veía como un vehículo para las expresiones musicales propias de los jóvenes de los barrios pobres –hijos de migrantes y desplazados, marginalizados del sistema educativo y del mercado laboral–. “La radio como un lugar para reconocer a esta gente, su forma de vida, de donde viene. Música picó, champeta –en ese entonces no se escuchaba en las otras radios”, recuerda W., uno de los integrantes del equipo fundador de Vokaribe Radio. “Esta era nuestra forma de ver la lucha: reafirmar el ser, el quehacer. El rap, las madres comunitarias”.³

Sin embargo, ni la desmovilización del M-19 y del EPL ni la nueva Constitución pudieron conseguir el fin de la violencia y una pacificación de la sociedad. Al contrario: con las ganancias del tráfico de cocaína que continuaba en auge, se inyectaron dinero y armas en los conflictos existentes, fomentando no solo el crecimiento de las FARC –la guerrilla más grande y antigua de Colombia que no había participado en la desmovilización y la constituyente–, sino también el de los ejércitos privados al servicio de narcotraficantes, empresarios y políticos que

³ Entrevista con W., realizada el 05.10.202.

se veían amenazados por la guerrilla. Es cierto que en Barranquilla el impacto del conflicto armado no fue tan masivo ni tan violento como en Medellín. Pero, siendo una de las principales ciudades del país, las secuelas de la guerra inevitablemente se hicieron sentir.

El área metropolitana de Barranquilla había crecido rápidamente en las décadas anteriores, debido a un flujo constante de personas desplazadas del *hinterland*, de regiones como los Montes de María, el sur de Bolívar o Córdoba, donde guerrillas, paramilitares y las fuerzas del Estado peleaban por el control territorial. Junto con la población campesina, la guerra se desplazaba a la ciudad. En los años ochenta y noventa, todos los principales grupos guerrilleros del país tenían células urbanas en los barrios pobres y emergentes de Barranquilla. Estas, sin embargo, evitaron la confrontación militar con las fuerzas públicas y limitaron sus acciones a la agitación política armada en barrios populares, asaltos a bancos y algunos ataques puntuales a instalaciones de la Policía o del Ejército. En general, las guerrillas utilizaron la ciudad más que todo como un territorio para el apoyo logístico a sus unidades que operaban en zonas rurales. En Barranquilla buscaban aprovisionamiento y armas, así como la atención médica a sus heridos. También se procuraba ampliar la base social de la insurgencia y reclutar nuevos combatientes (Zubiría Mutis, 2017).

Hacia finales de los años noventa, los paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia se impusieron como la fuerza dominante en la ciudad (Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, 2017b). Con la colaboración de políticos corruptos, de funcionarios públicos, de empresarios y militares, establecieron un régimen de terror en toda la región de la costa del Atlántico. Se apoderaron del lucrativo negocio del narcotráfico y de otras fuentes de ingresos ilegales como la venta de gasolina robada y la extorsión a comerciantes. Además, explotaron recursos del sector público y privado; por ejemplo, tomaron el control de hospitales, seguros de salud y universidades, y extorsionaron a comerciantes y ganaderos. Como revelaron datos encontrados en el computador de uno de los jefes paramilitares, el poder económico de este grupo fue tan grande que pudo infiltrar a sectores del Estado:

tenía en su nómina de pagos al GAULA,⁴ aparte del Ejército en la ciudad, aparte de la Policía Nacional, así como a miembros del antiguo Departamento Administrativo de

⁴ Los GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) son cuerpos de élite de la fuerza pública colombiana dedicados a la liberación de víctimas de secuestro.

Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que respondía directamente a la Presidencia de la República (Trejos, Martínez y Badillo, 2018).

Para blindar su dominación económica y política en la región, esta alianza criminal desató una ola de violencia contra todos aquellos que —en su imaginario— representaban una amenaza: sea por sus convicciones políticas o por su estilo de vida: activistas de la izquierda, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, personas que expresaban su diversidad sexual, habitantes de la calle. Durante el dominio de los paramilitares, la ciudad experimentó un extremo aumento de homicidios. Entre 2003 y 2006, solo en Barranquilla 1664 personas fueron asesinadas. Muchos de estos crímenes quedaron en la impunidad (Verdad Abierta, 2011, octubre 18); algunos, sin embargo, pudieron ser esclarecidos y sus perpetradores llevados a juicio (Verdad Abierta, 2019, abril 8). Probablemente el caso más emblemático es el de Jorge Noguera, quien fue nombrado director del DAS por el presidente Álvaro Uribe en 2002. En esta función, Noguera encargó a paramilitares del Bloque Norte el asesinato de Alfredo Correa de Andreis. El sociólogo había realizado investigaciones y publicaciones sobre la población desplazada en Barranquilla. Años después, Noguera fue condenado a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el crimen.

Uno de los efectos nefastos de la colaboración de funcionarios del Estado con los grupos criminales fue la normalización de prácticas antisociales como la llamada “limpieza social” y la persecución de todas aquellas personas cuyo comportamiento se desvió de las normas establecidas por el poder ilegal. El régimen de miedo instalado por los paramilitares no solo acabó con expresiones culturales como las fiestas populares, sino también con la participación política. “Los niveles de intolerancia aumentaron y cualquier persona o grupo que no cumpliera con sus leyes era discriminado y, en la mayoría de los casos, atacado por la misma población civil. Así fue como se creó una sociedad que creía en la violencia como mecanismo legítimo para solucionar las diferencias y los conflictos” (Verdad Abierta, 2011, octubre 18). Por supuesto, los medios de comunicación no quedaron exentos del silenciamiento: “La gente vivía amedrantada y las emisoras comunitarias, unas dejaron de emitir y otras fueron sometidas a las condiciones del discurso de terror de los paramilitares” (Ramos Maldonado, 2020). El control de la comunicación por actores fuera de la ley, junto con la normalización de la violencia, no

podieron tener otra consecuencia que la exclusión total del discurso público de las víctimas de los crímenes perpetrados por estos mismos actores.

¿Cómo fue posible, entonces, que una radio comunitaria como Vokaribe pudiera funcionar en un ambiente tan hostil? El caso es que, durante varios años, el grupo de gestores de la emisora tuvo que pausar sus actividades. La incursión de los paramilitares en Barranquilla significó un duro revés para el proyecto. Luego de recibir amenazas, varios de los integrantes de Vokaribe se vieron obligados a salir de la ciudad y a buscar refugio en otras regiones e incluso fuera del país. Los equipos donados a través de los fondos de reconciliación y paz y de reinserción fueron decomisados por la Policía. Como la radio no tenía licencia de emisión, se consideró que estaba operando ilegalmente.⁵ Lo que sucedió fue que las distintas agencias del Estado no actuaban de forma coordinada. La alcaldía de Barranquilla apoyaba este proyecto de comunicación popular, el Ministerio del Interior donó los equipos, pero no se otorgó una licencia que permitiera a la radio transmitir legalmente.

No obstante estas contradicciones, los integrantes de Vokaribe Radio siguieron persiguiendo su propósito de construir un medio local alternativo. De ahí en adelante, obtener una licencia se convirtió en una meta principal. Pero tenían que pasar muchos años para que esto ocurriera. Mientras, gracias a la persistencia del grupo de personas que iniciaron el proyecto, este se pudo consolidar institucionalmente. Hubo capacitaciones y asesorías, discusiones e intercambios con otras iniciativas de comunicación alternativa como, por ejemplo, el Colectivo de Comunicaciones Montes de María, la Escuela Audiovisual de Belén de los Andaquíes, la emisora Suba al Aire, entre otras. Así se formó una red de apoyo para la radio: amigos, activistas de otras radios y de redes como ALER (Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular) y AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), académicos y funcionarios públicos, agentes de la cooperación internacional. Esta red hizo posible, en un largo proceso de dos décadas, que Vokaribe Radio se convirtiera en un espacio de diálogo y de memoria, e incluso, que abriera sus micrófonos para que víctimas del conflicto

⁵ “El 26 de abril de 1998, funcionarios armados del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) irrumpían de manera espectacular en las instalaciones de la emisora y decomisaban los equipos sobre una orden de control de uso ilegal de frecuencias, pero especialmente sobre la acusación de que Vokaribe era la emisora rebelde de las Malvinas, vinculada a grupos guerrilleros. Al día siguiente una comisión de los barrios del suroccidente elevaba una carta de defensa de la emisora que contenía más de 5000 firmas y se movilizaba frente a la Alcaldía Municipal de Barranquilla, exigiendo que no les apagaran la voz. El suceso desembocó en un apoyo a la asociación por parte de la alcaldía, así como en una visibilización de la experiencia a nivel ya no sólo zonal sino distrital” (Osses, 2002).

armado pudieran expresar sus experiencias y sus reivindicaciones. Han sido numerosos los obstáculos y las dificultades que había que superar para poder llegar a este punto. El clima de desconfianza generalizada entre las personas, producto de las experiencias traumatizantes –el desplazamiento, la inseguridad, la represión– había erigido barreras ante la participación comunitaria (Mayor *et al.*, 2018). A esto se sumaba la dificultad de poder disponer de tiempo libre para cualquier actividad que no estuviese orientada a asegurar la precaria sobrevivencia de cada persona.

Entre los auspiciadores de Vokaribe destaca Cyrillus Swinne, un sacerdote holandés conocido como “el padre Cirilo”, quien desde su llegada a Barranquilla hace varias décadas coordinó la construcción de un centro comunitario en La Paz, un barrio vecino de Las Malvinas. La obra caritativa de los religiosos responde a las necesidades urgentes de una población que no puede contar con la garantía de sus derechos básicos por el Estado. Entre los establecimientos fundados por el cura se encuentran un centro de salud, un hogar para ancianos y una biblioteca pública.

Llegó una nueva oportunidad para Vokaribe cuando el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación abrió un proceso de licitación de licencias de radiodifusión comunitaria en las capitales departamentales del país, entre ellas Barranquilla. Sin embargo, la ruta para llegar ahí demoró varios años; había que cumplir con trámites legales e institucionales: el registro como asociación ciudadana, la conformación de una junta directiva y una junta de programación, entre otros. En 2012, finalmente, Vokaribe pudo comenzar a transmitir desde un pequeño estudio en el barrio La Paz, instalado en la biblioteca pública fundada por el padre Cirilo.

En esta temporada, Vokaribe Radio formaba parte de un grupo de cinco emisoras comunitarias de la costa del Caribe que recibieron entrenamiento en aspectos relacionados con la producción radiofónica. Fue un programa impulsado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Norte, Uninorte, una universidad privada con sede en Barranquilla, que se realizó en el marco de un convenio con DW Akademie de Alemania (2010-2014). Su objetivo era apoyar medios comunitarios de la región Caribe en la elaboración de programas sobre conflicto, paz y memoria. En retrospectiva, se puede decir que más que una simple capacitación (en el sentido de instrucción unidireccional), se trataba de un proceso de aprendizaje mutuo tanto entre individuos como entre instituciones. La cooperación para el desarrollo significa para las partes implicadas entrar en un complejo entramado de relaciones simbólicas y materiales; de

saberes, poderes, deseos e intereses. Este tema se profundizará en el capítulo 3. Aquí solamente cabe mencionar que el propósito de la agencia de cooperación, promover un debate éticamente cargado sobre asuntos relacionados con la conflictividad social, se encontró con una cierta benévola resistencia de parte de los comunicadores comunitarios. Pues era precisamente este ámbito temático el que venía en contra de su interés de comunicar. La programación de las emisoras estaba orientada hacia una comunicación de valores positivos –la cultura propia de la región, la ética cristiana, el desarrollo y la prosperidad– y evitaba tocar temas conflictivos. La lógica es evidente cuando se considera la posición expuesta de los comunicadores en la sociedad local y el bajo umbral entre formas no violentas y violentas de conflictividad en las comunidades.⁶

Hemos visto en el capítulo anterior que las profesiones de periodista y comunicador social pertenecen a las más riesgosas, y el hecho de que no hay más víctimas mortales de la violencia entre este grupo se debe principalmente a que la gran mayoría de ellos procura evitar los temas potencialmente conflictivos. Disponer de un tejido de apoyo institucional no puede garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores, pero se puede considerar una condición sin la cual no es posible realizar un trabajo publicitario crítico. Se necesita, como mínimo, el respaldo editorial del medio en el que se publican las investigaciones, además de esquemas de protección y entidades que vigilen el libre ejercicio del periodismo y denuncien las infracciones. También ayudan premios y otras formas de expresar el reconocimiento social y político. Todas estas instituciones existen en Colombia, pero funcionan mejor para periodistas profesionales de los medios comerciales que para los comunicadores comunitarios en poblaciones marginalizadas.

Con respecto a este tema, el equipo de Vokaribe se halló en un dilema. La historia de la emisora y de sus integrantes parecía indicar que era mejor evitar hablar de temas difíciles, y hacerlo sobre las víctimas del conflicto armado era definitivamente uno de ellos, mejor dicho: era el tema más difícil. Pues hablar con víctimas implicaba inevitablemente hablar de la responsabilidad de los perpetradores. Pero, por el otro lado, la misma historia de estas personas, la continuidad de sus convicciones políticas hacía que la propuesta de los cooperantes –usar la

⁶ Aquí me refiero a comunidades en el sentido de grupos humanos cuyos miembros interactúan en persona durante un largo tiempo en un cierto territorio. Sus relaciones incluyen otros seres vivos (Ingold), materialidades (Barad, Latour), paisaje y memoria (Basso). Ver una ampliación del concepto de comunidad en el apartado 2.2.

radio comunitaria para iniciar una conversación sobre el conflicto armado— fuera aceptada como un desafío. A partir de 2016, Vokaribe Radio estableció un convenio directo con DW Akademie, igual que la Universidad de Antioquia con su proyecto Hacemos Memoria, y juntos formaban parte del grupo de cuatro organizaciones socias de DW Akademie en Colombia (2016-2019). El objetivo de este programa era posibilitar la construcción de relatos de memoria con la participación de víctimas.

Para Vokaribe esto significaba aventurarse en algo nuevo, pues hasta entonces la identidad de la emisora estaba centrada en los programas musicales y algunos espacios de información sobre acontecimientos en la comunidad. La decisión de concentrar el trabajo de la radio en las expresiones culturales locales tenía un trasfondo en la historia de vida de los integrantes del proyecto. Las variadas experiencias de violencia de cada persona, en tiempos y contextos diversos, hacían que el universo de las víctimas estuviera tan cerca que no se podía hablar de él. Fue apenas en el marco del proyecto de cooperación cuando se pudieron comenzar a tocar, con delicadeza, algunas de las heridas profundas que la guerra dejó en las personas. Más adelante (2.1.2) veremos con más detalle cómo Vokaribe enfrentó esta tarea de entablar el diálogo con las víctimas del conflicto armado. Antes de ocuparnos de la participación de víctimas en la programación de Vokaribe Radio, no obstante, es pertinente hacer un excursus y dirigir la mirada a la radio comunitaria como institución. Hay que tratar de entender cómo se entrelazan normativas legales con las características sociales y culturales de la radio como organización; una organización local que por lo demás es parte de un movimiento más amplio, nacional, continental, y hasta global. Esta indagación es importante para el argumento de la presente tesis porque, como ya se insinuó en los párrafos anteriores, y se profundizará más adelante, se va cristalizando con cada vez mayor nitidez la comprensión de que la posibilidad de crear aquella memoria colectiva a contracorriente que nos interesa depende de la existencia de un tejido institucional favorable.

2.1.1 El derecho a hacer radio comunitaria en Colombia

Hemos visto, ejemplificadas en el caso de Vokaribe Radio, algunas de las particularidades implicadas en la construcción de una emisora comunitaria en medio de la transición del conflicto armado a un escenario de “postconflicto”, con todas las inseguridades,

pero también oportunidades, que esto conlleva. El contexto (social, político, histórico, cultural, económico, etc.) enmarca las posibilidades de comunicar y, por tanto, las condiciones para hacer una reflexión sobre esta misma sociedad. Pero el contexto no explica nada si no se localizan muy concretamente las relaciones de los actores; es conocida la crítica de Bruno Latour del uso del término en las ciencias sociales (Latour, 2008).⁷ Usar abstracciones como “el conflicto armado”, “las víctimas”, “los medios de comunicación”, significa hablar de una forma simplificada sobre complejísima entramados de acciones, decisiones, improntas culturales, imaginarios; pero también de materialidades, de formaciones espaciotemporales, de tecnologías, y demás. En fin, una cosa lleva a la otra y la tarea de la descripción se vuelve interminable si no se logran demarcar ciertas áreas de significado que pueden contribuir a la comprensión del tema que interesa. Es por ello que a continuación nos vamos a detener por un momento en el marco normativo e institucional de la radio comunitaria en Colombia. Esto, espero, nos permitirá comprender mejor en qué condiciones (y con qué limitaciones) una tecnología de comunicación como la radio puede ser apropiada para la construcción de memoria histórica por personas victimizadas.

Ya se mencionó que el proceso que llevó a la formulación y aprobación de una nueva Constitución Política fue también de suma importancia para la formación de medios de comunicación alternativos en Colombia. Como en otros países de América Latina, desde varias décadas se había formado un movimiento de radios comunitarias como una respuesta crítica a los medios masivos. Muchas de estas iniciativas se crearon en el seno de las iglesias con una intención de educar y de evangelizar a las clases populares. El caso paradigmático es el de Radio Sutatenza, fundada por un sacerdote en 1947 en el pueblo del mismo nombre, para alfabetizar a

⁷ En su libro *Reensamblar lo social*, Latour clarifica su posición de una forma muy concreta, a través de una conversación entre profesor y estudiante:

E.: ¿Pero siempre hay que poner las cosas en un contexto, verdad?

P.: Nunca entendí lo que significa contexto, no. Un marco hace que una pintura se vea mejor, puede orientar la mirada mejor, aumentar el valor, permite establecer la fecha, pero no agrega nada a la pintura ... Si fuera usted, me abstendría por completo de los marcos. Simplemente describa el estado de cosas en cuestión.

E.: "Simplemente describa". Disculpe que pregunte, ¿pero no es terriblemente ingenuo eso? ¿No es precisamente el tipo de empirismo o realismo contra el que nos han alertado? Creí que su razonamiento era... este..., más sofisticado.

P.: ¿Por qué cree usted que es fácil describir? Debe estar confundiendo, supongo, con sucesiones de clichés. Por cada cien libros de comentarios y argumentos, hay solo uno de descripción. Describir, estar atento al estado de cosas concreto, encontrar la única forma adecuada de describir una situación dada, a mí esto siempre me resulto increíblemente difícil. (Latour, 2008, p. 208)

los oyentes campesinos mediante el concepto, entonces novedoso, de la escuela radiofónica (Osse Rivera, 2015); en la misma época nacieron en Bolivia las radios de los mineros (Gumucio y Cajías, 1989). Más adelante, en los años sesenta y setenta, la cuestión de la educación se enmarcaba en nuevas corrientes sociales, políticas, intelectuales y religiosas. En una atmósfera en la que acontecimientos internacionales como la Revolución cubana, los movimientos anticoloniales y la revuelta estudiantil de mayo de 1968 servían de inspiración, en Colombia como en otros países de la región, surgieron nuevas líneas de pensamiento muy vinculadas a la práctica social: la Teología de Liberación, la pedagogía del oprimido, la investigación acción participación, entre otras. En esta búsqueda de formas para activar a la población campesina, obrera y estudiantil en la defensa de sus derechos en una sociedad jerárquica y clasista, hubo que plantearse el rol ambiguo de los medios de comunicación –como instrumento de poder de las clases dominantes o como herramienta para el empoderamiento de los “subalternos”–. Por consecuencia surge, junto con las corrientes críticas mencionadas, el interés de estudiar el potencial de los medios de comunicación para transformar la sociedad y, al mismo tiempo, desarrollar prácticas comunicativas emancipadoras. En círculos académicos, muchas veces vinculados con proyectos alternativos de comunicación, se generaron debates alrededor de “la comunicación para el cambio social” (Gumucio Dagron, 2011, 2012; Rodríguez, 2011) y sobre el uso de los medios de comunicación como forma de expresión de las culturas “populares” o “híbridas” (García Canclini, 1989; Martín-Barbero, 2010). En el fondo de estas nuevas percepciones de un potencial liberador de los medios yace la distinción realizada, a comienzos de los años sesenta, por el filósofo venezolano Antonio Pasquali, entre la información y la comunicación:

Información está ontológicamente emparentada con causalidad: connota el mensaje-
causa de un agente emisor que busca generar en un paciente receptor un efecto-
comportamiento inmediato o remoto. Comunicación está ontológicamente emparentada
con comunidad: connota el mensaje-diálogo que busca generar respuestas no
programadas, reciprocidad, consenso y decisiones en común. (Pasquali, 2005)

Un hito para la discusión internacional sobre los medios y la comunicación y su papel para el desarrollo de las sociedades en el norte y el sur global fue la publicación, en 1980, del

informe de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación convocada por la Unesco, mejor conocido por el apellido de su director como “informe MacBride”. El informe arroja luz sobre la inmensa desigualdad entre los países del norte y el sur en cuanto al acceso a los medios de comunicación y aboga por la democratización de la comunicación en el marco de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. En efecto, la democracia es caracterizada como una sociedad donde “los individuos podrían dejar de encontrarse en el extremo receptor y convertirse en socios activos del proceso de comunicación” (MacBride, 1993).⁸

Con el trasfondo de estos debates sobre el papel de la comunicación en la transformación de las sociedades, ante la ventana de oportunidad que se abrió en Colombia con el proceso constituyente, se formó un grupo de comunicadores, académicos, periodistas y funcionarios que generó insumos significativos sobre el área de comunicaciones, los que eventualmente se plasmaron en la nueva Constitución, específicamente en el artículo 20, en el cual “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación” (Cadavid, 2011). Claramente, declarar como derecho fundamental el acceso, no solo pasivo, sino de manera activa, a los medios de comunicación, era un fuerte soporte para los medios alternativos, ciudadanos o comunitarios.

La Constitución del 91 sentó sólidas bases para que Colombia entrara en un proceso de democratización que se suponía podría garantizar la superación de la crisis política y el conflicto. El clima del país, un clima de renovación, de ampliación democrática y de esperanza frente al desafío de la violencia. La Constitución de 1991, sin duda, fue esa caja de herramientas que permitió armar sueños y proyectos de los más diversos orígenes, entre ellos el de la Radio Comunitaria. (Osses Rivera, 2015, p. 279)

Treinta años después de su entrada en vigor, la Constitución de 1991 ha sido evaluada de forma contraria. Si bien se destaca en general su importancia como el fundamento de una

⁸ En un anexo al informe, los dos representantes para América Latina, el colombiano Gabriel García Márquez y el chileno Juan Somavia, destacaron “la trascendencia otorgada a la cuestión de la democratización” y señalaron, por otro lado, una desmesurada “glorificación de las soluciones tecnológicas” por parte de la comisión (MacBride, 1993).

transformación de la ciudad colombiana hacia una mayor democracia, no faltan las decepciones causadas por una multiplicidad de promesas hechas en el papel pero incumplidas en la realidad (Rodríguez, 2021; Uprimny, 2021, julio 5). Si bien hubo avances en la modernización del Estado, no se logró ni erradicar la violencia política de la sociedad colombiana, ni superar las formas más extremas de la injusticia social. En todo caso, para emisoras comunitarias como Vokaribe, la Constitución de 1991 sentó la base jurídica, ampliada y concreta a través de un despliegue de normativas en los años siguientes (los decretos 1446 y 1447 de 1995, el Decreto 1981 de 2003, la Ley 1341 de 2009 y la Resolución 415 de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) (Cadavid, 2011; Ramos Maldonado, 2020). De esta manera, las radios comunitarias pudieron constituirse legalmente como emprendimientos mediáticos sin fines de lucro y como

un servicio sin ánimo de lucro, participativo y pluralista, orientado a satisfacer necesidades de comunicación en el área de servicio objeto de la concesión y facilitar el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes a través de programas radiales realizados por distintos sectores de la comunidad de manera que promueva el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2023, noviembre 20)

Con un decreto presidencial de 1995 comienza la adjudicación de licencias para la radiodifusión comunitaria, un proceso complejo que demoró varios años pero que tuvo buena acogida: más de 600 organizaciones comunitarias obtuvieron una licencia. Por primera vez, el sueño de la democratización de los medios parecía tener una oportunidad de volverse realidad. Académicos, activistas y comunicadores expresaban que ya en adelante los medios no servirían únicamente como instrumento de información, de adoctrinamiento o de manipulación de las masas, sino más allá como espacios para el intercambio libre entre sujetos que se apropian de su destino:

lo que aparece es el panorama de los medios ciudadanos, entendidos como aquellos medios que facilitan procesos de apropiación simbólica, procesos de recodificación del entorno, de recodificación del propio ser, es decir, procesos de constitución de identidades fuertemente arraigadas en lo local, desde dónde proponer visiones de futuro sostenibles, verdes; versiones sí locales, pero no provincianas; es decir, enredadas, conectadas con lo global. (Rodríguez, 2011)

Por supuesto, el nuevo marco legal no fue una condición suficiente para posibilitar la creación de medios ciudadanos, independientes, participativos. De hecho, como señala Cadavid, las nuevas condiciones institucionales son tanto el resultado de políticas públicas como de movimientos sociales y del “surgimiento de nuevos sujetos, nuevas problemáticas, nuevos enfoques” (Cadavid, 2011).

Luego de tres décadas, sin embargo, el balance es mixto. Si bien los medios comunitarios se establecieron como un elemento fijo del paisaje de medios en Colombia, sus condiciones son precarias en varios sentidos. Un reciente estudio (Vega Casanova, Tapias Hernández y Pérez Quintero, 2019) resalta que a pesar de diversos programas de formación implementados por el Estado Colombiano, algunas ONG y agencias de la cooperación internacional, a la gran mayoría de las asociaciones de radiodifusión comunitaria formalmente constituidas les resulta difícil crear estos espacios de interacción entre miembros de su comunidad local. Las juntas de programación, que en teoría deben garantizar la participación de una amplia gama de sectores y organizaciones sociales en la programación de la emisora, en realidad muchas veces son percibidas como una mera condición formal con la cual hay que cumplir para mantener la licencia.

“No hay registros de seguimiento, evaluación o monitoreo de la parrilla de programación o algún asunto editorial o político. Posterior a los encuentros sólo quedan actas con los listados de varias personas quienes aprueban la programación. Tampoco se menciona que presenten propuestas de programas radiales, ni se discuten los existentes”, constatan los investigadores, para concluir que el constructo normativo de la radio comunitaria impide, o por lo menos dificulta, la participación ciudadana: “Si finalmente es el director de la emisora quien aprueba las propuestas que llegan de la JP, el papel de ésta no pasa de ser un requisito técnico” (Vega

Casanova *et al.*, 2019). Algunos autores dibujan un cuadro aun más negativo de la realidad de los medios comunitarios:

Lo comunitario en la radio se adopta como una etiqueta poco vinculada con su sentido democrático, participativo e incluyente; pese a que en los últimos años, algunos países de América Latina han renovado sus marcos normativos y políticas de comunicación y avances desiguales en legislación y derecho a la comunicación, mientras en Colombia aún está pendiente un cambio profundo en este sentido. (Martínez y Ortega, 2018)

Si bien la introducción de nuevas tecnologías ofrece oportunidades para el fortalecimiento de las radios (por ejemplo, aplicaciones de software libre), falta capacitación para llevar estas a un uso eficiente (Villa, Pinilla y Alvarado, 2021). En términos generales, la capacitación en áreas como gestión cultural, administración, producción radiofónica, uso de TIC, entre otras, es fundamental para la consolidación de los medios comunitarios. Ahí las agencias del Estado (en Colombia ha sido importante el apoyo del Ministerio de Cultura para las radios comunitarias) y de la cooperación internacional (entidades como DW Akademie, World Association of Christian Communication, USAID, Unión Europea, entre otras) es fundamental, ya que las emisoras no disponen de fondos para ello. Sin embargo, estas ofertas llegan de manera esporádica, según las posibilidades y los intereses coyunturales de estas agencias y no tanto según las necesidades de los medios. En el caso de Colombia, el compromiso de la comunidad internacional con la construcción de paz conllevó el interés en estrategias participativas de comunicación.

En este contexto se desarrolló el proyecto de DW Akademie (2016-2019), como una línea de trabajo de la cooperación alemana con la sociedad civil colombiana. La Unión Europea, por su lado, ha apoyado iniciativas en zonas afectadas por el conflicto armado, por ejemplo los programas de comunicación llevados a cabo en el marco de los Laboratorios de Paz (Cadavid, 2011) y el proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia realizado por la red de radios comunitarias del departamento de Santander (Vega Casanova *et al.*, 2019).

Si bien este tipo de programas significan un aporte económico para las emisoras, que les permite pagar modestos honorarios a sus colaboradores e intensificar su interacción con la comunidad local, el impacto suele ser de tiempo limitado. Como consecuencia, muchos medios

comunitarios viven temporadas de florecimiento que alternan con otras de contracción y de un relativo estancamiento. Su sostenibilidad económica es precaria; muchas emisoras corren el peligro de perder sus licencias porque no logran recaudar suficientes fondos para cumplir con las contribuciones obligatorias, por ejemplo, el pago de los derechos de música. Generar ingresos es un desafío constante y requiere tanto de capacidades como de creatividad. En este sentido, la normatividad pone a las emisoras comunitarias en una desventaja si se compara la situación con aquellas de carácter comercial. Mientras estas se financian por publicidad y pueden aumentar sus ganancias cuando logran ampliar sus audiencias, esta vía les queda cerrada a los medios comunitarios, porque las licencias otorgadas limitan el alcance técnico de las emisoras a un espacio muy restringido (una aldea, un barrio) y por tanto comprar pauta publicitaria resulta poco atractivo.

A esto se suma la dificultad de obtener datos sobre las audiencias. Si bien se entiende, que los programas son escuchados por la comunidad local, las emisoras no disponen de instrumentos para medir la recepción. Para contrarrestar este déficit, se han desarrollado metodologías interactivas que permiten, mediante talleres, encuestas y otras actividades entrar en un diálogo con personas y organizaciones locales (Valderrama y Osses, 2019). En Vokaribe Radio se desarrollaron distintas metodologías de acercamiento para poder entrar en diálogo con comunidades locales y para incentivar la participación. Por ejemplo, se realizaron programas de conversación desde espacios públicos (“la radio a la calle”) y se creó “la reporteración”, una intervención lúdica en la cual jóvenes, niños y niñas de barrios populares son apoyados para ser reporteros locales. También se realizó un rastreo de organizaciones sociales que permitió conocer y convocar a los distintos grupos alrededor de la emisora, ofreciéndoles capacitación en producción radiofónica y espacios para crear sus propios programas.

Sin embargo, llevar a cabo este tipo de actividades supera muchas veces la disponibilidad de tiempo y de recursos de las personas que integran el equipo de la radio (frecuentemente, la falta de dinero para poder pagar el transporte urbano constituye un obstáculo). En suma, las condiciones precarias en las cuales se desarrolla el sector comunitario de medios son la causa principal de su vulnerabilidad, tanto en cuanto a la sostenibilidad económica como en lo que refiere a su legitimidad frente a la ciudadanía y la seguridad de sus colaboradores.

Por todo lo anterior, el reparto más equitativo del uso del espectro electromagnético entre medios comerciales, estatales y comunitarias ha sido una demanda de insignia del movimiento

de las radios comunitarias. En algunos países de la región, el ascenso al poder de gobiernos de izquierda en la primera década del 2000 produjo cambios fundamentales en la política de medios. En Argentina y Ecuador, por ejemplo, se introdujeron leyes que establecieron la división del espectro en tres tercios, poniendo las emisoras comunitarias en un nivel con las comerciales. Sin embargo, lo que se veía bien en el papel, finalmente no se tradujo en un refuerzo contundente para las emisoras comunitarias, pues este no era el interés prioritario de estos gobiernos, sino más bien se trataba de debilitar los medios del sector privado desde donde se articulaba la oposición. Con el retorno de gobiernos de centro-derecha o derecha al poder, como era de esperar, las medidas se revirtieron, dejando el mercado de la información nuevamente en manos de la empresa privada (Binder y García Gago, 2020).

En vista de las múltiples dificultades implicadas en el proceso de construcción de una emisora comunitaria, muchos colectivos de comunicaciones optan por la vía digital. De hecho, hoy es mucho más fácil crear una emisora que transmita sus programas vía *streaming* por internet que una radio tradicional. Sin embargo, también hay una serie de desventajas; en primer lugar está el riesgo asociado al uso de las grandes plataformas monopólicas en internet: una pérdida de la autonomía y del control sobre los contenidos (Rendón, 2022). Segundo, mientras internet posibilita, en teoría, una difusión sin límites, la radio comunitaria es un espacio social real, donde las personas se pueden encontrar, dialogar, aprender y participar activamente. Esto se puede observar muy bien en el caso de Vokaribe Radio que tiene su estudio instalado en un centro comunitario y que abre sus micrófonos tanto para niñas y niños que usan la biblioteca pública como para adultos mayores que viven en el vecino hogar de ancianos. Asimismo, la radio es parte de expresiones de la cultura local como el carnaval, los grupos musicales, el hiphop.⁹ Con reporteros locales en los barrios, transmisiones desde la calle y anuncios locales establece una conexión directa con el territorio y sus habitantes. De todas formas, hoy en día la gran mayoría de las emisoras comunitarias combina la transmisión por onda hertziana con las posibilidades de interacción con sus audiencias que ofrecen las redes digitales. Lo cierto es que

⁹ La Asociación de Radiodifusión Comunitaria Vokaribe es concebida hoy como un espacio vinculado a un proyecto cultural y artístico, que está firmemente arraigado en la dinámica de la creación y la producción cultural en el suroccidente de Barranquilla. Una característica que sobresale en la labor de esta asociación es la de vincular las sonoridades y expresiones estéticas propias de la zona al ejercicio mediático y a proyectos continuos de investigación. Ritmos como la champeta, expresiones propias de la comunidad afro, o aires propios del carnaval, entre muchos otros, son elementos constantemente trabajados, valorados, resignificados y estudiados en la cotidianidad de la familia de Vokaribe, como la llaman sus gestores (Osses, 2002).

la tecnología no es el factor decisivo. Tampoco son las licencias del Estado las que ponen a funcionar el medio o lo que define su valor para sus usuarios. La relevancia de un medio comunitario no importa por cuál canal se transmite, depende más bien de la participación de los miembros de la comunidad a la que pertenece y que constituye su audiencia.

Queda evidente, con todo, que para poder operar como portadores y dinamizadores de la memoria colectiva, las emisoras comunitarias requieren de un tejido de instituciones que posibiliten la acción comunicativa. En el caso de Vokaribe confluyeron, en distintos momentos y en distintos grados, acciones y actitudes tomadas por instituciones tan diversas como los ministerios del Gobierno nacional, la alcaldía local, la asamblea constituyente, las universidades, la cooperación internacional, el carnaval y muchas otras. De gran valor es el intercambio de experiencias con otros proyectos similares; para Vokaribe, por ejemplo, la interacción con medios comunitarios como la emisora Suba al Aire, de Bogotá, y el Colectivo de Comunicaciones Montes de María fue importante en la fase inicial. A través de la participación en el proyecto de DW Akademie, se establecieron relaciones con medios comunitarios en otros países de la región como México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia.

Podemos resumir que, en su larga trayectoria como proyecto, Vokaribe Radio ha experimentado los altibajos de la comunicación comunitaria. Es la persistencia de sus integrantes, en primer lugar, junto con sus convicciones políticas, su disposición de ajustarse a realidades difíciles y su creatividad, lo que ha permitido que este proyecto continúe. Hay actores y factores que fomentan y otros que frenan el suceso –la institucionalidad, intereses políticos y económicos, la violencia, la cooperación–. Pero cada emprendimiento social y comunicativo de este tipo se construye con base en un impulso fundamental, la imaginación de algo nuevo, de una sociedad distinta. De esto vamos a hablar más adelante.

Antes de reflexionar más detenidamente sobre significados de la comunicación, lo comunitario y la imaginación, es pertinente orientar la mirada hacia la práctica. Lo que nos debe interesar ahora es cómo se manifiesta concretamente la participación de personas victimizadas en la emisora Vokaribe y cuáles son las prácticas que se podrían calificar como un empoderamiento de ellas. Ya hemos mencionado que, debido a la delicada situación de algunos de los fundadores de la emisora como reinsertados de la guerrilla del EPL, hablar del conflicto armado, de los derechos humanos y de las víctimas no fue un asunto fácil. A pesar de ello, se produjeron y emitieron varios programas acerca de estas temáticas, algunos de ellos en la

temporada que interesa en este estudio. Uno de estos programas, titulado *Palabra justa*, se examinará a continuación. Es ahí donde la emisora conscientemente abre un espacio en su programación para las víctimas del conflicto armado.

2.1.2 Análisis del programa de radio Palabra justa

“Hola, soy Hernando Díaz Arroyo, mi madre es Rosario Arroyo Gómez, mi padre es Hernando Díaz Otero. Mis padres están ahora mismo separados. Entré a prestar servicio en el batallón Vergara y Velasco en 1992. En 1993 me desaparecieron”. Con estas palabras enunciadas en primera persona comienza un capítulo del programa *Palabra justa*, emitido por Vokaribe Radio en 2018 con ocasión del día internacional de las víctimas de desaparición forzada (Vokaribe Radio, 2018). Son las palabras de una persona ausente, de un soldado que no ha vuelto a su casa luego de prestar el servicio militar. Son palabras imaginadas, una carta del desaparecido a su madre, escrita y leída por ella misma. Dice Hernando, con la voz de su madre Rosario, transmitida por las ondas de la radio:

Es duro para mi madre durante 25 años no saber qué pasó conmigo, es tremendo para ella y para las familias que tienen familiares desaparecidos, no saber qué sucedió. Por lo demás fui un muchacho feliz, un muchacho que tenía muchas esperanzas, quería un futuro bien hermoso para mi madre, para mí y mi familia.

¿Se trata de un simple truco literario, para hacer la historia más interesante? Aunque no conocemos el motivo de Rosario, esto no parece probable. Más bien, este relato suena como parte de un diálogo interno que la madre ha sostenido durante el largo tiempo de la ausencia del hijo desaparecido, cuya muerte nunca fue oficialmente confirmada. Muchos testimonios han demostrado que la perduración de la incertidumbre y la imposibilidad del duelo hacen que esta forma de asesinato sea particularmente cruel para los familiares de las víctimas. Una base de datos construida por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica registra 60 630 casos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado en Colombia en los años de 1970 a 2015. El informe *Hasta encontrarlos. El drama de*

la desaparición forzada en Colombia habla de los múltiples daños causados en los sobrevivientes por esta forma de violencia, catalogada como crimen de lesa humanidad.

La desaparición forzada se inscribe en un presente continuo atravesado por la angustia y el sufrimiento, la situación no ofrece los factores para su transformación puesto que no permite el examen de la realidad material en que el sujeto amado ya no existe más, lo que instaura dificultades para darle continuidad a la vida sin el otro. (CNMH, 2016, p. 278)

Parece que, a través del relato en primera persona, Rosario quiere reivindicar y afirmar la presencia de su hijo, cuya existencia fue borrada violentamente y, subsecuentemente, negada por las autoridades estatales. Desde el no-lugar donde yacen los desaparecidos, Hernando describe el calvario de su madre sobreviviente: la búsqueda frustrada, la burla de los representantes de un Estado que se resiste a asumir la responsabilidad por crímenes cometidos en su nombre. Así continúa la carta imaginada:

A mi madre le dijeron que me habían trasladado a Riohacha y después el capitán Abondano Micán le dijo que estuviera tranquila que yo estaba bien, que estaba en otra base. En agosto de 1993 me tocaba salir y no llegué a casa, mi madre se preocupó mucho y volvió donde el capitán Abondano. Él dijo después que no me conocía, después de haberle dicho a mi madre que yo estaba bien.

Como a muchos otros familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia, a Rosario le ha tocado vivir con la incertidumbre y luchar por conocer la verdad. “Yo siempre quiero saber qué pasó con él, qué hicieron con él, dónde está”, dice en Vokaribe Radio, cambiando del relato en primera persona, de la voz de su hijo a su propia voz, al ser entrevistada por la conductora del programa. “Hasta que yo no tenga sus restos, que los pueda yo enterrar, no voy a descansar, no voy a tener paz. He tenido pensamientos de que lo torturaron, o sea, muchas cosas que se le vienen a uno a la mente y duro para uno, muy, muy duro”. En 2021, en plena pandemia de covid-19, Rosario Arroyo falleció sin conocer la verdad sobre la desaparición de su hijo y sin poder haberlo sepultado.

Para reivindicar sus derechos, y ante la falta de una institucionalidad que responda a sus reclamos de una manera eficiente, los familiares de víctimas de desaparición forzada tienen que recurrir a la autoorganización y concebir estrategias para adelantar su causa. Tienen que buscar el apoyo de personas influyentes como abogados o políticos y participar en acciones públicas, asambleas conmemorativas y marchas para llamar la atención de la ciudadanía sobre la persistente injusticia. Otra forma de luchar por la verdad es compartir sus historias y articular sus demandas a través de los medios de comunicación. Pero esto requiere de ciertas habilidades comunicacionales y de un conocimiento del funcionamiento de los medios.

En primer lugar, no es fácil acceder a los micrófonos de las emisoras, sobre todo a las comerciales. Para los noticieros de los programas de mayor divulgación los acontecimientos relacionados con la violencia y el conflicto armado caen en el rubro de la nota roja, sensacionalista. Habitualmente, estas notas se limitan a reproducir los partes de Policía y Ejército y las declaraciones de funcionarios. Si es que aparecen los familiares de las víctimas directas, lo hacen en estado de total indefensión. Su único rol es agregar con sus lágrimas un toque de emoción al producto. Esta manera de informar, por supuesto, no sirve para activar las audiencias. En vez de analizar la situación con distancia crítica se repite una estructura narrativa organizada alrededor de clichés. El resultado es una representación plana de las víctimas y los sobrevivientes como personas pasivas (Bonilla, 2015). Es, por tanto, un gran reto para las familias de las víctimas aprender a usar los medios de una manera activa, pues nadie se lo enseña. Solos deben aprender que la radio no solo sirve para entretenerse con música y para escuchar noticias, sino que también puede ser un lugar para dar su testimonio. Así que muchas veces el primer acercamiento a los medios de comunicación es motivado por la urgencia de buscar a un familiar que fue víctima de desaparición forzada, dar a conocer su nombre, la fecha y el lugar del hecho, siempre con la esperanza de que algún oyente pueda tener información sobre lo ocurrido, incluso dar pistas para encontrar a la persona desaparecida.

Yomira Espinosa, otra entrevistada del programa *Palabra justa*, cuenta que luego del asesinato de su padre, un líder de desplazados en Barranquilla, ella comenzó a utilizar los medios de comunicación porque no se sentía apoyada por las instituciones del Estado.

La verdad nos tocó solas, no hubo un acompañamiento estatal, nosotros nos registramos en el Registro Único Nacional de Víctimas con nuestro número de cédula y quedó ahí.

Nos tocó mirar por radio, por internet qué se podía hacer, qué quería decir eso de víctimas, qué podíamos hacer. (Pardo, 2015a)

Es decir, la radio fue apropiada por los familiares de las víctimas, primero, como un medio para comprender su propia situación y, luego, como un instrumento para cambiarla. En la entrevista, Yomira da otro ejemplo de las enormes dificultades con las que personas victimizadas se ven confrontadas al reclamar reconocimiento y reparación, especialmente cuando pertenecen a los llamados estratos bajos de la sociedad.

Yo soy de pronto muy preguntona y muy metida y fui a la Unidad de Víctimas y dije yo soy víctima y ¿qué tengo que hacer? Yo quiero hablar, yo quiero que me digan. Me remitieron a un teléfono de un abogado en Bogotá que estaba llevando el proceso. Lo molesté creo que tantas veces, que me atendió la llamada y me dijo: ¿Será que usted es capaz de leer mil páginas que tiene la sentencia? Le digo: dígame, mándemelas que yo creo que soy capaz con la ayuda de un diccionario y de Google. Y lo hice. No hubo nunca un acompañamiento, nunca nos dijeron qué es la ruta. (Pardo, 2015a)

En este proceso de preguntar, de insistir, de leer y de hablar en la radio y en otros espacios, Yomira Espinosa se formó como activista, asumiendo un rol de vocera para muchas otras víctimas. Durante un acto público de perdón realizado en 2015, ella tuvo la oportunidad de dirigir sus palabras al responsable del asesinato de su padre, un exmilitar que se había vuelto jefe de los paramilitares. Frente al victimario, Yomira habló en primera persona plural; su voz se convirtió en una voz colectiva de las víctimas, en la voz de una comunidad de memoria:¹⁰

Todos ellos son víctimas de tus actos y nosotros todos rotulados también con ese calificativo que no pedimos llevar y que cargamos al principio con rabia, luego con frustración y ahora con valor. Porque no solo arrebataste vidas, sino que cambiaste para siempre las nuestras, dejándonos suspendidos en el tiempo, sumergidos en un espantoso letargo del cual estamos intentando salir. (CNMH, 2017, p. 98)

¹⁰ El término de comunidad de memoria corresponde a la *Erinnerungsgemeinschaft* de Jan Assmann (2011).

Cabe señalar que el testimonio de las víctimas, más allá de ser una mera expresión del sufrimiento, puede adquirir una fuerza mayor cuando se le agrega información sobre lo acontecido. Acompañado por una elaboración periodística, el relato personal hace posible una comprensión tanto de la dimensión humana como política del crimen. Por otro lado, un programa de radio puede servir para difundir consejos prácticos y para motivar a oyentes que han sufrido situaciones similares a salir del anonimato y a buscar el contacto con instituciones y organizaciones que defienden los derechos de las víctimas.

En el capítulo de *Palabra justa* sobre la desaparición forzada, por ejemplo, Rosario Arroyo, la madre del soldado desaparecido, está acompañada por tres otras invitadas. Dos de ellas hacen parte, como ella misma, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, MOVICE;¹¹ la tercera es asesora de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, una entidad estatal. Conversando en el programa de radio recorren juntas el camino institucional que las víctimas pueden seguir para obtener el apoyo tanto del Estado como de las organizaciones no gubernamentales. Al final del programa de Vokaribe Radio, Rosario Arroyo hace un llamado a la resiliencia de otras víctimas que pueden estar oyendo el programa:

Mi mensaje es no cansarse buscar hasta el final, hasta tener respuestas, no darnos por vencidos. Sí, es doloroso, terriblemente doloroso, me quiebro cuando cuento, ¿no?, pero he tratado de fortalecerme y no perder pues la necesidad de seguir en la búsqueda y siempre estaré buscando y esas personas que tienen personas desaparecidas, pues que no se cansen, que busquen la manera de comunicarse. (Pardo, 2018)

El mensaje de Rosario evidencia que para ella la condición de víctima ya no es el destino individual sino una injusticia social que afecta a muchos y que hablar de ello le otorga un cierto poder, una posibilidad para recuperar su dignidad y la de aquellos otros que también llevan el estigma de la víctima. Un miembro de la emisora Vokaribe lo expresa así:

¹¹ El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado de Colombia (MOVICE) es una coalición de organizaciones de víctimas cuyo objetivo principal es “reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado sea por su acción u omisión, en acciones perpetradas por miembros de la fuerza pública o fuerzas paraestatales o paramilitares que actuaron bajo el auspicio, respaldo y connivencia del Estado colombiano en diversas zonas del país” (presentación disponible en: <https://movimientodevictimas.org/>).

Esas historias por ejemplo que posibilitan no olvidar, que posibilitan seguir contando lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, para que haya justicia, para seguir insistiendo en la búsqueda, todo eso solamente se puede hacer cuando hay un empoderamiento y cuando hay una aceptación de que tú puedes aportar algo para transformar esa realidad. Entonces ahí te ubicas en otro lugar que no es solamente el del dolor, sino también desde donde tú puedes intentar transformar algo, aportar algo, hacer memoria, aportar tu voz a la construcción de una historia diferente, un relato diferente.¹²

Hablar desde la condición de víctima a una audiencia de radio, por lo tanto, puede ser considerado como una oportunidad para trascender la mera reivindicación de un derecho individual y motivar a muchas otras personas a hacerlo de manera colectiva. Entonces, el testimonio adquiere un carácter político que va más allá de la necesidad terapéutica de conocer la verdad para poder superar el trauma sufrido. Pero antes de que esto pueda suceder, es necesario comprender y asumir la propia condición de víctima, reconocer el hecho de haber sido victimizado, y luego, ser capaz de formular la demanda por justicia, verdad y reparación. Yomira Espinosa describe cómo sucede esta conversión:

Es un proceso. Primero cuando a uno le colocan el cartón de víctima, el título de víctima, uno no entiende cómo, por qué y cuándo, es un proceso de aceptación, es un proceso que pasa del miedo al entendimiento, luego a la tranquilidad y luego a la fortaleza para reconocer que somos víctimas.

Nunca se nos dio un apoyo, todo lo que nos enteramos que teníamos que hacer fue por iniciativa propia, se han tocado puertas, se llegó a todos los estamentos e instituciones, desde la Defensoría hasta la Unidad de Víctimas para saber por qué somos víctimas, qué hacemos como víctimas, hasta dónde llega el hecho de ser víctima. (Pardo, 2015a)

Se puede llegar a la conclusión, por tanto, de que las víctimas empoderadas a través de procesos organizativos, que son la consecuencia de su búsqueda de superar una condición de extrema injusticia, también tienen la capacidad (y la necesidad) de transformar a los medios,

¹² Entrevista a P. R., miembro de Vokaribe Radio, realizada el 14.10.2021.

siempre y cuando estos estén abiertos a una participación de este grupo de personas. En 2019, cuando se emitió el programa sobre desaparición forzada, *Palabra justa* estaba en la quinta temporada y Vokaribe ya había producido 25 programas sobre diversos asuntos relacionados con los derechos humanos. En cada programa se hablaba de un asunto de importancia en la región y del que se suponía era de interés vital para los oyentes de la emisora. Así se trataba una gran diversidad de temas, siempre desde el ángulo de los derechos humanos: la minería extractiva, el derecho a la salud, los derechos de las minorías étnicas, la persecución de líderes sociales, la estigmatización de los recicladores de la calle, sobre las reivindicaciones del movimiento LGBTIQ+ y otros más. El formato siempre era el mismo: una moderadora, Belén Pardo del equipo de Vokaribe, conversaba con un invitado, o a veces con varios, la duración variaba entre media hora y una hora. En muchos de los programas se hablaba de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, de la persecución a líderes sociales y a las personas que expresaban su diversidad sexual, sobre la implementación del Acuerdo de Paz y sobre la exclusión de los habitantes de barrios populares de los servicios urbanos. Como era natural, había que nombrar las diversas formas de victimización implicadas con cada tema. Generalmente, las personas invitadas eran activistas o investigadores académicos, así que hablaban *sobre* los asuntos de derechos humanos, pero no desde una perspectiva de víctimas.

Solo en la cuarta temporada de *Palabra justa*, en 2018, el esquema cambió. Ahora cada programa era moderado por un equipo de tres personas. Belén Pardo, la directora del programa, fue acompañada por una compañera de la radio, Patricia Rendón, y por José Antequera, hijo de un político de izquierda asesinado en Barranquilla en los años ochenta. Por primera vez, entonces, una persona victimizada, además activista por los derechos de las víctimas,¹³ hacía parte de la conducción del programa. En esta temporada se emitió la entrevista con Yomira Espinosa, mencionada más arriba. A continuación, reproducimos un pedazo del diálogo entre dos víctimas que se desenvuelve en el programa.

¹³ Antequera es fundador del colectivo Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad y dirige el Centro de Memoria de Bogotá. El asesinato de su padre, dirigente del partido Unión Patriótica, fue ejecutado por paramilitares. En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por el exterminio de la UP.

José Antequera: “Tú dices ‘yo soy una sobreviviente’, que es algo más que ser víctima, es algo más que simplemente el hecho de violencia, significa un hacer algo con lo que te hicieron. Cuéntanos un poco de manera muy resumida, bueno, tú como sobreviviente, no qué te pasó, porque esa pregunta no me parece que sea la pertinente, sino qué quieres tú que sepa la gente de ti, porque eres sobreviviente eres dueña de tu historia, ¿no?”

Yomira Espinosa: “Sí. yo quiero primero que sepan que soy víctima porque el señor Edgar Fierro mató a mi papá, Miguel Espinosa Rangel, ahí comenzó todo el proceso, quiero que sepan que no era un delincuente, que era una buena persona, que trabajaba por los demás, quiero que sepan que, aunque ha pasado mucho tiempo, todavía tenemos un vacío, hace muchos años”.

Desde el inicio, el entrevistador pone su contraparte en una posición empoderada en el discurso. La presenta como sobreviviente, “algo más que ser víctima”, una persona que “hace algo con lo que le hicieron”, en otras palabras, se empodera de su propia historia y, por tanto, de su vida. Además, con una sensibilidad que tal vez es natural de alguien que ha estado en la posición del otro, reformula la pregunta obvia, la pregunta periodística “¿qué te sucedió?”, de tal manera que otra vez le devuelve la agencia —el control de la situación— a la otra persona: cuéntanos *tú qué quieres* que sepamos de ti.

Y entonces la respuesta de la víctima entrevistada por la víctima entrevistadora deja muy claro qué es lo más importante que se diga en este programa: primero, anunciar el nombre del responsable del crimen, segundo nombrar el padre asesinado y afirmar que él fue una buena persona. En el transcurso del programa, donde también participa como invitado Rodrigo Triana, coordinador regional del Centro Nacional de Memoria Histórica en Barranquilla, se comienza con un resumen de los hechos violentos ocasionados por los paramilitares en la región y con los nombres de los responsables. Luego Yomira relata su largo recorrido en búsqueda de la verdad y el abandono del Estado. Es significativo, por ejemplo, que ella se entera de la identidad del perpetrador del crimen por un periodista y no por la Fiscalía, a quien le hubiera correspondido informar a la familia del muerto. También cuenta cómo fue llevada a una audiencia pública donde enfrentó al asesino de su padre: “Siempre nos llevaban como ganado al matadero, ‘hay una reunión, hay una reunión, lleve la cédula’, nunca nos explicaban para qué”. El

excomandante paramilitar Edgar Fierro iba a “dar un perdón”, se les explicó, y esta inversión semántica es significativa porque una vez más les quita la agencia a las víctimas, pues son únicamente ellas las que pueden dar el perdón, el criminal lo tiene que pedir. Yomira cuenta cómo aprovechaba la situación para confrontar al paramilitar: “Yo no lo conozco, usted nos hizo daño, ¿qué clase de persona es?, nosotros vamos a seguir adelante, ¿usted puede seguir adelante?, ¿puede mirar a su familia a los ojos?”. Evidentemente, ella no estaba interesada en perdonar. Lo que quería era comprender.

Afirmar que ciertos crímenes son inexplicables equivale a declararlos imperdonables, dice Ricœur (2010, p. 615). El perdón solo es posible, se podría decir a la inversa, cuando hay una explicación. Para Yomira, de todas formas, el encuentro fue positivo. No porque hubiese recibido una explicación sino porque pudo confrontar el perpetrador con sus preguntas. “Yo leí parte de las palabras que tú pronunciaste ese día”, dice Patricia Rendón, la otra entrevistadora de Vokaribe, “y fue inevitable realmente sentirme al lado tuyo porque fue muy, muy del corazón, muy desde tú ser mujer, muy desde tú ser hija”. “Y yo me sentí liberada”, dice Yomira, “porque me quitó un peso de encima y mucha gente coincidió conmigo y me dijo: ¡Eso era lo que exactamente yo sentía!”

Cuatro años más tarde, durante el trabajo para esta tesis, me encontré con Yomira para una entrevista. Me contó que siempre cuando algún medio le solicitaba una entrevista era una situación incómoda para ella, le producía cierto temor. En Vokaribe fue distinto, se sentía más acogida. Ya conocía a las personas que la entrevistaban. Con Belén Pardo se había encontrado en reuniones del colegio, pues sus hijos estudiaban juntos. Ahí se ve el potencial de la radio comunitaria: la cercanía de las personas en la localidad hace más fácil comunicar. Sin embargo, todavía le daba miedo hablar de lo que le aconteció a su padre. Toca sobreponerse para poder hablar en la radio, pero hacerlo le ha resultado una experiencia liberadora. Además, me contó, todas estas conversaciones y charlas le han servido también para educar a sus hijos, así que cuando en la escuela se tratan temas relacionados, ellos están mejor preparados, “para que ellos aprendan con las mismas vivencias de uno y la proyecten hacia los demás niños, entonces yo creo que eso va a estar ahí siempre”.

Al cerrar esta edición del programa *Palabra justa*, José Antequera recordó que el problema de las víctimas no es solamente de las víctimas:

Toda esta sociedad tiene que involucrarse en la reconstrucción de este país, ese es un imperativo que tiene que partir de la memoria, de la conciencia, de la guerra que hemos vivido y para eso están estos testimonios. Yomira no está aquí contándonos su testimonio para que la gente se sienta conmovida o se ponga a llorar, lo está haciendo porque se trata de movilizar las fuerzas que tiene la gente, de eso se trata.

Poder hablar durante una hora en un programa de radio ha sido algo excepcional para Yomira, y lo agradeció.

Estos espacios verdaderamente son difícilmente difíciles y liberadores. Yo al principio no hablo mucho porque me pongo muy nerviosa y luego después respiro y uffff...! [risas] Quiero agradecer la oportunidad de hablar, quiero decirles que lo que piensan y las acciones de cada uno son importantes, no piensen que porque son una o dos personas no importa, sí importa, documéntense, lean, pero sobre todo hablen, ese es mi mensaje.

Finalmente, lo que se dice en un programa de radio solo puede ser una pequeña parte de lo que se debería decir y muchas cosas que se podrían haber dicho quedan sin expresar. Esta vez, por ejemplo, supieron algo de la historia de Yomira, un poco de la de José, pero no se enteraron de que Patricia también fue victimizada, tal vez no de forma directa sino indirecta. Su expareja, el padre de su hija, fue asesinado por fuerzas del Estado. Pregunté a Patricia Rendón si alguna vez había pensado en aprovecharse de la radio para contar su propia historia y me respondió que hasta entonces no había hablado en público del tema.

Nunca lo he vinculado directamente a mi historia de vida, lentamente uno sí se da cuenta que efectivamente hace parte de esa historia... Entonces la conexión con el tema de la guerra a partir del caso de mi hija y el mío también –hay muchas más historias en mi historia de vida– me pone como en un lugar de decisión consciente de por qué sí yo desde la radio quiero que esos temas los trabajemos y que además tengamos los elementos suficientes para abordarlos. No como quien anuncia algo y no hay un proceso que haga seguimiento a eso o que... sino que sea un componente transversal en lo que nosotros estamos aportando como medio de comunicación.

Aquí vemos que, para poder hablar de la memoria de las víctimas, un marco institucional es necesario, pero no es suficiente. También requiere de una disposición personal, psicológica. Tener los elementos para poder abordar estos temas, dice Patricia Rendón. Ella y Belén Pardo pudieron participar en un curso de diplomado sobre memoria histórica impartido por el grupo Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. El diploma ha sido ofrecido más de una docena de veces y más de trescientas personas han participado y se capacitaron en el tema de la memoria histórica. Esta formación también ha dejado su huella en Vokaribe.

Asumir la tarea pedagógica de hablar en público desde la posición de víctima es difícil, aun si el medio para hacerlo –en este caso, la radio– está a la mano. Para José Antequera, adoptar ese rol significaba tal vez algo como tomar posesión del legado de su padre, una figura pública. Cuánto más difícil debe ser abrir el recuerdo personal y hacerlo público para que forme parte de una memoria colectiva, cuando el caso es uno de aquellos miles que quedaron en el anonimato.

2.1.3 El concepto de comunidad

Como demuestran los casos de Vokaribe Radio y de los otros medios mencionados en apartados anteriores –Granada Stereo, Sonsón TV, Hacemos Memoria–, es posible crear espacios para conversar sobre la guerra desde la perspectiva de las víctimas. No son los únicos espacios donde esto es posible, también algunos (pocos) órganos tradicionalmente establecidos de la prensa nacional hacen aportes importantes a la construcción de memoria con la participación de víctimas. En primer lugar, está el periódico *El Espectador*. Su audiencia sin embargo es distinta; prácticamente se limita a las élites intelectuales de los grandes centros urbanos. No hay que olvidar que entre ellos también hubo víctimas: en 1986, Guillermo Cano, director del periódico, fue asesinado por el cartel de Medellín. Pero para la gran mayoría de las víctimas, que son de origen campesino u obrero, la radio comunitaria puede ser una opción más cercana, más asequible para compartir su experiencia y articular sus reivindicaciones.

¿Pero qué, exactamente, significa este término de lo comunitario en cuanto a los medios, la comunicación y la memoria? ¿Puede *lo comunitario* en los medios ofrecer una vía comunicacional para empoderar a aquellas personas marginalizadas por la guerra? ¿Tiene, acaso, sentido hablar de una comunidad de víctimas?

Si volvemos, por un momento, a asumir la mirada desde Alemania, el término comunidad en relación con el de víctima evoca asociaciones sumamente problemáticas debido a la propia experiencia histórica. En el lenguaje de la propaganda nacionalsocialista el término *Volksgemeinschaft* (comunidad popular) hizo referencia a un pueblo amalgamado en un cuerpo nacional sólido, racialmente purificado. El individuo no contaba para nada, y cualquier elemento extraño u hostil tenía que estar eliminado. En fin, esta perversa ideología comunitaria fue aducida para legitimar el asesinato de opositores, de judíos y de romaníes, homosexuales y personas con discapacidad. En esta ideología (analizada con agudeza por Hannah Arendt en *Los orígenes del totalitarismo*), la auténtica víctima colectiva era el pueblo alemán, humillado por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Ahora, cada miembro de esta comunidad fatídica debía entregar su vida como sacrificio al líder Adolfo Hitler. En la semántica de la propaganda nazi el doble sentido de la palabra alemana *Opfer* como víctima y como sacrificio está unido con el de la comunidad dócil al servicio del dictador.

Sin embargo, antes de la usurpación ideológica por los nacionalsocialistas, el pensamiento acerca de la comunidad jugaba un papel importante en los círculos intelectuales. De hecho, una de las obras fundadoras de la sociología en Alemania trataba del tema: *Comunidad y sociedad*, de Ferdinand Tönnies, publicado en 1887. En esta obra, Tönnies contrasta la comunidad como una forma orgánica de convivencia basada en valores comunes, tradiciones y el sentido de pertenencia de sus miembros con la sociedad como una organización social regida por intereses y decisiones racionales de individuos que se encuentran en una permanente competencia entre ellos. En el fondo, se trata de la oposición entre una armoniosa pero perdida sociedad ancestral *versus* la sociedad industrial, marcada por la alienación de los individuos que la componen, un topos que ya se encuentra en Engels y Morgan.

En la sociedad de posguerra, dividida por la cortina de hierro, la utopía de la comunidad igualitaria, o es suprimida a favor de la persecución de las libertades individuales (el modelo occidental), o se proyecta a un futuro comunista todavía fuera de alcance (el modelo oriental). Solo a partir de los años ochenta, el concepto de la comunidad es nuevamente revisado por la filosofía y las ciencias sociales como parte de la crítica del capitalismo actual. Prominentes representantes de esta nueva línea del comunitarismo son el canadiense Charles Taylor, los estadounidenses Amitai Etzioni y Michael Sandel y el alemán Axel Honneth (Etzioni, 2015; Honneth, 1999; Sandel, 2000; Taylor, 2006; Taylor, Nanz, y Taylor, 2021). Partiendo de una

crítica del liberalismo extremo, estos autores advierten de los peligros que una atomización de la sociedad en función de la economía de mercado libre puede significar para la democracia. Como contrapeso a las burocracias centralizadas y alejadas de la ciudadanía, sugieren la introducción de elementos participativos a nivel local, tanto en el ámbito de la política como en la economía.

En América Latina, por otro lado, el concepto de comunidad evoca, tal vez en primer lugar, la forma de vida tradicional en las aldeas campesinas e indígenas y sus derivaciones y transformaciones como producto de la migración del campo a la ciudad. La comunidad rural fue objeto de numerosos estudios antropológicos en el estilo del funcionalismo en boga en las universidades de Estados Unidos desde los años treinta del siglo pasado; generalmente se representaba la comunidad como un microcosmos cerrado a cuyo interior cada miembro asumía un papel según su estatus social y donde las normas de conducta eran reguladas por un sistema de valores y rituales que mantenían estas pequeñas sociedades locales en un balance estable y armonioso, en contraste con el caos de la sociedad urbana.¹⁴ Pero pronto la realidad obliga a los investigadores a tomar en cuenta las rupturas y las conflictividades en estas sociedades. “En la práctica, las sociedades de dimensiones reducidas no ilustran muy bien la visión idealizada de comunidad. Algunas fomentan efectivamente la mutua confianza, otras no”, constata Mary Douglas y pregunta: “¿Nadie que haya escrito sobre este tema ha vivido nunca en un pueblo, ni leído jamás novelas, ni intentado acaso hacer una colecta?” (Douglas, 1996). Las rápidas transformaciones sociales en el marco del llamado capitalismo periférico provocan una mirada distinta a la comunidad. Así, se investigan fenómenos como la migración de comunidades andinas de Perú a los suburbios de Lima (Golte y Adams, 1987) y las comunidades transnacionales de migrantes indígenas en México y Estados Unidos (Kearney, 2000; Zabin *et al.*, 1993). El sociólogo marxista peruano Aníbal Quijano observa cómo la comunidad, como forma de organización social, es adaptada por los migrantes a su nuevo hábitat urbano y cómo, de paso, se transforma en una institución de la democracia directa:

¹⁴ Como ejemplo paradigmático de este tipo de estudios se puede considerar el libro del antropólogo chicaguense Robert Redfield, *Tepoztlán: A mexican village*, de 1930. Dos décadas más tarde, su colega Oscar Lewis volvió al mismo lugar y publicó *Life in a mexican village – Tepoztlán restudied*. Mientras el primero dibuja un cuadro armonioso de la vida campesina en la comunidad rural, el segundo demuestra que, al contrario, la vida cotidiana estaba marcada por numerosos conflictos.

No es más la jerarquía social originaria, sino la igualdad social entre sus miembros, lo que caracteriza a las instituciones comunitarias. No es más la tradición, sino el debate y la decisión colectivos el ámbito de donde surgen las normas, las instituciones, los valores. (Quijano, 2020)

En situaciones de precariedad económica y de ausencia del Estado, los pobladores responden a sus necesidades mediante la economía popular y el autogobierno comunitario. Así surgen espontáneamente instituciones como las ollas comunes, comités de abastecimiento, huertas familiares, comités de vaso de leche, y muchas otras. Sin embargo, no se puede detectar en ellas una nueva ética comunitaria, ni el intento de realizar una utopía política; simplemente se trata de responder a urgencias. A pesar de la falta de perspectivas revolucionarias, Quijano ve una posibilidad que estas organizaciones comunitarias espontáneas se puedan consolidar y de tal manera constituir la base de una sociedad más solidaria en el futuro. “Nada de eso puede ocurrir sin conflictos, sin organización y sin una clara conciencia de las situaciones y de las tendencias de la realidad”, concluye con una mezcla de esperanza y resignación. “Pero eso es, precisamente, el fondo de la cuestión: la necesidad de optar” (Quijano, 2020).

Pero hay otra carga semántica muy fuerte del concepto de comunidad: la comunidad religiosa. Para los teólogos de la liberación, organizar los pobres marginalizados en el campo y en las ciudades en “comunidades de base”, para evangelizarlos y capacitarlos políticamente representa el camino a la inclusión. La inspiración viene, en parte, de la filosofía pedagógica de Paulo Freire, pero se puede distinguir también una resonancia de la teoría de la acción comunicativa de Habermas cuando se proyecta

una organización donde, gracias al diálogo, la discusión, la reflexión crítica (a partir del texto bíblico, es decir, una auténtica hermenéutica popular y política), dichos individuos aislados logran constituir una Comunidad, llegan a un acuerdo (*Verständigung*) a partir de argumentos propios. (Dussel, 1993)

Colombia no es la excepción; las organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, madres comunitarias, cooperativas de ahorro, asociaciones de víctimas son indispensables para los pobladores de los barrios populares, en su gran mayoría desplazados del

campo por la pobreza y la violencia. En Barranquilla, el investigador social Alfredo Correa de Andreis constata que solo en forma colectiva se puede conseguir un desarrollo con dignidad. “La libertad”, dice, “es posible dentro de la comunidad y solamente dentro de la comunidad” (Correa de Andreis, 2016). Pero esta convicción basada en la lectura de Marx¹⁵ y la práctica de la “investigación acción participativa” en los barrios populares de Barranquilla finalmente le costaron la vida al sociólogo cuando en 2004 un sicario le disparó. Todavía, casi veinte años después, una comunicación comunitaria que sea un instrumento eficiente de comunicación y de organización de las múltiples organizaciones de base es muy difícil de realizar. La violencia latente y manifiesta de los actores violentos aún crea un clima de miedo que impide que la radio realmente se pueda convertir en un espacio de debate político abierto. Con el apoyo de un tejido de instituciones y de organizaciones locales, el proyecto de Vokaribe Radio ha podido subsistir y la presencia de un medio asequible para todos es un enorme logro a favor de la democracia en un lugar donde la participación política es muy restringida. Pero el hecho de que un pequeño grupo de excombatientes haya logrado, a través de la comunicación comunitaria, reinsertarse en la vida civil con un proyecto político libre de autoritarismo ideológico es un logro en sí.

En efecto, en la coyuntura política de un país que busca desesperadamente guardar el Acuerdo de Paz y apaciguar los nuevos brotes de violencia, este proyecto podría servir como un ejemplo de transformación social. Pues en todo caso, organizar con persistencia de muchos años una emisora comunitaria significa crear tejido social, unir las organizaciones de base locales, aprender a gestionar, establecer relaciones con muchas entidades y, sobre todo, imaginar, crear y realizar un proyecto cultural y político. Es así que, en vez de decir que la comunidad hace su radio, habría que decir que la radio forma su comunidad. “La comunidad es un lugar vacío, no dado cambiante, una potencia”, dice Sandra Osses, investigadora de medios comunitarios, “y lo comunitario son los sentidos con los que lo llenamos, dinamizamos, articulamos. Lo que nos hace estar juntos y querer estar juntos –a pesar de todo–” (Rendón, 2022).

Queda la pregunta por las víctimas. El estigma de la violencia, como hemos visto, las separa de sus comunidades y las aísla. Luego, en algunos casos relativamente pronto, en otros recién después de un largo tiempo, recuperan una mínima confianza en sí mismas, como para volver a juntarse con otros. Así surgen las asociaciones de víctimas, las organizaciones de

¹⁵ “Dentro de la comunidad real y verdadera, los individuos adquieren, al mismo tiempo, su libertad al asociarse y por medio de la asociación” (Marx, *Ideología alemana*, citado en Correa de Andreis, 2016).

madres y de familiares. Entre sí se apoyan, crean lazos sociales, forman una comunidad. Ahora la situación está cambiada, aunque no completamente cambiada. Terminó la guerra, pero no ha llegado la paz. Ahora la sociedad que expulsó las víctimas necesita recuperarlas para llenar ese vacío en su centro que menciona Sandra Osses.

2.2 En la espiral del tiempo: memorias indígenas

Hasta ahora, nuestra investigación se ha centrado en dos aproximaciones distintas a los medios de comunicación para crear memoria colectiva. En Hacemos Memoria, periodistas inquietos por sus experiencias traumatizantes durante la guerra iniciaron un trabajo colaborativo con comunidades fuertemente afectadas por la violencia. En el proceso, la universidad que proporciona el marco institucional para realizar este proceso de memorización se vio obligada a reflexionar sobre su propio rol ambiguo en el conflicto armado. Vokaribe Radio, por otro lado, es el empeño de personas que alguna vez creyeron en la lucha armada pero la abandonaron, sin por ello apartarse de sus ideales políticos. Se mezclan así experiencias de victimización sufrida con las de la acción violenta. Esta constelación hace difícil hablar del conflicto armado en la emisora, pues las amenazas siguen latentes. Pero hay otra forma de estimular la memoria colectiva: la música popular que hace resonancia con el lugar de origen, con la identidad de jóvenes urbanos marginalizados.¹⁶ Con el impulso de la cooperación internacional y el respaldo de instituciones y organizaciones locales, estos dos proyectos han logrado abrir espacios mediáticos para expresar las memorias de las víctimas del conflicto armado.

El tercer caso que queremos examinar aquí, el programa de comunicaciones del Consejo Regional del Cauca (CRIC), tiene algunos puntos en común con los dos anteriores y se distingue en otros. Igual que Hacemos Memoria y Vokaribe, formaba parte del proyecto apoyado por la cooperación alemana de 2016 a 2019, lo cual facilitaba un cierto grado de intercambio y colaboración entre las tres organizaciones. Para los efectos de su participación en este proyecto, a pesar de todas las diferencias regionales, culturales y demás, les unía el objetivo de fortalecer

¹⁶ El sociólogo alemán Hartmut Rosa ofrece *una sociología de la resonancia* en la que propone que, en un mundo en que los individuos experimentan una creciente enajenación, es necesario crear estrategias para mejorar la resonancia entre las personas y entre humanos y medio ambiente. Rosa adapta el término de resonancia de la acústica para transferirlo a las relaciones sociales. Entonces se refiere a un modo específico de entrar en relación entre sujeto y mundo a partir del cual ambos toman forma, un *conmover* y ser *conmovido* recíproco (Rosa, 2019).

el rol de las víctimas en los debates sobre la memoria histórica que se llevaron a cabo a través de sus respectivos medios de comunicación.

Lo que distingue el CRIC de Hacemos Memoria y Vokaribe de manera fundamental es su característica institucional: se trata de una organización política construida sobre la identidad étnica y con pretensiones de ejercer y ampliar el control sobre un territorio considerado como ancestral. Como tal, representa en la actualidad a 139 cabildos indígenas del suroccidente de Colombia. Es una institución bastante consolidada, probablemente una de las organizaciones indígenas más grandes y más combativas del continente; con marchas y asambleas logra movilizar a miles de personas, en su mayoría habitantes de las comunidades empobrecidas del departamento del Cauca. Desde su fundación en 1971, el posicionamiento del CRIC frente al Estado colombiano ha sido confrontativo y marcado por la reivindicación de derechos fundamentales relacionados con la autonomía cultural y territorial de los pueblos indígenas. En el primer lugar de sus demandas ha estado la recuperación de terrenos comunales que fueron concedidos a las comunidades indígenas en la época colonial bajo el título de resguardos, pero que han ido siendo apropiados por grandes terratenientes y empresas agroindustriales a través de los años.

En esta contienda entre el Estado y la organización indígena se ha establecido durante años una espiral de tensión y esporádicas erupciones de violencia. Las formas agresivas de protesta empleadas por el CRIC –bloqueo de carreteras, ocupación de predios reclamados como legítima propiedad de los resguardos indígenas– encontraron una respuesta excesivamente violenta de parte de la fuerza pública. Mientras unos tiraban piedras, los otros disparaban con armas de fuego; varios jóvenes indígenas perdieron la vida en estas confrontaciones. Para justificar el severo procedimiento contra los comuneros indígenas, funcionarios gubernamentales de la derecha política alegaban que el movimiento indígena estaría infiltrado por la guerrilla. El CRIC siempre ha rechazado estas afirmaciones.

Lo cierto es que tanto la guerrilla como el movimiento indígena en el Cauca tuvieron su origen en luchas campesinas y sindicales y en la resistencia contra los violentos abusos de una clase semifeudal de terratenientes y políticos. Desde su inicio existía una cercanía espacial entre el CRIC y las FARC que fueron fundadas en 1964 –siete años antes del CRIC– en el vecino departamento del Tolima. De hecho, el primer ataque de esta guerrilla a una población fue realizado en territorio de los indígenas Nasa: en 1965, las FARC se tomaron a Inzá, el municipio

donde quedan los monumentos arqueológicos de Tierradentro, un sitio sagrado para los indígenas. Varios indígenas perdieron la vida en el asalto, así que este primer encuentro con las FARC fue nada amigable y todavía es recordado con amargura por el CRIC. Sin embargo, las FARC se quedaron en el Cauca y, con el tiempo, otras guerrillas llegaron: el ELN, el M-19 y el EPL.

Necesariamente, esto condujo a una suerte de coexistencia forzosa que se desarrolló en medio del auge de la movilización social y el avance de las recuperaciones durante los años ochenta. En distintos momentos de esta etapa se produjeron diversos tipos de aproximación entre la población local y las organizaciones armadas. Sin embargo, en otros momentos, estas mismas organizaciones se convirtieron en una amenaza al movimiento social cuando intentaron cooptarlo o delimitar su acción. (Peñaranda, 2012, p. 173)

El movimiento indígena se cuidaba de mantener su autonomía. La reivindicación étnica del CRIC contrastaba de forma esencial con las ambiciones de las guerrillas comunistas que se entendían como la vanguardia de una lucha de clases. Aparte de las diferencias ideológicas, una mayoría de los comuneros indígenas rechazaban la lucha armada como instrumento para lograr sus objetivos.

A pesar de ello, de cara a una creciente ola de persecución y de asesinatos de líderes indígenas, en 1984 algunos activistas cercanos al CRIC formaron un grupo de autodefensa, el Movimiento Armado Quintín Lame.¹⁷ El nombre de esta guerrilla indígena recordaba a Manuel Quintín Lame, un líder Nasa quien organizaba la resistencia contra los terratenientes en la primera mitad del siglo veinte, una figura emblemática del movimiento indígena en el Cauca. En 1990, este grupo se desmovilizó –junto con el M-19 y el EPL– y a continuación envió dos delegados a la asamblea constituyente de 1991. Con la nueva Constitución instalada, por primera vez en la historia de Colombia las minorías étnicas tuvieron representación en el parlamento.

La violencia de las guerrillas de izquierda en el Cauca, sin embargo, no cesó; al contrario, como en otras regiones del país, la guerra se recrudeció. El CRIC rechazaba las acciones de los

¹⁷ El Quintín Lame surge como respuesta a la represión por parte de sicarios armados por los terratenientes y también debido al asesinato de algunos líderes y comuneros por parte de las FARC (Tattay y Peña, 2013).

grupos armados porque estas provocaron respuestas del Ejército que embarcaban las comunidades indígenas en una guerra ajena. La doctrina marxista, además, no resonaba con el imaginario político y cultural del movimiento indígena. Su crítica del capitalismo es mucho más radical porque la ideología del desarrollo y de un progreso lineal, a la cual adhiere el marxismo igual que el capitalismo liberal, no solo representa una amenaza muy concreta para la forma de vida de los pueblos originarios sino también está opuesta a su manera elemental de ver el mundo. En la cultura de los indígenas Nasa del Cauca, el tiempo no es representado de manera lineal sino en forma de espiral, una forma geométrica que corresponde a la evolución cíclica de la vida, tanto de los humanos como de los animales, plantas, cultivos y del universo en general (Yule Yatacue y Vitonas Pavi, 2012). Para esta forma de pensar, que percibe el tiempo en unión con el espacio (el territorio habitado por los seres vivos), el imaginario occidental de un progreso interminable hace tan poco sentido como la fantasía comunista del paraíso obrero.

Ocasionalmente, la disputa sobre el control territorial entre unidades de la guerrilla y la organización indígena resulta en choques violentos; muchos comuneros indígenas fueron asesinados por la guerrilla. Otro factor que incrementa la conflictividad en el Cauca es la incursión de narcotraficantes que encuentran en esta región montañosa buenas condiciones para sembrar coca, amapola y marihuana. Los cultivos ilícitos ofrecen oportunidades de trabajo –de otra manera muy escasas– para jóvenes indígenas; pero el dinero fácil los aleja de los cultivos tradicionales –maíz, papas, quinoa, fríjoles, hortalizas– y de la vida orientada por los valores ancestrales. Los intentos de la guardia indígena de expulsar a los narcotraficantes de las comunidades son respondidos con amenazas, asesinatos y masacres.

Sin embargo, la producción y el comercio de drogas no es el único negocio que atrae a las mafias y provoca fuertes altercados en la región. Con el auge del precio del oro en los mercados globales, la extracción ilegal de ese metal se ha vuelto muy rentable para estos grupos, causando así inmensos daños ambientales. Por otro lado, el Estado colombiano ha otorgado cientos de títulos de minería a particulares y a empresas, entre ellas la multinacional AngloGold Ashanti (Verdad Abierta, 2014, junio 18). La obligación de realizar una consulta previa para obtener el consenso de las comunidades locales y el rechazo rotundo de estas a la exploración minera en sus territorios han impedido que estos títulos se pongan en operación; sin embargo, permanecen en un estado latente y de esta manera constituyen un persistente potencial de

conflictividad. Con todo esto, el departamento del Cauca ha sido considerado uno de los más conflictivos del país.

Resulta fácil comprender que, dadas estas circunstancias, la memoria histórica juega un papel esencial en la configuración del movimiento indígena. Mantener vivo el recuerdo de ciertos eventos –tanto históricos como míticos–, de líderes importantes y de héroes caídos, es indispensable para forjar la conciencia de pertenecer a un colectivo étnico en lucha de resistencia. Aquí entra en juego lo que Benedict Anderson –refiriéndose a la construcción simbólica de la nación– ha llamado la comunidad imaginada (Anderson, 1993). La imaginación es un elemento constitutivo de la formación de identidad de colectivos grandes como la nación, porque a diferencia de las comunidades locales, sus miembros no se conocen personalmente, no los unen lazos familiares y tampoco comparten de forma directa la vida cotidiana. La memoria histórica, por tanto, es el instrumento primordial para estructurar la imaginación colectiva y para orientar el comportamiento de los individuos hacia un bien común. Esta imaginación puede ser manipulada con tanta eficiencia que millones de ciudadanos se disponen a sacrificar su vida para un supuesto bien de la nación, como se ha demostrado en las grandes guerras del siglo veinte y hasta el día de hoy.

Para el movimiento indígena en Colombia, las injusticias sufridas colectivamente, los actos de resistencia, y el recuerdo de aquellos que perdieron la vida luchando, son elementos centrales de la memoria colectiva (Peñaranda, 2012; Rappaport, 1998). La temporalidad de estas narrativas es distinta a la de aquellas que sostienen el Estado: en vez de la fundación de la nación, simbolizada por las historias de los próceres de la Independencia (200 años), la historia indígena enfatiza el genocidio cometido por los invasores y los cinco siglos de represión que siguieron. Ante esta historia de larga duración –que, por lo demás, es un conflicto existencial, de exterminio y sobrevivencia–, la temporalidad que enmarca los empeños actuales de consensuar una memoria colectiva del conflicto armado (50 o 60 años, según quien lo mida) es de menor relevancia para los indígenas del Cauca. La memoria de los pueblos originarios se remonta a cinco siglos de historia escrita y a un mítico tiempo milenario anterior a la llegada de los europeos. Es la memoria de la lucha contra la dominación colonial, la expropiación y el racismo. Enfocando la mirada en la temporalidad de larga duración, sin duda estos pueblos –hoy minoritarios–, junto con los descendientes de los africanos esclavizados, han sido victimizados en medidas desproporcionadas, y lo siguen siendo el día de hoy. Es por ello que en 2016 los

pueblos indígenas del Cauca observaron la firma del Acuerdo de Paz con las FARC con escepticismo, pues las negociaciones se habían llevado a cabo sin consultarlos.

Con mayor entusiasmo en cambio, en 2021 las comunidades indígenas del Cauca celebraron el quincuagésimo aniversario de la fundación del CRIC. En el curso de medio siglo, desde 1971 el movimiento indígena en el Cauca ha instituido una organización política y, junto con ella, un imaginario social que comienza también a influir en la conciencia colectiva a nivel nacional. La memoria de los pueblos originarios está siendo tomado en cuenta, al menos, por sectores más progresistas de la sociedad y por los medios de comunicación que circulan ahí. El Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, publicó un informe sobre el movimiento indígena del Cauca donde se refiere al CRIC como “un proceso de reconstrucción identitaria, a través del fortalecimiento de las autoridades tradicionales y la recuperación de valiosos rasgos culturales, como la lengua, apoyándose para todo ello en la reinvención de la tradición histórica” (Peñaranda, 2012, p. 21). Pero palabras como reconstrucción, recuperación y reinvención son engañosas, pues no designan exactamente lo que está al juego aquí. Es obvio que en la actualidad del siglo XXI no se puede *reconstruir* un modelo de sociedad que existió en un tiempo histórico, es decir, en una proyección en el pasado, sea esta basada en fuentes escritas, tradiciones orales u otras referencias simbólicas. Porque, si fuera posible (y deseable) reconstruir una comunidad tal como puede haber existido en el pasado, la primera pregunta sería a qué pasado se pretende recurrir: ¿A los resguardos indígenas de la época colonial? ¿A una temporada antes de la llegada de los españoles, de la cual solo quedan algunos vestigios arqueológicos y los reportes de los cronistas españoles? ¿O acaso a un tiempo mítico que solo se puede imaginar? Ninguna de estas fuentes es suficiente para construir una identidad colectiva, una comunidad imaginada, que necesariamente se tiene que formar a partir de prácticas en el presente, proyectadas hacia el futuro. Sin embargo, es absolutamente válido que elementos de los distintos imaginarios del pasado sean utilizados para crear lo nuevo. Esto es, precisamente, lo que ocurre en el “proceso político organizativo”, término que se usa constantemente en las asambleas, reuniones y publicaciones del CRIC para referirse a las múltiples prácticas colectivas que son parte de la autocreación de una nueva sociedad indígena en el Cauca, con proyecciones que van más allá y pretenden, a largo plazo, efectuar cambios en la nación colombiana entera.

En su organización, por tanto, el CRIC recurre a elementos heterogéneos: por un lado, los cabildos, que tienen su origen en la época colonial, representan la autoridad tradicional y la

base local de la organización en los diferentes territorios. Y, por otro lado, estos mismos cabildos están integrados en una superestructura regional, el CRIC, que se asemeja bastante a una ONG pero que en algunos aspectos funciona como una burocracia estatal. Bajo la dirección de su Consejería Mayor –compuesta por representantes de las comunidades subsumidas en zonas regionales– operan varios programas especializados (salud, educación, derechos humanos, economía, comunicaciones, medio ambiente) que atienden, casi como secretarías de un autogobierno, a las diferentes áreas de la vida en las comunidades.

Un principio fundamental de la organización es que los procesos estén orientados desde abajo hacia arriba, de tal manera que todas las decisiones importantes tienen que ser consultadas con las bases comunitarias representadas por sus respectivos cabildos. Otra regla para evitar una concentración del poder es que todos los puestos políticos y administrativos tienen que ser ocupados de forma rotativa. Así, por ejemplo, los integrantes de la Consejería Mayor se turnan cada dos años y en su composición se debe observar una representación proporcional de los diez pueblos que hacen parte del CRIC. Al mismo tiempo, estos elementos de democracia directa contrastan con formas más jerárquicas de organización. Las personas mayores de edad, por ejemplo, tienen un estatus superior en las culturas indígenas, y generalmente pueden incidir más en la toma de decisiones que los jóvenes, aunque en la actualidad jóvenes profesionales indígenas con formación técnica o académica asumen la mayoría de los cargos ejecutivos.

Cabe mencionar la guardia indígena, una suerte de defensa territorial, cuya importancia para lo consolidación del territorio y de la organización política y para la socialización de los jóvenes indígenas del Cauca no puede ser sobreestimada. Los miembros de la guardia gozan de alto estima, pues, pisando fuerte protegen a las comunidades, al territorio y a la cultura. Y a pesar de que no usan armas, cultivan la imagen de una casta de jóvenes guerreros. En su vestuario usan insignias del CRIC, un pañuelo rojo y verde, el bastón de mando; algunos lucen boinas, equipos de radio y botas altas que les otorgan un aire militar, pero no usan armas. Niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres y también personas de edad avanzada pasan temporadas como guardias. Recorren el territorio para cuidarlo; resuelven conflictos entre comuneros, llevan delincuentes al calabozo para que sean sometidos a la justicia indígena y confrontan a agresores externos. Muchos guardias han perdido la vida, pues sus labores de protección del territorio de influencias ajenas y dañinas les expone directamente a la violencia de actores armados como narcotraficantes, paramilitares y guerrillas que merodean en la región. El recuerdo de estos

caídos en la lucha por la autonomía indígena es central para la memoria colectiva. Las víctimas son declaradas mártires y su muerte un sacrificio para la comunidad; de esta manera, el imaginario colectivo es cargado de emociones fuertes. El himno de la guardia indígena, que es cantado con fervor en cada asamblea del CRIC, dice así: “Pa’ delante compañeros, dispuestos a resistir; a defender nuestros derechos, así nos toque morir”.

El domingo 8 de octubre de 2017, la comunicadora indígena Efigenia Vásquez recibió dos balas disparadas por un policía que acabaron con su vida. El hecho ocurrió cuando un comando del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía nacional se confrontó con comuneros del resguardo indígena de Kokonuko, a una hora de Popayán, la capital del departamento del Cauca. Un año había pasado desde la firma del Acuerdo de Paz, un año de relativa tranquilidad. Efigenia Vásquez fue la primera periodista asesinada luego de la terminación oficial del conflicto armado en Colombia. Y a pesar de que el momento en el que el policía le disparó quedó grabado en video, las autoridades no pudieron determinar quien fue responsable de la muerte de la comunicadora (Verdad Abierta y Hacemos Memoria, 2017, diciembre 21).

Los indígenas Kokonuko habitan la ladera occidental del volcán Puracé, un lugar idílico entre montañas verdes cubiertas de bosque nativo, donde hay fuentes termales a cuyas aguas se atribuyen propiedades medicinales. Según la creencia de la gente de Kokonuko, estas aguas están cargadas de energía espiritual. Los nacimientos, donde el agua sale del suelo casi hirviendo y con un fuerte olor a azufre, son considerados lugares sagrados. Pero una de estas fuentes termales se ha vuelto un sitio de discordia. Está ubicada en un predio del resguardo que fue comprado por un hombre de negocios de Popayán. El sitio fue convertido en un complejo turístico con toboganes, restaurantes y cabañas. Se ofrece hidroterapia mineral, jacuzzi de lodo volcánico y otras atracciones. El hecho de que un forastero perteneciente a la élite blanca de la ciudad sea dueño de esta propiedad y se aproveche de ella como un lucrativo negocio causa malestar entre muchos comuneros. Ellos dicen que, además de ser un lugar sagrado, el predio es parte de las tierras que se adjudicaron al resguardo de Kokonuko en la época colonial, y por tanto debería estar en manos de la comunidad indígena como propiedad colectiva. Varias veces jóvenes de la comunidad ocuparon el predio o bloquearon su entrada. Las negociaciones con el dueño no dieron fruto, a pesar de que el Estado le hizo ofertas para comprar el lote. Cuando llegó el temido comando antidisturbios, los comuneros rebeldes le tiraron piedras. Efigenia

estaba con los manifestantes, iba a preparar un reportaje para la radio comunitaria. Un policía disparó, usando ilegalmente perdigones de metal en vez de balas de goma, que sí eran permitidas. A pesar de que el hecho quedó grabado en video, las autoridades alegaron que no fue posible determinar quién fue responsable de la muerte de la comunicadora.

Pero obtener un veredicto en las cortes de la justicia sobre este caso no ha sido una prioridad del CRIC. La investigación de la Fiscalía no prosperó, pero tampoco hubo mucha presión de parte del movimiento indígena. Cuando visité a la familia de Efigenia en Kokonuko, un año después de su muerte, me comentaron que no habían recibido el apoyo que ellos esperaban de los dirigentes de la organización. Por ejemplo, les faltaban recursos para poder cubrir los costos de la educación de los hijos. Por otro lado, un enorme mural con el retrato de Efigenia luce en una pared del cabildo indígena de Kokonuko. La imagen de la comunicadora ha sido incorporada en la galería de héroes caídos. En una publicación del CRIC titulada *Tocando la memoria*, Efigenia es citada con las siguientes palabras:

Hacer comunicación es vivir y revivir la lucha y la resistencia de los pueblos originarios para la defensa de la vida, porque la comunicación no se hace sentados detrás de un escritorio, un computador o un micrófono, hay que salir a investigar, conocer el ambiente en que vivimos, nuestro proceso organizativo y de esa manera somos comunicadores indígenas. (CRIC, 2018)

Aquí la memoria no se apoya en la categoría de víctima sino en la del ser resistente, en el ejemplo de la guardia indígena, de líderes y lideresas y en el poder espiritual investido por los ancestros en los mayores de la comunidad.

No obstante, en las relaciones del CRIC con el Estado colombiano y la institucionalidad creada como producto del Acuerdo de Paz de 2016, la categoría de víctimas indígenas adquiere un significado estratégico para la organización. Nuevos instrumentos legales como la Jurisdicción Especial para la Paz abrieron oportunidades para situar reivindicaciones tradicionales de los pueblos originarios en la agenda pública. Pero definir lo que es una víctima indígena es un asunto complejo, pues ahí no solo entran criterios de adscripción y apropiación de identidades étnicas, sino también diferentes marcos conceptuales y temporales construidos por las instituciones.

Así, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica registra a nivel nacional 5011 víctimas indígenas para el periodo de 1959 a 2019, distinguiendo tres categorías de victimización: asesinato, masacres y desaparición forzada. Muchos de estos muertos eran líderes y autoridades indígenas, por consiguiente el CNMH constata que una de las afectaciones más graves del conflicto armado para las comunidades indígenas ha sido la vulneración de su integridad política y organizativa.

La autonomía territorial de las comunidades indígenas ha sido uno de los factores determinantes en la victimización. Proyectos económicos en territorios sujetos a consulta previa, negocios extractivos legales e ilegales y el narcotráfico han motivado la disputa por el control territorial. (CNMH, 2020)

Paralelamente, en el registro nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) están inscritas más de 65 000 víctimas indígenas solo en el departamento del Cauca. Además de las víctimas individuales se reconocen 52 sujetos de reparación colectiva.¹⁸ Aquí el marco temporal es el periodo de 1985 a la actualidad. La caracterización de las víctimas indígenas ha sido un tema de disputa entre el movimiento indígena y las entidades del Estado. El CRIC, por ejemplo, ha criticado que las instituciones no hayan aplicado un enfoque diferencial en su trabajo con comunidades étnicas. La Unidad de Víctimas, por su lado, sí se acerca a la organización indígena y promueve su participación en el levantamiento de datos sobre víctimas indígenas. Un documento del CRIC da cuenta de un proceso de caracterización de las víctimas indígenas en el territorio cubierto por la organización que fue realizado en un convenio con la UARIV. En las consultas que se llevaron a cabo en las diferentes zonas del CRIC se articularon desacuerdos respecto al procedimiento: el tiempo no era suficiente para garantizar un proceso participativo (“esto se está haciendo a la carrera”), el lenguaje de los documentos no era adecuado (“palabras muy técnicas para trabajar con víctimas”), y no se respetaban las propiedades culturales de las etnias (“no está acorde al contexto ni a las tradiciones de cada uno de los 10 pueblos”). En suma, lo que se refleja en estos comentarios es la desconfianza básica frente a las instituciones del Estado (“las cosas van a

¹⁸ <https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/pueblosindigenas/cauca.html>; consultado 01.05.2023

quedar mal hechas”), un resultado de la larga historia de relaciones marcadas por la colonialidad (CRIC, s. f.).

Una crítica fundamental de las organizaciones indígenas a la conceptualización de víctimas por el Estado es que esta se refiere exclusivamente a individuos y a colectivos humanos. En la cosmovisión indígena la vida humana está intrínsecamente articulada con la de otros seres vivos como animales, plantas y espíritus. La violencia afecta a todos los seres que habitan un territorio y, por lo tanto, las reparaciones deben tomar en cuenta esta visión integral de la victimización. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en la cual el CRIC juega un papel importante, sitúa esta victimización en un contexto más amplio que el conflicto armado entre guerrillas, paramilitares y el Estado:

En las discusiones en torno al conflicto armado, sus víctimas y la reparación, el territorio casi siempre se margina y se invisibiliza la discusión en torno a sus derechos, a su voz y a su manejo, como centro de las tensiones políticas. Por esto la insistencia en denunciar los proyectos económicos que amenazan a los territorios, y que usualmente son externos al contexto de la violencia. En cambio, los proyectos extractivos, el despojo de tierras para los monocultivos, la contaminación y los desvíos de ríos y arroyos hacen parte constitutiva del conflicto, victimizan y revictimizan el territorio. (ONIC, 2019)

En más de 50 años desde su fundación, el CRIC se ha consolidado como organización y, como se ha visto, la memoria es un elemento constitutivo de este proceso. El recuerdo de la violencia sufrida por los pueblos originarios en las diferentes épocas desde la invasión española –colonización, formación del Estado nacional, capitalismo globalizado– está en el centro de la identidad étnica y política. A partir de ahí se desarrollan las estrategias de resistencia y pervivencia cultural de los pueblos indígenas, los planes de vida y las proyecciones políticas, educativas y comunicacionales. Más que representar a las comunidades indígenas como organización indígena multiétnica, el CRIC puede ser considerado como un esfuerzo colectivo de los pueblos originarios del Cauca para construir una nueva forma de vida basada en la autonomía territorial y cultural (Almendra, 2017; Escobar, 2018).

Con todo, la prolongada experiencia colectiva de victimización, perpetuada y transmitida como memoria de una generación a la otra forma parte integral de la idiosincrasia del

movimiento indígena. A continuación, vamos a concentrar la mirada en los aportes a la construcción de la memoria de las víctimas indígenas de una unidad particular dentro de la organización, el programa de comunicación del CRIC.

2.2.1 Comunicación en el proceso político-organizativo indígena

En los años 2000, un intenso debate sobre la comunicación emerge dentro del movimiento indígena, que involucra al CRIC y a otras organizaciones indígenas de Colombia y de todo el continente (Conejo y Campo, 2018). Tanto la nueva autoconfianza de los movimientos indígenas como el desarrollo tecnológico –grabadoras y cámaras de video a precios accesibles, la difusión de celulares y del internet– hicieron surgir un gran número de iniciativas de comunicaciones en las comunidades; el impacto comunicacional de los zapatistas de Chiapas fue solo el más visible.

En 2002 se crea la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia (AMCIC) y cuatro años después, en 2006, el primer encuentro nacional de comunicación indígena toma lugar en el territorio del pueblo Misak en el municipio de Silvia, Cauca. En 2010, el CRIC es organización anfitriona de la Primera Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala que también se lleva a cabo en el Cauca “con el permiso y complacencia del Sol, la Luna, de las estrellas, del abuelo Fuego, de los abuelos de las aguas, de las montañas, de los bosques y de los espíritus del viento” (CRIC, 2011). En este encuentro, delegados de más de 60 organizaciones étnicas de 21 países discutieron sobre las estrategias de comunicación que los pueblos indígenas deberían adoptar en un contexto hostil donde comunicadores indígenas son amenazados y donde las formas de vida propias de los pueblos indígenas están en peligro. En la declaración final de la cumbre se afirman exigencias a los Estados nacionales y a los organismos internacionales: la protección de comunicadores indígenas; una legislación que facilite el acceso de las comunidades indígenas a los medios de comunicación; y recursos para la construcción de medios indígenas que deben ser considerados de interés público.

De ahí en adelante, el CRIC y otras organizaciones indígenas colombianas organizan talleres y escuelas de comunicación y dialogan con ministerios del Gobierno nacional para formular políticas públicas de comunicación para los pueblos indígenas. Ahí se exige un mayor acceso al espectro electromagnético y la participación de colectivos indígenas de comunicación

en la programación de los medios estatales. Sobre todo en las movilizaciones del CRIC, las estrategias de comunicación, cada vez más articuladas, adquieren una importancia central. En diez comunidades indígenas del Cauca existen emisoras de radio donde junto con la música tradicional y los mensajes y anuncios de los oyentes se emiten comunicados de las autoridades indígenas locales y del CRIC. En las zonas rurales del Cauca, como de toda Colombia, la radio sigue siendo un medio muy importante, pues acompaña las personas en sus labores agrícolas. Pero los medios digitales son utilizados cada vez más ampliamente, a pesar de la mala conectividad en las zonas montañosas. Donde hay acceso a internet, que es generalmente el caso en las cabeceras municipales, redes como WhatsApp y Facebook facilitan una comunicación instantánea y multimediática. Uno de los efectos positivos es que de esta manera las frecuentes violaciones a los derechos humanos que ocurren en los territorios indígenas pueden ser comunicados rápidamente para movilizar la resistencia local y para ser visibilizadas a nivel nacional e internacional.

La acelerada articulación de América Latina con los sistemas globales (flujos de mercancías, ideologías, personas, calentamiento global, redes digitales) y la también acelerada transformación de estas articulaciones producen simultáneamente tendencias contrarias: Por un lado, una creciente complejidad de la comunicación (acceso a información, multiplicación de plataformas, necesidad de adaptación a un acelerado cambio tecnológico) y, por otro lado una enorme nivelación cultural (ubiquidad de artefactos y medios, idiomas dominantes, homogenización de la comunicación y de la memoria). Al mismo tiempo, en Colombia, como en toda la región, se puede observar una mayor integración del territorio nacional (infraestructura, medios de comunicación, transporte) pero también una creciente desvinculación de las personas de los territorios locales (abandono de la vida campesina, migración, desplazamiento forzado).

Ante estas tendencias, la comunicación indígena enfrenta el desafío de desarrollar un uso apropiado –compatible con la cultura y forma de vida propia– de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Generalmente, los comunicadores indígenas adoptan una doble estrategia: utilizar los medios tecnológicos modernos (cameras, emisoras, internet) junto con formas tradicionales de comunicación (mingas, rituales, conversaciones con los espíritus) para afirmar los valores étnicos de la comunidad étnica, para construir memoria colectiva y para activar la defensa de los territorios. Ahora el proceso político-organizativo ha llegado a un nivel

que permite el entrenamiento profesional formalizado de comunicadores indígenas. Este se lleva a cabo en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), la universidad propia del CRIC con sede en Popayán. En esta primera universidad indígena acreditada por el Estado colombiano se forman comunicadores indígenas junto con otros profesionales en áreas que son importantes para la organización y para las comunidades: revitalizar las lenguas indígenas, administración pública de los territorios indígenas, derecho propio indígena, y otras. La formación en comunicación dura cinco años se ajusta a las necesidades de los estudiantes que en su mayoría provienen de comunidades rurales. Así, una parte de las clases se realiza en la sede de la universidad en Popayán, y otra parte como escuela itinerante en las comunidades indígenas del Cauca. Además, alumnos y profesores participan activamente en actividades comunitarias como las mingas y los rituales tradicionales, de manera que los absolventes estarán capacitados para liderar procesos comunicativos, políticos y culturales en sus comunidades; en otras palabras, se forma una nueva generación de intelectuales indígenas.

El proceso político-organizativo del CRIC está diseñado de tal manera que busca comprender a las diferentes áreas de la vida de los indígenas, sus necesidades materiales y espirituales, y sobre todo, su autonomía. También incluye a todas las edades, así que, en el medio siglo desde la fundación de la organización varias generaciones han sido formadas intelectual y emocionalmente. “Proceso político-organizativo” es el concepto usado en el CRIC para designar el conjunto de prácticas sociales, culturales, rituales, económicas, pedagógicas, medicinales, etc. que están creadas colectivamente. Se trata de un proceso organizado de creación de tejido social y simbólico que abarca el pensamiento político y la praxis de resistencia; el trabajo comunal y el trabajo agrícola; alimentación, medicina y espiritualidad; asambleas, fiestas y rituales.

Se puede decir que los pueblos indígenas del Cauca están inmersos en un largo y complejo proceso de abandono de la condición de subyugación y alienación, la emergencia de la colonialidad, o dicho de otra manera, de su estado colectivo de ser víctima.¹⁹ Es un proceso

¹⁹ No obstante, el discurso étnico del CRIC no puede soslayar la incidencia de muchas corrientes de pensamiento no indígenas y su característica de un movimiento social heterogéneo. Así, el antropólogo Martín Vidal señala que “El CRIC ha recibido muchas influencias no solo indígenas y su pensar y hacer corporativo está conformado por esa diversidad histórica, izquierdistas de todos los matices, socialdemócratas, liberales, godos, evangélicos, cristianos, socialcristianos, progresistas, cooperantes, antropólogos, abogados, médicos, politiqueros, chamanes, ateos, mestizos urbanos, mestizos campesinos, paisas, rolos, costeños, afros, movimientos

complejo, no solo porque está compuesto por muchos procesos, sino porque su complejidad va en incremento: la acción política, el diseño social y cultural abren nuevas posibilidades, nuevas relaciones. *Otro posible es posible* es el título de una obra del antropólogo colombiano Arturo Escobar en el que describe este tipo de procesos en el Cauca indígena y entre otros pueblos de América Latina / Abya Yala (Escobar, 2018). Una complejidad que va en aumento –y esta es una característica elemental de la complejidad: que va creciendo– crea constantemente nuevas contingencias, nuevas opciones, nuevas relaciones. Y es por eso que la complejidad también es una característica de la libertad.²⁰

Debido a sus propiedades relacionales, cada uno de los procesos mencionados puede ser analizado como un proceso de comunicación: el trabajo político y el trabajo agrícola, tanto como el trabajo espiritual y la enseñanza de los valores culturales. En las culturas indígenas, todas estas prácticas de comunicación involucran a humanos, a lo que en occidente llamamos la naturaleza y a los seres espirituales. Vamos a profundizar este tema, que ha recibido mucha atención en la antropología de las últimas décadas bajo las siglas del “perspectivismo amerindio” y el “giro ontológico”, en el siguiente apartado. Por ahora, nos vamos a concentrar en la comunicación como parte del proceso político-organizativo del CRIC y trataremos de identificar las definiciones y prácticas que esta misma organización ha desarrollado al respecto y en qué medida las reivindicaciones y el empoderamiento de las víctimas encuentran lugar en ellas.

La comunicación indígena, tal como está siendo conceptualizada por el CRIC y por otras organizaciones indígenas del continente, tiene como principio orientador el fortalecimiento, la promoción y divulgación de valores culturales que se construyen entorno al Buen Vivir (sumak kawsay, en Quechua, Wet Wet Fxi-zenxi en Nasa), un concepto central del pensamiento de los pueblos indígenas andinos que luego de su reformulación como crítica al desarrollo capitalista (Gudynas y Acosta, 2011) fue ampliamente discutido en foros internacionales y adoptado como política gubernamental en Ecuador y Bolivia (Choquehuanca, 2022; Sierra y Maldonado,

feministas, ecologistas, terraplanistas, etc, han encontrado en el CRIC un espacio no solo laboral sino también de incidencia y desahogo de sus ideologías” (comunicación personal).

²⁰ Las ciencias de la complejidad “se ocupan del modo como los fenómenos, sistemas y comportamientos evolucionan y ganan grados de libertad” (Maldonado y Gómez, 2010)

2016).²¹ El programa de comunicaciones del CRIC es la unidad institucional encargada de comunicar los avances del proceso político-organizativo en sus diferentes aspectos (políticos, culturales, económicos, identitarios), tanto hacia adentro –es decir: a las comunidades indígenas del Cauca– como hacia fuera, a la sociedad colombiana, otros movimientos indígenas y la comunidad internacional.

En 2014, una delegación del CRIC visitó a la DW Akademie en Alemania y mostró interés en una cooperación con esta entidad en el área de comunicación. Se acordó una visita recíproca de DW Akademie, así que unos meses después viajé a la oficina del CRIC en Popayán para concretar actividades conjuntas. En esta reunión, la comunicadora nasa Dora Muñoz hizo dos afirmaciones que me sorprendieron: primero, que los pueblos originarios rechazaban al periodismo como un instrumento de comunicación de la sociedad blanca y mestiza, ajeno a los intereses de las comunidades indígenas. Segundo, que los pueblos indígenas no dependían de la cooperación internacional para desarrollar sus procesos de comunicación y que los procesos de aprendizaje deberían ser orientados por instructores indígenas. Por supuesto, esta actitud desafiante despertó mi interés, porque era una invitación a reflexionar críticamente sobre los roles y poderes en la cooperación. Finalmente, se acordaron actividades conjuntas en la formación de comunicadores indígenas que enfatizaran aspectos técnicos de la producción de contenidos para radio e internet. Al cerrar la reunión, un consejero del CRIC que había asistido silenciosamente a la conversación, dirigió unas palabras de agradecimiento a la visita, concluyendo que “la cooperación internacional debería descansar un poquito”. A pesar de estas reservas iniciales, en los años siguientes el trabajo conjunto del programa de comunicaciones del CRIC y DW Akademie fue productivo. Se gestionaron aportes a la formación de jóvenes comunicadores en la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural del CRIC, y un constante intercambio con otras iniciativas de comunicación, en particular, aquellas que hacían parte del programa de DW Akademie: Hacemos Memoria, Vokaribe y Consejo de Redacción. En el marco de este programa, comunicadores del CRIC pudieron encontrarse con periodistas y comunicadores comunitarios en distintos lugares de Colombia y asistieron a talleres y

²¹ En el XV Congreso del CRIC que fue celebrado en 2017 en territorio del pueblo Yanakona, pude presenciar un acto simbólico en el que David Choquehuanca, actual vicepresidente de Bolivia y anteriormente ministro de relaciones exteriores, uno de los promotores intelectuales del Vivir Bien, entregó a las autoridades del CRIC una mochila que habría sido usada por el Che Guevara. La nostalgia de la antigua izquierda revolucionaria aún persiste en segmentos del movimiento indígena.

conferencias en Alemania, Guatemala, Bolivia y Perú. En todos estos encuentros hubo oportunidades para presentar y discutir los conceptos de la comunicación desde la perspectiva del CRIC.

Así por ejemplo, en 2015 Dora Muñoz, la comunicadora nasa mencionada que me recibió en la oficina del CRIC en Popayán, fue entrevistada en Vokaribe Radio sobre los procesos organizativos y comunicativos de los indígenas del Cauca (Pardo, 2015b). Fue una oportunidad para articular el pensamiento indígena con una audiencia culturalmente distinta (los oyentes en los barrios populares del suroccidente de Barranquilla), pero cercana en cuanto a sus experiencias cotidianas de marginalización y victimización. “Soy comunicadora indígena como la labor lo requiere y porque me nace y me gusta hacer este trabajo”, dice Dora en Vokaribe, y continúa:

Corresponde caminar mucho el territorio, caminar, visitar las comunidades, compartir, acompañar las diferentes actividades o acciones cotidianas, por ejemplo cuando hay un trabajo en la comunidad, lo que nosotros tradicionalmente llamamos una minga comunitaria, participamos y dialogamos mucho con todas las personas, sobre todo con las mujeres, depende de los temas también o las situaciones que se estén viviendo, se entabla conversación sobre cuál es su pensamiento como mujer en este proceso organizativo, la participación de la mujer que es un elemento importantísimo y que la mujer siempre ha estado presente en todos los espacios, las mujeres somos luchadoras desde el fogón decimos nosotros, hasta lo territorial, lo organizativo. Entonces ese caminar me ha enseñado también a entender que las luchas se dan de diferentes maneras y que las mujeres hemos estado presentes en esas luchas desde siempre.

Es evidente que esta forma de recoger y poner a circular la información es distinta a la del periodismo, pero desde luego, la realidad social en el Cauca también dista mucho de aquella de las democracias liberales occidentales. La comunicadora indígena no es una observadora “neutral” que reporta sobre los acontecimientos representando de forma equilibrada los puntos de vista de los diferentes partidos. Ella es parte de un partido, el partido de aquellos que fueron victimizados durante siglos. Su labor consiste en recorrer el territorio, participar en la actividad comunitaria y en las luchas políticas, estar en constante movimiento y “caminar la palabra”.

Pero por supuesto, no obstante los constantes esfuerzos de resaltar la unidad étnica, no faltan los conflictos, las luchas de poder, los desacuerdos entre las generaciones dentro del movimiento y de la organización política. Lucy Fernández, una comunicadora nasa que estudió periodismo en la Universidad de Antioquia, expresa su dilema profesional:

Decirles uno a las autoridades que están equivocados es como si uno le pegara una cachetada al papá, porque no se puede, es que usted no le puede venir a decir a la autoridad que está mal porque él es autoridad y usted no es autoridad, usted está llegando, entonces uno también se siente como bueno, yo qué hago, entonces para dónde cojo, quiero cambiar las cosas acá de lo que aprendí allá y quiero compartirlas acá pero tampoco me dejan porque me dicen: no, usted ya cambió, usted ya se occidentalizó, usted ya no es nasa, usted mire como habla, usted mire como se expresa.²²

Vilma Almendra, también comunicadora, escribió un libro sobre el proceso de comunicación indígena en las comunidades nasa del norte del Cauca. El texto comienza con las palabras “Soy comunera. Soy Nasa-Misak. Es decir, estoy y soy en asamblea”, dejando ninguna duda sobre la posición desde la cual la autora escribe (Almendra, 2017). Pero a pesar de asumir una perspectiva desde adentro de la organización y de las luchas indígenas, Almendra no renuncia a la crítica. El título de la obra, *Entre la emancipación y la captura*, hace referencia a aquellos dirigentes indígenas que se dejan cooptar por el Estado y que, traicionando los valores comunitarios, se vuelven funcionarios. Pero la crítica no solo está dirigida contra alcaldes indígenas que toman decisiones autoritarias por encima de las asambleas comunitarias, sino también contra la cooperación internacional que pretende curar los síntomas del conflicto armado sin atacar a las causas estructurales. Almendra relata cómo, ante la agudización del conflicto armado en el Cauca, comunicadores fueron convocados por distintas instituciones a hacer parte de una Mesa de Derechos Humanos para el Cauca.

Propusimos que en el borrador de documento de dicha mesa se dijera de entrada que la principal causa del terror y la guerra era el modelo económico de “desarrollo” y

²² Entrevista con Lucy Fernández, realizada el 05.06.2017.

“progreso” que nos imponían, y que este se servía del conflicto armado para desplazar, despojar y privatizar los bienes comunes, de allí que era fundamental rechazar el tratado de ‘libre comercio’, que en ese momento se negociaba con la Unión Europea. (Almendra, 2017, p. 197)

Resultaba, sin embargo, que el proyecto recibía fondos de la Unión Europea y por tanto, la crítica de los comunicadores indígenas no era conveniente.

Queda por mencionar que para ambas comunicadoras, Dora Muñoz y Vilma Almendra, afirmar que están hablando y escribiendo desde la posición de un colectivo victimizado no es un decir abstracto, sino lamentablemente una condición muy concreta de la vida de ambas. Juan Isidro Almendra, el padre de Vilma, fue asesinado en un proceso de “liberación de la madre tierra” en 1987. El esposo de Dora Muñoz, Miller Correa –un destacado líder nasa– fue asesinado por un exguerrillero convertido en narcotraficante.

2.2.2 El concepto de comunicación indígena

“A veces la comunicación más dura es el trueno”, dice Guillermo Tenorio, mayor del pueblo Nasa y uno de los fundadores del CRIC. “El rayo cae en el lado derecho, detrás de uno. Por allá detrás de esa loma de atrás puede caer y todo el sonido se va para el lado izquierdo, y va haciendo un gran ruido”. Con una mano levantada hacia el cielo, el mayor indica el trayecto del trueno a través del paisaje montañoso. Un grupo de jóvenes indígenas lo rodean, sentados en una loma herbosa escuchan sus palabras, observando el movimiento de su índice extendido.

“Eso está diciendo que los asesinatos, las masacres van a haber. Y por la noche uno ve en la neblina unas cortinas de sangre que dibuja una cortina roja. Todo eso para los que podemos entender y captar nos está dando una señal de comunicación: que peligro de que tiene que advertir. Que los mayores que están tienen que entrar a sentar a analizar y comenzar a hacer armonización para la defensa de la comunidad, que no sucedan por acá.”²³

²³ Guillermo Tenorio, miembro fundador del CRIC en *Wanadii: más allá de la palabra*, video producido por el equipo de comunicaciones del CRIC en el 2017, de circulación interna.

La escena descrita hace parte de un video producido por jóvenes comunicadores del CRIC, los mismos que aparecen en él como discípulos del mayor. Es un video didáctico, su objetivo es enseñar lo que significa la comunicación en la perspectiva de los pueblos indígenas del Cauca. Es un concepto de comunicación, como ya hemos visto en el apartado anterior, que es fundamentalmente distinto de aquel que rige en el mundo de los medios de comunicación occidentales. Lo cierto es que los medios de comunicación más difundidos en Colombia son aquellos de carácter comercial, cuyos contenidos tienen el único objetivo de monetizar las emociones del público consumidor a través del entretenimiento y la publicidad. Que el periodismo está tan mal visto por los comunicadores del CRIC está probablemente relacionado a que los noticieros y otros programas periodísticos de estos medios dibujan una realidad que tiene muy poco o nada que ver con aquella que se vive en las comunidades indígenas. Además, ha habido muchos casos de abierto racismo en estos programas.

Si se mira el periodismo por el lado de sus valores profesionales, como custodio del debate abierto y de la opinión pública, como vigilante ante los excesos del poder y protector de los valores de la comunidad, seguramente se pueden encontrar mayores coincidencias los fundamentos de la comunicación indígena. El periodismo indígena, ejercido con el rigor de la investigación, puede abrir canales no solo para denunciar las denuncias sociales sino también puentes de diálogo con la sociedad no-indígena. Un ejemplo para ello se puede encontrar en Chile, donde periodistas del pueblo Mapuche publican tanto en medios propios (en idioma mapundungún) como en medios urbanos del *mainstream* chileno. Un caso en particular es el periodista Pedro Cayuqueo, quien, además de publicar libros y artículos sobre la situación de los indígenas en Chile, es activo en redes digitales y contribuye la edición chilena del canal CNN (Cayuqueo, 2012).

Se puede llegar a la conclusión de que, respecto a sus fundaciones éticas, el periodismo y la comunicación indígena no están tan distantes como puede aparecer. Sin embargo, permanece una diferencia principal: la comunidad de los seres que comunican entre ellos está concebida de una forma mucho más amplia en el pensamiento indígena, pues comprende, además de humanos, a muchos otros seres –animales, plantas, montañas, corrientes de agua, estrellas, espíritus–, y a todos ellos se les adscribe agencia –hacen cosas–, y por tanto, comunican. Por eso, en el relato del mayor Guillermo Tenorio, el trueno y la nube roja son mensajeros de la violencia. La violencia de las masacres, de guerrillas, paramilitares y las

fuerzas armadas del Estado. La nube roja: advertencia de la violencia inminente, signo de hechos violentos del pasado, portadora de memoria. La naturaleza habla, está llena de espíritus quienes conversan con los humanos. El objetivo político de la comunicación, por tanto, es fortalecer este colectivo amplio e inclusivo de seres; un colectivo que no solamente incluye a los miembros de la etnia que habita un territorio definido, sino también el territorio mismo, incluyendo todos los seres que lo habitan. En esta lógica, la nube y el trueno son agentes de la memoria colectiva: "La naturaleza nos habla, solo que los pueblos indígenas nos hemos olvidado de escucharla ... para nosotros como pueblos indígenas el mejor comunicador en la vida colectiva es el 'Mayor espiritual', porque es el ser que está en permanente contacto y comunicación con la Madre Tierra y los espíritus" (CRIC, 2012). "Caminar la palabra" dicen los Nasa, expresando así la esencia de la comunicación según la cosmovisión indígena: con su portador, el ser humano, la palabra recorre el territorio donde ambos (palabra y humano) se encuentran con otros seres, humanos y no humanos.

"Para nosotros la comunicación va mucho más allá de lo instrumental, de lo técnico", dice Dora Muñoz, y continúa:

Es un espacio que inicia necesariamente en el espacio espiritual. Para nosotros, los pueblos indígenas, uno de los primeros principios es poder entender y acatar los mensajes de la naturaleza, los mensajes que nos dan a través de las aves, de las nubes, el viento. Ese espacio de la comunicación espiritual es la base de todo el proceso, no solo en el tema de la comunicación, sino de todo el proceso organizativo, es lo que nos va indicando nuestro caminar en el territorio y en este entorno que compartimos con otros seres, porque también creemos que no solo en este espacio que llamamos tierra habitamos seres humanos, también hay seres espirituales, hay seres naturales, con esos seres también interactuamos y nos comunicamos. (Pardo, 2015b)

Pregunté a Jesús Melenje, comunicador de la emisora Renacer de Kokonuko, cómo se traducía esta filosofía de la comunicación en el trabajo de la radio. Su respuesta evidenció la estrecha vinculación de las esferas de lo humano, la naturaleza, los espíritus y la memoria:

Se utilizan diversos aspectos en la programación de la emisora. En la parte de naturaleza, se hacen spot grabados con los espíritus, a cada espíritu se le dedica un tiempo para investigar con los mayores y de acuerdo al pensamiento de ellos se hacen algunas grabaciones que se difunden a través de la emisora, eso se hace... Bueno, hablémosles un poquito del duende: El duende es un espíritu que es originario de aquí del pueblo Kokonuko. Él según la historia de los mayores fue un ser humano normal hace muchos años, sino que él fue víctima de un despecho, entonces como a él le gustaba mucho tocar guitarra, él tocaba un instrumento que se llama la guitarra, entonces él era guitarrista. Víctima de ese despecho él en cierta ocasión estaba tocando guitarra y de pronto le dio tristeza y de esa tristeza pues él rompió la guitarra sobre una piedra, la despedazó y desapareció, se fue, se fue y se metió en el monte y se volvió ya un espíritu, ya no llegó a ser humano. Entonces por eso él desde entonces él quedó así como el duende, él es un ser muy pequeño que utiliza un sombrero grande que para el ojo de un ser humano es un sombrero pero que en realidad él utiliza es unas hojas que llaman alipangas, de monte, que en muchos casos la gente, el ser humano las utiliza para envolver quesos, entonces de esa manera él utiliza ese sombrero así grande, pero son alipangas del monte y anda con los pies torcidos, muy pequeñito y con los pies torcidos. Por lo general él no es un ser maligno, él no es bravo, él se enamora mucho es de los niños, se convierte en el momento de que a él le guste un niño o una niña, entonces él se convierte ya en otro animalito, se convierte en un pájaro, se convierte en un conejo y de esa manera él hace que la persona o que el niño se atraiga, que quiera cogerlo, pero nunca lo coge, se va yendo, se va yendo hasta que si no hay alguien de la familia que actúe, él se lleva el niño para el monte, lo esconde, porque se lo va llevando así, haciendo la idea que ya lo alcanza, que ya lo coge pero no, entonces ese es como el que hacer del duende, es un ser muy enamorado de los niños.²⁴

Lo notable en este cuento del duende es que nos volvemos a encontrar con el concepto de víctima: el origen de la transformación del ser humano en un espíritu que habita la esfera de la naturaleza es la negación del amor. Rompe con la cultura (la guitarra) y se va al monte, pero

²⁴ Entrevista con Jesús Melenge en Kokonuko, realizada el 02.11.2018.

conserva el amor a los humanos. Solo que ahora lo dirige a los niños, y para poder hacerlo, se tiene que convertir en animal. Pues, los niños aman los animales, y si los adultos no los cuidan, pueden ser seducidos para perderse en el ámbito de los espíritus y la naturaleza. El espíritu que se lleva los niños al monte no es maligno. Las verdaderas fuerzas destructoras vienen de afuera, son aquellos que invaden el territorio para convertirlo en dinero o para usarlo como base de su poder: los terratenientes y sus paramilitares, la guerrilla, el ejército. En la memoria histórica como en la práctica de comunicación de los indígenas del Cauca, hay que tener en cuenta a diferentes fuerzas, tanto el duende como el ESMAD que mató a la comunicadora Efigenia.

Las conexiones entre política, memoria y naturaleza en el pensamiento indígena están siendo tematizadas en la antropología desde hace algunas décadas. Joanne Rappaport, quien estudió fuentes de la época colonial para trazar el proceso de “reinvención de la tradición” entre los Nasa, destaca la importancia de una geografía sagrada para la configuración de la memoria colectiva indígena en el Cauca. Así, por ejemplo, algunos cerros son identificados con personas importantes –héroes culturales– de la historia local. Se podría decir entonces que el paisaje habla y recuerda la historia. Rappaport recurre al término *habitus* –en el sentido de Bourdieu: un complejo de llamados a la acción que orientan los miembros de una sociedad hacia ciertas prácticas– para referirse a la configuración política y cultural de la sociedad de los indígenas Nasa²⁵ (Rappaport, 1998). Este *habitus* está conformado por la memoria ancestral transmitida a través de documentos escritos, en ceremonias rituales, en la geografía y en los recuerdos personales de acciones de resistencia contra el Estado. Para Rappaport, la “renovación histórica” es un instrumento ideológico usado por los indígenas en su lucha de resistencia contra el etnocidio. Keith Basso observa algo similar entre los Apaches del suroccidente de Estados Unidos: para ellos, el paisaje está lleno de marcadores que simbolizan hechos y personas del pasado. El lenguaje está vinculado con el territorio para promover comportamientos concordantes con los valores éticos de la comunidad (Basso, 1996). Así, por ejemplo, los nombres de lugares frecuentemente hacen referencia a historias del pasado que ilustran las consecuencias negativas de una mala conducta. La interpretación del pasado, concluye Basso, puede ser lograda sin la ayuda de los documentos históricos, los archivos, las fotografías y otras tecnologías de memorización, pero no “sin recurrir a los lugares y los mundos-lugar que ellos

²⁵ Rappaport usa el término Paez; en la actualidad, la autodenominación Nasa es más común.

engendran”. En ausencia de la escritura, entonces, el paisaje sirve como texto y la historia es leído en él.

El antropólogo ecuatoriano Eduardo Kohn recurre a la semiótica de Charles Sanders Peirce para explicar la comunicación de los Runa, habitantes quechua-hablantes de la selva amazónica ecuatoriana, con seres no-humanos, como animales, plantas y espíritus (Kohn, 2013). La interpretación de signos, dice Peirce, no es una actividad restringida a los seres humanos, sino es una característica de la vida misma. Es más:

El pensamiento no necesariamente debe estar conectado con un cerebro. Aparece en el trabajo de las abejas, de los cristales, y a través de todo el mundo físico; y no se puede negar que está realmente allí más de lo que se podría negar que los colores, las formas, etc., de los objetos también lo están. (Peirce, 1986, p. 81)

Para Kohn, entonces, la selva también piensa, y lo hace a través de las vidas de los Runa y de una multiplicidad de otros seres pensantes que la habitan –Kohn usa el término de *ecology of selves*, una ecología de seres–. Superar el dualismo civilización/naturaleza característico del pensamiento occidental y de la modernidad requiere de nosotros, en palabras de Kohn, “un arduo proceso de decolonizar el pensamiento” para llegar a un pensamiento más allá del lenguaje, más capaz de sostener el ser humano en el mundo.

Existe una cierta tendencia en la antropología de las últimas décadas, y Kohn pertenece a esta línea, de interpretar el pensamiento –las cosmovisiones– de los pueblos indígenas (en particular, aquellos que habitan la Amazonía) en términos de ontología en vez de epistemología (Blaser y De la Cadena, 2018; Descola, 2012; Viveiros de Castro, 2010). Es decir, por ejemplo, cuando el chamán dialoga con el jaguar, que a su vez es la personificación de otro chamán, esto no constituye una interpretación distinta de la realidad a la occidental, sino que *es* la realidad, en este contexto. Esta antropología “perspectivista” y “multinaturalista” pretende, por un lado, superar el constructivismo y relativismo postmoderno (“el mundo está hecho y deshecho por narrativas”), y, por otro lado, desenmascarar la ontología moderna que “invisibiliza estas otras ontologías por medio del concepto de cultura” (Blaser y De la Cadena, 2009) y es “incapaz de aceptar categorías que no puede comprender, por ejemplo, la afirmación que *pachamama* es un ser consciente” (Blaser, 2014).

Ahora bien, se puede dudar si el llamado giro ontológico corresponde más a la realidad de los pueblos examinados o al deseo de los antropólogos y sus lectores de encontrar ahí una salida de la crisis actual del pensamiento moderno que amenaza con la autodestrucción de la humanidad al final del antropoceno. Hay índices que apuntan en esta dirección, como señala el antropólogo argentino Carlos Reynoso (Reynoso, 2015) quien, por lo demás, resalta serias debilidades en el argumentos de autores como Descola y Viveiros de Castro: hablan del pensamiento amazónico sin dar cuenta de las enormes variedades étnicas, suprimen las influencias e interdependencias con el mundo urbano, y radicalizan la alteridad de los pueblos indígenas reciclando términos superados en la antropología desde hace tiempo, como el “pensamiento salvaje” y el “animismo”.

De todas formas –e independiente de pleitos académicos que pasan desapercibidos por aquellos de que se habla–, algo me parece rescatable para el tema que aquí nos preocupa: la memoria que se construye, con mucho trabajo, para poder reparar los daños hechos a los individuos y la sociedad, tiene que incluir los otros seres pensantes, en el sentido de Peirce y de Kohn. Por lo tanto, no es suficiente la memoria de las violaciones a los derechos humanos, es necesario también recordar las violaciones a los derechos de la naturaleza, que están comenzando a ser reconocidos política- y jurídicamente.

Las discusiones sobre la memoria que se llevaron a cabo en el marco del proyecto de DW Akademie en Colombia impulsaron una reflexión sobre este tema al interior del CRIC. Finalmente, el programa de comunicaciones decidió retomar un hilo de comunicación que se había abandonado una década atrás. Entre 1986 y 2004, el CRIC había publicado el periódico *Unidad Álvaro Ulcué*, nombrado por el primer sacerdote indígena del Colombia, Álvaro Ulcué Chocué, quien fue asesinado en 1984. Luego de treinta números, se había discontinuado la publicación del periódico, por falta de recursos. Ahora llegó la oportunidad de retomar este proyecto. La propuesta, sin embargo, fue la de cambiar el formato de periódico por el de una revista. En 2017, apareció el primer número de la nueva revista *Unidad Indígena* y hasta finales de 2019 se publicaron tres ediciones más. Fue un ejercicio de memoria institucional –continuar un proceso interrumpido y llevarlo a otro nivel– y también una oportunidad de dialogar con las comunidades indígenas sobre la memoria histórica del CRIC. A continuar vamos a retomar nuestra preocupación por la representación y participación de las víctimas en los medios y, con esta pregunta en la mente, analizar algunos de los textos publicados en esta revista que, pese a

las reservas iniciales de los comunicadores indígenas hacia este concepto, se puede valorar como un ejercicio del periodismo actual indígena en Colombia.

2.2.3 Análisis de texto: Revista *Unidad Indígena Álvaro Ulcué*

Los pueblos indígenas somos orales y no nos sentamos a escribir, o nadie se sienta a hablar con un mayor y preguntarle la historia... ahora las personas que son líderes ya son mayores y algunos que ayudaron a conformar el CRIC, pues, están muertos, unos naturales, otros asesinados. Entonces se pierde la historia y al perderse la historia, cuando las nuevas generaciones vengan a preguntar, no hay nada escrito, no hay nada que los sustente.²⁶

Estas palabras de la periodista indígena Lucy Fernández explican la motivación por revivir el proyecto del periódico *Unidad Álvaro Ulcué*: para poder proyectarse en el futuro, la organización necesita fijar su propia memoria institucional. Ya no basta la transmisión oral de la memoria, aquí se trata de hacer *historia*. Ahora bien, en una cultura donde no solo la escritura sino también la lectura no son actividades muy habituales, la radio ha sido un medio de comunicación muy eficiente. Pero es un medio más efímero que los medios impresos; vive del momento y de la oralidad. Con la llegada de los celulares multimediales, el video se ha popularizado y los canales digitales se han convertido en archivos de la memoria personal. Sin embargo, la velocidad del desarrollo tecnológico no permite hacer un pronóstico acerca de qué medio será el que todavía se podrá leer en el futuro. Todavía existe el álbum de fotos de los años setenta, aunque los colores se han vuelto más opacos. Pero el video de los ochenta, grabado en VHS, ya no se puede ver. Cuando se trata de documentar historia para las futuras generaciones, el papel todavía parece ser un medio fiable y económico. En este sentido, la decisión de retomar la publicación de *Unidad Álvaro Ulcué* parece lógica, pues la versión antigua de este medio todavía puede ser consultado en el archivo del CRIC en Popayán.

Los treinta números publicados entre 1986 y 2004, hoy conforman una documentación valiosa para el CRIC y para quienes están interesados en estudiar la historia del movimiento

²⁶ Entrevista con Lucy Fernández, realizada el 05.06.2017.

indígena. Es el documento de la formación de una organización política y de la lucha por la tierra, y de los esfuerzos por reconstruir una identidad étnica. Pero también es el registro de la interminable cadena de actos de violencia contra las comunidades indígenas. Tres décadas después de la publicación de los primeros números, los temas tratados en la nueva serie demuestran tanto la continuidad como el desarrollo y fortalecimiento del movimiento. A continuación vamos a revisar los cuatro números de la nueva revista publicados entre 2017 y 2019, los temas que se trataron, enfoques en memoria y derechos humanos y la representación de víctimas.

Revista Unidad Álvaro Ulcué, N.º 1, 2017²⁷

La primera edición de la nueva serie de la revista lleva en su portada el título “Territorios de la palabra” sobre una foto, en primer plano, de una mano empuñando el bastón de mando, símbolo de la autoridad tradicional indígena. La revista contiene nueve artículos. El primero de ellos es una breve introducción donde se explica el antecedente histórico del periódico que apareció con regularidad de 1986 a 1993, y luego de forma esporádica hasta su clausura en 2004. En un párrafo se recuerda quien fue Álvaro Ulcué, considerando aparentemente que el sacerdote es todavía una figura suficientemente conocida y no necesita mayor explicación. En segundo lugar va un editorial titulado “Acá le decimos vivir sabroso”. En este texto se relaciona la paz (recién se había firmado el acuerdo con las FARC) con el concepto indígena del Buen Vivir. Un guardia indígena con nombre Hilamo es citado con las palabras “No hablamos de paz sino de Buen Vivir. Consiste en que cada familia tenga tierra para trabajar, donde tenga sus cositas, sus animales, de donde echar mano” (CRIC, 2017, p. 5).

De los otros artículos, tres se ocupan de los conflictos sobre el uso del territorio habitado por las comunidades indígenas. Se trata de proyectos económicos o de infraestructura que invariablemente son criticados como dañinos para las comunidades, para la naturaleza (el agua, los bosques) y porque afectan los sitios sagrados. Los cuatro artículos restantes están enfocados en la memoria histórica. El primero de ellos retrata a cuatro excombatientes indígenas “de origen humilde y con pocas oportunidades de acceder a los beneficios de un Estado distante”, que ya

²⁷ Las revistas pueden ser consultadas en la página web del Consejo Regional Indígena del Cauca, <https://revistaunidad.cric-colombia.org/>.

se habían desmovilizado en años anteriores. Su experiencia es relevante ante la inminente dejación de las armas de las FARC, pues se esperaba que varios indígenas que hacían parte de sus filas iban a volver a sus comunidades. Sin usar la palabra, se aclara que los guerrilleros indígenas son, en el fondo, víctimas de las circunstancias injustas de su vida:

la explotación de terratenientes, el engaño de notarios que con escritura en mano titularon a favor de personas privadas los resguardos y el dominio de una clase política que con engaños siempre han gobernado para sus propios intereses, sin duda, fueron razones suficientes para que indígenas nasa inconformes, adoptaran medidas radicales como la lucha armada. (Yatacué Collazos, 2017, p. 13)

Este artículo está seguido por un texto titulado “En resistencias y luchas” que hace un recuento de los diferentes conflictos armados en los que los indígenas del Cauca han estado involucrados de alguna forma u otra. El CRIC, se aclara, siempre ha rechazado la presencia de grupos armados en los territorios indígenas. Sigue un texto titulado “La memoria que el Cauca reclama”, refiriéndose, por supuesto al Cauca indígena. Ahí se presenta un listado de temas que, desde el punto de vista del autor, deberían ser tratados con mayor urgencia. En primer lugar, se exige un reconocimiento público del trabajo forzado –conocido como el *terraje*– a que los campesinos indígenas fueron sujetos en las grandes haciendas hasta los años setenta del siglo pasado. En segundo lugar,

Querían las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas dejar en la memoria la guerra desde el poder del Estado contra las semillas y contra los productos de economía campesina, a través de decretos fitosanitarios que los atacan y de programas de desarrollo que desincentivan esta producción; al igual que los procesos de desaparición de bosque y de ríos. (Caballero, 2017, p. 20)

Es decir, la primera causa de la violencia es la herencia del sistema colonial basado en la subyugación y explotación apoyada en criterios de raza, y la segunda, el capitalismo con su afán de borrar las formas de vida alternativas y las economías autónomas. Luego se enumeran también las barbaridades cometidas por los diferentes actores violentos, así como los actos de

resistencia; también está incluido un mapa detallado que referencia masacres y asesinatos ocurridos entre 1991 y 2016, y los respectivos perpetradores.

El último de los cuatro artículos sobre la memoria lleva el título “Maquillar el pasado” y trata de cómo la imagen del blanco como raza dominante se ha perpetuado en el imaginario público del Cauca. El artículo está compuesto por una secuencia de tres fotografías, una de una página entera, las otras dos de doble página. La primera imagen representa la estatua del conquistador Belalcázar en Popayán (la misma que fue derrumbada en 2019 por jóvenes indígenas Misak); luego sigue una reproducción de un mural en estilo decimonónico nombrado “Apoteosis de la ciudad de Popayán”, de 1940, que representa la pirámide racial de la sociedad colonial, “donde indios y afros no son más que figuras en el paisaje”. Y finalmente, otro mural, ubicado en la fachada de la facultad de medicina de la Universidad del Cauca. Esta obra de 2006, pintada en el estilo del realismo socialista de la mitad del siglo pasado, representa el ascenso de la medicina del pasado salvaje de los indios a la ciencia moderna sostenida por el hombre blanco.

Revista Unidad Álvaro Ulcué, N.º 2, 2018

La segunda edición de la revista lleva la memoria en su título. La foto de la portada muestra un mayor parado en una roca en la montaña. Viste ruana y sombrero y toca un tambor: el sonido del instrumento transporta memorias de tiempos ancestrales (ver foto arriba). Al abrir la primera página vemos una foto grande de Efigenia Vásquez, la comunicadora que pocos meses antes había muerto en una confrontación con la policía, compañera de los periodistas de la revista. Las siguientes dos páginas están dedicadas a la memoria de Manuel Quintín Lame, el legendario líder y precursor de las luchas del CRIC. Los otros artículos se ocupan de una variedad de temas: de las movilizaciones del CRIC, de las situaciones en los territorios de los diferentes pueblos indígenas del Cauca, del proceso de paz y la resistencia del CRIC a los actores armados, de la comunicación y la justicia indígena.

Quiero resaltar y analizar más detenidamente un artículo de este número que puede servir para ejemplificar como, a través del periodismo indígena un hecho de victimización es resignificado y puesto en el contexto de la resistencia indígena. El texto titulado “La recuperación de la Madre Tierra no puede morir” trata de la muerte de Efigenia Vásquez y de la

lucha por la tierra en su comunidad, el resguardo de Kokonuko, el caso que ya se mencionó más arriba. El relato comienza con una introducción que fija el marco temporal que interesa a la autora: “Hace más de 40 años, la comunidad indígena de Kokonuko inició su lucha por la tierra; cansados de ser terrajeros se armaron de azadones, picas, palas y se lanzaron a recuperar las tierras que legítimamente les han pertenecido” (Mestizo, 2018, p. 12).

Dos impactantes fotografías ilustran la continuidad de esta lucha; una de ellas, en blanco y negro, muestra a un grupo de aproximadamente cincuenta campesinos indígenas –mujeres, hombres y niños– con sus azadones alzados, en lo que a primera vista parece una actitud desafiante. Pero una mirada más detenida descubre que muchas de las personas sonríen, y se ve que realmente están celebrando una victoria. El pie de foto explica que acaban de “recuperar la Hacienda Cobaló”, en 1974. Esta foto tomada por Jorge Silva, el camarógrafo de la documentalista Marta Rodríguez, ha sido reproducida muchas veces y se ha convertido en una suerte de ícono de la lucha campesina por la tierra en Colombia. Al lado de esta foto histórica, el artículo presenta otra, tomada en la actualidad. Está en color y muestra el mismo motivo: un grupo de campesinas y campesinos con azadones alzados. Solo que son menos personas, y la mayoría de edad bastante avanzada. Ellos son los sobrevivientes de aquellas luchas de los años setenta, son memoria viva.

Una vez establecido el escenario, el horizonte temporal se amplía y el texto relata cómo los españoles se apoderaron del valle de Kokonuko, que en 1651 fue constituido el resguardo indígena, que la propiedad terminó en manos de los jesuitas en el siglo XVIII.

Los indígenas fueron la mano de obra de las haciendas, donde soportaban relaciones feudales de explotación y humillación como el terraje, donde además del trabajo de toda la familia, tenían que pagar con bienes como alimentos, mantas, hilos, gallinas, cabuya o cinchas al terrateniente. (Mestizo, 2018, p. 14)

De ahí el texto salta a los conflictos de los años setenta del siglo XX, a los intentos de “recuperar” el predio de Aguas Tibias con su complejo turístico, negociaciones con el propietario y con el Gobierno, que no dieron fruto, bloqueo del acceso al predio por los indígenas, y la intervención policial que resultó en la muerte de la comunicadora. El texto concluye con el testimonio de una comunera: “No importa cómo nos trate el Gobierno. Así nos

haga tragar gas, nosotros ya estamos acostumbrados. Por eso vamos a seguir peleando por lo nuestro y por nuestra integridad como pueblos indígenas” (Mestizo, 2018, p. 20).

Revista Unidad Álvaro Ulcué, N.º 3, 2019

En noviembre de 2018, el CRIC celebró en Popayán una gran “Minga del arte indígena”, un evento de tres días en el que los pueblos indígenas presentaban sus culturas con música, danza, artesanías y comidas típicas. Fue un alegre espectáculo de colores, sonidos y sabores que transcurrió en medio de los imponentes monumentos arquitectónicos de la colonia –la catedral, la gobernación, la alcaldía–, todos pintados desde siglos en blanco inmaculado. Por primera vez, los pueblos indígenas de la región se tomaron el corazón del poder local para afirmar sus múltiples identidades culturales; un acto simbólico de fuerte connotación política.

La tercera edición de la revista documenta la minga del arte con varios artículos y con muchas fotografías que enfatizan la diversidad étnica de los pueblos del Cauca a través de sus vestuarios y sus artesanías. El editorial aclara la estrategia política y comunicacional detrás de la minga: armonizar un espacio tradicionalista y excluyente.

A este sitio llegamos, no marchando en reclamo de nuestros derechos, sino mostrando nuestra riqueza cultural, la misma que ha sobrevivido a los cambios que impuso la conquista, la colonización, la conflictiva sociedad en la que aún vivimos y resistimos desde nuestros territorios. (CRIC, 2019, p. 3)

Los demás artículos de este número tratan de temas diversos: la ola de violencia que afecta el Cauca, la lucha de las mujeres en el movimiento indígena, la memoria de una avalancha del volcán Nevado del Huila que cobró la vida de cientos de indígenas hace 25 años. Con mucha fuerza, el desastre natural de 1994 pone de manifiesto el poder del volcán que por los Nasas que habitan sus laderas es considerado como el guardián del territorio, “quien recoge la energía negativa para transformarla en positiva”, y “se hace necesario realizarle armonizaciones para que libere toda esta energía que ha acumulado”. Con la avalancha, el espíritu de la naturaleza personificado por el volcán es interpretado como un mensaje para la comunidad: “Nos encontrábamos en estado de desequilibrio en el territorio, casi el tejido social estaba en

desorden”. En el idioma Nasa Yuwe, esta zona es llamada Kwë Zi’o, camino de joven, en referencia al legendario cacique Juan Tama quien, cuando joven, organizaba por aquí la resistencia contra los españoles. Hubo otros conflictos en años más recientes, por la minería y los cultivos ilícitos. Por ello, la señal del volcán es recibida como una enseñanza: “Los mayores y los tierradentrunos agradecen a la Madre Tierra, porque en dos segundos se esfumó todo lo que les habían impuesto”.

El último artículo de la revista se ocupa nuevamente de la comunicación y el periodismo. Se trata de un reporte sobre un Observatorio de Medios donde se evaluaron varios medios de comunicación regionales y nacionales en cuanto a su información relacionada con asuntos que conciernan las comunidades indígenas. El resultado de este ejercicio que fue realizado por comunicadores del CRIC y estudiantes de comunicación de la universidad indígena UAIIN no es sorprendente: se critica la distorsión de los hechos y una representación de los pueblos indígenas cargada de los prejuicios de los periodistas. Al final se presenta una lista de recomendaciones para comunicadores indígenas y para periodistas de medios convencionales para remediar esta situación y disminuir la discriminación.

Revista Unidad Álvaro Ulcué, N.º 4, 2019

El cuarto número de la revista *Unidad Álvaro Ulcué* está dedicado a la guardia indígena y resalta la labor de protección que realiza esta entidad, su importancia para “restituir la armonía” en los territorios indígenas, y el alto nivel de amenazas y violencia al que están expuestos sus miembros. El texto reclama la atención del Gobierno a que, ante la ausencia de las fuerzas del Estado, son ellos, los guardias, quienes tienen que enfrentar los actores armados en el territorio, poniendo su vida en riesgo. Si bien el artículo no es testimonial, en el sentido de reproducir las voces de víctimas o familiares, se puede considerar que es una expresión de un colectivo victimizado, la Guardia Indígena.

Pero hay otro artículo en esta edición que sí documenta de forma contundente los testimonios de víctimas individuales. Su título es “El crimen que rompió la armonía en el norte del Cauca”, y el tema es el problema de la desaparición forzada en las comunidades indígenas. En su tono general, este texto se distingue del tratamiento que los otros textos le han dado a los

hechos de violencia y de los víctimas, pues en vez de subordinar el sufrimiento individual a la causa colectiva de la organización indígena, les da el protagonismo a las víctimas.

El texto narra siete casos de comuneros indígenas que fueron desaparecidos, y siempre son personas cercanas a las víctimas –familiares, amigos, testigos del crimen– los que relatan los hechos. Se tematizan las afectaciones para las familias y para los sobrevivientes, la búsqueda y la espera, la desesperación, las depresiones. Todo un elenco de actores se coloca en el escenario: guerrilleros y paramilitares, policías y militares, autoridades indígenas y médicos tradicionales, entidades del Estado, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Mesa de Víctimas. Es una historia de víctimas del conflicto armado que se asemeja a las de miles de otras víctimas de desaparición forzada, pero también deja en evidencia que, desde una perspectiva indígena, la navegación por el tejido de instituciones que atienden a las víctimas tiene dificultades particulares. Así, se relata el caso de una madre que deja de buscar a su hijo porque “no sabía leer ni escribir, y tampoco entendía el idioma español” (Mestizo, 2019), y el de los padres de una víctima que “como no conocían las normas, no pudieron hacer nada”. Un líder Nasa “considerado Maestro en Sabiduría por la UNESCO” cuyo hermano fue desaparecido afirma con cierto fatalismo: “Como Nasa uno asume el hecho como una cuestión propia, porque uno sabe que está trabajando en la construcción de alternativas y esas son las consecuencias del conflicto”.

La desaparición forzada no solo produce afectaciones sociales y psicológicas, sino también espirituales. El paso del muerto a la vida espiritual está interrumpido y el espíritu vagante del difunto causa desarmonía. Esta crisis tiene que ser sanada a través de la medicina: “Se abre el camino para que el espíritu de la persona que fue desaparecida forzosamente nos diga para dónde quiere ir porque para nosotros no existe un cielo ni infierno, existen las montañas, las lagunas, los nevados, el volcán”, explica un médico tradicional. Solo entonces, cuando el espíritu de la víctima haya escogido su lugar en el paisaje, la familia y la comunidad pueden descansar. Finaliza el texto.

2.2 Conclusiones

En el desarrollo de mi argumento sobre la construcción de memoria colectiva desde las víctimas del conflicto armado en Colombia, los dos casos referidos en este capítulo confirman la tesis principal enunciada en el primer capítulo: que *hacer memoria* es un acto político, y de hecho, se puede considerar como un punto de partida de cualquier política. Necesariamente, la memoria que se centra en el sufrimiento de las víctimas de la guerra y de otras formas de exclusión social es el fundamento de políticas que aspiran a atenuar estas condiciones injustas. Hemos observado además, tanto en el caso de Hacemos Memoria como en los de Vokaribe y del CRIC, que la comunicación en público sobre la violencia sufrida puede significar un punto de inflexión en la vida de las personas victimizadas: el inicio de la conversión del sujeto de víctima en actor político.

También quedó en evidencia que la memoria está localizada, que está anclada en los territorios donde transitan las personas victimizadas y sus victimarios y muchos otros actores más. Los territorios donde transcurrieron (y muchas veces siguen transcurriendo) hechos de extrema violencia, están poblados de memorias. Algunas de ellas son negativas, traumatizantes, otras –aquellas que se refieren a la resistencia, la solidaridad y a la identidad cultural– dan el sustento simbólico para el desarrollo de la vida. Las configuraciones de los territorios son distintas, y así también lo son las memorias, e incluso, las posibilidades de formar memorias colectivas. Como evidenciaron los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en el transcurso del conflicto armado, que a su vez está compuesto por múltiples conflictos regionales, ciertas pautas de victimización se repitieron en todo el país, pero también hubo particularidades en cada territorio. Medellín y Barranquilla, por ejemplo, dos grandes centros urbanos, fueron el destino de grandes números de campesinos desplazados por la violencia en sus comunidades rurales. Pero mientras en Medellín se desató una guerra urbana desenfadada atizada por el narcotráfico, Barranquilla se mantuvo en relativa tranquilidad bajo un dominio absoluto de los paramilitares. En el Cauca, el desenlace del conflicto armado ha sido más parecido al de las zonas rurales de Antioquia. La topografía montañosa y la escasa infraestructura del departamento lo han hecho atractivo para los grupos ilegales. Pero el Cauca es una región donde las secuelas de la sociedad colonial aún son más visibles. Las comunidades indígenas en este departamento se han reunido

bajo la bandera de la identidad étnica para reclamar el acceso a tierra y para salvaguardar su estilo de vida campesino y comunitario.

Según las condiciones en cada territorio, entonces, las manifestaciones de la memoria colectiva varían. En todo caso, y esto complica el asunto, la constitución de una subjetividad de víctima tiene muchos matices. No todas las víctimas son iguales, pues en la guerra, la población civil se las tiene que arreglar con los diferentes actores contrarios que pasan por el territorio, ganando el control en un lugar para perderlo en otro. La inestabilidad y la inseguridad producen biografías quebradas y memorias fluctuantes, o del todo suprimidas. Nos concentramos, entonces, en la forma como estas experiencias individuales de victimización pueden ser mediadas, o mediatizadas, para aportar a la configuración de memoria colectiva. La memoria, como toda comunicación, necesita medios que la soportan. La radio, la revista, el blog, también las marchas y las mingas son medios que mediatizan la memoria. Y estos procesos de mediatización tienen un aspecto simbólico –por ejemplo, la resignificación de víctima en ser resistente– y un aspecto pragmático: son actos que requieren iniciativa, coordinación, comunicación, planificación.

La memoria colectiva –el imaginario del pasado común– es instituida y, como hemos visto en los apartados anteriores, junto con las personas –las y los activistas de la memoria– hay instituciones que sostienen el proceso de mediatización de la memoria. Son instituciones que facilitan el apoyo material (financiación, equipos, edificios), la normatividad (legislación de víctimas, de medios, de grupos minoritarios), la identidad y pertenencia (universidad, asociación de víctimas, radio comunitaria, autoridad tradicional indígena), la transmisión y conservación de conocimiento (talleres de capacitación, archivos, informes de derechos humanos, saberes ancestrales) que hacen posible que un grupo de personas organice un proceso de mediatización. Cuando el tejido de instituciones favorables es más amplio y más sólido, se facilita la creación del medio y, por tanto la de la memoria colectiva.

El proceso de institución de la sociedad ha sido el tema de la obra principal del filósofo griego-francés Cornelius Castoriadis, *La institución imaginaria de la sociedad* (2007). Como indica el título, para Castoriadis (quien, aparte de ser filósofo también ejerció como economista y psicoanalista) la imaginación juega un papel importante en este proceso. Pero a Castoriadis no le interesa la imaginación configurada “desde arriba” como la identidad nacional que ha sido el tema de la obra de Benedict Anderson, sino aquella que está al fondo de los procesos que

aspiran a una mayor autonomía de las personas y de las comunidades. Castoriadis se refiere a tres ejemplos históricos: la *polis* griega, la *commune* de París y la democracia occidental moderna. Si bien está claro que ninguna de estas sociedades representa un estado ideal político, lo que el autor quiere destacar es que en cada uno de los tres casos, se trata de la creación de una formación radicalmente nueva, prácticamente *ex nihilo*. Ahora bien, Castoriadis fue criticado por esta visión tan radical, pues ninguna sociedad se puede constituir sin precedentes, y en una conversación con Paul Ricoeur tuvo que conceder que ahí exageró un poco (Ricoeur y Castoriadis, 2016). La idea esencial, sin embargo, de la imaginación como fuente de la institución de una comunidad nueva, me parece productiva para nuestro tema, porque la imaginación y la memoria, me parece, son dos lados de la misma moneda; uno mira hacia el pasado, el otro hacia el futuro.

Imaginar y crear medios autónomos y comunitarios es una forma de abrir espacios para la comunicación de las personas hasta entonces excluidas del debate público, y esta discusión diferente, con nuevos temas y nuevos participantes, significa instituir una sociedad diferente, aunque el cambio no sea tan radical y abrupto como se lo imaginaba Castoriadis. En los casos concretos observados aquí, este proceso instituyente implica toda una serie de prácticas interrelacionadas: organizar asambleas, redactar propuestas para solicitar fondos, convocar a organizaciones sociales, crear formatos y contenidos, organizar mingas, etcétera. La imaginación se configura y se concreta en la acción.

Hay un elemento adicional, muy importante, que podemos observar en el trabajo de memoria de las comunidades indígenas: la memoria no se extiende solamente al ámbito de los humanos sino que incluye (y es sostenida también) el ámbito de la naturaleza. El paisaje es el libro de historia, el archivo de la memoria. Pero no un medio pasivo en el que los humanos inscriben sus recuerdos, sino un medio activo que habla y también es capaz de enviar señales como el trueno, el temblor, y hasta una avalancha devastadora, para amonestar a los humanos por sus actos que rompen la armonía en el territorio. Las paralelas con el pensamiento ecologista moderno son evidentes, solo que en las comunidades indígenas el concepto de armonía o balance ecológico corresponde a prácticas ancestrales y no está arraigado en narrativas tecnocientíficas sino en un mundo animado y poblado por espíritus y la filosofía del Buen Vivir.

El antropólogo colombiano Arturo Escobar, conocido por su crítica del concepto del desarrollo y de la colonialidad (ver el capítulo siguiente), ha sugerido trabajar con el concepto

del diseño para elaborar propuestas desde las organizaciones sociales y comunidades. Para Escobar, “discutir la innovación social desde perspectivas de diseño enriquece el entendimiento de las ciencias sociales sobre cómo se produce el cambio social cultural y, al mismo tiempo, radicaliza la práctica del diseño” (Escobar, 2016, p. 211). El concepto de diseño que adopta Escobar, apoyándose en teóricos como Tony Fry, Anne-Marie Willis, Enzo Manzini, Cameron Tonkinwise, y otros, se diferencia del diseño industrial modernista, principalmente por su enfoque ecológico, pues ve los objetos diseñados no solo en su función para el humano (utilidad, estética) sino en una red de relaciones mucho más amplia, considerando, por ejemplo, los efectos ambientales de los materiales utilizados, los procesos de trabajo involucrados, etc. Entonces el diseño se vuelve relevante para la creación de procesos sociales y comunitarios e interculturales. Y es precisamente lo que se puede observar en proyectos como los de Hacemos Memoria, Vokaribe y el programa de comunicaciones del CRIC: la práctica de diseñar nuevas vías de comunicación, a partir de las memorias de la guerra, para imaginar y diseñar colectivamente formas de convivencia. En los últimos años, el diseño colaborativo de proyectos para el cambio social ha sido adoptado, si bien con dificultades y ambigüedades, por la cooperación internacional.

En DW Akademie, por ejemplo, se ha adoptado una metodología llamada *human centered design* para diseñar herramientas digitales de comunicación, de manera colaborativa y adaptada a las necesidades de los usuarios. El pensamiento ecológico –o centrado en la Madre Tierra, en el caso de la cosmovisión indígena–, sin embargo, desplaza el ser humano del centro y amplía la mirada y el radio de acción. Por tanto, requiere de prácticas de diseño basadas en memorias e imaginarios que abarcan no solo la sociedad humana sino la sociedad completa de seres vivos. La cooperación internacional para el desarrollo se tendrá que acostumbrar a estas formas más amplias de comunicación; la crisis climática –la crisis del antropoceno– lo hace inevitable. El proyecto de cooperación que ya ha sido mencionado varias veces en este texto aun se concentró en la interacción entre humanos, en los derechos humanos. Pero en su transcurso se hizo sentir y comprender con cada vez más claridad que la memoria del conflicto armado debería incluir no solo las voces de las víctimas humanas, hay que dar cuenta también de los otros seres afectados. Este es un aprendizaje de las conversaciones que sostuve en los diferentes territorios, sobre todo con campesinos e indígenas. “Los diseñadores”, dice Tonkinwise, “siempre fueron agentes de la modernidad... Ahora deben priorizar el acercamiento

a otras culturas, no como ejemplos del pasado sino como modelos plausibles para el futuro” (Tonkinwise, 2016). Pero desde hace tiempo, las “otras culturas” están diseñando sus propios procesos. El potencial de la cooperación internacional para el desarrollo está en el diálogo, el aprendizaje mutuo. A la vista de la crisis global, los antiguos conceptos de desarrollo perdieron su vigencia, hay que buscar otros, más sostenibles. En el próximo capítulo vamos a dirigir la atención a la cooperación para el desarrollo de la memoria histórica, la memoria de las víctimas.

Capítulo 3. Cooperación, comunicación y desarrollo de medios

Varias veces en el transcurso de esta tesis se ha hecho referencia a la cooperación internacional. Concretamente, se han mencionado las contribuciones de DW Akademie de Alemania a los proyectos de Hacemos Memoria, de Vokaribe y del programa de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca. En lo que sigue quiero elucidar más cuáles han sido los aportes de esta cooperación y cómo incidieron en aquellas prácticas del periodismo que facilitan la construcción de memoria de las víctimas. Espero que esto nos pueda aproximar a comprender las condiciones que hacen posible que el diálogo con otros, y particularmente la cooperación para el desarrollo de medios, puede ayudar a construir una memoria colectiva que sienta las bases para libertad, justicia y autonomía.

Para poder responder estas preguntas es importante conocer tanto los fundamentos éticos de esta modalidad de cooperación como sus formas de procedimiento y metodologías. Entonces nuevamente hay que poner la atención en el marco institucional, sin olvidar, por supuesto, que las instituciones, como nos recuerda Castoriadis, son *instituidas* por las personas que conforman la sociedad. Así, la memoria de las instituciones también hace parte de la memoria colectiva y, en el presente caso, la memoria histórica no solo ha sido un objetivo de la cooperación sino también uno de sus motivos originales. En los capítulos anteriores hemos visto cómo la memoria institucional de Hacemos Memoria, Vokaribe y el CRIC influye en su forma de definir su relación con la categoría de víctima y de construir la memoria narrativa del conflicto armado. La historia de conflictividad en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, marcó el trabajo de Hacemos Memoria. Pero ha sido necesario el diálogo con otros, con comunidades de víctimas en zonas rurales, para iniciar una reflexión sobre esta condición propia. En Vokaribe, el diálogo con víctimas del conflicto armado abre memorias propias de violencias experimentadas en diversos contextos. Sin embargo, estas no pueden ser (todavía) discutidas en la radio. Y en el caso del CRIC, la historia de la organización étnica-política es invocada en todas sus comunicaciones, como parte de una memoria ancestral de los pueblos indígenas. Para la cooperación, la memoria institucional es de igual importancia y, por lo tanto, es útil esbozar aquí también la historia de DW Akademie y el concepto central a partir del cual esta organización fundamenta su cooperación con otras, a decir, el concepto del desarrollo de medios.

Es imposible considerar la cooperación para el desarrollo de los países industrializados sin hacer referencia a las críticas proferidas por las ciencias sociales, ya de larga data, a la ideología del desarrollo en general, y a sus aspectos “postcoloniales” en particular. Vamos a resumir algunas de las controversias más importantes con especial atención al concepto del desarrollo de medios. Lo que aquí nos debe interesar, una vez más, es la pregunta por el empoderamiento de las víctimas. Es bajo este criterio, entonces, que habrá que evaluar el concepto de desarrollo de medios.

3.1 La cooperación internacional y la memoria histórica

¿Es posible impulsar la construcción de la memoria histórica de un colectivo, una sociedad, desde afuera? Hace un siglo, el sociólogo Maurice Halbwachs introdujo la noción de que la memoria colectiva es el adhesivo simbólico que aglutina las sociedades. Para él, los recuerdos de cada persona están enmarcados en una memoria colectiva de la sociedad a la que el individuo pertenece:

Para obtener un recuerdo, no basta con reconstruir pieza a pieza la imagen de un hecho pasado. Esta reconstrucción debe realizarse a partir de datos o nociones comunes que se encuentran en nuestra mente al igual que en la de los demás, porque pasan sin cesar de estos a aquella y viceversa, lo cual solo es posible si han formado parte y siguen formando parte de una misma sociedad. (Halbwachs, 2004b, p. 34)

La memoria colectiva está anclada en las tradiciones; le otorga cohesión al grupo, y para ello, ciertos recuerdos son seleccionados y otros destinados al olvido. Halbwachs contrasta la memoria colectiva con la historia escrita, la historiografía, pues “del pasado sólo retiene lo que aún queda vivo de él o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. Por definición, no va más allá de los límites de este grupo” (2004b, p. 81). Al mismo tiempo, reconoce que la separación de los recuerdos importantes de aquellos que se descartan es una cuestión de poder, y que la calificación de acontecimientos históricos como centrales para la memoria es un privilegio de los “hombres fuertes”. El término memoria histórica se refiere entonces a la interpretación colectiva de la historia por un grupo marcado por toda una gama de

características sociales y culturales; es producto de la comunicación. Para enfatizar este aspecto, algunos autores usan el término memoria comunicativa (Assmann, 2008; Welzer, 2002), otros se enfocan en la memoria mediatizada (Hajek, Lohmeier y Pentzold, 2016; Hoskins, 2011, 2018; Zierold, 2008). Contrario a la historia fijada en escritura, que puede durar milenios sin cambiar en los archivos, la memoria histórica se adapta constantemente a las condiciones y los intereses de los grupos que la cultivan.

Varias décadas después de Halbwachs –el sociólogo murió en 1945 en el campo de concentración nazi Buchenwald–, con la experiencia de la barbaridad de las dictaduras del siglo XX todavía viva en el recuerdo de los sobrevivientes, tanto en Europa como en Latinoamérica se comenzó a considerar una memoria centrada en el sufrimiento de las víctimas como la base para una política orientada hacia la dignidad. Cada lugar, cada nación, tiene su propia historia, sus propias tragedias. ¿Puede la elaboración de estos traumas ser la base de una cooperación internacional en la cual el empeño por superar las condiciones de extrema violencia incida en la construcción de memoria?

Al comienzo del siglo XXI, cuando el conflicto armado en Colombia alcanzó un punto de alta complejidad, el libre desarrollo de los individuos y de la sociedad estaba bloqueado por una atmósfera de estancamiento, donde regían el autoritarismo, la violencia, la corrupción y el miedo. No había suficiente fuerza y voluntad dentro de la sociedad para superar este bloqueo. Los mensajes contradictorios emitidos por los contrincantes del conflicto armado reforzaban la paralización: el Estado pretendió proteger el imperio de la ley con medios ilegales y prometió defender la libertad de los ciudadanos cuando en realidad instaló formas crudas de represión que se asemejaban a aquellas impuestas por las dictaduras militares más notorias en la región durante los años setenta y ochenta. Por otro lado, los grupos guerrilleros cometieron atrocidades en el nombre de la justicia social y sustentaron sus aspiraciones de una sociedad comunista en una de las expresiones más radicales de la economía de mercado: el narcotráfico. Gregory Bateson acuñó el término doble vínculo (*double bind*) para esta clase de obstrucciones de la comunicación que son frecuentes en las relaciones interpersonales (Bateson, 1998).¹ Un ejemplo

¹ La intención de Bateson de explicar la génesis de la esquizofrenia a partir de este tipo de trampas relacionales fue posteriormente refutada. El concepto del doble vínculo, sin embargo, ha sido aplicado de manera fecunda para una variedad de fenómenos de la vida social. Agnes Heller, por ejemplo, identifica el doble vínculo entre la lógica tecnológica, funcional y racional, por un lado, y la imaginación histórica, por otro lado, como el dilema

es la madre que, mientras castiga a su hijo, le dice “¡lo hago sólo porque te amo!”, conduciendo al niño a un dilema: o se resigna a aceptar el castigo injusto o contradice y traiciona el amor de su madre. Cuando una persona emite señales ambiguas o contrarias, le hace difícil o imposible a la contraparte dar una respuesta clara y cooperativa. Durante el conflicto armado en Colombia –un país donde los valores cristianos están siendo celebrados hasta por los marxistas más doctrinarios–, estas incoherencias abundaban, haciendo imposible que se encontraran soluciones para salir de una crisis que afectaba la vida de millones de personas.

Posiblemente, sin el apoyo internacional a las negociaciones para el Acuerdo de Paz con las FARC, el conflicto armado se hubiera prolongado por más tiempo. Con el auspicio de los países garantes, Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, y el acompañamiento de Estados Unidos y la Unión Europea, se pudo lograr que los partidos contrincantes desarrollaran la suficiente confianza para sentarse juntos a la mesa de negociación. Hasta entonces, el conflicto armado en Colombia había recibido poca atención en los escenarios internacionales, tanto políticos como mediáticos. Por cierto, según el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra –que fue aprobado en 1977 y ratificado por el Parlamento Colombiano en 1994–, el término oficial es “conflicto armado interno”; o sea: un asunto entre colombianos. Pero evidentemente, no se trataba de un conflicto aislado. Los intereses y enlaces de sus actores, tanto políticos como económicos, trascendían el territorio nacional. Varios factores externos atizaron la violencia: la fuerte ayuda militar de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, el apoyo de países como Cuba y Venezuela a las guerrillas, los negocios con armas y drogas y la explotación extranjera de recursos naturales, para nombrar algunos de los más notorios. Ante la larga historia de intervenciones que propulsaron los conflictos violentos en Colombia, las recientes contribuciones de la comunidad internacional para disminuir la confrontación significaron un cambio excepcional. Cuba, Noruega, Venezuela y Chile actuaron como garantes del proceso de paz; otros países lo acompañaron, entre ellos los Estados Unidos y algunos de la Unión Europea; con seguridad, el firme apoyo de la comunidad internacional contribuyó a que en diciembre de 2016 se pudo firmar el Acuerdo de Paz, a pesar de la fuerte crítica de la oposición y de un plebiscito perdido. Muy pronto se reveló, sin embargo, que las expectativas hacia un cese de los

característico de la sociedad moderna, condicionada al mismo tiempo por la durabilidad como por la facultad de cambiar (Heller, 2005). Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 1996) se refiere a *double bind* como una amenaza para el practicante de las ciencias sociales: se le exige que utilice las herramientas de pensamiento establecidas en la academia. Pero muchas veces es justo eso lo que le impide entender la realidad social.

conflictos violentos habían sido demasiado elevadas. Con la dejación de las armas por las FARC ni la violencia, ni el sufrimiento de las víctimas terminaron –y tampoco las problemáticas sociales subyacentes al conflicto armado–. En esta situación difícil, entre esperanzas y retrocesos, se tuvo que poner a prueba el compromiso de la comunidad internacional con la construcción de la paz.

La cooperación internacional, por lo general, está vinculada a los intereses geoestratégicos de los gobiernos. Pero las políticas y comerciales no son el único ámbito donde se realiza la cooperación. También existen muchas iniciativas de la sociedad civil –organizaciones no gubernamentales, fundaciones privadas, universidades y iglesias, y otras– enmarcadas en algo que se puede llamar la solidaridad entre pueblos. En Alemania, el proceso de paz del gobierno Santos cautivó la atención de los medios; las conversaciones en La Habana, la firma del Acuerdo de Paz y el Premio Nobel de Paz fueron noticias de interés mundial. En consecuencia, varias organizaciones de la sociedad civil en Alemania se sintieron convocadas a implicarse en los esfuerzos para estabilizar la paz en Colombia. En un discurso en el parlamento alemán, el enviado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores para apoyar el proceso de paz en Colombia caracterizó la relación entre ambos países así: “no es ni colonial ni postcolonial y tampoco neoliberal, sino se trata de una relación colegial” (Koenigs, 2016). Y para darle sustento económico a esta nueva amistad, se aprobó un considerable aumento de los recursos para la cooperación con Colombia, un país, al fin de cuentas, que no había figurado prominente en el mapa de las relaciones exteriores de la República Federal.

Desde la perspectiva alemana, la preocupación de los colombianos con la memoria histórica y con temas como el perdón y la reconciliación resonaba con experiencias propias. Este fue el aprendizaje principal de siete décadas de debate sobre la memoria en Alemania desde el 1945: que había que escuchar los testimonios de las víctimas. El tema de la memoria colectiva, por tanto, ocupó un lugar central en los discursos de altos representantes del Gobierno alemán durante sus visitas oficiales a Colombia,² y se concretaron varios proyectos conjuntos para fortalecer el debate sobre la memoria en Colombia. Así, por ejemplo, Alemania apoyó el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica y la construcción del sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación. En Bogotá se fundó el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ),

²Un ejemplo es el discurso del presidente federal de Alemania, Joachim Gauck sobre “Reconciliación y cultura de la memoria en Alemania” dado en la Universidad de los Andes, Bogotá en 2013. <https://bit.ly/2B2WGkl>

que agrupa una red de universidades alemanas y colombianas, entre ellas la Universidad de Antioquia, para la investigación y el intercambio académico sobre temas relacionados con la construcción de paz y memoria histórica (Louis, 2019; Ruiz Romero, 2020).

En este contexto se gestiona también el proyecto de DW Akademie con sus aliados colombianos, que propone impulsar y fortalecer los debates públicos sobre la memoria a través del periodismo. Era una propuesta ambiciosa, para algunos, teniendo en cuenta la polarización política en Colombia que se reflejaba también en los medios. El proceso de paz evocaba fuertes emociones a favor y en contra, y en las redes digitales proliferaba y las audiencias se retraían cada vez más a espacios mediáticos que afirmaban su visión preconcebida del mundo.

No era un fenómeno nuevo. Ya en la Alemania de postguerra, Adorno constató que una mentalidad fascista continuaba por debajo de la nueva institucionalidad democrática. Era probable, advertía el filósofo, que el esclarecimiento del pasado solamente sería aceptado por los ya convencidos, los demócratas. A pesar de ello, el esfuerzo no era en vano porque servía para reforzar a este grupo en su argumentación (Adorno, 2009). Este razonamiento, hecho por un judío alemán que retornaba del exilio a un país que aún se resistía a confrontar su pasado, se hace valer nuevamente, esta vez en Colombia.

3.1.1 Deutsche Welle: fundaciones de un medio

Solo ocho años habían pasado desde el exterminio de los judíos en Europa, del bombardeo de las ciudades alemanas y del colapso del régimen nazi, cuando en 1953 se fundó la Deutsche Welle. Colonia, la sede del nuevo medio, fue una de las ciudades más destruidas en la guerra, pero la reconstrucción de infraestructura y economía se llevaba adelante energicamente. La mirada de los alemanes estaba orientada hacia un futuro próspero, del oscuro pasado mejor no se hablaba. En los años de posguerra, la creación de nuevos medios de comunicación fue una pieza clave para reagrupar la población alrededor de nuevos valores políticos. Pero, el país estaba dividido, y por consecuencia se establecieron dos sistemas de medios. En la parte que se encontraba bajo influencia soviética –la República Democrática de Alemania–, los medios estuvieron sujetos a la censura y al estricto control del Estado gobernado por el partido unificado. Por contraste, en el lado occidental –la República Federal de Alemania–, se instaló un sistema de medios públicos, inspirado en el modelo británico de la BBC. Desde

de la reunificación de Alemania el sistema occidental fue extendido a todo el país. Es un sistema dual que consiste, por un lado, en una amplia gama de medios –impresos y electrónicos– y, por otro lado, en una red federal de canales y emisoras públicas. Como miembro de esta red, a la Deutsche Welle le corresponde un rol particular: es la cadena para el exterior; su misión, por tanto, es transmitir información desde Alemania hacia el mundo.

Lo característico de los medios públicos alemanes como la Deutsche Welle es que, al igual que el modelo británico, son financiados con dineros públicos, pero no están bajo la tutela del Estado. Son independientes en cuanto al uso de sus finanzas y el nombramiento de los gerentes y, sobre todo, con respecto a la programación. Mantienen una cierta distancia crítica de los gobiernos, aunque nunca una oposición radical; su fundación ética, igual que la del Gobierno, es la constitución. El Estado debe garantizar su financiación, pues, los medios públicos son considerados un servicio esencial de información para la ciudadanía –contrario a los medios privados, no están regidos por intereses comerciales–. La independencia editorial de los medios públicos es vigilada por representantes de diferentes sectores de la sociedad: los parlamentos y partidos políticos, las iglesias, el concejo central de los judíos en Alemania, los sindicatos, las universidades, asociaciones cívicas, y otras más. La responsabilidad de este gremio es asegurar la provisión de la ciudadanía con información balanceada y la representación de un amplio espectro de opiniones, siempre y cuando se encuentren dentro del margen normativo de la constitución.

En la memoria institucional de los medios públicos alemanes, el recuerdo del pasado está intrínsecamente imbuido. Como medios democráticos y pluralistas, representan la negación absoluta de los regímenes totalitarios. Por lo tanto, se puede decir que la memoria histórica es constitutiva de su identidad. Para la Deutsche Welle, esta orientación por valores fundamentales está fijada en una propia Ley Deutsche Welle, de 2004, donde dice que “las ofertas de la Deutsche Welle deben facilitar la comprensión de Alemania como nación cultural crecida de forma europea y como Estado de derecho democrático y liberalmente constituido” (Deutsche Welle, 2004, p. 8).³

³ "Die Angebote der Deutschen Welle sollen Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und freiheitlich verfaßten demokratischen Rechtsstaat verständlich machen", traducido de la Ley para la Emisora de Derecho Federal Deutsche Welle.

Pero la Deutsche Welle no solo está encargada de difundir los puntos de vista de la Alemania democrática. Su misión va más allá de la información: a través de DW Akademie, el centro de capacitación de Deutsche Welle apoya la formación de periodistas y la creación de medios democráticos en otras partes del mundo. En un mundo fragmentado luego del fin de la guerra fría, DW Akademie se convirtió en un instrumento importante de la cooperación para el desarrollo. Las nuevas y frágiles democracias que emergían en distintas regiones solo se podían sostener cuando había medios de comunicación fundamentados en valores democráticos y una ética profesional periodística al servicio de la sociedad. Hoy, DW Akademie implementa proyectos en aproximadamente 50 países, muchos de ellos con historias recientes muy conflictivas. Según su definición propia, DW Akademie es

el centro de Deutsche Welle para el desarrollo internacional de medios de comunicación, la formación periodística y la transferencia de conocimiento. Por medio de sus proyectos, fortalece el derecho humano a la libertad de opinión y al libre acceso a la información. DW Akademie capacita a personas en todo el mundo para la libre toma de decisiones con base en hechos fiables y en el diálogo constructivo. (DW Akademie, 2020, noviembre 8)

El concepto central de esta descripción es el de los derechos humanos, que por lo demás, constituye el principio orientador de toda la cooperación internacional de la República Federal de Alemania. El derecho humano en cuya defensa se inscribe la DW Akademie (sin restarle importancia a los otros) está fijado en artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Para el proyecto en Colombia que es tema de la presente investigación, esta explícita orientación hacia los derechos humanos ha tenido importantes consecuencias. Hasta entonces, los esfuerzos de DW Akademie estaban orientados a mejorar las capacidades y las condiciones de trabajo de periodistas y, por tanto, un proyecto cuyo objetivo era promover la memoria histórica debería capacitar a periodistas en este sentido. De esta manera se iba a contribuir también al objetivo principal, a decir fomentar la libertad de expresión.

Sin embargo, en el Ministerio de Cooperación de Alemania, el financiador del proyecto existía una concepción distinta. Según los asesores del ministerio, el objetivo del proyecto tenía que ser formulado de tal manera que la intervención fortaleciera el derecho del grupo poblacional más vulnerado. Los periodistas, en esta visión, no eran el grupo más afectado por la violencia. El grupo más afectado eran las víctimas. Ahora bien, se puede objetar que muchos periodistas son victimizados, que el ejercicio de su profesión es peligroso y su derecho de expresión recortado de muchas maneras. Todo esto es cierto; pero poner el enfoque en las víctimas –el gran universo de las víctimas, sin dividirlo en subcategorías– obligó a repensar la cooperación. Los periodistas ya no eran el grupo objetivo, sino eran mediadores. Había que ampliar el radio de acción y lograr que periodistas y víctimas trabajaran de manera conjunta. Esto era otro periodismo: el periodismo hecho con y por las víctimas.

3.1.2 El diseño de la cooperación

Así como las instituciones emergen de procesos históricos, también van elaborando su propia memoria histórica, que forma parte de su memoria institucional, y como tal, figura como la base para la planeación y toma de decisiones. Las instituciones crean sus propias narrativas y las adaptan en el transcurso de su evolución (Corbett, Grube, Lovell, y Scott, 2020). Por lo general, estas narrativas de memoria institucional suelen referirse a los valores sociales y a cuestiones de legitimidad, en particular, de relaciones de poder (Cardoso y Pomim, 2021).⁴ Hemos visto, por ejemplo, como la Deutsche Welle construye su identidad institucional sobre las lecciones aprendidas de la historia alemana, y cómo los coletazos del conflicto armado en las universidades públicas de Colombia se impregnaron en las experiencias individuales y colectivas del grupo Hacemos Memoria.⁵ En la memoria institucional de Vokaribe Radio, la lucha por los medios comunitarios y el poder de la música popular como expresión cultural

⁴ En el ámbito de la administración de empresas es común referirse con memoria institucional a los procesos de acumulación y transferencia de conocimientos con el fin de incrementar la eficiencia y la eficacia. Cardoso y Pomim prefieren usar el término memoria organizacional para estos actos pragmáticos y reservar el concepto de memoria institucional para aquellos más relacionados a valores e identidades, dejando claro, sin embargo, que ambos están intrínsecamente relacionados (Cardoso y Pomim, 2021).

⁵ En años recientes, la reflexión crítica sobre la memoria institucional está ganando fuerza. Así, por ejemplo, en Alemania un informe sobre el rol del ministerio de relaciones exteriores en la época nazi causó un debate polémico (Conze *et al.*, 2010). En Australia, la crítica postcolonial del racismo en las universidades demuestra la necesidad de una confrontación con la memoria de las instituciones (Kearns, 2020).

autónoma figuran prominentemente; la transformación de guerrilleros en gestores de la comunicación, por otro lado, también forma una parte medular de la memoria de Vokaribe, pero de una memoria más privada y menos pública. En el CRIC, la memoria institucional está intrínsecamente relacionada con la resistencia indígena y la configuración de la identidad étnica.

Para la cooperación entre las instituciones, estas memorias, en cuanto configuran identidades, son esenciales; a partir de ellas se pueden negociar las condiciones de una cooperación. Pero, por supuesto, una cosa son las memorias de las instituciones –generalmente fijadas en actas, reglamentos, informes, archivos, etc.–, y otra, las memorias de las personas que trabajan en y con las instituciones. Por ejemplo, las distintas afectaciones que los integrantes de las tres organizaciones experimentaron por causa del conflicto armado marcaron sus percepciones y su actuación. Había reporteros de guerra, guerrilleros reinsertados, personas que perdieron familiares o fueron desplazadas y otras que luchaban por su tierra y su cultura. Por otro lado, las relaciones con los cooperantes alemanes de DW Akademie estaban marcadas por las diferencias abismales entre norte y sur global: el poder adquisitivo, las posibilidades de acceder a servicios de salud, educación, tecnologías, viajes, etcétera. Sin embargo, el hecho de que la confrontación crítica con la historia propia formaba tanto parte de la identidad institucional de la Deutsche Welle como la cobertura periodística de conflictos, hizo posible un cierto entendimiento y la formulación de objetivos comunes entre estos socios desiguales.

Lograr el objetivo de la cooperación, en este caso: mejorar las condiciones para que las víctimas puedan contribuir activamente a la memoria colectiva, significó, por tanto, construir un complicado tramado de relaciones y de memorias. Cabe señalar que, en la configuración del proyecto, las víctimas constituían el otro; eran los beneficiarios finales del proyecto, pero no sus actores principales. Más bien, el proyecto estaba diseñado para cambiar las perspectivas y las prácticas de mediadores hacia las víctimas del conflicto armado. Estos mediadores eran los periodistas y comunicadores de medios comunitarios –los interlocutores “naturales” de DW Akademie–. Existía entonces una base común, una referencia compartida a pesar de las diferencias culturales, que consistía en la libertad de expresión y el periodismo. Las prácticas que cada actor realizaba bajo este título eran muy variadas, pero suficientemente cercanas como para constituir el fundamento para una “relación de colegas”. El escepticismo inicialmente manifestado con franqueza por el CRIC –“la cooperación debería descansar un poquito”– disminuyó y, luego de haber firmado el acuerdo de cooperación con DW Akademie, cada

organización trabajó durante cuatro años en su respectiva región para alcanzar los objetivos acordados.

En el mundo de la cooperación para el desarrollo existe una variedad de metodologías diseñadas para garantizar la eficacia de los proyectos y el uso apropiado de los fondos públicos. Plantear objetivos realistas, por ejemplo, es tan indispensable para una exitosa gestión de cambios como una permanente evaluación y adaptación de las intervenciones. Una herramienta importante para ello puede ser la formulación de indicadores que permiten verificar en qué medida los logros deseados se están alcanzando. Es imprescindible que las partes involucradas –la entidad financiadora, la agencia de cooperación y las organizaciones locales que ejecutan el proyecto– interpreten estas formulaciones de una manera congruente para evitar malentendidos y, en su consecuencia, resultados no deseados. A menudo, factores culturales, así como particularidades institucionales y los hábitos asociados a ellas, pueden conducir a las personas implicadas en un proceso de cooperación a llegar a interpretaciones distintas del mismo asunto. Solo la participación de todos los actores involucrados en la formulación de los objetivos del proyecto conjunto, en otras palabras, el diseño colaborativo de metodologías apropiadas y de instrumentos para medir los avances, pueden disminuir el riesgo de que posibles discrepancias epistemológicas obstruyan el alcance de los resultados deseados.

Como muchas otras organizaciones en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, DW Akademie aplica el método del marco lógico (*logical framework*) para la planeación e implementación de proyectos.⁶ La ventaja de este instrumento es que permite visualizar de manera simple cómo las actividades de los actores involucrados (las organizaciones contrapartes del proyecto) contribuyen a ciertos logros, los cuales, se supone, conducen a la consecución de un objetivo general. El objetivo debe ser formulado de tal manera que, según la información disponible antes de iniciar el proyecto, alcanzarlo dentro el tiempo previsto y con los recursos disponibles, parece un propósito realista. Generalmente, los proyectos de la cooperación para el desarrollo aspiran a un cambio social y el grado en que el proyecto logra contribuir a este cambio es su impacto. El marco lógico, por tanto, sirve para concretar un imaginario social mediante una cadena de causas y efectos que se puede representar

⁶ Inicialmente desarrollado en 1969 por la agencia estadounidense USAID, el modelo de *logical framework* es utilizado por la agencia alemana de cooperación técnica GIZ, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina CEPAL (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005), entre otras.

en un sencillo esquema tabular, la llamada matriz de impacto (tabla 1). Al mismo tiempo, puede ser utilizado para verificar la eficiencia del proyecto y formular una respuesta a la pregunta: ¿Se ha logrado el impacto deseado con los recursos disponibles?

La matriz de impacto muestra cómo se supone que las actividades del proyecto producen ciertos logros (*outputs*), los cuales, a su vez, contribuyen al alcance de un objetivo general. En el caso del proyecto estudiado aquí, este objetivo general era la participación de víctimas de conflictos violentos en debates públicos sobre la memoria histórica con el apoyo de medios locales. Los aportes de las organizaciones locales que participaban en el proyecto fueron definidos como logros, con los respectivos indicadores para medir su alcance. Así, se proyectó que la Universidad de Antioquia iba a instalar un centro de competencia para fomentar el diálogo público y la producción periodística sobre violaciones a los DD.HH. en comunidades locales de Antioquia; a Vokaribe Radio le correspondía asesorar a medios comunitarios y organizaciones sociales en el desarrollo de ofertas participativas de información local; y del CRIC se esperaba que publicara información, cuya relevancia para la población indígena se iba a verificar mediante un estudio cualitativo posterior.

En la matriz también se incluyen las actividades que, según la lógica de impacto, conducirán a los resultados deseados, y que son subvencionadas por el donante. Como se puede ver en la tabla, estas actividades consisten principalmente en medidas de formación y en asesoría de DW Akademie para los socios locales en lo que atañe a su desarrollo organizacional y sus competencias de capacitación. Con estas actividades se espera instalar habilidades en las organizaciones locales que les permitirán conducir programas de formación en el ámbito del periodismo y los derechos humanos en su respectivo entorno social.

Tabla 1
Matriz de impacto del proyecto de DW Akademie en Colombia 2016-2019 (simplificada)⁷

Objetivo del proyecto: Con el apoyo de medios locales, víctimas de conflictos violentos participan en debates públicos sobre violaciones a los DDHH y sobre la Memoria Histórica.			
Organización:	Universidad de Antioquia	Vokaribe Radio	CRIC
Logro:	Un centro de competencia en la UdeA fomenta el diálogo público y la producción periodística sobre la memoria de crímenes contra los derechos humanos.	Vokaribe asesora a medios comunitarios y organizaciones sociales en el desarrollo de ofertas participativas de información local.	El programa de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca produce publicaciones sobre temas relevantes para la población indígena.
Indicador:	7 iniciativas locales de medios y organizaciones de víctimas publican trabajos periodísticos sobre la memoria histórica de crímenes contra los DDHH.	5 medios y organizaciones sociales producen, como resultado de la asesoría de Vokaribe, 5 informes periodísticos al mes.	El centro de medios del CRIC produce 2 informes al mes. Habitantes de comunidades indígenas estiman relevantes los productos del CRIC.
Actividades:	DW apoya en la asesoría a medios locales, desarrollo de formatos participativos con organizaciones de víctimas. Asesoría para el desarrollo de un centro de competencias para periodismo y memoria. Desarrollo de currícula y proyectos de investigación.	DW asesora a Vokaribe en la construcción de un centro de capacitación para medios comunitarios. Desarrollo de contenidos sobre derechos humanos. Asesoría con respecto a la sostenibilidad económica de la emisora.	DW asesora al CRIC en la construcción de un centro de medios indígenas (desarrollo organizacional, planeación). Asesoría y apoyo en la formación de comunicadores indígenas como docentes y en la producción de contenidos sobre ddhh.

Ahora bien, una representación tan comprimida tiene ventajas, pero también serios problemas en tanto de ahí derivan ciertas prácticas. El principal mérito de la matriz es, como ya se ha mencionado, que facilita la orientación de los diferentes actores del proyecto. Es una herramienta sencilla a la cual se puede recurrir en cada momento para asegurarse de que las actividades van en la dirección esperada. En otras palabras, sirve como una brújula que siempre señala el norte del proyecto. Pero por el otro lado, es obvio que la representación simplificada

⁷ Cabe mencionar que una cuarta organización, la red de periodistas de investigación Consejo de Redacción, participó en el proyecto haciendo aportes muy valiosos en la formación de periodistas, acerca de los derechos humanos y la memoria histórica. No se ha incluido en este estudio porque su característica es distinta a la de las otras tres organizaciones. No es una iniciativa local anclada en un territorio específico sino una red de profesionales a nivel nacional.

no puede hacer justicia a la complejidad de los procesos.⁸ En la mayoría de los casos es difícil, si no imposible, saber si un cambio observado realmente fue producto del proyecto o si corresponde a otros factores. Una mayor participación de víctimas en los debates públicos también se puede haber generado por iniciativas de otras organizaciones, del Estado y de los medios, o bien, por una mayor receptividad de la sociedad en general.⁹

Pero tal vez el asunto más problemático con el marco lógico es que restringe la mirada a ciertos aspectos (causas y efectos) y deja otros –de igual o mayor importancia, pero no previsibles– fuera del cuadro. Para Vokaribe, por ejemplo, fue sumamente difícil realizar el logro aspirado, a decir, asumir el rol de catalizador para que otros medios facilitaran la conversación sobre memoria y derechos humanos. En primer lugar, existen muy pocos medios alternativos o comunitarios en la cercanía de la emisora y, en segundo lugar, ninguno de ellos dispone de la motivación política y las capacidades profesionales requeridas para poder asumir la difícil tarea de hacer memoria del conflicto armado. Además, la precariedad económica de estos medios impide que sus miembros se involucren en actividades como talleres y reuniones, pues muchas veces faltan los recursos incluso para trasladarse de un sector a otro en la ciudad. Por otro lado, la matriz de impacto no puede dar cuenta de logros muy importantes de Vokaribe: la transformación de exguerrilleros en comunicadores sociales, por ejemplo, o historias de vida como la de Octavio, un hombre que por las circunstancias de la pobreza no pudo estudiar, pero en la radio comunitaria encontró un modesto salario y se convirtió en el orgullo de su familia y, además, en una figura muy importante para su entorno social: el reportero del barrio.

Pese a sus debilidades, la metodología del marco lógico todavía tiene buena acogida en las organizaciones de la cooperación para el desarrollo, sobre todo porque su forma de representación esquemática permite a los ejecutivos responsables de la financiación revisar un gran número de proyectos en muy poco tiempo. Sin embargo, una cierta rigidez del esquema dificulta su adaptación a realidades complejas, fluctuantes y muchas veces imprevisibles (Hummelbrunner, 2010). Hay que señalar también que, si bien la metodología del marco lógico

⁸ En efecto, el marco lógico incluye dos columnas adicionales que aquí se omitieron. Una de ellas representa las fuentes de verificación para cada indicador; la otra, suposiciones respecto a eventos que pueden poner en riesgo a cada logro. Pero, aun así, la matriz sigue siendo una representación que difícilmente corresponde a la realidad del proyecto.

⁹ Se ha evidenciado, de hecho, que en la temporada de reducción del conflicto armado luego del Acuerdo de Paz, las víctimas muestran una mayor participación política que las personas no directamente afectadas por la violencia (Rojas, 2022).

está diseñada para facilitar la participación de las organizaciones en la conceptualización del proyecto, en la realidad existen factores que pueden llegar a constituir serios obstáculos. Uno de los mayores riesgos es que en las organizaciones que implementan las actividades se puede generar una tendencia a ocultar los errores para no poner en peligro la continuación del financiamiento. La matriz es percibida como algo fijo, y muchas veces, como algo impuesto. Por ejemplo, puede resultar que un logro o un indicador esté mal formulado o que en el curso del proyecto se presente una situación distinta a la imaginada en la fase de planeación. Si bien se sabe que técnicamente es posible ajustar la matriz a las realidades cambiadas, esto requiere de un mayor esfuerzo burocrático pues hace necesario convencer a toda una cadena de funcionarios de la necesidad del cambio. Existe entonces una cierta inercia al interior de las agencias de cooperación frente a posibles ajustes que pueden ser necesarios para aumentar la eficacia del proyecto o incluso para evitar su fracaso. Mucho más difícil es que las organizaciones locales gestionen cambios en el marco lógico, sobre todo en contextos culturales donde estas organizaciones se caracterizan por estructuras jerárquicas. A esto se suman desniveles de poder entre las dos partes participantes de la cooperación, marcados no solamente por el control de los recursos económicos sino también por otros factores como género, nivel educativo, color de piel, entre otros. También es significativo que las reglas de juego de la cooperación, así como las metodologías aplicadas –el marco lógico en el caso presente– suelen ser establecidas por los donantes y sus instituciones intermediarias ubicadas en los países industrializados del hemisferio norte, y no por los beneficiarios de la cooperación, aquellas organizaciones y poblaciones del hemisferio sur, a cuyo empoderamiento se aspira. De hecho, el uso de términos como “donante” y “beneficiario” revela algo que la incorporación de metodologías y terminologías de participación no ha podido ocultar: desigualdad fundamental implicada en el modelo del desarrollo.

Pero cualquier cooperación voluntaria presupone un cierto grado de reciprocidad: cada regalo y cada servicio prestado demandan una contraprestación. En el caso de la cooperación para el desarrollo la contraprestación solo puede ser simbólica: los beneficiarios reconocen el valor de “lo recibido”, por ejemplo, la “transferencia de conocimientos”. En el proceso, los expertos se vuelven más expertos y los donantes acumulan capital simbólico que, a su vez, puede ser traducido en ventajas materiales. Desde muy temprano, la antropología descubrió la reciprocidad como un mecanismo esencial para la cohesión de las sociedades, más allá de

consideraciones utilitaristas. En su *Essai sur le don*, publicado hace cien años, Marcel Mauss hace una observación sorprendente sobre el intercambio de bienes en las sociedades tribales estudiadas por los antropólogos: “Lo que obliga en el regalo recibido, intercambiado, es el hecho que la cosa recibida no es algo inerte. Aunque el donante la abandone, ésta sigue siendo una cosa propia. A través de ella tiene poder sobre el beneficiario y como propietario de ella tiene poder sobre el ladrón” (Mauss, 2009, p. 88). Es decir, el don está habitado por un espíritu que ejerce poder sobre su receptor. Esta magia del don es comparable con aquella descrita por Marx en el *Capital*, a saber, el carácter de fetiche de la mercancía (Taussig, 1993). Hoy sabemos que esta magia, materializada en la sociedad de consumo, es la principal fuerza impulsadora del antropoceno y la explotación autodestructiva de la naturaleza por los humanos. En la cosmovisión de los pueblos indígenas del Cauca –y en su experiencia cotidiana–, la magia capitalista rompe la armonía entre los humanos y los otros seres que habitan la tierra. La reciprocidad, no solo entre humanos, sino entre humanos y el mundo –la madre tierra– está profundamente perturbada.

En conclusión, se puede constatar que la cooperación internacional para el desarrollo, por lo bien intencionada que pueda estar, no se encuentra libre de los desniveles de poder que caracterizan la sociedad global. Por el otro lado, es uno de los pocos mecanismos que permiten que ciudadanas y ciudadanos de los países “ricos” y de los países “pobres” sostengan un diálogo directo, que conozcan las condiciones de vida de los otros de primera mano y que se encuentren para realizar “talleres” y “laboratorios” en los cuales conjuntamente desarrollan perspectivas e instrumentos para construir “otro posible” (Escobar, 2018). Por lo tanto, fortalecer la reciprocidad en las relaciones de cooperación puede ser un camino para restablecer una cierta armonía en las comunicaciones. Con esta posibilidad en la mente, vamos a analizar a continuación el concepto central alrededor de que se organiza la cooperación en el proyecto descrito en esta tesis, a saber, el concepto del desarrollo de medios.

3.1 El concepto de desarrollo de medios

Luego de esbozar las metodologías y, también, algunas de las contradicciones de la cooperación internacional, nos vamos a dirigir más específicamente al campo de la cooperación para el desarrollo de medios. El objetivo de este apartado es examinar el significado del concepto

de desarrollo de medios y ponerlo a prueba con relación al tema de esta investigación, el empoderamiento de víctimas. Por lo tanto, es apropiado revisar el desarrollo de medios en su relación con los derechos humanos, pero también explorar su alcance más allá del universo de la comunicación humana. Nos hemos acostumbrado a referirnos con el término de medios a una variedad de instituciones, procesos y tecnologías relacionadas a la comunicación. En el lenguaje coloquial, cuando se dice “los medios”, se está hablando de los medios de comunicación de alcance masivo: televisión, radio, prensa, e internet. Pero el término cuyo uso se ha vuelto tan generalizado y central para la comprensión de la modernidad –que a veces se equipara con la sociedad de los medios–, es muy poco claro. A veces se resalta más el aspecto de organización social, por ejemplo, cuando se habla del poder de los medios, de los consorcios de medios, los medios comunitarios, o la democracia mediática. Otras veces resuenan más los aspectos tecnológicos: medios electrónicos, análogos o digitales. Un sinnúmero de connotaciones culturales, políticas, sociales y materiales se concentran en el término y hacen difícil fijar su sentido. Por ello, algunos teóricos prefieren encarar el tema enfocando la mirada en procesos y hablar de mediaciones (Martín-Barbero, 2010) o de mediatizaciones (Couldry y Hepp, 2017; Hepp, 2022) más que de medios.

Para Martín-Barbero las mediaciones son “lo que hay entre la gente y los medios”, es decir, los procesos de simbolización “cargados de tiempo, historia, memoria y luchas” (Pensadores.co, 2014, septiembre 27). En esto se remonta a Paul Ricœur quien, cuestionando el estructuralismo de su tiempo, revalora el acto de la interpretación como el dominio donde los humanos pueden concretar su autonomía. De manera ejemplar, Martín-Barbero se refiere a los medios masivos que están en manos de las élites capitalistas pero se ven obligados a adoptar elementos de las culturas populares para poder ser rentables en el mercado. Las mediaciones, por tanto, ocurren en los campos de comunicación, cultura y política y responden a lógicas de producción, matrices culturales, institucionalidad, ritualidad y tecnicidad (Martín-Barbero, 2002). La penetración de la sociedad actual por los medios digitales que están convertidos cada vez más en la base de procesos sociales resulta, según Hepp, en una mediatización profunda, es decir, “un proceso de transformación a largo plazo que va acompañado de otros procesos de cambio, como la individualización, la globalización y la comercialización” (Hepp, 2022, p. 39).

Esta transformación de las sociedades y de sus medios han producido tanto efectos favorables como dañinos para el desarrollo de la democracia. Por un lado, el fácil acceso a la

información y a canales de divulgación –cada quien puede ser productor de un medio masivo–, la agilización de la comunicación a nivel global; por otro lado, el surgimiento de nuevos imperios tecnológicos que ejercen el control sobre la comunicación mediante sus algoritmos. La manipulación de la información, las falsas noticias y las burbujas de filtros, que por cierto siempre han existido, se multiplicaron con una velocidad vertiginosa –tanto así que a sus 93 años, Jürgen Habermas se vio obligado a intervenir en el discurso público para reclamar una mayor regulación de los consorcios mediáticos– (Habermas, 2022). El desarrollo de medios está impulsado por el desarrollo tecnológico y este, a su vez, está estrechamente vinculado a intereses económicos, políticos y militares, como evidencia la todavía reciente historia del internet.

¿Qué medidas se pueden tomar para contrapesar el desarrollo salvaje del capitalismo y de los medios de comunicación? La crisis global originada por la aceleración de la economía está obligando a los gobiernos a intervenir y buscar respuestas a los problemas que afectan a todo el planeta y no pueden estar resueltos de únicamente de manera local. La Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, establece 17 objetivos para el desarrollo sostenible; en el primer lugar está el objetivo de erradicar la pobreza. En general, la agenda aspira –de manera demasiado ambiciosa, dicen sus críticos– a disminuir radicalmente la injusticia social en el mundo; el desarrollo sostenible no se puede lograr sin reducir la desigualdad. Especial relevancia para el desarrollo de los medios de comunicación tiene el objetivo 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. Este objetivo contiene 12 metas, una de ellas (16.10) se refiere directamente a “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”. Dos indicadores fueron establecidos para medir si esta meta se logra en 2030; uno se refiere a la protección de periodistas, el otro al acceso público a la información:

Tabla 2
El objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Indicador 16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los últimos 12 meses
Indicador 16.10.2 Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información

Teniendo en cuenta el hecho de que una gran parte de los países miembros de Naciones Unidas están gobernados por regímenes autoritarios, tal vez no debe sorprender que no se haya mencionado la libertad de expresión en los objetivos de la Agenda 2030. Con la referencia a las libertades fundamentales, sin embargo, la libertad de expresión se reconoce implícitamente, ya que el artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos la garantiza. De todas formas, las organizaciones dedicadas a fomentar el desarrollo de medios democráticos, como DW Akademie, celebraron que se haya considerado el acceso a la información como un elemento importante del desarrollo sostenible. Es importante destacar que el acceso a la información (y de manera implícita la libertad de expresión) se haya subsumido al objetivo de crear sociedades pacíficas e inclusivas y el acceso a la justicia. Esto significa nada menos que los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo sobre este punto: que la comunicación libre aporta a la paz y a la justicia y, por tanto, contribuye a disminuir la desigualdad. Si bien sabemos que es probable que este objetivo no será alcanzado en el 2030 –parece que al contrario en muchas partes del mundo la situación está empeorando–, estos acuerdos y objetivos pueden servir a las organizaciones defensoras de los derechos como un respaldo simbólico y una referencia para adelantar sus argumentos.

Ahora bien, se puede concluir que para las personas victimizadas el desarrollo de paz y justicia es de primordial importancia y que, acorde a la lógica delineada en los objetivos de desarrollo sostenible, el acceso a la información y el ejercicio del derecho a la expresión son

vitales. Ya hemos podido identificar, en los apartados anteriores, algunos elementos que pueden contribuir a la realización de estos derechos fundamentales; un marco jurídico e institucional favorable, una sociedad civil activa, el acceso a tecnologías y a la capacitación están entre ellos. Varias organizaciones de la cooperación internacional, tanto entidades públicas como fundaciones privadas y ONG, trabajan para fortalecer el derecho a la información y la libre expresión. Aparte de la DW Akademie de Alemania están BBC Media Action de la cadena pública de Gran Bretaña, el Centro Internacional para Periodistas ICFJ con sede en Washington, la fundación Open Society del magnate financiero George Soros, las organizaciones Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, para mencionar solo algunas. Las áreas de acción varían; algunas organizaciones capacitan periodistas, otras cabildean por una legislación favorable para los medios, hay programas de becas para periodistas amenazados y financiación para medios independientes. En general, para estas organizaciones, la sostenibilidad de medios significa más que la disponibilidad de recursos económicos. El desarrollo de medios requiere un entorno favorable que implica aspectos legislativos, políticos y tecnológicos, así como comunidades de usuarios (Deselaers, James, Mikhael, y Schneider, 2019).

El desarrollo de medios aspira, entonces, a un ideal: el de una sociedad informada cuyas ciudadanas y ciudadanos tienen acceso a la información relevante para poder tomar decisiones políticas, participar en debates públicos y defender sus derechos. Para poder obtener estas informaciones, el público depende de especialistas de la información, los periodistas. Ellos son los centinelas de la información: saben cómo separar lo relevante de la desinformación, tienen la capacidad de investigar, cultivan una relación crítica con las élites y disponen de medios de divulgación. Sin embargo, en un entorno mediático donde todos publican, el reconocimiento de estos especialistas de la información no es algo garantizado. ¿Cómo se puede saber qué son datos confiables y qué es desinformación? ¿Y qué pasa cuando a las personas no les importa si la información es verdadera o falsa sino únicamente que coincida con su forma prefigurada de ver el mundo? Para poder responder a estas preguntas, las estrategias de desarrollo de medios tienen que tomar en consideración las audiencias y su capacidad de procesar la información. Los medios de información se tienen que ganar la confianza de sus usuarios proveyéndolos con información que demuestra su utilidad en la vida práctica. Por el otro lado, confiar en la veracidad de la información presupone aceptar ciertos criterios para establecer la veracidad. Crear un entorno favorable para los medios debe incluir, entonces, también la capacitación de

las audiencias. De ahí que algunas de las organizaciones de la cooperación para el desarrollo de medios se concentran en la formación de habilidades comunicacionales, sobre todo de jóvenes –un campo de intervención que se ha ido consolidando como la “alfabetización mediática e informacional” (Pérez, 2015; Unesco, 2015)–. Los públicos no solo deben poder distinguir entre “mala” y “buena” información sino también adquirir las habilidades para poder participar de una forma calificada en la comunicación. Ahí se puede encontrar el potencial emancipador de los medios para las personas victimizadas: no solo es importante recibir información –sobre sus derechos, el esclarecimiento de los hechos, el paradero de los desaparecidos–, sino también informar a la sociedad. Este uso activo del medio puede ocurrir, por ejemplo, cuando la radio convoca a las víctimas y les entrega el micrófono, como fue el caso con el programa *Palabra justa* de Vokaribe. Otra opción es aquella escogida por las señoras del Costurero de la Memoria, la asociación de víctimas de Sonsón: el medio auténticamente apropiado por ellas para expresar sus recuerdos de la violencia sufrida fue el bordado. Pero estaban conscientes de las limitaciones de alcance de este medio, y por ello encargaron a los reporteros del canal de televisión comunitaria a contar una historia que a ellas les importaba que se contara. Una tercera alternativa es que una colectividad victimizada como los indígenas del Cauca, construya sus propios medios y se capacite para poder narrar la memoria de los conflictos y de las resistencias.

Queda por mencionar que el concepto de desarrollo de medios, si bien está siendo cada vez más desprendido de una comprensión, ya anticuada, de los medios como transmisores de información en sentido unidireccional, todavía parece estar muy centrado en el desarrollo tecnológico y sus consecuencias para la comunicación. Con creciente velocidad una tecnología reemplaza la otra; la cooperación para el desarrollo siempre está en la búsqueda de estrategias adecuadas para hacer la irrupción de estas tecnologías de la comunicación compatibles con la demanda por la democracia y los derechos humanos, y por consecuencia, siempre está un paso detrás del desarrollo tecnológico. En la actualidad se están explorando nuevas formas de relacionamiento con los medios, donde la información se genera de manera colaborativa y dialógica, sin hacer una separación estricta entre productor y receptor. La digitalización ha agilizado estos procesos, pero nos han conducido una vez más a una situación de *double bind*: La libertad de comunicar, casi sin límites, por un lado, y por otro el control total de los datos.

Todavía las estrategias de desarrollo de medios –entendidas como estrategias de empoderamiento de las personas subalternizadas y victimizadas– no ha sido capaz de

comprender el entorno de los medios en su totalidad, ni los efectos de su propia materialidad. La contradicción entre libertad y control no es la única que nos debe preocupar. Otras son aquellas entre la agilidad del intercambio simbólico y el congelamiento de los cuerpos, la atención monopolizada por los dispositivos (los *gadgets*) y substraída del entorno. Si bien Bruno Latour y sus aliados no han desarrollado una teoría explícita de medios, la teoría actor-red ofrece pistas: hay que hacer el seguimiento a las relaciones entre híbridos; lo simbólico y lo social nunca están separados de lo material y lo natural (Spöhrer, 2017). Así, por ejemplo, tras un desarrollo a largo plazo, las tecnologías de medios han “adquirido la fuerza de la naturaleza” (Couldry, 2008, p. 93). Igual que el fetiche de la mercancía y la magia de la dádiva, los medios de comunicación están imbuidos de una calidad mística, los rodea un aura, como decía Walter Benjamin. En aras de dispersar un poco las nubes del misticismo conviene tocar la tierra y sin dejar de observar los desenlaces a nivel simbólico, hacer un rastreo de las relaciones materiales. Esto también implica cuestionar el lenguaje con el cual nos referimos a los medios, las mediaciones y mediatizaciones. Cuando se habla del espacio virtual, por ejemplo, hay que tener claro, que en realidad se trata de un espacio muy concreto, si bien disperso y difícil de localizar. Es un espacio que comprende granjas de servidores, cables submarinos, chips que almacenan cadenas de unos y ceros, los home office de los programadores y demás. Se estima que en la actualidad las tecnologías de la información y comunicación causan emisiones de dióxido de carbono que equivalen o superan las de la aeronáutica mundial (Freitag *et al.*, 2020). Considerando las inmensas cantidades de rendimiento que futuras aplicaciones de inteligencia artificial demandarán, es probable que el porcentaje del calentamiento global causado por las tecnologías de comunicación incrementará. Todavía no está claro si este aumento podrá ser compensado por el uso de energías renovables o por ganancias de eficiencia energética con las tecnologías digitales. Pero evidentemente es necesario reconsiderar nuestras prácticas de relacionamiento. Ya no es posible separar medios de comunicación y medio ambiente.

3.2 Conclusiones

Iniciamos este capítulo con la pregunta de si es posible impulsar la memoria colectiva en un proceso de cooperación internacional. En cuanto a la relación entre Colombia y Alemania, una respuesta positiva a esta pregunta no parece de antemano obvia, tomando en consideración

las diferencias entre las historias de estos dos países. Sin embargo, cuando Alemania se involucró en los esfuerzos diplomáticos de algunos países de facilitar y flanquear el proceso de paz en Colombia, lo hizo enfatizando justo este campo, el de la memoria colectiva. Concretamente, los aprendizajes de la historia alemana y europea fueron aducidos como un motivo de la cooperación y, en lo consecutivo, la construcción de la memoria del conflicto armado por los colombianos también fue designado como un campo de la cooperación. Esta orientación se debió probablemente a que los encargados de formular las políticas de la cooperación alemana pertenecen a una generación que ha presenciado la irrupción tardía en la sociedad alemana del debate público sobre la responsabilidad colectiva en las dos guerras mundiales y el exterminio de los judíos europeos. Hoy existe un consenso entre las élites políticas –con excepción de la extrema derecha– que la memoria de los crímenes cometidos en el pasado por el pueblo alemán es un elemento fundamental y constitutivo de la cultura democrática en el presente. El recuerdo de las víctimas y los testimonios de los sobrevivientes representan la permanente exhortación a la sociedad a vigilarse ante la amenaza de las fuerzas destructoras que ella alberga en sí. Con todas las diferencias, la experiencia alemana se conectaba con la de la actualidad colombiana en un punto focal: la urgencia de escuchar el testimonio de las víctimas.

Este imperativo ético está inscrito en la memoria institucional de los medios públicos alemanes; desde su inicio en la posguerra, su función esencial ha sido marcar la distancia del totalitarismo nazi y promover la democracia. No solo aspiraban a informar, sino a educar y democratizar al pueblo alemán. El papel especial de la Deutsche Welle era transmitir al mundo la imagen de una Alemania próspera y democrática, un país que ya no significa una amenaza para sus vecinos. Hoy, la historia (memoria) institucional provee el fundamento ético para una cooperación que tiene un propósito pedagógico y político. Ahí la memoria de las víctimas juega un papel central; ella constituye la base para dialogar con otros sobre el pasado. La memoria de las injusticias cometidas contra otros pueblos –en las guerras, en el colonialismo– hace posible, primero el reconocimiento de la culpa, y luego la indemnización. Pero en la cooperación para el desarrollo, otro motivo entra en juego: la promesa de un futuro próspero y justo. Esta promesa solo se puede realizar a través de instituciones que garantizan los derechos de todos los ciudadanos; en primer lugar, el derecho de participar en el discurso público y en la toma de decisiones. Este es, precisamente, el objetivo superior de la cooperación para el desarrollo de

medios: el ideal liberal de la comunicación abierta de todas con todos. Un ideal, por cierto, que ha sido criticado como ilusorio por aquellos que están convencidos, como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, de que en las sociedades siempre existen intereses contrarios y fuerzas antagónicas que hacen imposible llegar a un acuerdo total por la razón, y que por ello habría de lograr “una hegemonía de valores democráticos” (Laclau, 2014; Mouffe, 1999). Claramente, el concepto de desarrollo de medios está más cercano al ideal habermasiano de la deliberación guiada por la razón y el acuerdo, que al de la hegemonía.

Sin embargo, la cooperación entendida como una práctica pedagógica orientada hacia un fin preestablecido, lleva una contradicción intrínseca a su interior: quiere empoderar, pero lo hace desde una posición de desigualdad y de poder. La lógica de un desarrollo teleológico y el imaginario de impactos medibles tienden a perpetuar estos desniveles en vez de eliminarlos. Ahora bien, es parte de la realidad actual y producto de la historia que difícilmente se puede gestionar una cooperación a la altura de los ojos entre países ricos del norte y países relativamente pobres del sur. Pero existen metodologías como la alfabetización mediática y el análisis del discurso que sirven para crear conciencia crítica y para desenmascarar las técnicas del poder y de la manipulación. Es ahí donde yace probablemente el mayor potencial emancipador de la cooperación para el desarrollo de medios: fortalecer las capacidades de la investigación crítica y apoyar los procesos colaborativos para la creación de medios independientes; estas son, sin duda, maneras de empoderamiento. Hay que decirlo también: las posibilidades de dialogar entre norte y sur, entre académicas y campesinos, periodistas e indígenas, entre aquellas y aquellos que buscan vías hacia un desarrollo más inclusivo, son escasas y la cooperación para el desarrollo ofrece espacios para ello. Para poder sostener este diálogo sin caer en la trampa del doble vínculo –que es propio, como hemos visto, de la relación entre “donante” y “beneficiario”– se requiere de formas de cooperación donde se considera el desarrollo, no como una transferencia, sino como un proceso compartido. En este proceso habrá que desenmascarar la magia de los medios y recuperar la habilidad de comunicar con el entorno; escuchar al trueno, por ejemplo, para formar una memoria colectiva más completa.

4 Conclusiones

Iniciamos este estudio sobre la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia con la intención de comprender mejor los procesos de comunicación y los medios que posibilitan la configuración de estas memorias como parte de una conversación más amplia que involucra a distintos sectores de la sociedad. Por lo tanto, la construcción de la memoria histórica es examinada como un ensamblaje de prácticas y de cooperaciones entre actores diversos. En particular, se revela que los actos comunicacionales que crean la memoria de los colectivos se tienen que apoyar en instituciones que, a su vez, son creadas a partir de la imaginación y de prácticas específicas.

De una manera similar, se puede considerar que esta tesis es el producto de ciertas prácticas de comunicación orientadas, por un lado, a la gestión de cambios sociales y, por otro lado, a la investigación de estos mismos procesos. Asimismo, los resultados aquí presentados tienen una ubicación espaciotemporal: representan un cruce de perspectivas de actores que habitan tres territorios distintos en Colombia en un momento histórico particular de este país, los años que siguen al Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Al mismo tiempo he tratado de hacer transparente, en el transcurso del texto, mi ubicación como autor, un asunto que me parece no solo relevante sino indispensable, pues, la comprensión del otro no puede realizarse con otros medios que los instrumentos cognitivos y los conceptos analíticos disponibles y apropiados como miembro de una sociedad y de diferentes colectivos y saberes que la componen. En otras palabras, el estudio de la memoria colectiva se desenvuelve en un escenario espaciotemporal cuyo telón de fondo es la propia memoria histórica.

De ahí que, cuando nos ocupamos de registrar y analizar los esfuerzos para construir memoria histórica realizados por tres colectivos en diferentes regiones de Colombia, hicimos referencia a los debates sobre la memoria histórica que se están llevando a cabo en Alemania. Esto era importante no solo para aclarar mi perspectiva como autor, necesariamente anclada – hasta cierto grado – en esta memoria, sino también por el contexto en el que se realizó la investigación. Pues si la memoria histórica es un producto de la acción, lo mismo es válido para la investigación social. Este proyecto científico estaba enmarcado en un proyecto de intervención social gestionado por la cooperación alemana y tres medios locales colombianos. Por lo tanto, el proceso analítico y teórico realizado aquí nace de la observación participativa de

prácticas concretas, es decir ha significado dar un paso al lado para reflexionar sobre los procesos en los cuales estaba profundamente inmerso. En esta constelación, adherir al ideal – por cierto, muy cuestionado, para no decir obsoleto– de una ciencia radicalmente separada de su objeto, era evidentemente imposible. Vemos entonces que la investigación sobre los procesos de cooperación que producen memoria tiene sus raíces en esta misma cooperación y su producto dialoga con estas memorias.

Solo cuando el recuerdo de las injusticias y de la violencia se hace público, el acto de recordar adquiere un significado político. El testimonio de los crímenes hecho por las víctimas representa el reclamo –explícito o no– por una reparación y la sanación de las heridas infligidas a las personas y al tejido social. Restaurar su buen nombre y pedir a la sociedad que retire el estigma impuesto por ella sobre las víctimas, suelen ser las principales reivindicaciones. Distinta a la memoria de las víctimas, pero no menos importante, es aquella de los colectivos responsables de los crímenes; en Alemania, por ejemplo, la confrontación con el Holocausto sigue siendo un tema abierto y muy relevante ante el surgimiento de nuevas tendencias autoritarias y xenófobas. Recordar y aceptar la responsabilidad de reparar simbólicamente los daños hechos por las generaciones anteriores también es una forma de restaurar el buen nombre colectivo, en este caso de una nación democrática que aún lleva las manchas de la historia.

La memoria requiere de medios de almacenamiento (libros, archivos, películas, etcétera) y de medios de comunicación. Mientras la memoria es inmaterial, los dispositivos que la soportan no lo son. Del aire que transporta las ondas sonoras a los circuitos electrónicos que sostienen el “espacio virtual”, los medios son materiales y en este sentido forman parte del medio ambiente. Por lo menos, este es el concepto occidental-racional. En las cosmovisiones religiosas, la realidad de los medios espirituales prima sobre la materia. Esto vale para el cristianismo tanto como para las culturas indígenas, y de hecho también para conceptos muy normalizados en la sociedad global occidental, como por ejemplo “la fuerza del mercado libre”, o el fetiche del valor de la mercancía revelado tempranamente por Marx. Los medios aquí observados, es decir, aquellos que transportan y sostienen la memoria y los imaginarios sociales, sea esta la memoria de las víctimas o el imaginario del desarrollo, están configurados por su materialidad (la emisora de radio, la revista, el blog) tanto como por las prácticas sociales que ponen en marcha estas mediatizaciones de la memoria.

En Colombia, las víctimas organizadas en asociaciones locales y nacionales han desarrollado una gran variedad de estrategias mediáticas para configurar la memoria colectiva: las bitácoras, el bordado, marchas y recorridos de la memoria, la radio, el teatro, los rituales, altares, memoriales y otros espacios de memoria, para nombrar algunas. El presente trabajo ha puesto su énfasis en el periodismo como medio de articulación entre las víctimas y la sociedad. El periodismo delineado aquí, sin embargo, tiene una característica especial: es un conjunto de prácticas de comunicación y de información sostenidas por comunidades locales afectadas de diferentes y variadas maneras por la violencia de los conflictos armados.

De los tres casos examinados, el proyecto Hacemos Memoria que fue iniciado en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, es el que ha adoptado con mayor rigor el periodismo y sus metodologías establecidas como instrumento para configurar la memoria colectiva. La investigación periodística, igual que la investigación científica, busca acercarse a la verdad, en este caso, la verdad sobre los hechos violentos. En Hacemos Memoria esta búsqueda es combinada con un empeño pedagógico. Se trata no solo de investigar y publicar la verdad, sino también de ayudar a las comunidades más violentadas a realizar ese mismo ejercicio por su cuenta. Considerando que conocer la verdad es una de las necesidades fundamentales de los sobrevivientes de la violencia, proveerlos de instrumentos y habilidades que les permiten realizar estas indagaciones, significa empoderarlos. Es significativo que, en este proceso compuesto por una pedagogía dialógica y un periodismo colaborativo, haya surgido la pregunta por la memoria propia como colectivo adentro de una institución muy afectada por la violencia política, la universidad pública. De cierta manera, esto se puede interpretar como un logro, como otro paso hacia el empoderamiento: “Ahora que hemos hablado de nuestra memoria, ¿qué pasa con la de ustedes?”. Esta pregunta devuelve la pelota y suscita otra acción de memoria tan importante como la de las comunidades campesinas: la pregunta por el papel y la responsabilidad de los intelectuales, periodistas y académicos, comunidades que fueron gravemente victimizadas, pero, en algunos casos, también contribuyeron al escalamiento de los conflictos, atizando la violencia con armas ideológicas y borrando la memoria de aquellos que estaban en la otra bancada.

Examinar el pasado y confrontar los recuerdos dolorosos es una tarea difícil e incómoda. Y más aún, puede ser peligrosa, pues naturalmente, la memoria de los crímenes pone en la mesa la pregunta por la responsabilidad, por los entramados de poder que promovieron la violencia,

las negligencias de la justicia, el silencio de los medios. Las persistentes amenazas contra periodistas y líderes sociales y el miedo generalizado tras muchos años de violencia obstaculizan los trabajos de memoria. Para poder hablar del pasado en público las víctimas requieren el respaldo de un tejido institucional, como se ha podido observar en los tres casos examinados aquí.

Para Vokaribe Radio, comenzar a hablar del conflicto armado no fue algo fácil; en parte, seguramente, porque algunos de sus miembros estaban involucrados en la lucha armada revolucionaria y aunque se habían desmovilizado años atrás, la mejor estrategia parecía ser mantener un bajo perfil y no llamar la atención a este pasado. Entre los factores que hacían posible el diálogo con las víctimas en la radio estaban, más allá de la motivación personal de algunos miembros de la radio, el reconocimiento institucional de la emisora por el Estado, materializado en una licencia de emisión, y el impulso dado por el proyecto de la cooperación de DW Akademie. La cercanía de los medios comunitarios a su público y la participación de organizaciones locales en su gestión hace que estos medios ofrezcan buenas condiciones para entablar el diálogo sobre la memoria y los derechos humanos. Su disposición a mantener los micrófonos abiertos para la ciudadanía en vez de parapetarse detrás de un *habitus* de experticia profesional como los medios de información comerciales, hace posible que personas de la localidad compartan más fácilmente sus experiencias. Hay un cierto nivel de confianza, los comunicadores suelen ser personas conocidas y aceptadas en la comunidad. Pero tal vez es justo esta cercanía lo que dificulta hablar de las memorias incómodas, pues, también pueden ser personas cercanas las que son expuestas a la crítica. El hecho de que Vokaribe haya decidido iniciar el diálogo con las víctimas en Barranquilla ha sido valorado como una muestra de interés y de empatía por las víctimas que participaron en el programa *Palabra justa* de esta emisora. Varias personas comentaron que ningún otro medio de la región les había ofrecido un espacio de programación tan grande y tan bien preparado como la emisora comunitaria. Pero dar continuidad a este tipo de programas aun es una tarea muy difícil de realizar con sus recursos propios para un medio comunitario. Se necesita el apoyo de otras instituciones, del Estado a nivel local o nacional, de universidades y fundaciones, de la cooperación internacional. Todavía, a pesar de condiciones legales favorables y el fácil acceso de las tecnologías de la comunicación, lo más difícil para los medios ciudadanos, alternativos o comunitarios es que sean sostenidos por una comunidad de usuarios activos que participan en la producción de contenidos, usan el

medio para discutir sobre asuntos políticos y culturales y aportan con su tiempo, sus habilidades y otros recursos. En cierto grado, esto está ocurriendo en Vokaribe Radio. Hay un grupo de productores locales que producen de manera regular programas sobre acontecimientos culturales y, sobre todo, la música popular creada en el entorno. Con esto, la emisora se mantiene fiel a su propuesta original: habilitar la radio como espacio para la expresión cultural de jóvenes marginalizados de los barrios populares de la ciudad. Sin duda, este es un aporte valioso a la memoria cultural –el conjunto de los programas musicales emitidos por Vokaribe ya se puede considerar como un archivo importante de la cultura musical del Caribe–, y para quienes fueron desplazados con sus familias y han sufrido tanto la violencia de las armas como la de la pobreza y el hambre, poder presentar su hiphop o su champeta en un estudio de radio representa una forma de empoderamiento.

Si preguntamos entonces, cuáles son las características de un medio de comunicación que informa, que facilita la comunicación y el diálogo, que empodera y sana, no podemos dar una respuesta sencilla. Existen muchas diferentes formas de cultivar la memoria de colectivos autónomos, libres, justos y democráticos. Al parecer, los imaginarios, que son la otra cara de la memoria, tienen que ponerse en la práctica para adquirir algún sentido duradero. Para poder hacer el trabajo de la memoria, lo demuestran tanto el ejemplo de Alemania como el de Colombia y de otros países, se tienen que dar primero las condiciones mínimas para habilitar los espacios de memoria. En Alemania, en el país de los perpetradores, hubo que esperar cuarenta años, hasta que se acabaron biológicamente las generaciones responsables de la guerra y del Holocausto. El experimento colombiano con la memoria en medio de la guerra es excepcional en el contexto internacional de los países en conflicto. La existencia de instituciones a nivel global que procuran consolidar la promesa de los derechos universales ha apoyado, también la ampliación del discurso de derechos humanos en los medios. Prácticas de memoria colectiva como aquellas implementadas en Colombia en las últimas dos décadas crean antecedentes y probablemente serán adaptadas a otros contextos en el futuro.

La preocupación reciente por la memoria en Colombia se debe ver no solo en el contexto de las discusiones y de los movimientos sociales y políticos relacionados con el proceso de paz con las FARC, sino también como producto de una coyuntura internacional. Es que la memoria política, la memoria crítica del poder, en fin, la memoria de las víctimas aflora en momentos de ruptura. Los años ochenta fueron uno de estos momentos: el derrumbe de las dictaduras militares

en Sudamérica, la caída del muro de Berlín. Después, en los años noventa, el desmoronamiento de la Unión Soviética y de Yugoslavia, el fin del régimen colonial de *apartheid* en Sudáfrica. Ahora también los pueblos originarios reclaman que se reconozca su historia de medio milenio de opresión y genocidio; han podido sobrevivir y conservar una cierta autonomía cultural en lugares selváticos, montañosos, desérticos, poco aptos para el aprovechamiento por la economía moderna. Aún no han sucumbido a la magia del fetiche de la mercancía. En las montañas del Cauca y en la selva de la costa del Pacífico, los pueblos que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emprendieron una lucha para defender su estilo de vida y sus territorios de los constantes ataques de las múltiples fuerzas pertenecientes al sistema extractivista. La memoria histórica de estos pueblos está estrechamente vinculada a los territorios que habitan, que habitaron sus antepasados. El programa de comunicaciones del CRIC acompaña el movimiento indígena, registra las marchas y asambleas, las “liberaciones de la madre tierra”. La memoria está en el territorio, en los sitios sagrados, en montañas, lagunas y páramos, en la narración de los mayores al lado del fogón. Pero también se construye a través de los medios electrónicos; la radio, los blogs, YouTube. Muchos jóvenes se están capacitando para usar estos medios y para desarrollar narrativas propias. La comunicación propia indígena e intercultural es el equivalente al periodismo occidental, pero obedece a las dinámicas de las cosmovisiones y de los movimientos indígenas. Es una comunicación que siempre incluye a otros seres no humanos –plantas, animales, espíritus–, por ejemplo, a través de pagamentos y ofrendas.

En la descripción de los tres casos estudiados, Hacemos Memoria, Vokaribe y el CRIC, hemos introducido un procedimiento en tres etapas –de la memoria a la imaginación, y de la imaginación al diseño y la práctica–. La memoria reconstruye el pasado, la imaginación proyecta el futuro. Son inseparables: la memoria –la mirada hacia atrás desde el presente– prepara el terreno para el salto de la imaginación hacia delante. Ambas, la memoria y la imaginación requieren de mucho trabajo para poder desplegar su potencial liberador. El trabajo de la memoria liberadora consiste en investigar el pasado y en la búsqueda de verdades. La imaginación liberadora es la negación de las limitaciones del pasado y de la actualidad. Ella puede volar lejos para descubrir algo nuevo, algo todavía desconocido. Pero luego se tiene que concretar en la práctica del diseño. Hace treinta años, la imaginación de los fundadores de Vokaribe Radio era tener un medio propio, independiente, no comercial. Para concretar este sueño había que hacer

muchos talleres de planeación, diseñar políticas de comunicación, redactar postulaciones a fondos. Había también que diseñar las prácticas de comunicación hacia el interior y hacia el exterior de la organización.

Posiblemente, las reflexiones sobre las prácticas violentas dentro de la Universidad de Antioquia iniciadas por Hacemos Memoria podrán conducir a discusiones críticas y autocríticas, y a la imaginación y el diseño de políticas inclusivas, alternativas y creativas. Lo cierto es que, sin el paso por la memoria centrada en las víctimas –no me refiero a los mártires de la lucha revolucionaria sino a los que fueron asesinados o secuestrados en su nombre– será difícil, si no imposible, desarrollar desde las universidades nuevas propuestas de políticas liberadoras, adecuadas para las condiciones sociales de hoy.

Desde hace un tiempo sabemos que el modelo económico basado en la magia del fetiche de la mercancía y en la explotación de la tierra, de los ecosistemas y de los humanos no solo es insostenible, sino que conduce a la extinción de una gran parte de la vida. Este proceso autodestructivo está bien documentado, por ejemplo, en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los modelamientos basados en datos científicos hacen posible nombrar las víctimas del futuro: campesinos forzados a migrar por la desertificación, habitantes de islas y zonas costeras inundadas o devastadas por tormentas, además, todos aquellos que morirán en las guerras por los recursos cada vez más escasos. Ya no será posible separar la memoria de los humanos de aquella de la naturaleza. De hecho, esto ya es el caso. Las capas de hielo ártico son el archivo que registra la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a través de los milenios. Ahí está documentado el comienzo del antropoceno, la era en que el impacto de los humanos se ha convertido en un factor tan dominante que puede llevar a muchos ecosistemas a un punto crítico o, incluso, a la destrucción irreversible.

Es importante entonces hacer memoria de aquellas prácticas que nos relacionan con el medio ambiente, no como a un subalterno que se puede explotar hasta su agotamiento, sino como un sistema de vida que debemos cuidar. En la cosmovisión indígena a los humanos les corresponde cuidar a la madre tierra. En el antropoceno, cuando la influencia de los humanos se ha vuelto dominante, nos obliga la responsabilidad de tomar medidas a tiempo para salvar a las futuras generaciones. Para ello, la memoria de los ecosistemas es indispensable. Hay que hacer

el registro de las especies que vamos extinguiendo, por ejemplo, para percatarnos de que la nueva normalidad no fue normal hace un tiempo atrás.

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por los miembros de Naciones Unidas está plasmado el imaginario de un mundo en el que los humanos logran convivir en condiciones aceptables para todos y sin destruir los ecosistemas. En estos objetivos se reconoce también la importancia de los medios de comunicación y de la información. El desarrollo de medios críticos e independientes es indispensable para que estos objetivos se puedan alcanzar. Hasta ahora, sin embargo, las prácticas no son congruentes con ese imaginario. Todavía no se ha frenado el crecimiento acelerado de la economía global y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Quizás la memoria de las víctimas de hoy puede servir para impulsar el diseño de estrategias y de planes de vida que ayudarán a disminuir el número de las víctimas del futuro. Es la única vía para lograr que los que habitarán el futuro guarden una memoria favorable de nosotros.

A manera de conclusión, quiero destacar algunos hallazgos principales como resultado de esta investigación.

En primer lugar, el potencial de las víctimas del conflicto armado como agentes del cambio político. El hecho de que en Colombia la condición de las víctimas haya recibido una mayor atención pública en recientes años indica una mayor sensibilidad de la sociedad frente a la violencia, la injusticia y la desigualdad. La cuestión de las víctimas, un problema de un tamaño tan enorme que casi todas las familias son afectadas de alguna manera, ha puesto el reclamo por los derechos humanos en el primer plano. Pero falta mucho camino por recorrer. Debido a su condición de pobreza y desarraigo, la mayoría de las víctimas del conflicto armado están excluidas del discurso público. Necesitan acceso a medios de comunicación apropiados, medios que no se rijan por criterios comerciales, la cantidad de clics o los ratings, sino por la calidad del diálogo. Hemos visto que algunos medios independientes, ciudadanos, comunitarios disponen de esta orientación y pueden ofrecer espacios de participación a las víctimas. Con el uso activo de los medios de comunicación, las víctimas pueden aportar sus experiencias y reivindicaciones, sus memorias, a un diálogo social más amplio. Así, la memoria de las víctimas puede hacer parte de la memoria colectiva y servir como insumo para la configuración de nuevas políticas.

En segundo lugar, hay que resaltar que en un diálogo con las víctimas sostenido en el tiempo, el periodismo y los medios de comunicación también se transforman. Este diálogo, cuando es tomado en serio, invita a realizar reflexiones sobre las distintas formas de victimización que afectan la sociedad y permite identificar estructuras sociales, políticas y económicas que tienden a producir violencias. Es significativo que los medios de comunicación observados en este estudio no pertenecen al sector tradicional de los medios periodísticos sino que han surgido como producto de inquietudes de carácter político, social y cultural en organizaciones indígenas, colectivos de comunicación popular alternativa y la universidad pública.

Tercero, es evidente que las memorias colectivas tienen temporalidades y espacialidades distintas. Cada caso examinado está localizado en un territorio con una historia propia, con idiosincrasias culturales, con paisajes que sostienen memorias y formas de vida. La gran mayoría de las víctimas fueron desplazadas de una región a otra, del campo a la ciudad. Hay memorias desplazadas, memorias de desplazamiento y memorias de la reconstrucción de la vida en otro lugar. Los tiempos de las víctimas tienen su característica propia. Giran alrededor de la tragedia que les cambió la vida y permean la interminable espera por el reencuentro, la restitución del derecho, la recuperación de la dignidad. Para poder sostener el diálogo honesto con las víctimas, los periodistas y los medios de comunicación tienen que aceptar y aprender estas temporalidades. Para los pueblos indígenas la larga duración de la condición colonial y postcolonial es un marco de referencia temporal importante, pero no es el único. También está la historia más reciente de las luchas y las organizaciones y, por otro lado, el tiempo ancestral antes de la historia escrita que se tiene que leer en los signos de la naturaleza, en los cantos y rituales.

Finalmente, la memoria de las víctimas remite a la urgencia de establecer nuevas y múltiples cooperaciones. Es un llamado a diseñar, entre muchos, un futuro más sostenible. Para poder lograrlo, los colectivos de memoria tienen que incluir a otros seres, no solo a los humanos. Las víctimas del futuro (de las guerras por el agua, de las tempestades y la desertificación) lo demandan. ¿De qué manera se pueden adaptar el periodismo y los medios a esta nueva situación? Lo cierto es que el modelo unidireccional de la información se ha vuelto tan obsoleto como el modelo unidireccional del desarrollo. El llamado del momento es a diseñar estrategias

sostenibles de comunicación a partir de la memoria de los seres vulnerados: ahí se abre un campo para futuras cooperaciones, y también para la investigación.

Referencias

- Abad Faciolince, H. (2006). *El olvido que seremos*. Seix Barral.
- Acevedo, Á. y Samacá, G. (2015). Entre la movilización estudiantil y la lucha armada en Colombia. De utopías y diálogos de Paz. *Anuario de Historia Regional y de Las Fronteras*, 20(2), 157-182.
- Adorno, T. W. (1996). Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit. En *Ob nach Auschwitz noch sich leben lasse: Ein philosophisches Lesebuch*. Suhrkamp.
- Agamben, G. (2009). *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III*. Pre-Textos.
- Allier Montano, E. (2018). Tlatelolco, lugar de memoria y sitio de turismo. Miradas desde el 68. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 63(234), 215-238.
- Almendra, V. (2017). *Entre la emancipación y la captura. Memorias y caminos desde la lucha nasa en Colombia*. Grietas Editores.
- Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2005). *Resolución 60/147: Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener*. <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandrepairation.aspx>
- Alvarado, R. (1994, enero 30). Barranquilla, tierra prometida para CRS. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-28387>
- Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas*. Fondo de Cultura Económica.
- Asovida (s. f.). Salon del Nunca Más - El primer lugar de memoria de Colombia construido por una comunidad. <https://www.salondelnuncamas.com/>
- Assmann, A. (2006a). *Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*. C. H. Beck.
- Assmann, A. (2006b). *Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik*. C. H. Beck.
- Assmann, A. (2013). *Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur - Eine Intervention*. C. H. Beck.
- Assmann, J. (2008). Communicative and Cultural Memory. En A. Erll y A. Nunning (eds.), *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook* (pp. 109-118). De Gruyter.
- Assmann, J. (2011). *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. Cambridge University Press.
- Atehortúa, A. (2019, junio 6). Carlos, mi papá. Memorias de María José Pizarro. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2019/06/06/carlos-mi-papa-memorias-de-maria->

jose-pizarro/

- Atehortúa, A. (2019, abril 7). Silvia, mi hermana: memorias de María Jimena Duzán. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2019/04/07/maria-jimena-duzan-memorias-silvia-duzan/>
- Basso, K. H. (1996). *Wisdom Sits in Places: Landscape and Language Among the Western Apache*. University of New Mexico Press.
- Bateson, G. (1998). *Pasos hacia una ecología de la mente*. Editorial Lohlé-Lumen.
- Bencic, A. (2016). Theoretical Conceptualisation of Collective Memories in Sociology and Related Social Sciences. *Drustvena Istrazivanja*, 25(1), 1-19. <https://doi.org/10.5559/di.25.1.01>
- Bidaseca, K. y Meneses, M. P. (coords). (2014). *Epistemologías del sur (Perspectivas)*. Ediciones Akal.
- Binder, I. y García Gago, S. (2020). *Politizar la tecnología. Radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales*. Ediciones del Jinete Insomne.
- Blaser, M. (2014). Ontology and indigeneity: on the political ontology of heterogeneous assemblages. *Cultural Geographies*, 21(1).
- Blaser, M. y De la Cadena, M. (2009). Introducción. *Red de Antropologías del Mundo*, (4).
- Blaser, M. y De la Cadena, M. (2018). *A world of many worlds*. Duke University Press.
- Blei, D. M. (2012). Probabilistic topic models. *Communications of the ACM*, 55(4), 77-84.
- Bonilla, J. I. (2015). Algo más que malas noticias. Una revisión crítica a los estudios sobre medios-guerra. *Signo y Pensamiento*, XXXIV, 62-78.
- Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1996). *Reflexive Anthropologie*. Suhrkamp.
- Cadavid, A. (2011). La comunicación para el desarrollo en Colombia, los últimos 20 años. En J. M. Pereira y A. Cadavid (eds.), *Comunicación, desarrollo y cambio social. Interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios* (pp. 57-80). Pontificia Universidad Javeriana / Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Cadavid, A. y Gumucio Dagron, A. (2014). *Pensar desde la experiencia. Comunicación participativa en el cambio social*. Uniminuto.
- Cardoso dos Santos, J. y Pomim Valentim, M. L. (2021). Memória institucional e memória organizacional: faces de uma mesma moeda. *Perspectivas Em Ciência Da Informação*, 26(3), 208-235.
- Castañeda Arboleda, J. C. (2016, septiembre 20). ¿Cuál es el plan para buscar los desaparecidos en Medellín? *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2016/09/20/cual-es-el-plan-para-buscar-los-desaparecidos-en-medellin/>
- Castañeda Arboleda, J. C. (2016). *Nuestro otro infierno. Violencia y guerra en Manrique*. Fondo Editorial Universidad EAFIT, Alcaldía de Medellín.

- Castoriadis, C. (2007). *La institución imaginaria de la sociedad*. Tusquets.
- Cayuqueo, P. (2012). *Solo por ser indios*. Catalonia.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH. (2015). *Una nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia*. CNMH, UARIV.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH. (2016a). *Granada: Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH. (2016b). *Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH. (2017a). *Medellín, memorias de una guerra urbana*. CNMH, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH. (2017b). *En honor a su memoria: Víctimas del Bloque Norte de las AUC en el Caribe colombiano*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH. (2020). *Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio*. Bogotá.
- Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH. (2020, agosto 14). Pueblos indígenas, víctimas de violencias de larga duración. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/pueblos-indigenas-victimas-de-violencias-de-larga-duracion/>
- Choquehuanca, D. (2022). *Geopolítica del vivir bien*. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Comisión de la Verdad - CEV. (2022a). *Hay futuro si hay verdad: Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición*. CEV.
- Comisión de la Verdad - CEV. (2022b). Voces vivas: Universidades. <https://www.comisiondelaverdad.co/impactos-afrentamientos-y-resistencias/voces-vivas-universidades>
- Conejo, A. y Campo, N. (2018). Devolver a la gente la palabra. Como los indígenas del Cauca caminan hacia el reconocimiento de su comunicación propia. *Unidad Álvaro Ulcué*, 2.
- Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. (s. f.) *Atención a víctimas indígenas del CRIC*. [Folleto].
- Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. (2011). *Primera Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala. Memorias y declaración*. Popayán.
- Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. (2012). La esencia de la comunicación propia - fundamento de la política diferencial. <https://www.cric-colombia.org/portal/la-esencia-de-la-comunicacion-propia-fundamento-de-la-politica-diferencial/>
- Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. (2018). Tocando la memoria. *Revista Unidad Álvaro Ulcué*, 2.

- Conze, E., Frei, N., Hayes, P., y Zimmermann, M. (2010). *Das Amt und die Vergangenheit – Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik*. Karl Blessing Verlag.
- Corbett, J., Grube, D., Lovell, H., y Scott, R. J. (2020). *Institutional memory as storytelling*. Cambridge University Press.
- Correa de Andreis, A. (2016). *Sociología desde el Caribe colombiano. Mirada de un sentipensante*. Universidad del Norte.
- Couldry, N. (2008). Actor network theory and media: do they connect and on what terms? En A. Hepp, F. Krotz, S. Moores y C. Winter (eds.), *Connectivity, networks and flows: conceptualizing contemporary communications* (pp. 93-110). Hampton Press.
- Couldry, N. y Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Cruz, R. (2020, febrero 15). General (r) Mario Montoya, ¿primer militar que podría ser excluido de la JEP? *Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/general-r-mario-montoya-primer-militar-que-podria-ser-excluido-de-la-jep/>
- Descola, P. (2012). *Más allá de naturaleza y cultura*. Amorrortu.
- Deselaers, P., James, K., Mikhael, R., y Schneider, L. (2019). *Más que dinero. Repensar la viabilidad de los medios de comunicación en la era digital*. DW Akademie.
- Deutsche Welle (2004). *Deutsche Welle Gesetz* [Folleto]. DW.
- Douglas, M. (1996). *Cómo piensan las instituciones*. Alianza Editorial.
- Dussel, E. (1993). Teología habermasiana y economía. En *Las metáforas teológicas de Marx* (pp. 257-282). Verbo Divino.
- Duzán, M. J. (2015). *Mi viaje al infierno*. Aguilar.
- DW Akademie (2020, noviembre 8). ¿Qué es DW Akademie? ¿Cuál es la diferencia con Deutsche Welle? <https://akademie.dw.com/es/qu%C3%A9-es-dw-akademie-cu%C3%A1l-es-la-diferencia-con-deutsche-welle/a-54526751>
- El Colombiano (2022, junio 9). Así era Stefany, la joven universitaria que falleció al manipular explosivos. *El Colombiano*. <https://m.elcolombiano.com/antioquia/quien-era-stefany-orrego-bedoya-estudiante-de-la-universidad-de-antioquia-que-fallecio-BA17715631>
- El Espectador (2018, enero 15). ¿En dónde quedó la verdad sobre el asesinato de Jaime Garzón? *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/judicial/en-donde-queda-la-verdad-sobre-el-asesinato-de-jaime-garzon-article-733562/>
- El Tiempo (2002, junio 15). Ejército golpea a las autodefensas. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1362567>
- Escobar, A. (2016). *Autonomía y diseño. La realización de lo comunal*. Universidad del Cauca.
- Escobar, A. (2018). *Otro posible es posible: Caminando hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latinoamérica*. Desde Abajo.

- Etzioni, A. (2015). Communitarianism. En K. Christensen y D. Levinson (eds.), *The Encyclopedia of Political Thought* (pp. 224-228). Sage Publications.
- FBI (2016). Crime in the United States, 2016 [Documento]. <https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2016/crime-in-the-u.s.-2016/tables/table-4>
- Foucault, M. (1984). De los espacios otros. *Architecture, Mouvement, Continuité*, (5), 46-49. <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=67995>
- Franco Restrepo, V. L. (2009). *Orden contrainsurgente y dominación*. Siglo del Hombre, Instituto Popular de Capacitación.
- Franco, S., Mercedes, C., Rozo, P., Gracia, G. M., Gallo, G. P., Vera, C. Y., y García, H. I. (2012). Mortalidad por homicidio en Medellín, 1980-2007. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012001200006>.
- Freitag, C., Berners-Lee, M., Widdicks, K., Knowles, B., Blair, G., y Friday, A. (2020). *The climate impact of ICT: A review of estimates, trends and regulations*. Lancaster.
- Fundación Ideas para la Paz (2016). Violencia homicida en Colombia 2016 [Documento]. https://www.ideaspaz.org/especiales/data-fip/homicidios/map_tasa.html#5/3.382/-72.554
- Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP. (s. f.). Mapa de violaciones a la libertad de prensa. Estadísticas. <https://flip.org.co/index.php/en/atencion-a-periodistas/mapa-de-agresiones>
- Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP. (2017, noviembre 2). Continúa la impunidad en crímenes contra la prensa [Comunicado]. <https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2159-continua-la-impunidad-en-crimenes-contra-la-prensa>
- García, C. I., Aramburo, C., Valderrama, D., y Barajas, D. (2011). *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia*. Cinep, Odecofi, Iner, Universidad de Antioquia.
- García Canclini, N. (1989). *Culturas híbridas*. Grijalbo.
- Gauck, J. (2013, mayo 13). Erinnerungskultur und Versöhnung in Deutschland [Conferencia]. Universidad de los Andes. Bogotá. <http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2013/05/130510-Kolumbien-Grundsatzrede.html>
- Giraldo, J. (1996). *Colombia: The Genocidal Democracy*. Common Courage Press.
- Girard, R. (2012). *El sacrificio*. Ediciones Encuentro.
- Girard, R. (2016). *La violencia y lo sagrado*. Anagrama.
- Golte, J. y Adams, N. (1987). *Los caballos de Troya de los invasores: estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Goltermann, S. (2017). *Opfer. Die Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Moderne*. S. Fischer.
- Gómez, J. G. (org.). (2021). La violencia política y el conflicto armado en la Universidad de

- Antioquia 1958-2016: Aportes a la memoria y esclarecimiento de sus impactos y relaciones. Documento para la Comisión de la Verdad [Documento]. Universidad de Antioquia.
- González, A., Nieto, P. y Arenas, S. (2022, julio 23). En la UdeA las paredes hablan, aunque algunos quieran callarlas. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2022/07/23/en-la-udea-las-paredes-hablan-aunque-algunos-quieran-callarlas/>
- González, F. E. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Odecofi, Cinep.
- Grajzl, P. y Murrell, P. (2019). Toward understanding 17th century English culture: A structural topic model of Francis Bacon's ideas. *Journal of Comparative Economics*, (47), 111-135.
- Grupo de Memoria Histórica - GMH. (2009). *Memoria en tiempos de guerra - repertorio de iniciativas*. Puntoaparte Editores.
- Grupo de Memoria Histórica - GMH. (2011). *San Carlos: Memorias del éxodo en la guerra*. Taurus.
- Grupo de Memoria Histórica - GMH. (2013). *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Imprenta Nacional.
- Gudynas, E. y Acosta, A. (2011). El buen vivir o la disolución de la idea del progreso. En M. Rojas (ed.), *La medición del progreso y el bienestar. Propuestas desde América Latina* (pp. 103-110). Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México.
- Guglielmucci, A. (2017). El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, 59, 83-97.
- Gumucio, A. y Cajías, L. (1989). *Las radios mineras de Bolivia*. Cimca, Unesco.
- Gumucio Dagon, A. (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. En J. M. Pereira y A. Cadavid (eds.), *Comunicación, desarrollo y cambio social* (pp. 19-36). Pontificia Universidad Javeriana.
- Gumucio Dagon, A. (2012). Comunicación y cambio social: raíces ideológicas y horizontes teóricos. En M. Martínez Hermida y F. Sierra Caballero (eds.), *Comunicación y desarrollo. Prácticas comunicativas y empoderamiento local* (pp. 27-68). Gedisa.
- Habermas, J. (1973). *Erkenntnis und Interesse*. Suhrkamp.
- Habermas, J. (2022). *Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit*. Suhrkamp.
- Hacemos Memoria (2014). Periodismo sensible a los conflictos y memoria histórica. Informe final [Documento]. Medellín.
- Hacemos Memoria (2017, junio 26). Gloria a Dios. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2017/09/26/gloria-a-dios/>
- Hacemos Memoria (2018, abril 17). Discurso de Fabiola Lalinde en la Universidad Nacional de Colombia. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2018/04/17/el-archivo-de-un-ciriri-tiene-que-ser-incomodo-en-un-pais-injusto-y-violento-como-el-nuestro-fabiola-lalinde/>

- Hacemos Memoria (2018, junio 14). María Teresa Uribe: "La verdad es lo primero". *Hacemos Memoria*. <http://hacemosmemoria.org/2018/06/14/maria-teresa-uribe-udea/>
- Hacemos Memoria (2018, septiembre 24). La búsqueda de Gloria. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2018/09/24/la-busqueda-de-gloria/>
- Hacemos Memoria (s. f. a). El ELN asesinó al rector del Liceo Marco Fidel Suárez. *50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia*. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/udea50/el-eln-asesino-al-director-del-liceo-marco-fidel-suarez/>
- Hacemos Memoria (s. f. b). *50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia*. <https://hacemosmemoria.org/udea50/>
- Hacemos Memoria (s. f. c). Agente del DAS asesinó al estudiante universitario Fernando Barrientos. *50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia*. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/udea50/un-agente-del-das-asesino-al-estudiante-universitario-fernando-barrientos/>
- Hacemos Memoria (s. f. d). El M-19 se tomó el Edificio San Ignacio de la Universidad. *50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia*. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/udea50/el-m-19-se-tomo-el-edificio-san-ignacio-de-la-universidad/>
- Hacemos Memoria (s. f. e). El profesor Diego Roldán fue fusilado por el ELN frente a sus estudiantes del Liceo Antioqueño. *50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia*. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/udea50/el-profesor-diego-roldan-fue-fusilado-por-el-eln-frente-a-sus-estudiantes-del-liceo-antioqueno/>
- Hacemos Memoria (s. f. f). Las FARC se tomaron la plazoleta central de la Universidad con una parada militar. *50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia*. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/udea50/las-farc-se-tomaron-la-plazoleta-central-de-la-universidad-con-una-parada-militar/>
- Hacemos Memoria (2022, septiembre 28). Gustavo Franco no murió, está en el exilio. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2022/09/28/gustavo-franco-no-murio-esta-en-el-exilio/>
- Hajek, A., Lohmeier, C., y Pentzold, C. (2016). *Memory in a mediated world*. Palgrave Macmillan.
- Halbwachs, M. (2004a). *La memoria colectiva*. Prensa Universitaria.
- Halbwachs, M. (2004b). *Los marcos sociales de la memoria*. Anthropos.
- Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575. <https://doi.org/10.2307/3178066>
- Hartog, F. (2012). El tiempo de las víctimas. *Revista de Estudios Sociales*, 44, 12-19.
- Heller, A. (2005). The three logics of modernity and the double bind of the modern imagination. *Thesis Eleven*, 81(1). <https://doi.org/10.1177/0725513605051614>

- Hepp, A. (2022). De la mediatización a la mediatización profunda. *DeSignis*, 37, 35-44.
- Hernández, Y. C. (2023). Líneas de tiempo: diálogos e inscripción del pasado. En: Hacemos Memoria (ed.), *Hacemos Memoria: Seis apuntes metodológicos y una declaración de principios* (pp. 91-110). Nomos.
- Honneth, A. (1999). Comunidad. Esbozo de una historia conceptual. *Isegoría*, 20, 5-15.
- Hoskins, A. (2011). Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective Turn. *Parallax*, 17(4), 19-31.
- Hoskins, A. (ed.). (2018). *Digital Memory Studies*. Routledge.
- Human Rights Watch (1994). *Human Rights Watch World Report 1994 - Colombia* [Informe]. <https://www.refworld.org/docid/467fca7e5.html>
- Husserl, E. (2008). *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Prometeo.
- Instituto Nacional de Medicina Legal (2000). Boletines estadísticos mensuales [Documentos]. Colombia. <https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49478/Homicidio.pdf>
- Iragorri, J. C. (1999, noviembre 13). Colombia sigue como país más peligroso para periodistas. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-948604>
- Isaza Velásquez, M. (2017). Amado no tuvo tiempo para aprender a matar. En Consejo de Redacción (ed.), *Memorias: 12 historias que nos deja la guerra* (pp. 87-102). Fundación Konrad Adenauer.
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI.
- Jelin, E. (2017). *La lucha por el pasado: Cómo construimos la memoria social*. Siglo Veintiuno.
- Jureit, U. y Schneider, C. (2010). *Gefühlte Opfer : Illusionen der Vergangenheitsbewältigung*. Klett-Cotta.
- Kearney, M. (2000). Transnational Oaxacan indigenous identity: The Case of Mixtecs and Zapotecs. *Identities. Global Studies in Culture and Power*, 7(2), 173-195.
- Kearns, G. (2020). Topple the racists 1: decolonising the space and institutional memory of the university. *Geography*, 105(3), 116-125. <https://doi.org/10.1080/00167487.2020.12106473>
- Kohn, E. (2013). *How forests think : toward an anthropology beyond the human*. University of California Press.
- Kopp, M. (2004). *Experiment frieden / La paz como experimento* [Audiovisual]. Deutsche Welle.
- Kopp, M. (2020). Balacera en Balboa. Periodismo, antropología, memoria. En P. Nieto (ed.), *Memorias: conceptos, relatos y experiencias compartidas* (pp. 253-278). Universidad de Antioquia, Hacemos Memoria.
- Koppel, A. (2001, septiembre 10). U. S. to classify Colombian group as “terrorist”. *CNN*. <http://edition.cnn.com/2001/WORLD/americas/09/10/colombia.terrorism/index.h>
- Laclau, E. (2014). *Los fundamentos retóricos de la sociedad*. Fondo de Cultura Económica.

- Latour, B. (2008). *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Manantial.
- Laurent, V. (2021). Constitución de 1991 y multiculturalismo a prueba de la experiencia. *Análisis Político*, 101, 23-46.
- Levi, P. (1989). *Los hundidos y los salvados*. Península.
- Löwy, M. (2002). *Walter Benjamin: aviso de incendio - Una lectura de las tesis "Sobre el concepto de historia"*. Fondo de Cultura Económica.
- Lyotard, J.-F. (1988). *La diferencia*. Gedisa.
- MacBride, S. et al. (1993). *Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo*. Fondo de Cultura Económica.
- Maldonado, C. E. y Gómez, N. A. (2010). *El mundo de las ciencias de la complejidad*. Editorial Universidad del Rosario.
- Martín-Barbero, J. (2002). Pistas para entre-ver medios y mediaciones. *Signo y Pensamiento*, 21(41), 13-20.
- Martín-Barbero, J. (2010). *De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía*. Universidad Autónoma - Azcapotzalco.
- Martin, G. (2014). *Medellín. Tragedia y resurrección. Mafias, ciudad y Estado 1975-2013*. La Carreta Editores.
- Martínez, J. F. (2016). *Chuzadas: ocho años de espionaje y barbarie*. Ediciones B.
- Martínez Mejía, L. (2023). Reportería participativa para narrar el pasado. En: Hacemos Memoria (ed.), *Hacemos Memoria: Seis apuntes metodológicos y una declaración de principios* (pp. 13-38). Nomos.
- Martínez Mejía, L. y Restrepo, A. (2019). Con el apoyo de medios locales víctimas de conflictos violentos participan en debates públicos sobre violaciones a los DD. HH. y sobre la Memoria Histórica [Informe interno de sistematización]. DW Akademie.
- Martínez-Roa, O. G. y Ortega-Erazo, E. G. (2018). Percepciones y participación en emisoras de radio comunitaria en Nariño, Colombia. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVI(54), 81-90.
- Mate, R. (2008). *Justicia de las víctimas. Terrorismo, memoria, reconciliación*. Anthropos.
- Mauss, M. (2009). *Ensayo sobre el don*. Katz.
- Mayor, D., De Castro, A., Amarís, M. C., y Buelvas, F. (2018). Perfil de salud mental en víctimas del desplazamiento forzado con síntomas de TEPT en Barranquilla, Colombia. *Suma Psicológica UST*, 15(2), 173-182. <https://doi.org/10.18774/0719-448x.2018.15.401>
- Michel, J. (2014). *Ricoeur y sus contemporáneos*. Biblioteca Nueva.
- Ministerio de Salud (2015). *Sala situacional de la población víctima del conflicto armado - Departamento de Antioquia. Colombia.*

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/RP/ssituacion-al-victimasabr-15-antioquia.pdf>

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2023, noviembre 20). Descripción Radio Comunitaria. <https://mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Radio-Comunitaria-/Descripcion-Radio-Comunitaria>
- Mouffe, C. (1999). *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Paidós.
- Organización de las Naciones Unidas - ONU. (2002). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia [Documento]. https://www.hchr.org.co/informes_anuales/informe-anual-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-y-derecho-internacional-humanitario-en-colombia-ano-2001/
- Navarro Wolff, A. (2021). *Una asamblea que transformó el país*. Nomos.
- Nieto, P. (ed). (2006). *Jamás olvidaré tu nombre*. Alcaldía de Medellín.
- Nieto, P. (ed.). (2009). *El cielo no me abandona*. Alcaldía de Medellín.
- Nieto, P. (ed.). (2010). *Donde pisé aún crece la hierba*. Alcaldía de Medellín.
- Olick, J. (2008). From Collective Memory to the Sociology of Mnemonic Practices and Products. En: A. Erll y A. Nünning (eds.), *Media and Cultural Memory* (pp. 151-161). De Gruyter.
- Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH. (2019). *Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia*. CNMH, ONIC.
- Oquendo, C. (2007, abril 24). Armada de machete y palas, Pastora excava en busca de su hija. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2466251>
- Ortegón, E., Pacheco, J. F., y Prieto, A. (2005). *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas*. CEPAL.
- Osses Rivera, S. L. (2015). Cincuenta años de radio comunitaria en Colombia. Análisis sociohistórico (1945-1995). *Revista Científica General José María Córdova*, 13(16), 263-283. <http://www.redalyc.org/html/4762/476247224013/>
- Osses Rivera, S. L. (2002). Nuevos sentidos de lo comunitario. La radio comunitaria en Colombia [Tesis]. Maestría en Ciencias Sociales. Flacso, sede México.
- Otálvaro, E. (2017, mayo 3). El documental “Luces y sombras” reavivó la memoria de Sonsón. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2017/05/03/el-documental-luces-y-sombras-reavivo-la-memoria-de-sonson/>
- Otálvaro, E. (2017, octubre 18). Itinerarios de María Efigenia Vásquez. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2017/10/18/itinerarios-de-maria-efigenia-vasquez/>
- Pardo, B. (2015a). Víctimas y reparación. *Palabra justa* [Programa de radio]. *Vokaribe Radio*. Barranquilla.

- Pardo, B. (2015b). Entrevista a Dora Muñoz. *Palabra justa* [Programa de radio]. *Vokaribe Radio*. Barranquilla.
- Pardo, B. (2018). Desaparición forzada. *Palabra justa* [Programa de radio]. *Vokaribe Radio*. Barranquilla.
- Pasquali, A. (1967). *Comunicación y cultura de masas*. Monte Ávila Editores.
- Pasquali, A. (2005). *18 ensayos sobre comunicación*. Random House.
- Peirce, C. S. (1986). *La ciencia de la semiótica*. Nueva Visión.
- Pensadores.co (2014, septiembre 27). Jesús Martín Barbero: conceptos clave en su obra. Parte 1: “Mediaciones” [Audiovisual]. *Youtube*. Universidad Pontificia Javeriana - Centro Ático. <https://youtu.be/NveV5ScaZHg>
- Peña, P. (2020, septiembre 1). Una tragedia anunciada: la humedad deterioró las bitácoras del Salón del Nunca Más en Granada. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2020/09/01/una-tragedia-anunciada-la-humedad-deterioro-las-bitacoras-del-salon-del-nunca-mas-en-granada/>
- Peñaranda, D. R. (coord.). (2012). *Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca Indígena. Informe del centro de memoria histórica*. CNMH, Taurus, Semana. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pereira, J. M. y Cadavid, A. (eds.). (2011). *Comunicación, desarrollo y cambio social. Interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios*. Pontificia Universidad Javeriana.
- Pérez Tornero, J. M. (2015). La emergencia de la alfabetización mediática e informacional. Un nuevo paradigma para las políticas públicas y la investigación. *Telos*, 100, 99-102.
- Preciado, A. (2022, febrero 1). 7 gráficas para entender los homicidios en Colombia en 2021. *La Silla Vacía*. <https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/7-graficas-para-entender-los-homicidios-en-colombia-en-2021/>
- Puerta, C. (2020). Víctimas. Geneología reciente, aspectos jurídicos y construcción social del concepto en Colombia. En: P. Nieto (ed.). *Memorias: conceptos, relatos y experiencias compartidas* (pp. 81-100). Medellín: Universidad de Antioquia.
- Quijano, A. (2020). ¿Del “polo marginal” a la “economía alternativa”? En *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (pp. 125-170). Clacso, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Ramos Maldonado, C. (2020). Historia de la radio comunitaria en Colombia: crisis durante el conflicto armado en el siglo XXI. *Quórum Académico*, 17(1), 95-131.
- Ramos Vidal, I. (2018). Desplazamiento forzado y adaptación al contexto de destino: el caso de Barranquilla. *Perfiles Latinoamericanos*, 51(26), 301-328.
- Rappaport, J. (1998). *The politics of Memory: Native Historical Interpretation in the Colombian Andes*. Duke University Press.

- Rendón, P. (2012, mayo 9). Las Malvinas: 30 años palpitando al ritmo de lo comunitario. *Vokaribe*. <https://www.vokaribe.net/2012/05/09/el-barrio/>
- Rendón, P. (2022). *Diálogos sobre comunicación comunitaria. El poder de la voz - medios comunitarios en América Latina*. DW Akademie.
- Reporteros sin Fronteras (s. f.). Clasificación. Estadísticas [Documentos]. <https://rsf.org/es/clasificacion>
- Restrepo, C. O. (2019, mayo 6). Desaparecidos de Medellín y Antioquia, con espacio en la JEP. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2019/03/06/desaparecidos-jep-medellin-antioquia/>
- Restrepo, L. A. (1990). Movimientos cívicos en la década de los ochentas. En F. Leal Buitrago y L. Zamora (eds.), *Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80* (pp. 381-409). Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia.
- Rey, G. (ed.). (2015). *La palabra y el silencio: la violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015)*. CNMH.
- Reynoso, C. (2015). *Crítica de la antropología perspectivista*. Editorial Sb.
- Ricœur, P. (2010). *La memoria, la historia y el olvido*. Trotta.
- Ricœur, P. (2015). *Historia y verdad*. Fondo de Cultura Económica.
- Ricœur, P. y Castoriadis, C. (2016). *Dialogue sur l'histoire et l'imaginaire social*. Éditions de l'EHESS.
- Roberts, M., Stewart, B., y Airoidi, E. (2016). A Model of Text for Experimentation in the Social Sciences. *Journal of the American Statistical Association*, 111(515), 988-1003.
- Robin, R. (2012). *La memoria saturada*. Waldhuter.
- Rodríguez, A. A. (2021). El Estado como proyecto en la Constitución de 1991. *Análisis Político*, 101, 47-67.
- Rodríguez, C. (2011). Trayectoria de un recorrido: comunicación y cambio social en América Latina. En J. M. Pereira y A. Cadavid (eds.), *Comunicación, desarrollo y cambio social. Interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios* (pp. 37-56). Pontificia Universidad Javeriana.
- Rodríguez Moreno, A. (2010). Hermenéutica del concepto actual de "víctima". *Revista Derechos Humanos México*, 5(13), 33-49.
- Rojas, J. F. (2022). Participación política en un contexto de reducción de la violencia. El caso de las víctimas del conflicto armado en Colombia (2011, 2016 y 2018). *Estudios Políticos*, 65, 180-208.
- Ronderos, M. T. (2014). *Guerras recicladas: una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Aguilar.
- Rosa, H. (2019). *Resonancia. Una sociología de la relación con el mundo*. Katz.

- Rosati, G. (2022). Procesamiento de Lenguaje Natural aplicado a las ciencias sociales. Detección de tópicos en letras de tango. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, 12(23), 38-60.
- Rudas, N. (2021). *La violencia y sus resistencias en la Universidad Nacional de Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- Ruiz Buitrago, M. C. et al. (2016). *Plan de Desarrollo Sonsón Progresá 2016-2019*. Alcaldía de Sonsón.
- Sánchez Gómez, G. (2018). Reflexiones sobre genealogía y políticas de la memoria en Colombia. *Análisis Político*, 31(92), 96-114.
- Sánchez, K. (2022, octubre 12). Pasaron dos años y aún no restauran el Salón del Nunca Más. *Hacemos Memoria*. from <https://hacemosmemoria.org/2022/10/12/pasaron-dos-anos-y-aun-no-restauran-el-salon-del-nunca-mas/>
- Salazar, A. (2018). *No nacimos pa' semilla*. Aguilar.
- Sandel, M. J. (2000). *El liberalismo y los límites de la justicia*. Gedisa.
- Schutz, A. y Luckmann, T. (2013). *Las estructuras del mundo de la vida*. Amorrortu.
- Sierra, F. y Maldonado, C. (2016). *Comunicación, decolonialidad y buen vivir*. Ciespal.
- Sonsón TV (2015). *Las vueltas del retorno en Sonsón* [Audiovisual]. <https://youtu.be/N7iqCSw1274>
- Sonsón TV (2017). *Luces y sombras. Reconstrucción de memoria sobre La Pinera* [Audiovisual]. <https://youtu.be/aorqbZsm6xw>
- Spöhrer, M. (2017). Applications of Actor-Network Theory in Media Studies: A Research Overview. En Spöhrer y B. Ochsner (eds.), *Applying the Actor-Network Theory in Media Studies* (pp. 1-19). IGI Global.
- Stavrakakis, Y. (2010). *La izquierda lacaniana. Psicoanálisis, teoría, política*. Fondo de Cultura Económica.
- Tattay, P. y Peña, J. E. (2013). *Movimiento Quintín Lame: una historia desde sus protagonistas*. Fundación Sol y Tierra.
- Taussig, M. (1993). *El diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica*. Nueva Imagen.
- Tavera, E. (2017, mayo 2). Dabeiba honra a las víctimas del paramilitarismo. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2017/05/02/dabeiba-honra-las-victimas-del-paramilitarismo/>
- Tavera, E. (2017, junio 6). El archivo fotográfico de Asovida aportará a la verdad del conflicto. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2017/06/06/el-archivo-fotografico-de-asovida-aportara-la-verdad-del-conflicto/>
- Tavera, E. (2018, mayo 29). El Salón del Nunca Más busca aliados para preservar sus memorias. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2018/05/29/estado-salon-nunca-mas-granada/>

- Taylor, C. (2006). *Imaginario sociales modernos*. Paidós.
- Taylor, C., Nanz, P., y Taylor, M. B. (2021). *Reconstruyendo la democracia. Cómo los ciudadanos la reconstruyen desde sus cimientos*. Avarigani.
- Todorov, T. (2000). *Los abusos de la memoria*. Paidós.
- Tonche, J. y Umaña, C. E. (2017). Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: un acuerdo de justicia ¿restaurativa? *Revista Derecho del Estado*, (38), 223-241. <https://doi.org/10.18601/01229893.n38.09>
- Tonkinwise, C. (2016). Responses for “21st Century. Design After Design”. Documento. *XXI Triennale di Milano*.
- Trejos, L. F., Martínez, F., y Badillo, R. (2018). Aproximación a las dinámicas del conflicto armado en la ciudad de Barranquilla: entre la marginalidad insurgente y el control paramilitar 1990-2006. *Papel Político*, 23(2). <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/papelpol/article/view/22354>
- Unesco (2015). *Media and Information Literacy for the Sustainable Development*. Göteborg. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234657?posInSet=2&queryId=a0bd86d0-fef6-48c5-acaa-2a6c468bb27d>
- Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD. (2019). Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Colombia. <https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/>
- Universidad de Antioquia (2021, agosto 5). Violencia y conflicto en la Universidad de Antioquia [Audiovisual]. https://www.youtube.com/live/1_7DjaNdLqQ?feature=share
- Uprimny, R. (2021, julio 5). Una Constitución viva pero amenazada. *De Justicia*. <https://www.dejusticia.org/column/una-constitucion-viva-pero-amenazada/>
- Vaca, P. (2017, septiembre 29). Después de la violencia se instala el silencio. Entrevista a Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, realizada por el autor. Medellín.
- Valderrama, C. E. y Osses, S. L. (2019). El proceso es el modelo. Hacia el estudio de recepción de radios comunitarias. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, 140, 113-128.
- Vega Casanova, J., Tapias Hernández, C. A. y Pérez Quintero, C. E. (2019). Radio comunitaria y construcción de paz en Colombia. Comunicación, interacción y planeación participativa para el posconflicto. *Revista Latina de Comunicación Social*, 74, 1391-1410.
- Verdad Abierta y Hacemos Memoria. (2017, diciembre 21). Disputa de tierras en Puracé: la visión de dos mundos que no se encuentran. *Verdad Abierta*. <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6851-disputa-de-tierras-en-purace-la-vision-de-dos-mundos-que-no-se-encuentran>
- Verdad Abierta (2011, octubre 18). El paso macabro de las AUC por Atlántico. *Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/el-paso-macabro-del-bloque-norte-por-el-atlantico/>

- Verdad Abierta (2014, junio 18). Minería en el Cauca: ¿riqueza para quién? *Verdad Abierta*. from <https://verdadabierta.com/mineria-en-el-cauca-riqueza-para-quien/>
- Verdad Abierta (2019, abril 8). "Ojitos Azules", el verdadero poder del paramilitarismo en Atlántico. *Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/ojitos-azules-el-verdadero-poder-del-paramilitarismo-en-atlantico/>
- Villa, M. I., Pinilla, E. T., y Alvarado, L. M. (2021). Processes of innovation and technological appropriation in community radio stations. A study of La Cometa and La Esquina Radio in Colombia. *Revista Observatório*, 7(4).
- Viveiros de Castro, E. (2010). *Metafísicas canibales*. Katz.
- Vokaribe Radio (2017). Conversaciones, derechos y comunidad. *Palabra justa* [Programa radial]. *Vokaribe Radio*. Barranquilla.
- Vokaribe Radio (2018). Desaparición forzada. *Palabra justa* [Programa radial]. *Vokaribe Radio*. Barranquilla.
- Welzer, H. (2002). *Das kommunikative Gedächtnis: Eine Theorie der Erinnerung*. C. H. Beck.
- Yule Yatacue, M. y Vitonas Pavi, C. (2012). *Pees kupx fxi'zenxi - La metamorfosis de la vida*. Asociación Indígena de los Cabildos de Toribío, San Francisco, Tacueyó Proyecto Nasa.
- Zabin, C. *et al.* (1993). *Mixtec migrants in California agriculture. A new cycle of poverty*. California Institute for Rural Studies.
- Zelizer, B. (2008). Journalism's Memory Work. En A. Erll y A. Nünning (eds.), *Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook* (pp. 379-387). De Gruyter.
- Zubiría Mutis, B. (2017). Violencias, memorias y políticas públicas en Barranquilla (1980-2012). En Á. Guzmán Barney (ed.), *Violencia en cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI* (pp. 272-475). Universidad Autónoma de Occidente.